

Causa Rol N° 14-2013.

Sentencia dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Álvaro Claudio Mesa Latorre.

Temuco, veintinueve de enero de dos mil veinticuatro. -

VISTOS:

ÍNDICE

I.	Relación de la Sentencia.....	2-5
II.	Resumen ejecutivo.....	5-6
III.	Actuarios de tramitación y dato técnico.....	6
IV.	Tachas.....	7-8
V.	Incidentes de nulidad.....	8
VI.	En cuanto a la Acción Penal:	
	A. Declaraciones	8-91
	B. Documentos.....	91-101
	Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal.....	101-107
	Calificación jurídica de los hechos.....	108-113
	Concepto de Lesa Humanidad.....	113-116
	C. Declaraciones indagatorias y sus respectivo análisis:	116-172
	D. En cuanto a las defensas.....	172-184
	E. Análisis de las defensas:	
	Consideraciones previas al análisis de la defensa:	
	Estado de Derecho.....	185-190
	Obligación de Investigar.....	190-208
	Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por el Tribunales Alemanes.....	208-219
	Convenio de Ginebra.....	219-220
	Complicidad.....	220-221
	Resumen ejecutivo del auto acusatorio.....	221-224
	F. Análisis de las defensas específicas:.....	224-239
	G. Acusación particular.....	239
	H. Adhesión a la Acusación Judicial.....	239

I. Reflexiones sobre lesa humanidad.....239-246

J. Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal:

Eximente de responsabilidad penal.....246-247

Atenuante de responsabilidad penal.....247-250

Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual.....250-253

Agravantes de Responsabilidad Penal.....253-254

Determinación de la Pena.....254-256

Beneficios de la Ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.....256-264

VII. En cuanto a la Acción Civil:

Demanda civil.....264-266

Contestación de la demanda civil.....266-272

Análisis de la contestación de la demanda civil.....272-284

Acreditación probatoria del daño moral.....284-287

Montos; reajustes e intereses de las sumas demandadas.....287

VIII. Aspectos Resolutivos.....287-291

I. RELACIÓN DE LA SENTENCIA:

Que se ha iniciado esta **causa rol N° 14-2013** del ingreso de la Corte de Apelaciones de Valdivia, para investigar el delito de secuestro calificado de Marcelo del Carmen Gutierrez Gómez y determinar la responsabilidad que en tales hechos le ha cabido a:

1. RODOLFO SEGUNDO CHEUQUELAF LORENZO, R.U.N 6.400.355-0, chileno, natural de Galvarino, casado, de 74 años de edad, funcionario en retiro de Carabineros, domiciliado en pasaje Arauco N°1627, Osorno, región de los Lagos, nunca antes condenado (extracto de filiación y antecedentes de fs. 1117 (Tomo IV), 1475 (Tomo V), 1490 a 1491 (Tomo V).

2. JORGE DANIEL GARCÉS YÁÑEZ, R.U.N 5.376.792-3, chileno, natural de Cunco, casado, de 79 años de edad, funcionario en retiro de Carabineros, domiciliado en Colico s/n, sector tres esquinas, Cunco, región Araucanía, nunca antes condenado (extracto de filiación y antecedentes de fs. 1116 (Tomo IV), 1468 (Tomo V).

3. **ADRIAN JOSÉ FERNANDEZ HERNANDEZ**, R.U.N 4.275.671-7, chileno, natural de Santa Bárbara, casado, de 85 años de edad, funcionario en retiro de Carabineros, fallecido según consta a fs. **2572 (Tomo VIII)**, siendo sobreseído definitiva y parcialmente según consta a **fs. 2582 (Tomo VIII)**.

A **fs. 36 a 52 (Tomo I)**, se inició la causa mediante presentación de querrela criminal de Rodrigo Ubilla Mackenney Subsecretario del Interior, en contra de todos aquellos que resulten responsables, por su intervención en calidad de autores, cómplices y encubridores, en contra de quienes resulten responsables, de los delitos de sustracción de menores en concurso real con homicidio calificado de Marcelo Gutierrez Gómez.

A **fs. 980 a 985 (Tomo III)**, la abogada Rose Marie Vásquez Garrido, en representación de Edgar Marcelo Gutierrez Bertín, interpuso querrela criminal contra todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores por el delito de sustracción de menor de edad, consumado, cometido en la persona de Marcelo del Carmen Gutierrez Gómez, con costas.

A **fs. 1125 a 1171 (Tomo IV)**, con fecha 01 de julio de 2020, se sometió a proceso a **ADRIAN JOSÉ FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, JORGE DANIEL GARCÉS YÁÑEZ y RODOLFO SEGUNDO CHEUQUELAF LORENZO**, como autores; del delito de secuestro calificado de Marcelo del Carmen Gutierrez Gómez, perpetrado en el sector Bahía Mansa de Osorno, desde el día 5 de octubre de 1973, sometiéndolos a arresto domiciliario total.

A **fs. 1.234 (Tomo IV)** con fecha 26 de agosto de 2020, la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco, confirmó el auto de procesamiento de fs. 1125 y siguientes.

A **fs. 1654 (Tomo V)**, con fecha 03 de diciembre de 2021, **se declaró cerrado el sumario.**

A **fs. 1681 a 1724 (Tomo V)**, con fecha 29 de diciembre de 2021, se dictó auto acusatorio en contra de **ADRIAN JOSÉ FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, JORGE DANIEL GARCÉS YÁÑEZ y RODOLFO SEGUNDO CHEUQUELAF LORENZO**, como autores; del delito de secuestro calificado de Marcelo del Carmen Gutierrez Gómez, perpetrado en el sector Bahía Mansa de Osorno, desde el día 5 de octubre de 1973,

A **fs. 1749 a 1756 (Tomo VI)**, la abogada Catalina Ross Fredes, en representación del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, formula **acusación particular**.

A **fs. 1759 a 1784 (Tomo VI)**, la abogada Rose Marie Vásquez Garrido, en representación del querellante de auto, en lo principal de su escrito se adhiere a la acusación fiscal. Al primer otrosí deduce demanda civil de indemnización de daños y perjuicios en representación de Edgar Marcelo Gutierrez Bertín en contra del Fisco de Chile, por el accionar ilícito de agentes estatales por el delito de secuestro calificado de Marcelo del Carmen Gutierrez Gómez, con costas.

A **fs. 1808 a 1833 (Tomo VI)**, el abogado Procurador Fiscal de Temuco subrogante, Álvaro Sáez Willer, en representación del Fisco de Chile, **contesta la demanda civil**. Solicitando acoger las excepciones o defensas opuestas.

A **fs. 1948 a 1973 (Tomo VI)**, el abogado Gonzalo Cruz Gutierrez, en representación del acusado Jorge Garcés Yáñez, en lo principal de su escrito opone excepciones de previo y especial pronunciamiento; al primer otrosí contesta acusación judicial y particulares, solicitando la absolución por falta de participación; al segundo otrosí medios de prueba; al tercer otrosí solicita otorgamiento de beneficios ley N°18.216; al cuatro otrosí forma de notificación. .

A **fs. 2024 a 2098 (Tomo VI)**, el abogado Maximiliano Murath Mansilla, en representación del acusado Adrián José Fernández Hernández, lo principal de su escrito: solicita inhabilidad por falta de imparcialidad; en el primer otrosí: en subsidio, solicita inhabilidad del juez por control de convencionalidad; segundo otrosí; solicita suspensión del procedimiento; al tercer otrosí; solicita la nulidad de todas las declaraciones del proceso que indica y rectificación del auto acusatorio en la forma que indica; al cuarto otrosí: solicita la nulidad de todas las declaraciones del proceso que indica y rectificación del auto acusatorio en la forma que indica; quinto otrosí; en subsidio, opone excepción de previo y especial pronunciamiento; sexto otrosí: acusación fiscal y adhesiones; séptimo otrosí: solicita oficio a gendarmería de Chile; octavo otrosí: acompaña documentos; noveno otrosí: medios de prueba.

A **fs. 2.309 a 2321 (Tomo VII)**, el abogado Mauricio Scheuch Araya, en representación del acusado Rodolfo Segundo Cheuquelaf Lorenzo, en lo principal de su escrito opone excepciones de previo y especial pronunciamiento; al primer otrosí: se tenga presente, en cuanto a documentos justificativos de los hechos que

se refieren las excepciones opuestas; en el segundo otrosí en subsidio de las excepciones de previo y especial pronunciamiento. Contesta acusación judicial y acusaciones particulares en los términos que señala; al tercer otrosí subsidiaria de prescripción; al cuarto otro sí: medio de prueba; al quinto otrosí; beneficios de la ley N°18.216; al sexto otrosí: acredita personería, acompaña documento.

A **fs. 2582(Tomo VIII)**, con fecha 31 de octubre de 2023, se **sobresee definitiva y parcialmente** a **Adrián José Fernández Hernández**, por fallecimiento tal como consta en certificado de defunción a **fs. 2572 (Tomo VIII)**.

A **fs. 2417 a 2418 (Tomo VII)**, con fecha **08 de agosto de 2023**, se **recibió la causa a prueba**.

A **fs. 2516 (Tomo VIII)**, con fecha 12 de septiembre de 2023, se certificó que el término probatorio se encontraba vencido.

A **fs.2517 (Tomo VIII)**, con fecha 12 de septiembre de 2023, se trajeron los autos para efectos del **artículo 499 del Código de Procedimiento Penal**.

A **fs. 2518, 2589, 2602, 2603 y 2608 (Tomo VIII)**, se dictaron medidas para mejor resolver.

A **fs. 2610 (Tomo VIII)**, con fecha 29 de enero de 2024 se trajeron los **autos para fallo**.

II. RESUMEN EJECUTIVO

- **EN CUANTO A LAS TACHAS 1° al 6°**
- **EN CUANTO A LOS INCIDENTES DE NULIDAD. 7° al 8°**
- **ACCIÓN PENAL 9° al 44**

9°) y 10°) En cuanto a la acción penal y elementos probatorios del proceso: Declaraciones y Documentos); **11°)** Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal; **12°) y 13°)** Calificación jurídica de los hechos; **14°) y 15°)** Concepto de Lesa Humanidad; **16°)** Declaraciones Indagatorias de Jorge Daniel Garcés Yáñez; **17°) y 18°)** Análisis de la declaración del acusado, corroboración con sus propios dichos y ponderación en relación a la prueba del proceso; **19°)** Declaraciones indagatorias de Rodolfo Cheuquela Lorenzo; **20°) y 21°)** Análisis de la declaración del acusado, corroboración con sus propios dichos y ponderación en relación a la prueba del proceso; **22°)** Defensa del abogado Maximiliano Murath en representación de Adrián José Fernández Hernández; **23°)** Defensa del abogado Gonzalo Cruz Gutiérrez en representación de Jorge Daniel Garcés Yáñez; **24°)** Defensa del abogado Mauricio Scheuch Araya en representación de Rodolfo Cheuquela Lorenzo; **25°) Consideraciones Previas al Análisis de la Defensa:** Estado de Derecho; Obligación de investigar; Jurisprudencia internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos (delitos de lesa humanidad)

*pronunciada por Tribunales Alemanes; Convenio de Ginebra; complicidad; resumen ejecutivo del auto acusatorio; 26°) Análisis de la defensa específica del acusado Jorge Daniel Garcés Yáñez; 27°) Análisis de la defensa específica del acusado Rodolfo Cheuquela Lorenz; 28°) Acusación particular de la abogada Catalina Ross; 29°) Análisis de la acusación particular; 30°) Adhesión a la acusación particular; 31°) Análisis del tribunal; 32°) Reflexiones sobre lesa humanidad; **Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal: 33°) Eximentes de responsabilidad penal y Análisis del Tribunal; 34°) Atenuante de responsabilidad penal; 35°) Análisis del Tribunal 36°) Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual; 37°) Agravantes de responsabilidad penal; 38°), 39°) y 40°) Determinación de la pena; 41°), 42°) 43°) y 44°) Beneficios de la ley 18.216 y sus modificaciones posteriores;***

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL 45° al 50°:

45°) Demanda Civil interpuestas por Rose Marie Vasquez Garrido, en representación de Edgar Gutierrez Bertín; 46°) Contestación de la demanda civil por el abogado Procurador Fiscal de Temuco (Álvaro Sáez Willer en representación del Consejo de Defensa del Estado; 47°) Análisis de la contestación de la demanda civil efectuadas por el Fisco de Chile; 48°) Acreditación probatoria del daño moral; 49°) Montos; 50°) reajustes e intereses de las sumas demandadas.

III. ACTUARIOS DE TRAMITACIÓN Y DATO TÉCNICO:

- A. Fecha de inicio de la causa: 06 de noviembre de 2013.
- B. Actuario de Tramitación Sumario: Gonzalo Millalén Gutierrez.
- C. Actuario de Tramitación Plenario: Paulina Montealegre Carrillo, Leslie Villalobos, Francisca Rabié Figueroa
- D. **Tomos:**
 - Tomo I de fs.1 a fs. 362;
 - Tomo II de fs. 363 a 655;
 - Tomo III de fs. 656 a 1044;
 - Tomo IV de fs. 1.045 a fs. 1.451;
 - Tomo V de fs. 1.452 a fs. 1.747;
 - Tomo VI de fs. 1.748 a 2183;
 - Tomo VII de fs. 2.184 a 2465;
 - Tomo VIII de fs. 2466 y siguientes;
 - Cuaderno secreto de fs. 1 a 239.-
 - Anexo CD informe pericial fotográfico fs. 723 (Tomo II).-
- E. Fojas 292.
- F. Considerandos 50°.

IV. EN CUANTO A LAS TACHAS

1°) Que la abogada Damary Melo Melo por el programa de derechos Humanos, en su presentación de fs. 2450 y siguientes (Tomo VII), interpuso tachas respecto del testigo, Rafael Pérez Torres, invocando la causal del artículo 460 N°2 del Código de Procedimiento Penal:

2°) Que se dio traslado a las partes a **fs. 2450 (Tomo VII)** de esta tacha.

3°) Que a **fs. 2450 y siguientes (Tomo VII)** evacuó traslado el abogado Mauricio Fernando Scheuch Araya, en representación de Rodolfo Cheuquelaf Lorenzo solicitando se rechace la tacha interpuesta por cuanto es un testigo presencial de los hechos, siendo necesario su deposición. Si bien es una tacha establecida en la ley, atendido el tiempo transcurrido y la poca gente que queda con vida de la época, insiste en que se acoja o reciba el testimonio del testigo.

4°) A **fs. 2450 y siguientes (Tomo VII)**, se dejó para la definitiva la resolución de las tachas. Que como bien lo expresa el querellante Programa Unidad de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la lectura de los artículos 458 y siguientes, que se refieren a la prueba de testigo, como de los artículos 492 y siguiente que se refieren a las tachas, la ley hace expresa mención, que las tachas es un institución diseñada para los testigos.

5°) La defensa al contestar la tacha no da ningún argumento legal simplemente invoca el tiempo transcurrido, y pide se rechace la tacha.

6°) El tribunal resolviendo la tacha interpuesta por la abogada Damary Melo Melo a fs. 2450 y siguientes, puntualiza lo siguiente: efectivamente el artículo 460 N°2 del Código ya mencionado establece: *“No son testigos hábiles para declarar: Los procesados por crimen o por simple delito, y los condenados por crimen o simple delito mientras cumplen la condena, a menos de tratarse de un delito perpetrado en el establecimiento en que el testigo se halle preso.”* En esta causa si bien el testigo Rafael Pérez Torres presentado por la defensa y según extracto de filiación de fs. 2603 a 2605 (Tomo VIII) se encuentra cumpliendo una condena, cabe puntualizar que este testigo durante la etapa del sumario declaro de fs. 553 a 554 (Tomo II), 627 a 630 (Tomo II) y de fs. 632 a 633 (Tomo II), por lo cual el tribunal hizo una ponderación en el auto acusatorio, luego su testimonio con anterioridad ha ingresado al proceso. En consecuencia, a fin de no incurrir en contradicciones no es posible por un lado considerar su declaración, y por otro

rechazarla, en virtud de lo anterior **no se acogerá la tacha interpuesta por la abogada Damary Melo Melo.**

V. EN CUANTO A LOS INCIDENTES DE NULIDAD.

7°) Que a **fs. 2024 a 2098 (Tomo VI)**, el abogado interpuso recurso de nulidad solicitando en el tercer otrosí, nulidad de todas las declaraciones del proceso que indica y rectificación del auto acusatorio en la forma que indica y en el mismo sentido se refiere el cuarto otrosí, solicita la nulidad de todas las declaraciones del proceso que indica y rectificación del auto acusatorio.

8°) Sobre lo anterior el Tribunal estará a lo ya resuelto a **fs. 2582 (Tomo VIII)** en virtud del cual se dictó sobreseimiento definitivo y parcial en la persona de acusado **Adrián José Fernández Hernández.**

CONSIDERANDO:

VI. EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL.

9°) Que a **fs. 1681 a 1724 (Tomo V)**, con fecha 29 de diciembre de 2021, se dictó auto acusatorio en contra de **Adrián José Fernández Hernández** (quien fue sobreseído definitiva y parcialmente a fs. 2582 (Tomo VIII); **Jorge Daniel Garcés Yáñez y Rodolfo Segundo Cheuquelaf Lorenzo**, como **autores**; todos los anteriores en el delito de secuestro calificado de Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez perpetrados en el sector Bahía Mansa de Osorno, a contar del 05 de octubre de 1973.

10°) Que con el objeto de establecer en autos la existencia del ilícito penal señalado, se han reunido durante el curso de la investigación los siguientes elementos de convicción, además de los ya enunciados que se encuentran en el auto acusatorio de fs. 1681 a 1725 (que corren de fs. **1** a fs. **1680**), como las querellas deducidas antes individualizadas. Sin perjuicio, del análisis de la pruebas rendidas durante el plenario.

A. DECLARACIONES (25):

- | | |
|---|--|
| 1. Rafael Pérez Torres | 9. Inés Elena Bertín Yáñez |
| 2. Federrina Del Rosario Barrientos Cancino | 10. José Adolfo Panqueco Calfulef. |
| 3. Noemí Del Carmen Carrasco Maragaño | 11. Edgar Marcelo Gutiérrez Bertín |
| 4. Rolando Del Carmen Ríos García | 12. José Oberto Santana Oyarzún |
| 5. María Gladys Ávila Rosas | 13. Ademar Catalán Aguilar |
| 6. Juan Gualberto Guarda Castro | 14. Luis Humberto Pinol Carillanca |
| 7. Ecar Adolfo Guarda Rosas | 15- Sigfrido Ernesto González González |
| 8. Adrián José Fernández Hernández | 16. María Judith Aucapán Ancapán |

17. Aristeo Maripán Queipuyao	21 De Guillermo Antilef Quintul
18. Ana Del Carmen López Barría	22 María Angélica Vergara Herrera
19. Juan Segundo Moreira Garcés.	23 Héctor Vargas Soto
20. María Eufemia Millaquipai	24 Jorge Ricardo Coronado Henzi
Guichaquelen	25. Rubén Molina González

Los testimonios que a continuación se detallan corresponden a una síntesis de los aspectos sustanciales y pertinentes en relación a los hechos investigados, que los testigos expresaron:

A.1 RAFAEL PÉREZ TORRES (de 33 años a la fecha de los hechos)

quien declaró a fs. 553 a 554 (Tomo II), 627 a fs. 630 (Tomo II) y de fs. 632 a 633 (Tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 09 de octubre de 2015, de **fs. 553 a 554 (Tomo II)**, soslaya que en el mes de septiembre del año 1973, estuvo realizando labores en el Retén termas de Puyehue, donde trabajó desde el mes de abril a diciembre de ese mismo año, para luego regresar a la tercera comisaria. En lo pertinente al capitán Adrián Fernández Hernández, este era su jefe en la tercera Comisaria de Osorno, de dotación de más de cien funcionarios. En relación a los funcionarios de apellidos Benavides y Rojas, no los recuerda, salvo uno de apellido Barrientos, éste era menos antiguo y no estaba para el año 1973; se llamaba Jaime Barrientos, además había un Carabinero de nombre Abel Barrientos, no está muy seguro, éste trabajaba en la Prefectura y le conducía el vehículo al Prefecto del cual no recuerda su nombre. Que no participó en la detención de Marcelo Gutierrez Gómez, ya durante esa fecha estaba realizando labores en el Retén termas de Puyehue.

En declaración de judicial de fecha 24 de marzo de 2016, de **fs. 627 a 630 (Tomo II)**, proclama que a la fecha del golpe de Estado se encontraba trabajando en el Retén termas de Puyehue, con el grado de carabinero o cabo recién ascendido. Dicho Retén estaba a cargo de Rolando Becker Solís, también estaba su colega de apellido Angulo, sin recordar a los demás, sólo eran cinco personas ahí. Que en el mismo mes de septiembre se ordenó cerrar el retén y los enviaron a la Tercera Comisaría de Osorno, que estaba a cargo del capitán Adrián Fernández Hernández y cuya dotación era como de treinta personas. En esa fecha debieron acuartelarse en primer grado y sus funciones fueron salir de patrullaje (con dos o cuatro funcionarios más) y custodiar la Comisaría. De los

colegas que recuerda es al cabo Muñoz Albornoz, carabinero Angulo, González (fallecido), Eliseo Águila (fallecido), Canales (fallecido), Moreira, Mario Flores, Nelson Rozas (que era del Retén Bahía Mansa, fallecido). Aduce que el capitán Fernández les entregaba regularmente, no todos los días, los distintos bandos con el detalle de los nombre de las personas que debían detener. Esos documentos eran escritos a máquina, aunque no sabe quién escribía esos documentos. Luego de ello la patrulla del día, cuyos integrantes estaban determinados con veinticuatro horas de anterioridad, debían salir a cumplir la orden, sea caminando o en furgón policial, cuando este estaba bueno; y armado con fusiles SIG. Una vez detenidos los requeridos, estos eran puestos a disposición del regimiento, quien habitualmente iba a buscar a los mismos. Señala que nunca vio detenidos en el subterráneo, que hayan sido torturados o que hayan muerto en la comisaría. Jamás vio ni supo de hechos de tal grave naturaleza. Preguntado si mientras estuvo de guardia en la noche vio a Adrián Fernández en la comisaría y si escuchó lamentos de personas, responde que nunca escuchó nada, pero si puede afirmar haber visto al capitán en horas de la noche, lo que no era extraño, que este pasaba mucho tiempo en la comisaría. Que Fernández también salía hacer patrullaje y detenciones. Era muy severo con sus propios funcionarios. No recuerda a quien entregó el mando el capitán Fernández. Señala que conoció a Thompson, quien era de la Tenencia Pajaritos y después pasó a trabajar a la tercera, siendo también operativo. Se le pregunta por otros hechos. A lo pertinente afinca que del asalto al Retén de Bahía Mansa tuvo conocimiento, aunque no puede dar fe de que ello haya ocurrido. También supo que los atacantes fueron detenidos y muertos, lo que llegaron fallecidos a la comisaría. En ese procedimiento estuvo el capitán Fernández y Sergio Rosas, por su parte Nelson Rosas Cárdenas estaba en esa época en el mismo Retén de Bahía Mansa. Que él no fue a ese sector aunque lo han inculpado de haber sido partícipe de hechos ilícitos. Preguntado si en el operativo pudo haber participado el marenga Jorge Garcés responde que no sabe si este estuvo o no, pero también participaba de operativos. Éste siempre andaba con Adrián Fernández, al igual que Canales y Eliseo Águila. Dice que Garcés era el guardaespaldas de Fernández. Agrega, Garcés era cabo antiguo mandaba a todos los que tenían menos tiempos en la filas. Éste era medio agresivo, especialmente cuando solía andar con trago, ya que era protegido del jefe Fernández.

En declaración judicial de fecha 07 de abril de 2003, rolante de **fs. 632 a 633 (Tomo II)**, en lo pertinente dice que días antes del 11 de septiembre de 1973 fue trasladado desde el Retén Las Lumas a la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno, en ese entonces tenía el grado de cabo primero de carabineros. Hubo varios detenidos por razones políticas en la tercera comisaría, pero no recuerda el nombre de esas personas, solo recuerda a una señora Ávila (alias la “coneja de Cascadas”), una señora Torres y un señor Zúñiga. Estas detenciones eran ordenadas por el jefe de la unidad capitán Adrián Fernández Hernández y él mismo decía, cuando una persona quedaba en libertad. Generalmente los detenidos eran por pertenecer a partidos políticos de la unidad popular. Que nunca participó de detenciones de personas. Señala que no es cierto que el capitán Fernández hubiera formado un grupo especial para realizar esas detenciones de personas políticas. Cualquier carabinero al que el capitán le ordenara podía hacerlo. Atestigua que en el subterráneo de la comisaría había un lugar donde se interrogaba a los detenidos por “cosas políticas”. Ahí solo entraba Eliseo Águila, Canales y el propio capitán Fernández que bajaba a menudo. A veces estaba también el suboficial mayor Oscar Vargas. Nunca escuchó que se torturara, algunas veces cuando bajó, no había nadie y vio unas cajas, unos catres, pero no había cables de electricidad o artefactos para torturar a la gente. Fundamenta que una vez participó en el interrogatorio de una señora Torres, pero fue al lado de la sala de guardia y solo se le preguntó por sus vinculaciones políticas. Este interrogatorio lo hizo Eliseo Águila. Salió de la institución de carabineros en 1986 y nunca supo de ejecuciones de personas que hubieran estado detenidas en la tercera comisaría en la que trabajaba. Que ningún carabinero de su unidad hizo un comentario similar. Tampoco participó en ninguna ejecución ni le consta que la hubiera habido. Que no es cierto que hubiera degollado a Cesar Ávila Lara.

A.2 FEDERRINA DEL ROSARIO BARRIENTOS CANCINO (22 años de la época de los hechos). En **declaración extrajudicial** de fecha 01 de septiembre de 2015, rolante de **fs. 567 a 569 (Tomo II)**, sostuvo en lo pertinente que su marido Carlos Delgado Muñoz falleció el año 2003, y trabajaba como conductor de la empresa de buses “Mar Bus” realizando viajes de Osorno a Bahía Mansa, que para el año 1973 después del golpe de Estado, su marido le contaba que en algunos viajes los carabineros paraban el bus, generalmente antes del

cruce con Pocatrihue o en la “Visera”, sector que queda como a 14 kilómetros de Bahía Mansa. En esos controles los carabineros les pedían carnet de identidad a los pasajeros, revisaban el equipaje y en algunas ocasiones bajaban a pasajeros. Por lo que recuerda, decían que eran desconocidos, es decir, no de Bahía Mansa, también decían que con los fusiles los carabineros le pegaban a esa gente y luego hacían que el bus siguiera su camino, quedándose ellos con las personas que bajaban, le parece que detenidas, siendo esos los únicos incidentes que le contaba su marido. Esto pasó inmediatamente ocurrido el golpe, no recuerda si sólo los primeros días de pasado el golpe o esto duró más meses, pero sí que inmediatamente pasado el golpe eso pasó varias veces. Agrega otro hecho y sostiene que los carabineros que hacían los controles a los buses y bajaban a la gente no eran de Bahía Mansa, venían de fuera, no sabe de dónde pero cree que de Osorno. Denuncia lo acontecido con ella y su marido en octubre de 1973.

A.3 NOEMÍ DEL CARMEN CARRASCO MARAGAÑO (de 19 años de edad a la época de los hechos). En **declaración extrajudicial** de fecha 02 de noviembre de 2015, rolante de **fs. 570 a 572 (Tomo II)**, aduce que Erico Carrasco Sanhueza es su padre, dueño de los buses “Bus Mar”, para el 11 de septiembre de 1973 y hasta la fecha efectúa el recorrido de transporte de pasajeros entre la comuna de Osorno y Bahía Mansa. En dicha fecha su padre tenía una micro de color verde, no recuerda la marca ni modelo, con la cual transportaba pasajeros en la mañana, a esos de las 07:00 horas, saliendo de Bahía Mansa con destino al terminal de la “Feria de Raque”, agregando nombre de conductores y auxiliares. Cuenta que el 17 de septiembre de 1973 su padre adicionó un camión para el transporte de pasajeros el que en el sector Guaicho fue “parado por carabineros”, entre ellos recuerda a Eliecer Águila, a quien le decían “Cheo”, recuerda que pararon el camión, sin controlar al conductor, bajaron a todas las personas que iban en el camión y los mandaron a tirarse al suelo, luego si se demoraban mucho con sus mismas armas les pegaban culetazos, incluyéndola a ella, ya que el carabinero Águila le ordenó al otro que le pegara con su arma y la obligó a tirarse al suelo. Revisaron a las personas, a algunos les pegaron y luego de eso se quedaron con algunos de los pasajeros detenidos en el lugar, de esos solo recuerda a uno de apellido Quinán fallecido, ordenándoles seguir el viaje a Bahía Mansa. Mencionando otros trabajadores de la empresa de buses. Relatando que pasado el 11 de Septiembre de 1973, no sabe si antes de que los carabineros

mataran a una mujer y dos hombres por un supuesto atentado al Retén de Carabineros en Bahía Mansa, o después de eso, los carabineros “mataron a un vecino de Pucomo, cuyo apellido era Salas, quien de la noche a la mañana desapareció”. En cuanto a Marcelo Gutiérrez Gómez dice no conocerlo.

A.4 ROLANDO DEL CARMEN RÍOS GARCÍA (41 años de edad a la época de los hechos). En **declaración extrajudicial** de fecha 19 de noviembre de 2015, rolante de **fs. 583 a 584 (Tomo II)**, advirtió que asumió como jefe de la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno, durante el año 1974, no recuerda la fecha exacta. El jefe anterior era Adrián Fernández Hernández, no le hizo entrega de la unidad, ni siquiera estaba en el destacamento, ni en la ciudad de Osorno, se comentaba que había huido a la parte rural de Osorno, comentario de la gente que lo conocía y de los funcionarios. Se le pregunta por otras situaciones y en cuanto a los hechos no aporta antecedentes.

A.5 MARÍA GLADYS ÁVILA ROSAS (25 años de edad a la época de los hechos). En **declaración extrajudicial** de fecha 26 de febrero de 2003, rolante de **fs. 657 a 658 (Tomo III)**, arguye que en el año 1973 no tenía militancia política, pero era presidenta de un sindicato agrícola y delegada ante la CUT de Osorno. Vivía en ese entonces en el sector El Volcán, Las Cascadas, comuna de Puerto Octay. El día 17 de septiembre de 1973, supo que era requerida, su nombre salió en un bando militar. Presentándose en el Retén de carabineros de Las Cascadas, narrando lo vivido en ese contexto, que posteriormente fue trasladada a diferentes unidades policiales entre ellas la Tercera Comisaría de Osorno, donde solo estuvo un momento, siendo enviada a la Tercera Comisaría de Raque a cargo de Adrián Fernández, a quien conocía desde mucho antes porque compraba en el almacén del sector Las Cascadas y animales a su abuelo. Arguye que en dicho lugar estuvo detenida por alrededor de siete días y torturada, siendo llevada al subterráneo utilizada como sala de tortura, detallando todo lo acontecido con ella y las cosas que pudo observar en dicho lugar. Destaca que Adrián Fernández era quien daba las órdenes de las torturas. Revela que muchas veces llegaban militares y era el propio Fernández el que entregaba a algunos detenidos a ellos o a investigaciones. Continúa relatando lo vivido. Esgrime que la segunda vez que fue detenida en la Tercera Comisaría de Raque, estaba Adrián Fernández y pudo ver a su primo Cesar Ávila en el subterráneo donde torturaban, no volviéndolo a ver. Sigue refiriendo a su contexto propio.

A.6. JUAN GUALBERTO GUARDA CASTRO (32 años la fecha de ocurrencia de los hechos). Declara de fs. 778 a 779 (Tomo III) y de fs. 865 (Tomo III).

En declaración extrajudicial con fecha 5 de septiembre de 2016, **rolante a fs. 778 a 779 (Tomo III).** Divulga que es nacido y criado en San Juan De La Costa, lugar en el que se quedó a vivir hasta el año 1963 aproximadamente, ya que se trasladó a la comuna de Osorno, al sector Pampa Schilling de Raque Alto, por lo que el golpe de estado del 11 de Septiembre de 1973 le tocó en Osorno, lugar en el que permaneció hasta el año 1980 más o menos, que fue cuando se separó y se fue a vivir a Temuco. Funda que si bien su tío Juan Héctor Guarda Bracho junto a su socio Eleuterio Guarda Bracho tenían dos buses y un camión que efectuaban el recorrido entre Purrihuín y Osorno esto es por San Juan De La Costa, él nunca trabajó para ellos como chofer o auxiliar, sin embargo tiene un familiar que se llama Adolfo Guarda Rosas que es su primo, también de San Juan de la Costa, cree que vive en Osorno, quien para el año 1973 era chofer de la empresa de buses de Tuchie, efectuando el recorrido entre Osorno y Bahía Mansa, siendo este el único familiar que recordó manejara o trabajara en buses para el año 1973.

En declaración judicial con fecha 29 de agosto de 2017, **rolante de fs. 865 (Tomo III).** Ratifica declaración extrajudicial que rola a fs. 778 a 779, y que en ese acto le ha sido leída. A la pregunta, proclama que él sólo escuchó, que la víctima de la presente causa, cuyo nombre es Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez, se había perdido, lo escuchó porque él vivía en la misma cuadra que él, supo que fue detenido por Carabineros, nada más. Aseveró que la persona que trabajaba en los buses era su primo Adolfo Guarda Rosas y no él, quien podría tener antecedentes. Agregó que se fue a Temuco, porque era acosado constantemente por Carabineros de Osorno por su apellido, pero nunca sufrió torturas.

A.7 ECAR ADOLFO GUARDA ROSAS (30 años para la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 787 a 788 (Tomo III) y de fs. 892 a 893 (Tomo III).

En declaración extrajudicial prestada con fecha 16 de octubre de 2016, **rolante de fs.787 a 788 (Tomo III).** Afinca que cuando joven trabajó como cuatro años para la empresa de buses de Tuchie, como auxiliar del recorrido de la micro que iba de Bahía Mansa a Osorno, no recuerda los años específicamente en que trabajó para el "Turco" Tuchie, si fue antes después del Golpe de Estado, pero el

conductor del bus era el mismo Tuchie, su dueño, y en algunas ocasiones lo acompañaba su señora, no recuerda sus nombres ni apellidos. Mientras trabajó para Tuchie, deliberó que en una oportunidad los Carabineros en el cruce de Bahía Mansa con Maicolpué hicieron parar el bus en la mañana y subieron junto a unos tres o dos jóvenes, no se acuerda tampoco si habían mujeres, pero el asunto es que los trasladaron como pasajeros hasta la antigua feria de Raque, que quedaba en calle Chillán, sin volver a verlos ni qué les pasó. Asimismo, después de eso que relato, en un viaje de Osorno a Bahía Mansa, los Carabineros en el cruce hacia Maicolpué pararon el bus y bajaron a uno o dos jóvenes, no se acuerda ni vio mucho, ya que todo fue por la puerta de atrás del bus, siendo eso lo único que se acuerda. Como trabajó poco tiempo con Tuchie, no recuerda los nombres de los pasajeros frecuentes del bus, era un cabro joven y su padre lo llevó de regreso a su casa en el campo. Tampoco conoció por nombres ni apellidos a los Carabineros de Bahía Mansa, ya que al parecer los cambiaban bien seguido.

En declaración judicial con fecha 1 de febrero de 2018, **a fs. 892 a 893 (Tomo III)**, efectivamente trabajó dos años en la empresa de Tuchie. Juan Gualberto Guarda Castro es su primo. En relación a los hechos que se investigan, con la detención de don Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez, espeta que no lo recuerda ni tiene conocimiento de ello. Respecto a los conductores, eran de apellido Tuchie. Para el 11 de septiembre de 1973, él estaba trabajando donde los Mito Tuchie, vio que en las calles andaba militares y carabineros, pero en los viajes que hizo como auxiliar del bus, dos veces carabineros detuvieron el bus y en la segunda vez se llevaron a un "gallo" más joven, ese joven tiene que haber tenido 17 años, esto ocurrió en 1973. Detalla que carabineros no dijo nada, solo lo tomaron de la mano, esto fue en el kilómetro 30 con dirección a Bahía Mansa, lo recuerda con claridad porque ese joven era casi de su edad, no supo qué pasó con ese joven después del 73. Atestigua que no sabe de qué retén eran esos carabineros, porque estaban en mitad del camino, eran como tres carabineros, dos tomaron al chico y lo dejaron al lado de la patrulla, y ellos siguieron el viaje. Este joven iba "pelaito", no llevaba ninguna cosa. Anexa que en otra oportunidad un carabinero bajó dos personas del bus, porque parece que habían robado, esto también ocurrió en el trayecto a Bahía Mansa, hasta Bahía Mansa serían unos 60 kilómetros. Sustenta que cuando detuvieron a este joven, él no decía nada, pero

les dijo: "aquí estoy señores, aquí está mi cabeza, háganla pedazo", frente a ellos los carabineros no le hicieron ninguna cosa. Parece que los carabineros conocían a ese chico, porque uno de los carabineros le dijo; "tu padre y tu madre te dijeron que no hicieras nada malo". Anexa que en Bahía Mansa en el muelle mataron a dos personas, les dispararon, pero no sabe si los mataron con balas o los apuñalaron, eso también fue cerca del 73.

A.8 ADRIÁN JOSÉ FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, (35 años para la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 217 a 221 (Tomo I) y de fs. 1010 a 1013 (Tomo III).

En declaración judicial con fecha 12 de diciembre de 2014, **de fs. 217 a 221 (Tomo I)**, puntualiza que para el año 1973 se desempeñaba como Comisario de la Tercera Comisaría de Raque, en la ciudad de Osorno, la que dependía de la Prefectura cargo del Coronel Rojas. Era el jefe de unidad y tenían jurisdicción en el Departamento de Osorno, es decir, desde la Comuna que San Pablo, parte de la Comuna de Osorno, Entre Lagos y Puerto Octay, incluyendo también la Aduana de Pajaritos que le correspondía a Entre Lagos, Puyehue. A su cargo estaban los destacamentos que dependían de la Tercera Comisaría, es decir, entre unas 80 a 100 personas, no podría determinarlo. Dependían de ellos las Tenencias de los territorios antes señalados. Anexa que en la Comisaría, después de él, debería haber habido un Capitán, pero no había pues las dotaciones eran irregulares, así que le correspondía hacer, además, las tareas administrativas. Por eso, le seguía el Suboficial Vargas y luego otros suboficiales cuyos nombres no recuerda, salvo uno de apellido Inostroza. Dependía directamente de la Comisaría el Retén Eleuterio Ramírez (salida Osorno hacia Puyehue, km. 22) y San Juan De La Costa. De la Tenencia San Pablo dependía a su vez, el Retén Trumao y Quilacahuin. De la Tenencia Puerto Octay, dependía el Retén Las Cascadas, Cancura, Ñuble y Rupanco. De Entre Lagos, el Retén Puyehue. Proclama que sus funciones eran administrativas y especialmente distribuir los destacamentos para los operativos en sectores rurales, designar servicios, fiscalizar servicios, etc., sin perjuicio de otras misiones que les encomendaba la Prefectura, como reuniones de oficiales, comisiones especiales cuando llegaba alguien de cierta trascendencia. En cuanto a los hechos ocurridos después del Golpe Militar y debido a que existía un estado de excepción constitucional, no era difícil mantener el orden social. Todos los servicios estaban en pos de este orden (Carabineros,

Investigaciones), así que no hubo desórdenes públicos. El mismo 11 de septiembre se detuvo gente de la Universidad y se pasó a la Justicia Militar, que funcionaba en el inmueble que era destinado al Hospital de Osorno, que aún no estaba habilitado para atender. Estas personas eran de los que preparaban la toma de los campos y ese tipo de situaciones subversivas. No hubo muertos en estos hechos, las detenciones fueron tranquilas. Luego de que el Tribunal le hace referencia a los hechos que habrían terminado en la desaparición y muerte del señor Marcelo Gutiérrez Gómez, nada puede aportar. Declara respecto de los demás nombrados, el hermano del desaparecido, sobre un señor Aguilar Cubillos y de doña María Bustamante, dando cuenta que recibió un llamado telefónico, posiblemente del personal de servicio de la Tercera Comisaría, quién le informó que habría habido un enfrentamiento entre desconocidos y personal de Bahía Mansa, motivo por el cual se hizo uso de las armas de servicio con el resultado de muerte de las tres personas antes señaladas. Este hecho, a su vez, lo comunicó telefónicamente, pero además, se hizo mediante el parte policial respectivo. No sabe si para este caso específico se utilizó un radiograma interno. Eso es todo lo que supo respecto al caso, sin que se le haya dado a conocer de ninguna detención de un menor en un bus.

En declaración judicial con fecha 2 de agosto de 2019, **de fs. 1.010 a 1.013 (Tomo III)**. El tribunal lee las declaraciones de Luis Humberto Pinol Carrillanca, de fs. 267 y siguientes y de 324 y siguientes. Depone que no recuerda en ese momento a Luis Pinol. Él no formó ningún grupo tendiente a realizar detenciones por motivos políticos. Solo había un grupo de instrucción, pero este grupo estaba a cargo de la Prefectura. Solo recuerda a dos o tres personas que estaban en la guardia. Él tenía muy poco personal en la Comisaría, no había un capitán en su unidad. El tribunal le leyó la declaración de Rubén Molina González, de fs. 288 y siguientes, aproxima que no tiene conocimiento alguno de lo que él hacía, Molina según su recuerdo era un practicante que no pertenecía al mando de la Tercera Comisaría. Desconoce por qué esta persona relata los hechos que se le leyeron. Es falso que haya formado un grupo especial. Sobre el subterráneo, precisa que eran los calabozos de la unidad y estos se inundaban en el invierno. Ignora absolutamente el hecho sobre la muerte de una persona a manos de Becker. Es falso que haya presenciado algo así. Becker fue un hombre muy activo, tenía un título de mecánico, era jefe del retén de Puyehue. Basa que a Becker lo llamaban,

cuando tenían en panne de vehículos, para que se fuera a desempeñar en la comisaría de Osorno. El tribunal lee la declaración de José Santana Oyarzun, de fs.292 y siguientes, espeta que no recuerda a esa persona. Es falso que él haya habilitado el subterráneo para efectuar las torturas a detenidos. También es falso que hubiera tenido un grupo especial. Si hubiera sido real indiscutiblemente debería haber tenido conocimiento. Es falso también que él haya salido en operativos a detener personas. El tribunal lee en lo pertinente la declaración de Juan Segundo Moreira Garcés de fs. 294 y siguientes, a lo cual sostiene que él era uno de los choferes que había en Raque, se desempeñaba como conductor del furgón. Efectivamente dormía en la comisaría, pero no es efectivo lo que esta persona menciona. Anexa que hubo dos retenes que se replegaron a la comisaría de Osorno, luego del 11 de septiembre de 1973, especula que fue San Juan de la Costa y Rupanco. La situación fue en grado 1, acuartelados, todos los funcionarios de la comisaría debían quedarse a dormir en el cuartel, no había excepción, ni siquiera los casados. Suma que la única salida en terreno fue cuando por orden de la Fiscalía militar en compañía de funcionarios de Ejército a buscar al regidor Zapata en el sector del lago Rupanco al interior de las Gaviotas y Fulelfu. Eran como 30 hombres de Ejército que fueron al lugar, ellos iban a cargo de un subteniente. Él de la comisaría fue con dos funcionarios cuyos nombres no recuerda. Estuvieron como dos días en eso, pero no lo hallaron. El tribunal le leyó en lo pertinente la declaración de María Millaquipai de fs. 297 y siguientes, acota que es totalmente falso lo que se relató. Además, el retén Ovejería pertenecía a la Primera Comisaría de Osorno. Es absolutamente falso lo que relato esta persona. Además él no tenía personal para hacer eso. En la comisaría no tenían más de 6 personas, entre ellos el vigilante exterior, el telefonista, el que hacía de guardia, el chofer de servicios. Musita que los retenes que fueron agregaron de San Juan de la Costa y Rupanco, eran para reforzar la base y también cumplían el acuartelamiento dispuesto. Ellos en la base no eran más de 10 hombres. Cuando se fue a Santiago aún se mantenía la misma situación, así que ignora cuando los funcionarios de Rupanco y San Juan retornaron a sus unidades. Describe que solo tenían un furgón Suzuki 777, color blanco y negro. Tenían caballos para movilizarse, pero no había jinetes. Había algo de 10 caballos en total en la Comisaría. Después del 11 de septiembre de 1973 no requisaron vehículos. Pero por orden de la comandancia de la guarnición se les agregó una camioneta Ford

blanca, pero no les sirvió mucho porque estaba en mal estado. El tribunal le leyó la declaración de Rodolfo Segundo Cheuquelaf Lorenzo, de fs. 772 y siguientes. Declara que no estuvo en el procedimiento que menciona Cheuquelaf. Lo desconoce a él. El relato que él hace sobre un joven que él habría mandado a detener lo desconoce totalmente, es falso. A la pregunta, el que estaba entrante del segundo turno era quien lo acompañaba a las visitas a otras unidades cuando tenía que concurrir por razones de mando, es decir, a fiscalizar o adoptar procedimientos. El suboficial Mayor Vargas era quien lo subrogaba en los servicios. Fundamenta que no tenía un grupo especial, claro que todos eran de confianza porque eran pocos. Después de 11 de septiembre de 1973, recibió dos misiones importantes, una de ellos fue la búsqueda de Zapata. Cuenta que la mayor diligencia la hicieron por orden del general Manuel Contreras Sepúlveda, que fue una bomba que pusieron en un puente que estaba hacia la costa. Recuerda que estaba la carga explosiva en el puente. Dejó a Rosas custodiando el lugar porque estaban seguros que iban a ir a conectar la bomba. En eso lo llaman de la Comisaria y le dicen que habían detenido a la persona que había puesto la bomba y pasó los antecedentes a Inteligencia del Ejército, creo que un militar de apellido Hesse estaba a cargo de ese grupo. Luego de eso llamó personalmente al general Contreras para darle cuenta de la situación. Esta persona que puso la bomba era un estudiante de la universidad de apellido Anfosi, que tenía entendido era oriundo de Aysén. Adosa que Osvaldo Foller y Fredy Rosas eran los encargados de la Fiscalía Militar. Las dos fiscalías estaban en el mismo lugar, esto es, el Hospital que aún no había sido inaugurado. Todos los detenidos que se daban en el sector de la Tercera Comisaría de Osorno, podían ser por militares que salían de patrullajes o por patrullas de diferentes instituciones de la defensa nacional. A veces los militares dejaban detenidos en tránsito en la tercera comisaría, los de guardia los ingresaban y dejaban constancia en el libro de guardia. Ellos iban con una guía donde se indicaba el motivo de la detención, siempre iban con documentos de la Fiscalía. Luego, iban en la noche y se los llevaban a la Fiscalía, es decir, ellos se hacían cargo de sus detenidos.

A. 9. INÉS ELENA BERTÍN YÁÑEZ (14 años a la época de ocurrencia de los hechos). En **declaración extrajudicial** del 03 de septiembre de 1990, **de fs. 32 a 35 (Tomo I)**, la víctima estudiaba en la noche y trabajaba en el día. Hacía pololos. No pertenecía a ningún partido político, pero era de ideas socialistas.

Salía con amigos que eran del FER. En cuanto a los hechos, antes de 5 de octubre de 1973 fue a la casa de su padraastro que quedaba en Bahía Mansa. Ahí estaba refugiado su hermano Edgar Cárdenas Gómez. Con él estaba una niña de nombre Ester Bustamante y Jorge Aguilar. A ellos los estaban buscando. El 4 de octubre de eses año volvió a Osorno para comprar alimentos y remedios en la farmacia donde trabajaba la señora de Jorge Aguilar y el 5 volvió a Bahía Mansa. Esa señora fue la última persona en verlo, ya que el día 4 en la noche fue allanada la casa de Bahía Mansa, donde mataron a los tres ocupantes. Ignora el nombre de la señora de Aguilar y no sabe dónde ubicarla. Esto lo supo a través de la prensa del domingo 6 de octubre de 1973, en que se señalaba que ellos tres habían sido fusilados cuando trataron de asaltar un retén. Al leer esto su cuñado Luis Gregorio Cárcamo Gómez, actualmente fallecido, fue a Bahía Mansa donde un pescador de lugar de apellido, al parecer Bañales, cuyo paradero desconoce, y le dijo que lo habían bajado de la micro a la altura del puente Contaco, no sabe si carabineros o militares, pero el camino estaba custodiado por militares en esa fecha. Su cuñado no fue a la casa ya que tenía temor. Ella recorrió diversos lugares para saber de él, en el hospital Nuevo, Copresur, la cárcel, la primera Comisaría, la morgue. En ninguna parte le dieron respuesta. Nadie le ha dado pistas, nadie lo vio. Nunca han hecho gestiones judiciales. Se podría hacer un monumento donde poder ir a dejar flores.

A.10. JOSÉ ADOLFO PANQUECO CALFULEF (35 años a la época de los hechos). En **declaración extrajudicial** del 14 de mayo de 1994, de **fs. 34 a 35 (Tomo I)**, ostenta que tres o cuatro días pasado el 11 de septiembre, siendo las siete de la tarde aproximadamente, pues empezaba a oscurecer, pero no mucho, subieron las cuatro personas que vivían en la casa por la calle que existía desde mucho antes y que es la misma de hoy. Una de esas personas era el hijo del finado Cárcamo (que tenía sitio en Bahía Mansa, en la Loma del Risco, donde sucedió lo que está contando, y que también tenía una casa en Osorno). Ese hijo se llamaba Edgar Cárcamo. A las otras tres personas no las conocía, pero eran dos hombres y dos mujeres. Como a las dos horas después, estaba entre oscuro y claro, subieron dos carabineros armados con metralletas por la misma calle, en dirección a la casa del finado Cárcamo, donde se encontraban las cuatro personas que habían subido antes. Los carabineros eran Nelson Rojas y Huentrotupay. Él miraba por la ventana del sobrepiso de su casa que tenía en ese lugar, un poco

más debajo de la casa del finado Cárcamo, a orilla de la casa por donde subieron todas esas personas. Esos carabineros estuvieron unos veinte minutos en el lugar, tiempo en el que dispararon sus metralletas, pues la vivienda quedó hecha pedazos. Aún quedan restos de materiales que están en la casa que hoy existe y que está un poquito más arriba de donde estaba la antigua. Luego, los dos carabineros bajaron por la misma calle, con dos personas que llevaban vendadas de los ojos; las llevaron al Retén de Carabineros; las llevaban amarradas de las manos, al parecer era con cadenas. Las dos personas eran mujeres, una era estatura mediana alta, morena, la otra era baja y de color blanquita. Supone que el otro joven murió, porque el joven Cárcamo estaba después en Osorno, con el tiempo fue a ver su casa hecha tira. (Sobre el tiempo, primero dijo a los cuatro meses, y luego dijo como al mes). El joven Cárcamo conversó con él y le dijo “me escapé de las garras”; no conversaron de otras cosas, algo le dijo que los vendaron. Sobre el otro joven, supone tiraron el cuerpo al risco, hacia el camino, pues como al mes y medio en el risco andaban hartos jotes, por lo menos anduvieron los jotes como tres meses, calcula hasta después de fin año. No vio el cuerpo, pero debe haberlo tirado a esos riscos, pues en ese tiempo unos niños y jóvenes iban a buscar leña a ese lugar y encontraron un cinturón y ropa metida en el risco, en la loma para abajo. El lugar podría ser entre unos 10 a 20 metros hacia el cruce de Bahía Mansa, desde donde está la subida a la casa. La gente comenta que vio ropa y cinturón. Los que podrían dar más información podrían ser los Bañares y los Hualamán, porque ellos eran los que más iban a buscar leña al lugar. Los Bañares aún viven en Bahía Mansa, pero ya son jóvenes y adultos, ariscos y desconfiados, quizá quieran conversar. Los Hualamán ya no viven en el lugar, se fueron a Osorno, quizás donde vivirán.

A.11. EDGAR MARCELO GUTIÉRREZ BERTÍN (0 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). En **declaración extrajudicial** del 11 de diciembre de 2013, **fs. 98 a 99** (Tomo I), aquilata que es el único hijo de víctima Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez, siendo su madre Inés Elena Bertín Yáñez (fallecida). Tomó conocimiento de los hechos a partir de comentarios de su madre, ya que para la fecha aún no nacía. Su madre tenía 13 años y su padre 17 años de edad, relatándole que el 05 de octubre del año 1973 sus padres Inés y Marcelo, residiendo en la casa de los abuelos de su madre, ubicada en el Campamento Bernardo O'Higgins, frente al Hospital Base de atención pública, siendo las 15:00

o 16:00 horas, su madre se traslada junto a su padre hasta el paradero ubicado en ese tiempo en la intersección de calles Valparaíso y Concepción, Raque Bajo, lugar donde su familia lo ve por última vez, su finalidad era concurrir en bus hasta el Sector Bahía Mansa, para entregar a su hermanastro Edgar Eugenio Cárdenas Gómez, una mercadería. De lo anterior, los lugareños de Bahía Mansa, comentaron a su madre y abuela, que durante una fiscalización que realizaron funcionarios de Carabineros de dotación de la Subcomisaria Raque Bajo, y al parecer de dotación de la Subcomisaria Bahía Mansa, en el bus donde se transportaba su padre, éstos al tomar conocimiento del alcance de apellido con una persona que fue muerta en un enfrentamiento el día anterior, lo hacen desaparecer, no teniendo más conocimiento respecto a lo sucedido posteriormente. La persona muerta en el enfrentamiento anterior corresponde a su tío Edgar Eugenio Cárdenas Gómez, quién había sido muerto el día anterior por el personal de carabineros descrito. No tiene conocimiento de que su padre militara en algún partido político ni era simpatizante, en comparación con su tío, quién era militante del Partido Socialista, es por eso que presume fueron investigados y posteriormente muertos por agentes del Estado, en específico por funcionarios de Carabineros de la Subcomisaria Raque Bajo y Bahía Mansa. De conformidad a relatos de personas del sector Bahía Mansa, muchas de las personas que fueron muertas por agentes del Estado, fueron algunos lanzados al mar, ríos y otros enterrados en una fosa común, no teniendo conocimiento específico de esas desapariciones de cadáveres. Indica que su tío Edgar fue sepultado en el Cementerio Católico de la ciudad de Osorno, y su padre se encuentra en los registros de la Vicaría de la Solidaridad, en relación a detenidos desaparecidos durante el gobierno militar en Chile. Dichos ratificados judicialmente a fs. 1006 (Tomo III).

A.12. JOSÉ OBERTO SANTANA OYARZÚN, (27 años a la época de los hechos). Depone de fs. 162 a 164 (Tomo I), fs. 251 a 253 (Tomo I) y de fs. 292 a 293 (Tomo I).

En **declaración extrajudicial** del 01 de julio de 2014, **fs. 162 a 164 (Tomo I)**, hace una breve reseña de su carrera funcionaria. Manifiesta que en el mes de junio del año 1972 fue destinado a la Tercera Comisaría de Osorno, desde San Antonio, siendo inmediatamente enviado a cumplir funciones en el Retén Termas de Puyehue, por un lapso de dos a tres meses aproximadamente, regresando a la

base, a saber la Tercera Comisaría Osorno, donde el Comisario Jefe era el Capitán de Carabineros don Adrián Fernández Hernández, quién antes de llegar a la mencionada era el ayudante del señor Intendente o Gobernador de Osorno en la época, oficial que tenía bastantes problemas con el personal subalterno que no compartía sus ideologías y actividades sociales que realizaba dentro de la unidad policial, ya que era bastante prepotente. Recuerda que para el día 11 de septiembre del año 1973, estando casado y tener dos hijos junto a su cónyuge, teniendo el grado de Cabo, se levantó temprano como todos los días para presentarse en la unidad policial y comenzar sus labores habituales. Una vez en las instalaciones de la Tercera Comisaría, el Comisario anteriormente nombrado le ordenó que se hiciera cargo del servicio de guardia, cosa que tuvo que acatar, a pesar de no estar designado para dicho servicio el día indicado, cumpliéndolo junto al Carabinero Roberto Ubilla Soto, quedando todo el personal de la Comisaría acuartelados por orden del Comisario. Siendo alrededor de las 10:00 a 11:00 horas de la mañana del mismo día 11 de septiembre del año 1973, se les comunica que en la ciudad de Santiago había asumido el Gobierno las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, quedando en calidad de acuartelados, hasta nueva orden. Recuerda que solo efectuó servicio de guardia hasta las 06:00 horas del día 14 de septiembre del año 1973, ya que el Comisario, Capitán Adrián Fernández le notificó, junto a Ubilla, que desde ese momento estaban arrestados y que iban a ser trasladados a las instalaciones de la Tenencia de Raque Alto, unidad que dependía de la Tercera Comisaría de Osorno. Entre los días 11 al 13 de septiembre del año 1973, durante el tiempo que estuvo acuartelado en la Tercera Comisaría, cumpliendo servicios de guardia, se pudo percatar que el Capitán Fernández Hernández, junto a un grupo de funcionarios de la misma Comisaría, tales como el Suboficial Mayor Oscar Vargas Vargas, Sargento Segundo Eliseo Águila Salgado, el Cabo Mario Maragaño Oyarzún (chofer), el Cabo José Ríos Vergara (chofer), los carabineros Guillermo Antilef Quintul, Juan Segundo Moreira Garcés, y Sergio Rozas Silva, el Escribiente Segundo Vladimiro Fernández Rojas, el Cabo Enfermero de Ganado Gustavo del Carmen Muñoz Albornoz, más conocido como "El Loli", Rafael Pérez y Rolando Becker Solís, salían a realizar distintos procedimientos en la Provincia de Osorno, desconociendo que actividades realmente efectuaban. Uno de los días señalados anteriormente, estando de guardia, se hizo presente en el servicio de guardia de la Tercera

Comisaría de Osorno el Senador de la República don Anselmo Zule, quien solicitó hablar con el Comisario Adrián Fernández, por lo que se dirige a su oficina dándole cuenta de la presencia del señor Senador, obteniendo como respuesta que no lo atendería. Acto seguido llamó a los funcionarios con los que trabajaba, anteriormente nombrados, y les ordena que envíen al Regimiento Arauco de Osorno al Senador Zule, ignorando que ocurrió realmente con esa autoridad. Manifiesta, además, que en calidad de arrestado estuvo hasta el mes de noviembre del año 1973, si mal no recuerda, junto a Roberto Ubilla, donde se les permitió salir ni realizar labores policiales, solo efectuaron servicios administrativos. Conforme a los antecedentes anteriormente expuestos, ignora todo tipo de información relacionada con la detención y posterior desaparición de la víctima que se le menciona y es primera vez que escucha su nombre. Igualmente, hace entrega en esta ocasión de fotocopia de Oficio N° 59 de la Tercera Comisaría de Osorno, dirigido a la Prefectura de Carabineros de la misma ciudad, de fecha 14 de septiembre de 1973, confeccionado por el Capitán Adrián Fernández Hernández, mediante el cual se informa a la superioridad que los funcionarios mencionados en dicho documento no eran de su confianza y no ofrecían seguridad alguna por su marcada tendencia de izquierda, para constancia y ratificación de los dichos estampados en la presente declaración. A través del tiempo se ha sabido que el Capitán de Carabineros Adrián Fernández Hernández, durante el tiempo que estuvo en la ciudad de Osorno, como carabinero, mientras estuvo el gobierno militar, abusó de su condición, cometiendo diversas detenciones y desapariciones de civiles en la Provincia de Osorno, e incluso esta persona participó en la muerte de un familiar cercano a él, el cual fue encontrado en la aguas del Río Pilmaiquén.

En **declaración extrajudicial** del 06 de diciembre de 2014 **fs. 251 a 253 (Tomo I)**, hace una breve reseña de su carrera funcionaria. Invoca que en el mes de junio del año 1972 fue destinado a la Tercera Comisaría de Osorno, desde San Antonio, siendo inmediatamente enviado a cumplir funciones en el Retén Termas de Puyehue, por un lapso de dos a tres meses aproximadamente, regresando a la base, la que correspondía a la Tercera Comisaría Osorno, donde el Comisario Jefe era el Capitán de Carabineros don Adrián Fernández Hernández, quién antes de llegar a la mencionada era el ayudante del señor Intendente o Gobernador de Osorno en la época, oficial que tenía bastantes problemas con el personal

subalterno que no compartía sus ideologías y actividades sociales que realizaba dentro de la unidad policial, ya que era bastante prepotente. Recuerda que para el día 11 de septiembre del año 1973, estando casado y con dos hijos, teniendo el grado de Cabo, se levantó temprano como era habitual para poder irse a trabajar y comenzar con sus labores habituales en la unidad policial. Una vez en las instalaciones de la Tercera Comisaría, el Comisario anteriormente nombrado le ordenó que se hiciera cargo del servicio de guardia, junto al Carabinero Roberto Ubilla Soto, pese a que no estaban designados para cumplir el señalado servicio, quedando todo el personal policial, desde ese instante, acuartelados por orden del señor Comisario. Siendo entre las 10.00 y 11:00 horas de la mañana del día 11 de septiembre del año 1973 el personal policial se encontraba acuartelado, a través de las noticias de la radio tomaron conocimiento que en la ciudad de Santiago se había llevado a cabo un golpe de estado y que asumía el gobierno militar, lo cual fue ratificado a través de un comunicado oficial de Carabineros de Chile, por lo que se les dejaba en calidad de acuartelados hasta nueva orden. Recuerda que junto al Carabinero Roberto Ubilla Soto los dejaron a cargo del servicio de guardia en forma permanente, hasta que el día 14 de septiembre del año 1973 se les acerca el Suboficial Mayor Oscar Vargas Vargas, quien les informa que tenían que presentarse en la oficina del Capitán Adrián Fernández Hernández, por lo que junto a Ubilla llegaron alrededor de las 06:00 a 07.00 horas a la oficina del oficial, quién les comunica que desde ese instante estaban en calidad de arrestados, por lo que iban a ser trasladados a las dependencias de la Tenencia Raque Alto; esta situación le extrañó bastante, por lo que le pidió al Capitán Fernández que le señalara los motivos por los cuales estaban siendo puestos en calidad de arrestados, respondiéndole que se quedara callado, pero como insistió en su pregunta, le señaló que mejor se quedara callado o lo pondría a disposición de guerra, pero de igual forma le señaló que era por traición a los principios institucionales y al gobierno imperante, agregando que todo eso ocurrió en presencia del personal que se encontraba afuera de su oficina, ya que en ningún momento cerró la puerta. Luego, el capitán mencionado hace ingresar a personal de la Comisaría, quienes se encontraban portando fusiles sic, tales como el Suboficial Mayor Oscar Vargas Vargas, el escribiente Vladimiro Fernández Rojas, el Sargento Segundo Eliseo Águila Salgado, Gustavo Muñoz Albornoz, Rafael Pérez Torres, Sergio Rozas Silva, Juan Canales y Rolando Becker Solís,

quienes los apuntaban y los trasladaron a que reunieran sus pertenencias y quedaron a la espera de la llegada del Teniente Sergio Saavedra Olmedo, Jefe de la Tenencia de Raque Alto, quién una vez que llegaron a la Tenencia señalada, les comunicó que no podían portar armamento y que no podían salir de las instalaciones del cuartel policial. En esa condición estuvieron hasta diciembre del año 1973, si mal no recuerda. Ignora todo antecedente respecto de la víctima de la presente investigación, y que a través del tiempo y por comentarios que realizaban los mismos funcionarios de la Tercera Comisaría de Osorno, que el Comisario Adrián Fernández Hernández, junto al grupo de funcionarios anteriormente nombrados, cumplió funciones operativas una vez que se instauró el gobierno militar, realizando diversas detenciones de personas civiles en distintas partes de la jurisdicción de la Tercera Comisaría de Osorno, y que presenciaba las torturas de las distintas personas que llegaron detenidas.

En **declaración judicial** del 05 de marzo de 2015, de **fs. 292 a 293 (Tomo I)**, ratifica la declaración extrajudicial y por lo mismo, insiste en que no puede aportar ningún antecedente que sea útil para la investigación de la muerte de la víctima Marcelo Gutiérrez Gómez. Además, como fue acusado por el Capitán Adrián Fernández, y arrestado desde el 14 de septiembre del año 1973 hasta fines de diciembre del mismo año en la Tenencia de Raque Alto, no vio las cosas que pasaron en la Tercera Comisaría de Osorno. Sin embargo, en cuanto a la actividad que desarrollaba el Capitán Adrián Fernández Hernández en la Tercera Comisaría junto a un grupo de colegas, entre los cuales recuerda al Suboficial Mayor Vargas, el negro Rosas, Becker Solís, Pérez Torres, Gustavo Muñoz, apodado el “Loli”, Águila, Canales, Antilef, Wladimiro Fernández (civil de apoyo como escribiente), Inostroza, Maragaño (chofer) y Ríos Vergara, y por los comentarios que escuchó luego de ser liberado, supo, por ejemplo, que Fernández acusó a un Suboficial, y en frente de los funcionarios le empezó a dar golpes con la culata de su arma. Además, escuchó que habían habilitado el subterráneo de la Tercera Comisaría para efectuar las torturas de los detenidos, pero eso no le consta. Lo único que observó fue una noche cuando les hicieron levantarse y formarse frente a varias mujeres, incluso algunas estudiantes, las que fueron torturadas a golpes de puño y con las culatas de los fusiles, insistiéndoles que reconocieran que ellos eran del grupo partidista contrario a los del golpe militar. Por suerte esa noche las mujeres estoicas mantuvieron su posición de no

conocerlos, lo que era cierto por lo demás. Como nota ilustrativa tiene conocimiento que en la solicitud efectuada por el colega Becker como exonerado político, explica que le habían dado órdenes de matar a tres colegas, entre los que salía mencionado. Señala, además, que los hechos demuestran que Adrián Fernández tuvo mucho poder en esa zona, lo que aún no logra explicarse. Por eso hizo lo que quiso y anduvo por toda la zona, incluso por territorios que no eran de su jurisdicción. Señala que aunque nunca vio a Fernández personalmente, sí supo que él salía con su grupo a realizar operativos y detener personas. Señala, además, que pidió su traslado de Unidad en marzo del año 1974, por lo que no puede saber hasta cuando Fernández estuvo a cargo de la Tercera Comisaría. Le recuerda al Tribunal que desde su arresto en septiembre del año 1973 y hasta su nueva destinación en marzo de 1974, estuvo en la Tenencia de Raque Alto. Lo que sí sabe es que posteriormente, el Capitán Rolando Ríos García se hizo cargo de la Tercera Comisaría, a lo menos desde junio del año 1974, no sabe si antes. Descarga que según supo por comentarios, Adrián Fernández participó tanto de las detenciones como de las torturas.

A. 13. ADEMAR CATALÁN AGUILAR (36 años a la época de los hechos).

Depone de fs. 169 a 171 (Tomo I) y de fs. 319 a 323 (Tomo I).

En **declaración extrajudicial** del 01 de julio de 2014, **de fs. 169 a 171 (Tomo I)**, en el mes de junio del año 1962 fue contratado por Carabineros de Chile en la Primera Comisaría de Carabineros de Osorno, y en el mes de noviembre del mismo año fue destinado a realizar el curso de Recluta en la ciudad de Temuco, el cual duró alrededor de 4 meses, y una vez finalizado, regresa a cumplir funciones a la Primera Comisaría de Osorno. En lo pertinente blasona que una vez asumido el Gobierno Militar el 11 de septiembre de año 1973, al día siguiente todo el personal del Retén Bahía Mansa, por orden de la superioridad, se replegó a la Unidad Base, siendo esta la Tercera Comisaría de Osorno, donde estuvieron acuartelados hasta fines del mes de noviembre del año anteriormente indicado, donde solo le correspondió cumplir labores de centinela, no participando en detenciones ni custodia de detenidos, ya que por su grado en la época, el cual era de Carabinero, no se le daba a cumplir ese tipo de servicios, siendo realizados solo por funcionarios del grado de Sargento hacia arriba. Una vez que regresaron a las instalaciones del Retén Bahía Mansa, a fines de noviembre del año 1973, continuaron realizando los servicios preventivos y diligenciamiento de órdenes

judiciales. Agrega que desconoce toda información respecto de la víctima de la presente causa.

En **declaración judicial** del 27 de julio de 2004 **de fs. 319 a 323 (Tomo I)**, soflama que el 11 de septiembre de 1973 era Carabinero en el Retén de Bahía Mansa. Estaban en el Retén el Sargento Pinol, el Cabo Rosas, el carabinero Ramón Plaza, el carabinero Landis García y él. Tenían un jeep Rumano cerrado de color verde claro y lo manejaba Plaza, quien era el chofer. Al par de días después del golpe los fueron a buscar en camión, por orden del Comisario Fernández, porque parece que iban a bombardear la caleta. Como a los 8 días después del 11 de septiembre de 1973, los devolvieron al Retén, por lo que a fines del mes de septiembre ya estaban de vuelta, como el 28 de septiembre de 1973, pues ellos dijeron que en Bahía Mansa no había políticos. Cuando volvieron, reforzaron el Retén con 10 personas más o menos, las que estuvieron un par de días, unos 10 días, entre ellos el Jefe Francisco Inostroza. El Retén se reforzó porque tenían miedo de la gente de Bahía Mansa, esto es, que pudieran atacar contra el Retén o contra los Carabineros. En todo caso, nunca hubo nada de la gente contra ellos, nunca hubo un problema, pues eran queridos y cuando volvieron los recibieron amablemente, e incluso los echaron de menos. En ese Retén cumplió funciones entre 1972 y 1975. Sí hubo un atentado al Retén de Bahía Mansa, pero no pasó nada. Parece que fue como a las 17:00 horas. Él andaba con el Jefe del Retén en Osorno, es decir, con Luis Pino y nadie más, y puede que hayan ido a dejar documentación a los Tribunales. Al Retén llegaron como a las 20:00 horas, en micro de recorrido, y no pasaron a ningún lugar antes del Retén. No sabe en realidad a qué hora llegarían de vuelta, aunque sí estaba oscuro. El jeep había quedado allá, pues el Jefe era el suboficial Mayor Francisco Inostroza Baeza. Cuando llegaron encontraron que había detenidos, entre tres o cuatro, y le parece que había una mujer joven. Habían sido detenidos en el día mientras ellos andaban en Osorno. Ellos tenían bombas incendiarias que eran unos tarros llenos de fierros cortados, con mecha y como con 20 metros de cablería. Parece que había unos armamentos, pero no se acuerda, como tres armas, no sabe si revólveres o escopetas, no se acuerda bien. Se comentaba que habían atentado contra el Retén, pero no había daños o destrozos en el Retén. Tampoco había algún carabinero herido en el Retén. Las personas eran jóvenes alrededor de los 25 años, pues los vio cuando los entregaron a los que los fueron

a buscar desde Osorno. Ellos estaban en el calabozo del Retén y los vio salir cuando se embarcaron en el vehículo, al parecer una camioneta doble cabina. No eran residentes de Bahía Mansa, y nadie los conocía ni sabe qué color político tendían esas personas. En Bahía Mansa había quedado el Sargento Rosas e Inostroza. Cree que ellos fueron detenidos cerca del Retén, en un cerro de unos 7 metros de alto y como a 10 metros del cuartel. No sabe si habría existido el tal ataque al Retén, pues lo único que escuchó fueron comentarios de los Carabineros, entre ellos el Suboficial Inostroza. Habían quedado también en Bahía Mansa Plaza, de los Reyes, Barría y Rosas. Entiende que estos habían detenido a esas personas. La gente de civil no le comentó nada al respecto. No cree que los hayan metido al libro, pues avisaron inmediatamente a Osorno y dijeron que los iban a ir a buscar. Las personas estaban en una casucha abandonada de propiedad de un particular que era Capitán de Puerto, de apellido Leal. Alguien tiene que haber visto algo y haberlos denunciado, pero no sabe quién. Tendrían que haber pasado con parte del Retén, pero como se dio cuenta a la Tercera Comisaría, no se hizo parte, y ellos los fueron a buscar. Al otro día, temprano en la mañana, como a las 08.00 horas, llegó el Capitán Adrián Fernández Hernández, no recuerda si en vehículos particulares o de Carabineros, junto a otros 11 Carabineros de la Tercera Comisaría y se llevaron a los 3 detenidos, aunque no está seguro si eran cuatro. Si está seguro de que no eran más de 4 ni menos de 3, pues los vio pasar cuando subieron a un vehículo. Tendrían que haberlos esposado dentro del Retén y haberlos sacado y echado arriba del vehículo. Además, eso lo vio la gente de civil que deambulaba por el sector. El que entregó a los detenidos fue el Suboficial Inostroza. Rosas y Pinol no hacían guardia y ese día debió haber estado Plaza o Barría, porque él personalmente no estaba de guardia, sino que en el dormitorio, desde el cual los vio pasar. Está seguro de que andaba el Capitán Fernández, pues él era el Comisario de la Tercera Comisaría y lo conocía bien. No andaba ningún otro oficial con él. No recuerda cuales eran los Carabineros que andaban con el Capitán Fernández, pero siempre ellos, se refiere a los oficiales, andaban con el personal de su confianza. El capitán Fernández tenía un grupo de confianza que le guardaba los secretos, de unas cinco personas, entre los que estaban Canales, Águila, Sergio Rosas o el Negreo Rosas y Becker, no recordando a otros. Puede que esas personas hubieran andado con el Capitán el día en que fueron a buscar a los detenidos. Él no se daba bien

cuenta de quién andaba porque salían al campo y usaban una gorra de campaña que se bajaba y ocultaba la vista, las que eran manejadas solo por funcionarios que estaba en la Tercera Comisaría, no se podía ver bien los rostros. No tiene idea que cuenta le daría Inostroza al Capitán Fernández. Ese día andaban dos vehículos particulares, una camioneta roja y un vehículo verde y puede haber sido el furgón del SAG. Maragaño y Becker eran los choferes de confianza de Fernández, pero no puede decir si ese día andaban o no. Se comentaba que ese grupo era unido y estaba compuesto por personal de cabo Primero para arriba, y eran privilegiados en el sentido de estar al lado del jefe. De hecho tenían cierta licencia en la presentación, pues ellos andaban como querían, se refiere al cabello o al lustre de los zapatos. La mayoría de las detenciones por política la hacía Fernández con su grupito, pues al resto no le tenía confianza. Ellos se fueron con los detenidos en la mañana. Ellos, se refiere al personal del Retén, se quedó allá. El grupo al que se refiere andaba permanentemente con el Capitán Fernández. Siempre se veía que el Capitán tenía más comunicación con la gente de su grupo, y en él estaba Becker, como ha dicho. A los detenidos los llevaron a Osorno, y no sabe si fueron puestos a disposición de la Justicia Militar o no. No supo ni escuchó que esas personas se hubieran arrancado y que se hubieran muerto por aplicación de la Ley de Fuga. Cuando estuvieron en Osorno, después del 11 de septiembre de 1973, fue destinado a la Tenencia de Raque Alto, y cree que eso fue para el 18 de septiembre de 1973. Rosas quedó en la Tercera con Pinol. Le parece que Plaza se fue a la Tenencia de San Pablo. En la base había un carabinero de apellido Huentrutripay, pero no el en Retén de Bahía Mansa. Supo por el Cura de San Pablo de apellido Reiser que en San Pablo había desaparecido gente y que después habían aparecido sus cadáveres en el Río Pilmaiquén, lo cual le contó hace unos 10 años atrás, pero no dio mayores detalles. No recuerda haber participado en la detención de un propietario de una fuente de soda ubicada en el Teatro Raque, bajo la acusación de tenencia de explosivos, y menos de apellido Aguilar, lo cual habría recordado porque es su segundo apellido. No lo conoció y tampoco supo de su detención.

A.14. LUIS HUMBERTO PINOL CARILLANCA (43 años a la época de los hechos). Depone de fs. 173 a 176 (Tomo I), 335 a 336 (Tomo I), 254 a 255 (Tomo I), 267 a 268 (Tomo I), 324 a 329 (Tomo I), 335 a 336 (Tomo I), 347 a 348 (Tomo I), 829 a 831 (Tomo II) 837 a fs. 838 (Tomo II) y de fs. 975 a 976 (Tomo III).

En **declaración extrajudicial** de fecha 01 de julio de 2014 de **fs. 173 a 176 (Tomo I)**, comienza haciendo una breve reseña de su carrera funcionaria. En cuanto a los hechos, no recuerda el período exacto en el cual estuvo cumpliendo funciones en el Retén Bahía Mansa, el cual dependía operativa y administrativamente de la Tercera Comisaría de Osorno. En dicho Retén desarrolló las funciones de Jefe de Destacamento. Cuenta que con fecha 10 de septiembre del año 1973 tuvo que concurrir a la Tercera Comisaría de Osorno a dejar y retirar documentación, quedándose a alojarse en su casa ubicada en la misma ciudad de Osorno. Al día siguiente, a primera hora, se presenta en la Comisaría mencionada con la finalidad de dejar su retirada y dirigirse al Retén Bahía Mansa, instantes que uno de los funcionarios de guardia le comentó que el personal del Retén señalado, había detenido a tres extremistas, por lo que inmediatamente comienza su viaje de regreso en compañía de lugareños de Bahía Mansa. Al llegar, el Sargento Nelson Rosas Cárdenas, quien lo reemplazaba durante su ausencia, le comunicó de la detención de 3 jóvenes, dos hombres y una mujer, quienes se escondían en una casa abandonada ubicada a unos 500 metros del Retén, portando armamento y bombas molotov, las que se encontraban en dependencias del Retén, indicándole, además, que el Mayor Adrián Fernández Hernández, concurriría al Retén junto a personal suficiente para llevarse los detenidos y ponerlos a disposición del Tribunal correspondiente. A primera hora de la mañana arribó al Retén de Bahía Mansa el Mayor anteriormente mencionado, acompañado por varios funcionarios de Carabineros de dotación de la Tercera Comisaría Osorno, entre los que recuerda al Suboficial Mayor Oscar Vargas Vargas, el Sargento Segundo Eliseo Segundo Águila Salgado, el Cabo Mario Maragaño Oyarzún (chofer), el Cabo José Rodemil Ríos Vergara, el carabinero Guillermo Antilef Quintuil, el carabinero Juan Segundo Moreira Garcés, el carabinero Sergio Rosas Silva, el Escribiente Segundo Vladimiro Fernández Rojas, el Cabo Gustavo del Carmen Muñoz Albornoz, más conocido como “El Loli”, Rolando Becker Solís y Rafael Pérez, además de personas civiles, movilizándose en vehículos institucionales y particulares. Recuerda que el Mayor Fernández ordenó sacar las hojas del libro de novedades, donde se consignó la detención de esas tres personas y le ordenó al carabinero Guillermo Antilef Quintuil dejar una constancia que el Mayor le dictaba, consistente en que los detenidos fueron sorprendidos en los instantes que se disponían a asaltar el Retén; luego los

detenidos fueron sacados del Retén por el Mayor Fernández y su contingente con dirección a Osorno, ignorando que pasó posteriormente con ellos. Además, entre los días 8 o 9 de septiembre del año 1973, otro carabinero del Retén había llevado a esas mismas personas a la unidad, ya que vecinos del sector habían llamado por la presencia de personas ajenas al lugar que andaban marisqueando, siendo dejados inmediatamente en libertad, ya que entre esos sujetos andaba un joven que trabajaba en Indap de apellido Aguilar, el otro joven tenía pinta de estudiante, al igual que la señorita que los acompañaba, indicándoles, además, que regresarían en el primer bus a Osorno. Adopta que el joven Aguilar también era conocido por el Mayor Fernández. Ignora todo tipo de información relacionada con la muerte de la víctima del proceso.

En **declaración extrajudicial** del 07 de diciembre de 2014 **fs. 254 a 255 (Tomo I)**, señala que con fecha 16 de octubre del año 1956 fue contratado por Carabineros de Chile, en la 12ª Comisaría de San Miguel de la ciudad de Santiago, y a los meses después fue a realizar el curso de recluta en la 16ª Comisaría de la Florida a efectuar un curso de perfeccionamiento, el cual tuvo una duración de seis meses, el que una vez finalizado, solicitó su traslado a la Prefectura de Puerto Montt, acogiéndose a retiro en el año 1984, con el grado de Suboficial Mayor, mientras cumplía funciones en la 3ª Comisaría de Osorno. Con relación a los sucesos que se investigan, señala que para el mes de septiembre del año 1973, cumplía funciones en el Retén Bahía Mansa, ocupando el puesto de Jefe de Destacamento. Respeto a la víctima, es primera vez que escucha su nombre, por lo que no podría aportar antecedentes de interés. El nombre de Venancio Bernabé García Ovando, le es un poco conocido, ya que durante el año 1973, siendo el Jefe de Retén de Bahía Mansa, recuerda que se le designó para diligenciar una orden de investigar para ubicar el paradero de un joven de nombre Venancio García, quien registraba su domicilio en Bahía Mansa, tomando contacto con una hermana de la víctima, de la cual no recuerda su identidad, a la cual al preguntarle por su hermano, señaló que se lo habían llevado detenido los Carabineros de Bahía Mansa. Expone, además, que el Jefe de Retén de Bahía Mansa de la época en que ocurrieron los acontecimientos, los mismos funcionarios del Retén lo molestaban diciéndole “Venancio García, Venancio García, donde estás Venancio García.

En **declaración judicial** del 05 de febrero de 2015 de **fs. 267 a 268 (Tomo I)**, habla en forma posterior al golpe de estado, en una fecha que no puede precisar, mientras se desempeñaba como Jefe del Retén de Bahía Mansa con el grado de Sargento, sus funcionarios le informaron de la detención de tres personas, dos hombres y una mujer. Al hablar con ellos le indicaron que andaban mariscando y nada más. A uno de apellido Aguilar, que era bien conocido en Osorno, logró identificarlo y les dijo que los dejaría en libertad, pues no había mérito para tenerlos detenidos. Al día siguiente viajó a la ciudad de Osorno, y previo a regresar, pasó a firmar el libro de novedades para regresar a Bahía Mansa. El Capitán Fernández le señaló que sabía que habían detenido unos extremistas y que él se personaría en el Retén al día siguiente. Cuando llegó al Retén se dio cuenta que las tres personas antes señaladas se encontraban nuevamente detenidas, esta vez como sospechosas de tener 14 molotov, algunas armas en mal estado y un mapa de la casa del Jefe de Retén. Esta vez esas personas quedaron recluidas en espera de ser puestas a disposición de la Tercera Comisaría de Osorno y del señor Fernández. Al día siguiente, en horas de la mañana, el Capitán Fernández llegó al Retén acompañado de unos cuatro vehículos y unos 15 funcionarios, incluso andaba acompañado de civiles que reconoció como ex militares. Al ingresar Fernández se percató de la presencia de Aguilar, conversaron un momento y luego derivó a los detenidos a otra sala. Después pidió el libro de guardia, sacó la hoja donde se registró la detención y le ordenó a uno de sus funcionarios que escribiera lo que él le dictaría, creando una historia de la detención de esas personas distinta a la verdadera. Luego subieron a los detenidos a los vehículos y se retiraron, llevándose consigo el Capitán Fernández el libro de guardia y ordenándole que concurriera al día siguiente a firmar el parte policial que él confeccionaría. Al día siguiente fue cerca de la cárcel, donde estaba el personal del Tribunal Militar, donde firmó el parte y donde debió corroborar falsamente toda la historia de Fernández, entre la que se señalaba que esas tres personas habían atacado el Retén y, además, habían fallecido cuando se repelió el ataque. El hecho que corrobora su historia se debió al temor reverencial y al estado de caos que se vivía en esos momentos. No se podían discutir las directrices de los superiores. En relación con la desaparición de Marcelo Gutiérrez Gómez el mismo día en que habría concurrido el Capitán Fernández al Retén de Bahía Mansa, nada puede aportar. No conoció a ese señor

como del sector ni tampoco a ningún familiar de él. El Capitán andaba con su comitiva como señaló antes, y solo con ellos se regresó. Su personal se mantuvo en Bahía Mansa. Entre los que andaban con Fernández estaba un tal Vargas, Eliseo Águila, Canales, un escribiente, todos actualmente fallecidos. No recuerda más nombres. Escuchó versiones de que en la Tercera Comisaría se realizaron torturas, pero por comentarios solamente, sin poder afirmar ni descartar esos hechos. El bus en que viajaba de Bahía Mansa a Osorno era un bus Mar bus, de propiedad de don Erico Carrasco, para unos 40 pasajeros, que habitualmente viajaba repleta de gente; al extremo que se ponía una parrilla en el techo de la misma para que se subieran más personas. Al chofer le decían “Rinso”, y está actualmente fallecido. Él trabajaba primero con Pablo Vidal, quién falleció en un accidente, y luego con un joven de apellido Necul del sector de Osorno. Respecto de éste último no tiene antecedentes. El Tribunal le da a conocer la declaración de José Panqueco Calfuléf de fs. 35, a lo que señala que no tiene conocimiento de esos antecedentes y, precisa que el nombre del Carabinero que se menciona sería Nelson Rosas Cárdenas y, agrega respecto del de apellido Huentrutripay debería tratarse de un funcionario agregado que colocaron en el Retén, cuando por motivos de seguridad cerraron por un tiempo el de San Juan de la Costa. También dice que la familia de apellido Bañares es del sector de Bahía Mansa. Finalmente el declarante hace presente que esta misma versión, en especial respecto de los tres detenidos, la entregó a otro Juez Especial hace unos años atrás.

En **declaración extrajudicial** del 20 de agosto de 2004, de **fs. 324 a 329 (Tomo I)**, señala que en el año 1973 se desempeñaba como Jefe del Retén de Bahía Mansa, con el grado de Sargento Segundo, el cual tenía una dotación de cuatro personas, entre ellos Osvaldo Rosas con el grado de Cabo Primero y Ademar Catalán, con el grado de Carabinero. Unos tres días después del 11 de septiembre llegó una orden de la Tercera Comisaría de Raque que dispuso el traslado de la dotación y de sus familiares a la Tercera Comisaría, lo que duró unos 6 a 7 días, al cabo de lo cual retornaron al Retén de Bahía Mansa, el cual fue reforzado, además, por unos 6 carabineros jóvenes, de entre quienes recuerda a Huentrutripay y Gaete. En el Retén no tenían vehículo ni chofer, por lo que después del 11 de septiembre se le asignó un jeep Rumano verde, y como chofer a Ramón Plaza de los Reyes, por un tiempo nomás. Cuando los llevaron a

Osorno, los caballares quedaron en Bahía Mansa a cargo de lugareños. Cuando volvieron al Retén continuó con el cargo de Jefe hasta el año 1977. De los carabineros agregados ninguno era más antiguo que él. Al llegar a la Tercera Comisaría, Rosas y él fueron asignados a labores de población, y Ademar Catalán quedó como chofer. En ese tiempo en la Tercera Comisaría había un furgón grande y estaba agregado un furgón de Indap o SAG, cerrado, de color verde oscuro, amplio y con puertas en los costados, y no recuerda si en la parte posterior las tenía, el cual era manejado por un funcionario del servicio de Indap o SAG. Después de haber retornado al Retén de Bahía Mansa le correspondió ir a la Tercera Comisaría a dejar documentación a los diferentes tribunales y al pasar a la base con el fin de hacer constar su retirada, a eso de las 15:30 horas, por varios carabineros se enteró de que el Cabo Osvaldo Rosas y el Carabinero Huentrutripay y el Carabinero Gaete, y otros que no recuerda, había detenidos a unos extremistas en Bahía Mansa, y que el Capitán Fernández iría al día siguiente a buscarlos junto a personal suficiente. Viajó en bus de recorrido y alrededor de las 18:00 horas llegó al Retén y ahí se enteró de que esas personas era tres y que habían sido detenidas en una cabaña ubicada en un montecito cercano, de propiedad de un lugareño que los había ido a denunciar por extremistas. Ese lugareño era de apellido Bañares y actualmente es muerto. En esos momentos conversó con los detenidos y les explicó que el Capitán Fernández los iría a buscar al otro día. Señala que el día anterior había conversado con la mujer y uno de los hombres, a quienes les había dicho que se fueran, pues ellos le habían dicho que andaban mariscando, sin plata, conversación que tuvo con ellos en la tarde y en la playa adyacente al Retén, distante a unos 60 metros del Retén. En ese momento no los vio con armamentos. Cuando conversó en el Retén con ellos, habló también con el otro hombre, a quién conocía como Aguilar, y como funcionario de un servicio relacionado con las faenas agrícolas, al parecer INDAP. En ese momento vio también en el Retén unas 20 bombas molotov, banderines de color rojo, un revólver y una escopeta y otras armas cortas acondicionadas. El Cabo Rosas le contó que había recibido la denuncia y que había ido a detener a las personas y que cuando llegó con ellos al Retén comunicó vía radial el hecho al Capitán Fernández, quién le respondió que los iría a buscar al día siguiente. La detención de esas personas se practicó antes del mediodía. Al otro día llegó el Capitán Fernández en tres vehículos más un furgón y con personal suficiente,

unos 8 funcionarios, alrededor de las 9:00 a 9:30 horas; le dio cuenta, leyó la constancia sobre la detención de esas personas y sobre el personal que las había hecho, y le ordenó a un carabinero que lo acompañaba, de apellido indígena, Antilef, que la arrancara y enseguida le dictó una constancia en la cual se decía que extremistas habían intentado asaltar el Retén de Bahía Mansa, y que a raíz de la respuesta de Carabineros, habían muerto tres de ellos, indicando todos los pormenores, tales como hora y nombre de los fallecidos, todo lo cual presencié personalmente. Recuerda incluso que unos tres días después llegó la copia del parte en el cual se narraba lo mismo, y por medio del cual se dio cuenta a la Fiscalía. En todo caso el Fiscal no se constituyó en Bahía Mansa, y ataque tampoco hubo, así como menos disparos y heridos. Recuerda que el Capitán Fernández llevó a los detenidos a una pieza de solteros y durante media hora los interrogó a los tres juntos, y al cabo de ello el Capitán Fernández ordenó conseguir una sábana, la que fue obtenida donde la vecina Graciela Cañulef, conocida como “La Chela”, con cuyo género vendaron a los tres detenidos y los hicieron subir al furgón, sin amarrar, después de lo cual el Capitán Fernández y su personal emprendió viaje con destino a Osorno, más o menos como a las 11:00 o 12:00 horas. En el grupo que acompañaba al Capitán Fernández andaban el Suboficial Mayor Vargas, pues era el segundo jefe de la Comisaría, ya que no había Teniente, el Sargento Inostroza, el Sargento Águila, el Cabo Canales, el Cabo Sergio Rosas que es el que aparece a fs. 5.296, el Sargento Garcés, que era marenga, Muñoz Albornoz, apodado “El Loli”, y que también era marenga, el Carabinero Antilef, que era bastante preparado y lo utilizaban como ayudante o escribiente, y no está seguro si andaba o no Rafael Pérez Torres y Conejeros. Este último trabajó toda su vida en San Juan De La Costa. Añade que ninguno de los carabineros de la dotación de Bahía Mansa acompañó al Capitán Fernández en su viaje de regreso a Osorno. Después escuchó el rumor de que esas personas habían sido muertas por los carabineros al tratar de arrancarse o fugarse, lo cual era imposible, porque los detenidos iban vendados, en un furgón cerrado y custodiados por demasiados carabineros. Agrega que cuando estuvo en la Tercera Comisaría le tocó ver a José Vidal sentado en una banca de la guardia, como a la espera de una respuesta, a quién ubicaba desde cuando trabajaba en la Intendencia, y quién era amigo del Capitán Fernández, pues antes del 11 de septiembre conversaba con él; ese joven era bien conocido e incluso se

comentaba que había ido al extranjero. La persona que aparece fotografiada a fs. 1.905 es José Vidal, a quien se refiere, persona de quién se recuerda perfectamente, ya que era un persona tranquila y callada, a quien conoció cuando trabajó de punto fijo en la Intendencia. Ese es el único momento en que lo vio, esto es, cuando estuvo en la Tercera después de haber sido traído desde el Retén de Bahía Mansa. También vio detenido en la Tercera Comisaría a Humberto Salas Salas, con quién conversaba y vivía en Pucomo, quién además era muy conocido en el sector como dirigente. A él lo vio en la banca de la guardia y vestido con una manta de hilado y, según supo después, se había ido a presentar a la Tercera Comisaría en forma voluntaria, quién estaba como a la espera de algo. La casa que aparece a fs. 5.419 era la que ocupaba Humberto Salas Salas con su familia, a unos 50 metros del puente Pucomo. La fotografía que aparece a fs. 3.974 vta., es la de la persona que conoció como Humberto Salas Salas. No tiene antecedentes sobre la desaparición de Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez. No vio detenido a la persona que aparece a fs. 2.881, a quién no conoció y de quién se le dice que fue chofer del Diputado Rubén Zapata, a quién sí conoció. Al respecto señala que cuando estuvo en la Tercera Comisaría vio en el patio de la unidad una citroneta de color blanco del tipo techo curvo, similar a la del Diputado Zapata en sus campañas, la cual estaba a cargo de la Unidad y era manejada por carabineros. La citroneta estaba en calidad de retenida, pero después no la vio más y supo que fue entregada, porque alguien la reclamó. Le parece recordar que esa citroneta se le había requisado a una persona que estaba detenida. Cree haber visto a Padilla conduciéndola, pues él era chofer permanente en la Tercera Comisaría. Era bien notorio ese vehículo porque era casi nuevo y blanquito. Escuchó rumores de que un grupo de funcionarios de la Tercera Comisaría de Raque, entre los que estaban los que mencionó anteriormente, por orden del Capitán Fernández, se dedicaban a detener a personas por motivos políticos, actividades que realizaban en las noches, lo cual concordaba con el hecho de que siempre los veía llegar a trabajar muy entrada la mañana, trasnochados y con olor a vino.

En **diligencia de careo con Jorge Garcés Yáñez**, del 30 de noviembre de 2004, de **fs. 335 a 336 (Tomo I)**, la persona que está a su lado es Jorge Garcés, ex funcionario del Carabineros de la Tercera Comisaría, y es a quién se refiere como “Sargento Garcés que era Marenga”, en su declaración de fs. 5.568; él era

uno de los funcionarios que andaba con el Capitán Fernández cuando se retiraron a los tres detenidos que estaban en el Retén de Bahía Mansa, grupo en el que andaban las demás personas que mencionó en esa declaración; no tiene dudas sobre eso. Él andaba acompañando en el grupo y no vio que tuviera otra participación como, por ejemplo, agredir a los detenidos, pero lo cierto es que ese día andaba en ese grupo. Insiste en que él andaba en ese grupo. Para esa época se suspendieron todos los servicios especiales y recuerda, incluso, que la persona con él presente, fue agregada al Retén en la temporada veraniega 1973-1974. Ubicaba bien a esa persona y había otro Garcés, pero era una persona joven, con grado de Carabinero, que servía en retenes. Insiste que ubicaba bien a esta persona, y él dice que estaba cuidando la casa del Capitán, cosa que no puede ser, porque no lo vio allá, no podría ser, porque cómo lo iban a destinar a eso solamente, y además, porque lo vio en la Tercera Comisaría no sólo una vez, sino que varios días en calidad de disponible. No agrega nada más porque no tiene dudas al respecto.

En **diligencia de careo con Guillermo Antilef Quintul** del 12 de enero de 2012 de **fs. 347 a 348 (Tomo I)**, dice que ubica a la persona que está a su lado como Luis Antilef y como ex carabinero de la Tercera Comisaria de Osorno. Ratifica lo que declaró a fs. 5.568 en cuanto a que cuando el Capitán Fernández llegó en la mañana con alrededor de 10 funcionarios de la base, arrancó personalmente la hoja del Libro de Novedades de Guardia del Retén, donde estaba la constancia de la detención de esas tres personas que habían sido ingresadas como sospechosos, y después de eso le ordenó a la persona que está a su lado, quién al parecer tenía buena letra, que escribiera lo que él había dictado, en lo que estuvo más o menos media hora, y en que escuchó que le decía que anotara que esas tres personas habían muerto en la noche a consecuencia de un ataque al Retén, en el que el funcionario Ademar Catalán y él habían respondido acribillando a esas personas. Escuchó un poco de eso no más, porque no estaba tan encima, y el Capitán ordenó que se llevaran el libro, el cual fue devuelto al otro día con la copia del parte que fue hecho en la Tercera Comisaría de Osorno. El funcionario aquí presente, se limitó a cumplir lo que le estaba ordenando el Capitán Fernández. Respecto a que no recordaría bien los hechos, eso no es así, pues no tiene dudas. Urde que el funcionario presente era muy preparado para escribir e incluso a máquina, era casi un dactilógrafo. Las

personas fueron detenidas como a un kilómetro del Retén, en una cabaña, en una altura, frente al camino a Maicolpue y Bahía Mansa, pero siempre yendo hacia Osorno. Esa cabaña era cuidada por Bañares y que fue él quien denunció la presencia de esas personas. Él ubica el lugar.

En **declaración extrajudicial** del 02 de marzo de 2017, **de fs. 829 a 831 (Tomo III)**, hace una breve reseña de su carrera funcionaria. Para el año 1973 la dotación del Retén de Bahía Mansa estaba integrado por Ademar Catalán, que era Carabinero, el Sargento Rosas, actualmente fallecido, quién se quedaba a cargo del Retén cuando él viajaba a Osorno, además de algunos funcionarios que estaban de agregados al Retén, dentro de estos Jorge Coronado Henzi, Juan Huentrutripay Villarroel y Rodolfo Cheuquelaf Lorenzo, al menos esos recuerda al momento. Pasado el 11 de septiembre de 1973 llegó al Retén en la tarde y se encontró que al interior habían cuatro jóvenes que habían sido detenidos por sospecha, preguntó que pasaba y fue informado de que unos carabineros del Retén los habían visto en la playa, y al ver que no eran del sector, es decir, lugareños, los habían llevado al cuartel por sospecha. Conversó con los jóvenes, eran tres hombres y una mujer, luego de eso se enteró que uno era de Osorno, trabajaba en Indap, y los otros no recuerda de donde eran, pero el asunto es que les dijo que al día siguiente regresaran a Osorno, en el bus de la mañana y les dio la libertad. Al día siguiente viajó a Osorno, regresando a Bahía Mansa en la tarde, pero antes de volver se enteró en la Comisaría de Raque que habían sido detenidos tres jóvenes por asaltar el Retén de Bahía Mansa, razón por la cual al día siguiente de eso iba a ir a Bahía Mansa el Capitán Adrián Fernández con personal suficiente para trasladar a los detenidos, haciendo presente que esa detención la practicó el Suboficial Rosas, sin informarle de eso, por lo que al regresar esa tarde a Bahía Mansa al Retén, se enteró en el lugar que esos jóvenes habían sido detenidos desde una casa de Bahía Mansa y trasladados al Retén. Nunca vio señales de atentado al Retén, como habían dicho en la Comisaría de Raque. Asimismo, vio que los jóvenes estaban golpeados y supo que supuestamente a ellos les encontraron una escopeta antigua, una bandera del partido Comunista y unas molotov, además de un supuesto mapa. Como ya estaba enterado el Capitán Fernández por el Sargento Rosas, no pudo hacer nada, solo esperar al día siguiente hasta que llegaran de Osorno el Capitán Fernández con varios carabineros más, entre ellos dos enfermeros de ganado,

Jorge Garcés y Gustavo Muñoz Albornoz, además del ayudante de apellido Antilef, todos de la Comisaría de Raque. Cuando llegó el Capitán Fernández al Retén, sacó la hoja del Libro de Guardia y la tiró al papelerero, luego de eso dio instrucciones y se fue con los tres detenidos en caravana a Osorno, llevándose el Libro de Guardia con ellos, dejándolo citado a la Fiscalía Militar al día siguiente, sin saber nada más por ese día. Al día siguiente fue a Osorno y ahí declaró con miedo porque los militares estaba armados, por lo que tuvo que mentir y decir que efectivamente habían atentado contra el Retén de Bahía Mansa, en tanto que de los detenidos supo que ellos los habían matado en el camino, hasta la fecha nadie le ha dicho el lugar donde los mataron. Tiempo después de lo que acaba de relatar, años después mejor dicho, fue interrogado por un Juez por la muerte de esos jóvenes, y ahí se enteró que había un cuarto joven que había ido a comprar cosas a Osorno, y que al regreso no había llegado a Bahía Mansa, por lo que ahora haciendo memoria, ese joven pudo ser el cuarto integrante de los que les dio la libertad en el Retén. Por otra parte, si bien el Jefe del Retén era él, el Capitán Fernández cuando pasó todo eso era su superior, y él no le contaba nada, tenía su grupo de gente seleccionada con la que realizaba todas las cosas, de hecho el libro al que le sacó la hoja fue reescrito por sus hombres de confianza, entre los que estaba Nelson Rosas de Bahía Mansa.

En **declaración judicial** del 25 de abril de 201 de **fs. 837 a 838 (Tomo III)**, ratifica la declaración de fs. 829 y siguientes. Añade que en su ausencia Rosas dio la orden de detener por sospecha a dos hombres, más un chico y una mujer. Él les dio la libertad a esos jóvenes porque no habían hecho nada. Cree que Rosas, después que los dejaron en libertad a los jóvenes, se comunicó con Fernández y éste dio instrucciones de detener nuevamente a esas personas. Fernández no se comunicó con él en ese momento, nunca lo llamó por lo ocurrido. Recuerda muy bien que mucho tiempo después de ese episodio de los jóvenes, Jorge Garcés le comentó personalmente que él sabía el lugar exacto donde habían pasado a darles muerte a los jóvenes. Supuestamente el lugar fue como a 2 kilómetros del Retén de Raque. Además, Garcés andaba en el grupo con Fernández, tiene que saber dónde específicamente se ejecutó a los jóvenes. El Tribunal le lee la declaración de fs. 772 y siguientes, depone que es efectivo lo que relata Cheuquelaf. El mismo le comentó lo que se le lee. Recuerda que una vecina, actualmente fallecida, Graciela Caniulef, fue quien ayudó a prestar género

para vendarles los ojos a los jóvenes. Por comentarios de los vecinos se enteró que a esos jóvenes les habían vendado los ojos. Alrededor del Retén había aproximadamente cuatro casas, de gente buena. Respecto a algún otro funcionario le comentó sobre el hecho de la detención y muerte de los jóvenes, recuerda que había rumores sobre la muerte y lugar donde se efectuó, pero nunca datos específicos. Respecto al parte que fue a firmar, indica que no aparecía el cuarto joven en ese documento, solo 3 personas. El que más sabe del cuarto integrante del grupo de los detenidos es Cheuquelaf junto con Rosas.

En **declaración extrajudicial** del 12 de enero de 2017, **de fs. 975 a 976 (Tomo III)**, en lo pertinente reitera que en el año 1974 estuvo destinado en Bahía Mansa, siendo el Jefe de Retén, seguido por el Cabo Osvaldo Rosas Cárdenas, recordando que en una oportunidad mientras se encontraba en el Retén, pasado el pronunciamiento militar, detuvieron a cuatro personas, las cuales andaban mariscando en zona de Bahía Mansa, en las cercanías del Retén; al entrevistarse con ellos los dejó en libertad con el compromiso que se trasladaran a sus domicilios en la comuna de Osorno, quienes contestaron que en la mañana se trasladarían a la comuna antes citada, desconectándose del tema. Al día siguiente llegaron vehículos policiales y particulares, quienes andaban bajo el mando del Capitán Fernández, integrado por Gustavo Muñoz, Isaías Águila Delgado, Jorge Garcés Yáñez, Rafael Pérez, Ademar Catalán, Francisco Inostroza Baeza, un escribiente de apellido indígena, entre otros que no se acuerda por el tiempo transcurrido. Hace presente que detuvieron a tres personas, entre ellos un señor que trabajaba en Indap, el otro al parecer era un estudiante de la Universidad en Osorno y la mujer, ignora de donde era; ellos fueron interrogados al interior del Retén de Bahía Mansa en su presencia, recordando que ese interrogatorio lo realizó el Cheo Águila junto a un practicante, sacando a los detenidos de la unidad alrededor de las once horas, con sus ojos vendados, subiéndolos al carro de Osorno. Al llegar el Capitán Fernández al Retén, el funcionario de guardia dejó una constancia de su presencia, no obstante lo anterior, dicho oficial hizo arrancar la hoja para dejar una nueva constancia de que esas personas detenidas habían atacado el cuartel, hecho que era completamente falso, y además, le ordenó que debía ir posteriormente a la Fiscalía Militar a ratificar lo que ellos escribieron en el libro, que se trataba de un falso ataque. Una vez que se presentó a la Fiscalía, solo tuvo que firmar su declaración ya que estaba hecha, y por represalias que

podía tener en su contra, firmó el documento. Al día siguiente se enteró en Osorno que esas personas habían sido fusiladas por el contingente que fue al Retén, el cual al parecer había sido cercano al cruce Pucatrihue, cuerpos que presume que entregaron al Servicio Médico Legal de Osorno, solo se enteró por comentarios. Respecto de la desaparición de Ilucindo González Bustamante, ignora todo antecedente.

A.15- SIGFRIDO ERNESTO GONZÁLEZ GONZÁLEZ (73 años de edad para la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 524 a 525 (tomo II) y de fs. 855 a 856 (tomo III).

En declaración judicial con fecha 02 de septiembre de 2015, **rolante a de fs. 524 a 525 (tomo II).** Hace una breve reseña de su carrera funcionaria. Relata que en el mes de septiembre del año 1973, integró la dotación de la 3ª Comisaría de Osorno, ubicada en calle Iquique, no precisando numeración. El Comisario de la época era el Capitán Adrián Fernández Hernández y la dotación estaba compuesta por unos 35 funcionarios aproximadamente. Respecto a las funciones que le correspondió desarrollar en dicha época, como Carabinero recién egresado, principalmente fueron servicios de guardia y peluquero del personal, motivo por el cual no le correspondió desarrollar labores operativas como patrullajes y detenciones de carácter político. Inquieta que referente a un supuesto grupo de trabajo con el cual habría trabajado el Capitán y Comisario Adrián Fernández Hernández, lo desconoce. En relación a los límites jurisdiccionales de la 3ª Comisaría, indica que además de la ciudad incluía las zonas rurales, costeras y cordilleranas. En cuanto al parque automotriz de la unidad había un furgón y un radio patrullas. Respecto a la presencia de personal de la Policía de Investigaciones durante el interrogatorio a detenidos, alude que no tiene conocimiento. Que del único interrogatorio que se percató de forma indirecta, fue cuando en una oportunidad el Suboficial Mayor Oscar Vargas Vargas y otros funcionarios que no recuerda, en el subterráneo de la 3ª Comisaría, mantenían vendado y amordazado a un detenido y cada vez que le preguntaban algo le tiraban agua en su cabeza. Que por temor a que se dieran cuenta de su presencia se fue rápidamente del lugar. Tiene entendido que tres días después fue liberado, no teniendo en su memoria de cómo era físicamente este, lo único que sabe es que tenía entre 25 y 30 años aproximadamente. En cuanto a los hechos por los cuales se le consulta y

que guarda relación con la detención y posterior muerte de Marcelo Gutiérrez Gómez, ocurrida en el mes de octubre del año 1973 en los alrededores del sector de Bahía Mansa, siendo los presuntos responsables funcionarios de Carabineros de la 3ª Comisaría de Osorno, refiere que no tiene nada que decir, que es la primera vez que escucha ese nombre, es más, no recuerda que se haya comentado entre sus compañeros de una detención con resultado de muerte en esa zona costera.

En declaración judicial con fecha 12 de julio de 2017, **de fs. 855 a 856 (tomo III)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 524 a 525 y que en este acto le ha sido leída. Aproxima que por supuesto que le llamó la atención esta situación, pero se fue a la peluquería. Que aquello fue alrededor de 10 días después del 11 de septiembre. Que él llevaba aproximadamente de 5 meses en el lugar. Que a los pocos que conocía eran los de la tercera comisaría de Raque, Osorno. Alude que fue la única vez que vio algo así. Que no recuerda lo de Bahía Mansa y no supo de nada. Comenta que un día salió de la unidad a almorzar al frente y se percató que había tres camionetas y vio alrededor 6 cadáveres en una camioneta. Que no sabe quién las conducía pero se acuerda que eran particulares. Arguye que se fue, se enteró y no quiso hacer ningún comentario. Que aquello fue como a los pocos días después del golpe, alrededor de 5 días después. Divulga que nadie comentó nada de eso. Expresa que él salía a hacer los operativos en la calle. Que todos los que el tribunal le lee en este momento eran los antiguos. El capitán Adrián Fernández. Exclama que no tiene idea de los sucesos de Raque. No recuerda haber visto a algún familiar de la víctima preguntado por ellos. Que él se dedicaba a la peluquería en el cuartel. Que después nunca supo de lo que pasó en Bahía Mansa. Que no vio patrullas militares en el lugar donde estuvo. Puntualiza que Adrián Fernández era un caballero con todos y que sinceramente no tuvo nada que ver con ellos. Que el personal entraba, salía, y de las fechorías que hicieron no sabe nada, quizá cuanta gente mataron. Esgrime que nunca oyó que alguien se jactara de lo que hacían o hicieron. Para él todo fue callado. Ni siquiera personal de PDI vio en el sector, solo Carabineros, tampoco del ejército. Funda que se enteró de las fechorías cuando fue a ver los cadáveres. Que estaban todos metidos ahí. Que él era el menos antiguo de los que habían llegado a Raque. Que todos los demás tenían como 15 a 20 años para arriba

A. 16. MARIA JUDITH AUCAPÁN ANCAPÁN (25 años de edad para el año 1973). En **declaración extrajudicial** prestada con fecha 02 de noviembre de 2015, **rolante a de fs. 535 a 537 (tomo II)**. Acota que toda su vida vivió en el sector Costero de Bahía Mansa y hace aproximadamente veinte años se trasladó con su marido llamado Aristeo Maripán Queipullao al sector Pucomo. Que el Golpe de Estado de 1973 le tocó vivirlo en Bahía Mansa en una casa de tejuelas ubicada como a 100 metros del camino principal. Cuenta que en una época cuya fecha no recuerda, precisando que fue en una tarde del mes de octubre cuando ya estaba oscureciendo, y en momentos que se encontraba en casa junto a su marido, sintieron muchos disparos, motivo por el cual después de que terminara la balacera, salieron a la puerta de la calle ya que incluso algunos de esos disparos llegaron a la casa. Recuerda que salió a la puerta y sintió el llanto de una mujer que venía desde una casa que estaba ubicada frente a la suya, como a unos 100 metros, propiedad que era de uno de los tres jóvenes que estaban viviendo ahí. Uno de estos jóvenes era de Osorno y los otros dos de Panguipulli, en total eran dos hombres y una mujer. Precisa que esa tarde noche ella sólo sintió el ruido de los disparos y vio desde la ventana de su casa un furgón de Carabineros, no visualizando a los funcionarios, motivo por el cual no puede proporcionar sus identidades, pero indica que si era el furgón blanco con negro de Bahía Mansa, el único que había en aquellos años en la zona. Narra que, sobre los vecinos de Bahía Mansa que podrían ser testigos de lo que acaba de relatar, están casi todos muertos, en realidad no recuerda que alguno de ellos este vivo actualmente. Recalca que no ubica y nunca había escuchado el nombre de Marcelo Gutiérrez Gómez pero lo que está segura, es que después del 11 de septiembre de 1973 era costumbre que los Carabineros y Militares pararan a los dos únicos buses que viajaban entre Osorno y Bahía Mansa, es decir, el de Carrasco y el de Tuchie, estos controles los hacían tanto en Bahía Mansa, Caleta Pocatrihue, sector Pucomo y otros lugares más de la ruta a Osorno. En dichos controles los Carabineros bajaban a toda la gente, le registraban sus cosas y a veces dejaban detenidas a personas y el bus seguía su ruta, al menos eso le tocó ver en los viajes que efectuaba a Osorno. Volviendo al tema de los tres jóvenes que se estaban quedando frente a su casa y que los Carabineros les dispararon a su hogar, haciendo memoria, años atrás fue entrevistada por una Ministra que le dijo que era de Santiago, a

ella le contó lo mismo que está haciendo hoy y además fue dos veces con ella a su ex casa. La primera incluso llevaron una máquina detectora de metales para encontrar las balas, y al parecer se las llevaron, además de los impactos que dejaron las balas en su casa, la cual dicho sea de paso hoy es habitada por Eleodoro Huiscas Cárcamo. Explicita que respecto a otro vecino de Pucomo que desapareció un tiempo después del 11 de Septiembre de 1973, cuyo nombre es Humberto Salas, no está muy segura de su nombre; pero sí que él se dedicaba al negocio del alerce en aquellos años y según se comenta, de la noche a la mañana desapareció de Pucomo, no se supo nunca nada más de él, incluso su señora se fue a Santiago a vivir, según dicen que amenazada. Refiere que también comentan que fue detenido por Carabineros, pero la persona que debe saber bien esa historia es Héctor Nilanllefi, que actualmente vive pasado el puente colgante de Pucomo.

A.17. ARISTEO MARIPÁN QUEIPUYAO (33 años de edad para la fecha de ocurrencia de los hechos). En declaración extrajudicial con fecha 2 de noviembre de 2015, **de fs. 538 a 540 (tomo II)**. Relata que para el año 1973 vivía junto a su señora María Judith Aucapan Ancapan y su hijo, el cual para eso años tenía alrededor de 3 años de edad, en el sector de Bahía Mansa, ubicada a más o menos 150 kilómetros del camino principal que conectaba el pueblo con Osorno. Allí vivían, cuando al poco tiempo del golpe militar, quizás para el mes de Octubre, no está seguro ya que refiere que ha pasado mucho tiempo, estaba oscureciendo, quizás serían las siete de la tarde, cuando con su señora, y encontrándose al interior de la casa que compartían, escucharon disparos, los cuales se escucharon muy cerca, motivo por el cual el decidió salir a ver qué pasaba, mientras que su señora se quedó en la casa cuidando al hijo de ambos. Indica que al asomarse unos dos metros del lugar que provenían los disparos, se escondió entre unas matas y desde allí miró, pero no logró ver nada ya que estaba oscuro, sólo pudo ver los estallidos de los disparos, los que además pasaban muy cerca de él y quedaron incrustados en el suelo de su casa, debido a que esta estaba ubicada en un cerro. Funda que posterior a este hecho, las conversaciones de la gente decían que los Carabineros esa noche había baleado a 3 jóvenes que vivían en una casa que se ubicaba frente a la suya, algunos decían que de esa casa habían sacado muerta a la mujer del grupo, otros decían que no era así, sino que posteriormente los habían matado

en otro lado, lo cierto es que dice sólo haber escuchado los disparos esa noche y no entiendo por qué algunos fueron a dar al suelo de su casa. Detalla que para esos tiempos tenían mucho miedo de lo que podía, por lo que trataba de no mirar mucho y de pasar lo más desapercibido. Que no recuerda los nombres de los vecinos que tenía para el año 1973, la mayoría ha muerto y otros se han ido del sector, tal como lo hizo el con su señora. Puntualiza que ella no conocía a los jóvenes que masacraron, apenas los vio alguna vez de vista. Desarrolla que entre otras cosas que recuerda, en un tiempo después, quizás para el año 1990 o 1989, debió ser hace unos 26 años, a su cuñado Virginio Aucan Ancapan lo acusaron de haber matado a un amigo de él, del cual no recuerda el nombre, dice que su cuñado era inocente, no obstante los familiares del muerto ubicaron a gente que lo inculpó y ante ello Carabineros lo detuvo, lo torturó y tras eso lo dejaron en libertad. Recuerda haberlo ido a ver, instantes en que aquel se encontraba, masacrado y muy golpeado. Recuerda que con Judith le dijeron que no se quedara así no más y que reclamara, ya que no había sido justo lo que le había pasado, pero a los días se agravó, cayó al Hospital y finalmente murió, todo producto a lo que sufrió tras ser detenido por Carabineros. Explaya que para el golpe militar viajaba de vez en cuando a Osorno, sin embargo, nunca vio que Carabineras pararan los buses, aunque por lo general no viajaba en bus y eran viajes aislados.

A.18. ANA DEL CARMEN LÓPEZ BARRÍA (22 años de edad para el año 1973). Depone de fs. 188 a 192, 302 a 308, 356 (tomo I), 466 (tomo II) y de fs. 1506 a 1509 (tomo V).

En declaración extrajudicial con fecha 20 de agosto de 2014, rolante de fs. 188 a 192 (tomo I), destaca que el año 1970, si mal no recuerda a la edad de 21 años, trabajaba en el CORA, de la ciudad de Osorno, se desempeñaba en el departamento de Finanzas, entidad donde conoció a Jorge Aguilar Cubillos, Jefe de área de Puyehue, con quien inició una relación sentimental, de la cual nació un hijo, el cual tiene el nombre de Jorge Aguilar López, quien actualmente tiene la edad de 41 años, viviendo en la casa de sus padres. El caso es que Jorge Aguilar Cubillos, era militante del Partido Radical y era el presidente del mencionado partido político. Aduce que para el día 11 de septiembre del año 1973, en horas de la mañana, Jorge le indicó que tenía que trasladarse hasta un sector rural denominado Lomas de la Piedra, de la ciudad

de Osorno, junto a unos campesinos y desde ese instante no volvió más a la casa. Recuerda que en la radio local, se había comunicado una nómina de personas que debían presentarse en las dependencias de la Tercera Comisaría de Osorno, dentro de la cual salía el nombre de Jorge Aguilar Cubillos, y desde ese momento se dieron cuenta porque su pareja no regresaba a la casa. Adopta que el día 13 de septiembre del año 1973, con la finalidad de saber de Jorge, se trasladó hasta el sector Lomas de la Piedra, donde tomó contacto con Jorge, quien se estaba quedando en la casa de unos lugareños, junto a Edgar Cárdenas Gómez y María Ester Bustamante, personas que iban arrancando de la persecución que se inició una vez asumido el gobierno militar, quienes perseguían a todas las personas contrarias al gobierno instaurado. Apoya que en oportunidad, conversó con Jorge, quien le comentó que ya sabía que había salido en una nómina de un bando y que si no se presentaba en la unidad policial o militar, iba a ser ejecutado en el lugar donde fuera encontrado, pero que él se iba a quedar en ese sector, esperando que las cosas se calmaran, ya que, según él, lo que estaba ocurriendo tenía que calmarse. Estima que este último contacto que tuvo con Jorge, tuvo una duración aproximada de unos 30 minutos y desde ese instante no supo más de él hasta el día 06 de octubre del año anteriormente mencionado, cuando un vecino de los padres de Jorge, conversa con la señora Ema Cubillos, madre de Jorge, a quien le comunica que momentos antes había estado en el hospital de Osorno, ubicado en ese entonces en calle Los Carreras de la ciudad nombrada, junto a uno de sus hijos quien se encontraba enfermo, mientras esperaba que fuera atendido, vio que habían ingresado al mencionado servicio de salud, tres personas heridas a bala, sin indicarle que estaba Jorge, pero les señaló que fueran a averiguar, ya que podría estar Jorge entre esas personas, motivo por el cual, al día siguiente, una vez finalizado el toque de queda, doña Ema, su cuñada Honorinda Aguilar Cubillos y la deponente, se trasladaron inmediatamente hasta el mencionado hospital, donde comenzaron a realizar consultas por las personas que habrían ingresado heridas a bala el día anterior, siendo atendidas por un enfermero, el cual les comunicó que efectivamente habían ingresado tres personas por impactos de bala, pero que habían llegado fallecidas y entre ellas estaba el cuerpo de Jorge Aguilar Cubillos, cuerpos que habían sido trasladados por Carabineros de la Tercera Comisaría y que habían sido trasladados en la

camioneta que pertenecía al CORA y que era ocupada por Jorge, la cual era marca Chevrolet, color amarillo, dé una cabina. Deduce que este enfermero, los llevó hasta la morgue del hospital de Osorno, donde les hizo ver el cuerpo de Jorge, el cual se encontraba en la bandeja central, ya que a su izquierda estaba el cuerpo de María Ester y a su derecha se encontraba el cuerpo de Edgar, los tres cuerpos estaban con ropa. En esta ocasión el enfermero les permitió revisar los tres cadáveres y el cuerpo de Jorge presentaba alrededor de 36 impactos balísticos todos concentrados en el costado izquierdo, además presentaba un impacto balístico entre sus cejas salida de proyectil, lo que le hizo perder masa encefálica ya que le faltaba prácticamente toda la parte posterior del cráneo, además de un impacto balístico en su sien izquierda. Delibera que el cuerpo de María Ester, presentaba un gran forado en su espalda a la altura de la cintura, además de enterarse que estaba embarazada y del cuerpo de Edgar no recuerda que heridas presentaba. Cuenta que mientras estaban en la morgue, se hicieron presentes tres funcionarios de Carabineros de dotación de la Tercera Comisaría de Osorno, quienes le señalan que tenía que acompañarlos para conversar con el Capitán Adrián Fernández, por lo que doña Ema le dice a los Carabineros que por lo menos esperaran para poder velar y sepultar a Jorge, pero no la dejaron ya que tenía que presentarse inmediatamente con el Capitán Fernández, pero doña Ema insistió e incluso le pidió a los Carabineros que la autorizaran para sacar el cuerpo de la morgue y poder velarlo, pero los uniformados le respondieron que para poder sacar el cuerpo de Jorge, iba a necesitar un permiso especial, ya que estaban considerados como extremistas, porque supuestamente habían ido a atacar el Retén de Carabineros de Bahía Mansa y se habrían enfrentado con el personal policial, quienes tuvieron que repeler el ataque y le dieron muerte a estos supuestos extremistas. Difunde que el caso, es que Carabineros le acompañó hasta la casa, desde donde posteriormente concurrió junto a la esposa de un hermano de Jorge, de nombre Angélica Liuco, hasta Tercera Comisaría de Osorno, a la cual llegó alrededor de las 14:00 horas, donde un Carabinero de edad, de quien no recuerda nombre, quien le preguntó quiénes eran las otras personas que estaban con Jorge y que quería los nombres, respondiéndole que desconocía esa información, por lo que reaccionó en forma violenta propinándole un golpe en el rostro a mano abierta,

tirándole al suelo, colocándose de pie por sus medios. Destaca que luego le hizo pasar a una pieza, donde había una banca y le señala que tenía que quedarse a la espera de que llegara el Capitán Adrián Fernández, sin tener contacto con él durante ese día, ya que posteriormente fue llevada a una celda de la mencionada Comisaría, donde había una mujer de nombre María, la cual tenía un apellido indígena el cual no recuerda, quedando en el momento que ingresó a la Tercera Comisaría, en calidad de detenida por el lapso de 22 días. Destaca que durante esos días que estuvo detenida, fue sometida a distintos tipos de interrogatorios, los cuales incluían diferentes formas de torturas, entre las cuales incluyó aplicación de descargas eléctricas en los senos. Detalla que dentro de todas las personas uniformadas que le torturaron, en dos ocasiones, solamente fue interrogada, pero utilizando un vocabulario muy agresivo y grosero, por el Capitán Adrián Fernández y un señor de contextura normal, tez morena, pelo corto zambo, el cual vestía un abrigo color azul piedra, terno oscuro corbata, acento extranjero, apoya que le daba la sensación de ser colombiano quienes solamente le preguntaban por las identidades de las personas que estaban escondidas con Jorge y que habrían alcanzado a escapar el día del enfrentamiento. Destaca que la primera ocasión que le interrogan estas dos personas, dentro del procedimiento le hacen escuchar un casete, donde existían una grabación en la cual escuchó a un joven, el cual se identifica como Marcelo Gutierrez Gómez, dándose cuenta en ese instante que se trataba del hermano de Edgar Cárdenas Gómez, quien según el capitán Fernández, había sido detenido por Carabineros de la Tercera Comisaría, bajo su mando. Explana que el día 05 de octubre del año 1973, al cual lo había sometido a un intenso interrogatorio y tortura, para obtener el paradero del Edgar, Jorge y María Ester y se escuchaba como Marcelo Gutierrez, gritaba y suplicaba que no lo siguieran sometiendo a torturas, lloraba e indicaba que no sabía dónde estaba su hermano, lo cual durante el tiempo que le hicieron escuchar, Marcelo nunca señaló el lugar donde se encontraba su hermano en compañía de Jorge y María Ester. Dicha grabación, se la hicieron escuchar por unos tres minutos, ya que en un instante, este señor de abrigo cortó la grabación y le indicó que lo que seguía era peor, lo que le hizo suponer que el grado de tortura fue mayor hasta que Marcelo tuvo que confesar. Ensaya que acto seguido, el Capitán Adrián Fernández, le manifestó que si no cooperaba,

le iba a ocurrir lo mismo, a lo que le contesto, "bueno y usted no era tan amigo con Jorge" y él le responde "maldigo el di en que fui su amigo" y le manda a la celda. Propone que el Capitán Adrián Fernández, conocía muy bien a Jorge, ya que eran amigos. Hasta el día anterior al 11 de septiembre del año 1973, siempre se veían, se saludaban, conversaban y siempre el señor Adrián Fernández le pedía favores a Jorge, e incluso, en varias ocasiones fue a la casa de su suegra, para hablar con Jorge o a solicitarle prestada la camioneta del CORA que tenía a cargo Jorge, la cual Jorge le facilitaba. Esgrime que con relación a Marcelo Gutierrez Gómez, es todo lo que puede manifestar y respecto a los hechos que ocurrían en el interior de la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno, la que puede entregar mayores antecedentes es esta señora María, de quien buscara antecedentes y los hará llegar a la brevedad, ya que recuerda nombres de personas que estuvieron detenidas en la Comisaría y de los Carabineros que interrogaban y torturaban.

En declaración judicial prestada con fecha 11 de abril de 1991, **de fs. 302 a 308 (tomo I)**, suma que en el año 1969 ingreso por concurso al ministerio de agricultura, específicamente a CORA y se desempeñaba en la oficina ubicada en calle Santa María de esta ciudad. Aduce que en enero de 1972 empezó a vivir junto a Jorge Ricardo Aguilar Cubillos que se desempeñaba como jefe de Área de Puerto Octay de Cora y su oficina estaba ubicada en el mismo lugar anterior. Colige que el 11 de septiembre de 1973 ella estaba trabajando como encargada de finanzas del área de san Juan de la Costa y Jorge era jefe de Área siempre en Puerto Octay con oficina en esta ciudad. Barbulla que el día 11 de septiembre de 1973 fueron a trabajar normalmente ya que pertenecían al partido radical y treinta minutos después de haber llegado al trabajo le llamo por teléfono Jorge Aguilar diciéndole que fuera para la casa, ya que había un golpe militar y en la casa le iba a explicar. Agrega que ella se fue a su domicilio ubicado en el triángulo de Ovejería (triangulo Ferroviario) a la izquierda del puente ferroviario, donde vivían con ellos la madre de Jorge, llamada Ema Cubillos Cubillos, la cual falleció el 21 de agosto de 1974, y al llegar a la casa Jorge se aprestaba para irse al campo, ya que se le explico que había un golpe militar en Santiago y que se iba al campo para esperar a ver que iba a suceder con todo eso. Anima que no le contó para donde se iba, ella regreso a su oficina y se pudo enterar por radio de lo que sucedía en Santiago

(bombardeo de la Moneda y muerte del Presidente Allende). Añade que el 12 de septiembre escucho que se llamaba a Jorge por un bando Militar, su cuñado Carlos Hurtado casado con Margoth Aguilar Cubillos, que actualmente viven en Osorno en calle Fernando Cañas N° 972, población García Hurtado Mendoza, Raque, le aviso que Jorge estaba en el Asentamiento Puacho, en el sector “Lomas de la Piedra”, el día 13 de septiembre fue con su cuñado en camioneta y ella hablo con Jorge en el lugar en que estaba, que era una casita de un campesino cuyo nombre le parece es Luis Pinol que actualmente tiene más de setenta años y vive donde mismo. Apunta que le conto lo del bando y él le dijo que habían llegado a esa casita otras personas pero que eran del Partido Socialista, a lo que él le dijo que estaba en compás de espera y que no se podía presentar a las autoridades de la época porque el bando daba veinticuatro horas para hacerlo y si no lo hacían serian ejecutados. Colige que ella regreso a su casa con su cuñado, y siguió asistiendo a su trabajo normalmente hasta el 18 de septiembre, que intento volver al lugar donde estaba Jorge. Como ella sabía que podía estar vigilada se vistió como campesina y como momentos antes había encontrado en la ciudad a gente que era del Asentamiento y que le dijeron que andaban en un tractor, les pidió que le llevaran a lo que accedieron. Decanta que llegaron al lugar y ella se fue a la casa del Presidente del Asentamiento cuyo nombre era Bernardo, pero no recuerda el apellido, había llegado hacia poquísimo rato, esto fue en la tarde tipo 18:00 horas, cuando vieron que venía la camioneta que usaban Jorge en el servicio, unos furgones verdes que el B.I.D, había entregado al Sag, le parece y la cuca de Carabineros con muchos Carabineros. Destaca que por temor se escondió en un baño exterior que hay en el campo, sintió que Carabineros disparaba y la gente gritaba y lloraba. Continua, allanaron todo pero no buscaron en el baño en que ella estaba, como quedaron carabineros en el lugar, ella arrastrándose y aprovechando la oscuridad se dirigió hacia el monte. Describe que estaba escondida en el monte cuando sintió ruido y era un hijo de don Bernardo, cuyo nombre ahora no recuerda, y le dijo que no se asustara ya que él estaba con su perro. Explica que en la noche se acurrucaron ambos al lado del perro y como a las 06:00 de la mañana se acercaron a la casa por unas lomas y constataron que los carabineros se habían retirado y salió al camino e hizo dedo, parando una camioneta y el conductor le dijo que se

subiera atrás. Advierte que en Curaco había control militar pero no les paro y se bajó en la calle Victoria de Raque dirigiéndose a la casa. Continúo trabajando en Cora. El 03 de octubre llegó en la mañana un joven llamado Marcelo Gutiérrez de unos 18 años de edad. Actualmente desaparecido y le dijo que había visto a Jorge (se había refugiado en el mismo lugar) y que estaba muy preocupado por sus hijos que había nacido el 11 de noviembre de 1972, y le dijo que no tenía alimentos y que Jorge necesitaba calcetines y ropa para que llevara. Añade que había otras personas con ellos pero no quiso dar ningún nombre. Atina que el sábado 06 de octubre de 1973, como a las 20:00 horas el vecino de su suegra, cuyo nombre podría dar la esposa de Carlos Hurtado doña Margoth Aguilar Cubillos, por el sitio de atrás de la casa se acercó y le dijo a su suegra que habían llegado tres personas heridas el hospital que hizo llegar carabineros., lo que supo porque él iba a ver una niñita que tenía muy grave y que averiguara si alguno de esos heridos era Jorge Aguilar Cubillos. Cimentada que en la mañana del día domingo 07 de octubre de 1973, fueron al hospital y al preguntar por las personas heridas el portero consulto con un carabinero y le dijo que pasa, ahí le dijeron que Jorge estaba muerto. Atestigua que el mismo portero del hospital los llevo a la morgue y ahí vio a Jorge en la mesa del centro con heridas de bala en todo el lado izquierdo y sobre la oreja izquierda se encontraba la cabeza destapada. Comunica que a un lado de él, en otra mesa, estaba una mujer joven, con signos de un embarazo de unos siete meses, también con muchas heridas a bala. El mismo portero del hospital les dijo que los otros muertos eran María Ester Bustamante Llancapani y Edgardo Cárdenas Gómez. Destaca que el día 09 de octubre les entregaron desde fiscalía el cadáver de Jorge Aguilar con condición de que lo velaran pero no podía ir nadie. Cuando retiraban el cadáver llevo a la morgue carabineros y le dijo que por orden del capitán Adrián Fernández Hernández debía presentarse a las 15:00 horas, a la tercera comisaría. Descarga que le acompañaron su cuñada Angélica Luco que actualmente vive en avenida Alemania N° 0996 Temuco y Erwin Brickesak cuya familia vive en calle Prat de Osorno y él le parece estaría en Concepción. Delibera que cuando llegaron no dejaron que entrara su cuñada y un hombre bastante mayor de edad vestido de carabinero los hizo pasar a Erwin y a ella en calidad de detenidos. Detalla que a Erwin le empezaron a pegar entre varios carabineros de inmediato. A ella le hicieron

pasar a una habitación para que esperara al capitán Fernández y le sacaron el cinturón, pañuelo, cordones de zapatos y todo lo que llevaba en los bolsillos. Glosa que cuando llegó el capitán Fernández le hicieron salir a un pasillo y el mismo carabinero viejo le preguntaba que quien más estaba con Jorge en bahía mansa, como ella no sabía se los hizo notar y ese carabinero, delante de otros y del capitán Fernández, le dio un golpe de puño en la cara que lo boto al suelo. Después le llevaron a una pieza donde estaba el Capitán Fernández, otros carabineros y un hombre de civil. Escruta que la interrogaron siempre sobre las otras personas que andaban con Jorge y le insultaban diciéndole que era una comunista y como ella le dijera al capitán Fernández que él había sido amigo de Jorge Aguilar ya que varias veces había ido a la casa e incluso le pedía la camioneta prestada y le respondió que no era amigo de ningún comunista y que estos tenían que morir y que le iba a pasar lo mismo que le paso a Marcelo Gutiérrez, que había dicho todo y que ella debía corroborar la declaración de Gutiérrez, para lo cual le pusieron un casete en que se sentían gritos y como que se quebraban tablas, diciéndole Fernández “esto es lo que hicimos con Gutiérrez” Musita que por boca de ellos mismos se enteró que Marcelo Gutiérrez Gómez era hermano de Edgardo Cárdenas Gómez. Expone que el capitán ordeno que la sacaran y los carabineros la llevaron a un calabozo donde quedo con otra mujer de su edad, 24 años, cuyo nombre no recuerda pero supo que era secretaria o trabajaba en la juventud socialista. Invoca que todas las demás celdas estaban llenas de hombres y cuando habría la reja y nombraban a uno lo sacaban y después volvía gritando y quejándose. Puntualiza que estuvo detenida seis o siete días pasando por lo mismo y en las noches carabineros se embriagaban y ellos iban a buscar a su compañera de celda y cuando volvía le decía que la habían violado, lo que se repetía constantemente. Exclama que a ella la trato de sacar un carabinero y de susto vomitó, por lo que el carabinero le pego con la culata del arma en el estómago. Acota que en algunas oportunidades escucho que su suegra iba a preguntar por ella, gritaba para que le entregaran, pero siempre le decían que ella no estaba en la comisaría. Aduce que a Fernández no lo vio después que la pusieron en la celda, y la llevaron poniéndole una capucha de saco de papa a un lugar como de subterráneo donde pusieron en una silla o sillón y le amarraron de los pies y las manos. Uno de ellos se metió por la cintura del

pantalón unos cables y le ponían la corriente para que ella les dijera quienes eran los otros que estaban con Jorge y cuáles eran los comunistas que con él estaban. Musita que ella lo ignoraba. El encargado de la reja de los calabozos, un carnicero, una noche le convido un cigarro y también le pasaba una manta que retiraba como a las 05:00 de la mañana para que se abrigara. Interpreta que ella preguntaba cuando le pasarían a la fiscalía y él le dijo que “si no lo hacía a las 6:00 de la mañana alguien debería rezar ya que le harían desaparecer” Relata que al día siguiente llegaron dos patrullas, una de carabineros y una del ejército y preguntaron por ella, debido a contactos que hizo Angélica Luco y negaron los carabineros que ella estuviera en la tercera comisaria. Narra que como los Militares insistieron les mostraron una lista en la que aparecían los que habían sido puestos a disposición de la fiscalía y en ella aparecía ella. Acota que en la tarde, como a las 17:00 horas, llegó a su celda el carabinero viejo y le dijo que saliera y se fuera haciendo movimientos de preparación de su arma. Aduce que ella pensó que se mataría, al llegar a la guardia un carabinero le dijo ándate son mirar para atrás y allí están sus cosas. Agrega que ella las tomo y salió con mucho temor pero no le dispararon. Continúa que se fue a su casa donde estuvo varios días en cama y después se presentó al servicio donde trabajaba y el que estaba de jefe don Arnaldo Maiochi, el cual le dijo que ya no se le necesitaba. Arguye que posteriormente no fue detenida, Por otra parte delibera que don Antonio Molina, que era profesor de Puacho y que actualmente trabaja como profesor en Pichicupoi, converso con ella y le dijo que Jorge Aguilar le pidió que lo trasladare desde el lugar donde estaba el asentamiento Paucho y él lo llevo a una casita que estaba en bahía Mansa (a unos dos kilómetros) de un pescador de apellido Bañares, actualmente muerto, quien supuestamente habría ido al retén de carabineros de Bahía mansa y otros de la tercera comisaria al mando del capitán Fernández y cercaron la casa. Indica que presumiblemente Jorge Aguilar y Edgardo Cárdenas estaban en la puerta de la casa y ahí los mataron sin que estos hubieran apuesto resistencia, ya que no tenían armas ni siquiera alimentos suficientes. Difunde que la mujer María Ester Bustamante Llancamil la habría llevado cerca de un puente y ahí la mataron. Es imposible que ellos hubieran querido asaltar el retén de bahía Mansa como dice la versión oficial ya que habían muchos carabineros y ellos no los no tenían armas si no que eran

tres personas que no eran extremistas. Atina que en una pensión que había en Bahía Mansa los carabineros habrían comentado lo que habían hecho, según supo por Antonio Molina, según don Pedro Aylwin de la comisión de verdad y reconciliación se habría recibido el testimonio de una mujer que habría visto cuando los asesinaron.

En declaración judicial del 07 de marzo de 2005, rolante de fs. 356 a 361 (tomo I) se refiere en términos similares a sus declaraciones precedentes. Exclama que una vez en la casa del presidente llegó un niño de 16 años y comentó que Jorge se había ido de Puacho mas a la cordillera, a este niño le dejó las pocas cosas que andaba trayendo ya que dijo que se las entregaría a Jorge. El mismo día salió a la carretera hizo dedo a un señor que viajaba en una camioneta quien al parecer era conocido de carabineros ya que no lo revisaron y lo trajo a Osorno. Precisa que cuando iban llegando a su casa su suegra estaba afuera con su hijo en brazos y los carabineros estaban allanando la casa, su suegra le hizo señas y se fue a casa de una vecina. Propone que los carabineros buscaban armas pero no encontraron nada, ya que Jorge jamás tuvo armas, tampoco se llevaron a nadie detenido. Ostenta que el día 2 de octubre llegó a la casa un niño vestido de campesino quien dijo que venía de parte de Jorge, quien le había pedido fuera a saber cómo estaba su hijo Jorge que a esa fecha tenía 10 meses. Este niño de unos 16 años dijo que su hermano con su cuñada que estaba embarazada estaban con Jorge y ella deduce se trataba de Ester. Sugiere que su suegra quedó en enviar una encomienda a Jorge, la que fue a buscar el día jueves, este chico se llamaba Manuel Gutiérrez, dijo ser de Osorno y que él se había ido a reunir con su hermano que estaba junto con Jorge. Acota que el día sábado en la noche atrás colindante con la casa de su suegra había un vecino que tenía una niñita enferma en el hospital por lo que tenía que ir a dar sangre, este señor comenzó a tirar piedras a la casa por lo que su suegra salió y éste le contó que al ir al Hospital habían llegado tres personas heridas que habían traído de la Costa. Como a las 07:00 horas una vez que se levantó el toque de queda fueron al Hospital, a un enfermero preguntaron por las tres personas heridas que habían traído de la Costa, especialmente por Jorge. El enfermero regresó al rato con un carabinero, llamaron a su suegra y le informaron que Jorge había fallecido. Adosa que su suegra pidió verlo por lo que: fueron con su suegra y su

hermana Honorinda Aguilar. Atestigua que en la morgue en el suelo habían coágulos de sangre, Jorge estaba al centro de las otras dos personas, se refiere a Edgar y Ester, Jorge estaba herido en todo el sector izquierdo por el frente y costado y una herida por perforación en la sien izquierda y cabeza, tenía golpes en las manos más la izquierda y la pera morada. Las ropas estaban llenas de hoyos, especialmente el blue jeans y especialmente el sector izquierdo y con manchas de sangre pero no en forma excesiva. Comenta que a ella después le entregaron el reloj de Jorge el que estaba desarmado por lo que presume lo golpearon con algo contundente. Decanta que su hermano Luis le fue a vestir posteriormente, éste vive actualmente en Temuco, en la avenida Alemania 0996, es presidente del colegio de Contadores. Divulga que el cadáver no estaba embarrado y lo entregaron el día lunes y cuando fueron a retirar el cadáver le citaron por intermedio de un carabinero que no recuerda para que concurra a la tercera Comisaría de Raque ante el capitán Fernández. Destaca que fue así como se presentó, no recuerda con exactitud quedó Angélica Luco y un amigo en común Erwin Brikisac. Ese día le pasaron a una pieza, no vio más a Angélica ni a Erwin. Distingue que pasado unas dos horas le sacaron y le interrogó un Carabinero de edad, quién le pegó ya que le preguntó quién estaba con Jorge y al responderle que no sabía se molestó. Después le hicieron pasar donde el Capitán Fernández quién al parecer estaba con un detective, le volvió a preguntar quienes estaban con Jorge pero malamente le podía contestar ya que ella no sabía. Alega que el detective que era bajo y moreno le mostró un casete que tenía ruidos de quejidos y señaló que eso le había pasado a Marcelo, ella dedujo a Marcelo Gutiérrez, hermano de Edgar, y que eso mismo le podía pasar a él. No recuerda rostros, ni tiempo que permaneció detenida, ya que no sabe qué le pasó. Recuerda que a Fernández le criticó lo que hacía siendo amigo de Jorge, a lo que le respondió "maldito fue el día en que me hice amigo de él". Apoya que cuando salió en libertad ya Jorge estaba sepultado hace rato en el Cementerio Católico. Posteriormente supo que una persona llamada Antolín había estado junto con Jorge pero no tiene mayores antecedentes de esta persona. Jorge era una persona educada y no cree que iba a llevar a una persona embarazada a una emboscada. A los años después fue a la Costa para tratar de ubicar la casa tipo choza donde Jorge fue emboscado por Carabineros, pero no vio nada

relevante, esta se ubicaba en una altura. Arguye que tiene entendido que la casita era de un pescador de apellido Bañares. Algunas personas dicen que éste señor delata a Jorge. Pero ella cree que carabineros interceptó la micro en que viajaba Marcelo y lo torturaron hasta que señale donde se encontraba Jorge y los demás, musita que a este chico nunca más lo volvió a ver y también es detenido desaparecido. Finalmente indica que le parece muy extraño que el certificado de defunción María Ester Bustamante Llancamil se señala como fecha de fallecimiento el 17 de mayo del año 1973, en circunstancias que ella la vio el día 7 de octubre de 1973.

En declaración extrajudicial con fecha 09 de junio de 2015, **rolante de fs. 466 (tomo II)** se refiere en términos similares a lo precedente.

En declaración judicial de fecha 23 de julio de 2021, **de fs. 1506 a 1509 (tomo V)**. Se lee sus declaraciones de fs. 188 a 192 y de fs. 302 a 308, adopta que María se llamaba la otra señora que estuvo con ella detenida, a ella la pasaron como a los siete días, a la Fiscalía Militar y a la deponente la dejaron, así que ella preguntó por qué la dejaban y no la llevaban, y le dijo el Capitán, o sea el carabinero ese que cerraba las rejas, que si no le habían llevado o al otro día no la llevaban, le hizo como que le iban a cortar el cuello, una cosa así; iba a desaparecer. Agrega que el resto de los días siguió ahí, escuchando y viendo las personas que iban, que los iban llevando y torturando. Advierte que las llamaban cada cinco, siete minutos, llamaban por el apellido a alguien y tenía que salir y después los entraban a la rastra para dentro otra vez. Ante la consulta solo por precisar aquí nombra el cuatro, el cinco de octubre del 1973, ¿esas fechas son correctas? a lo que agrega que sí, el cuatro de octubre, “haber no, miento”, Marcelo Gutiérrez, él fue a la casa de ellas, a la casa que estaba en el Triángulo Ferroviario en Ancud. Él dijo de que Jorge lo había mandado para que viera al hijo y le llevara noticias de ellas y que necesitaba comida, pero, él aparece el cuatro parece que fue a buscar las cosas y se iba en la micro. Ella supo que de la micro lo habían bajado el mismo capitán Fernández. Cuando le interrogaron él dijo que lo habían bajado de un bus y escuchaba ella como le golpeaban, como lo torturaban, porque pusieron un casete con ese hombre que era moreno, que andaba vestido de civil. Basa que el 5 de octubre como 22:40 horas de la noche mataron a Jorge, entonces no es posible olvidar, no es posible. Posteriormente se procede a leer otra

declaración de la Sra. Ana del Carmen López Barría, de fs. 356 a 361. Arguye que sí está de acuerdo. Posteriormente se lee la declaración policial de fs. 466 a lo cual está de acuerdo la deponente. Se procede a leer lo peticionado por el solicitante de la diligencia en relación con doña Ana del Carmen López Barría. Se refiere a otro hecho. El tribunal consulta si en el caso de Marcelo Gutiérrez, la información que tiene, que él habría, presuntamente fallecido. A lo que distingue que falleció el mismo 5, porque a ellos los mataron en la noche, y se imagina que a él lo interceptaron en el camino a Bahía Mansa tipo 3 o 4 de la tarde, y por lo que decía en el casete o lo que ella escuchó en el casete o le hicieron escuchar es que él gritaba y pedía de favor que no lo siguieran golpeando, torturando, era bien horroroso escuchar y ella cree que a él lo hicieron confesar y a raíz, de eso los carabineros llegaron a Bahía Mansa. No puede decir al Tribunal con exactitud en qué lugar habría fallecido Marcelo Gutiérrez, pero tiene que haber personas que iban en el bus y que vieron cuando lo bajaron, pero, es que la gente después del año 1973, o sea después de esos hechos, nadie quería hablar, nadie. Afirma que a su esposo junto con Edgard y Ester, fallecieron medianamente cerca de Bahía Mansa, en el mismo lugar. Desconoce si cuando los ejecutaron estaba Marcelo Gutierrez, cree que no, porque no, no habrían entregado los cadáveres. Espeta que no tiene antecedentes que Jorge, Edgard y Marcelo Gutierrez estuvieran juntos el día del fallecimiento, porque toda la gente dijo que estaban ellos tres, que había otras personas antes, pero que se habían ido o habrían salido, no sabe, pero a los únicos que tomaron ahí en la choza fue a Jorge, Edgard y María Ester. Respecto a declaración de fs. 772 declara que no tiene conocimiento de las órdenes que Adrián Fernández dio a Cheuquelaf y Pinol, pues no estaba con ellos, pero era una persecución encarnizada que tenía Fernández contra estas personas, así es que ella no cree que los señores carabineros se iban a mandar por sí solos. Él era el Capitán de la Tercera Comisaría de Raque. El tribunal consulta cuando estuvo detenida en la Comisaría de Osorno que Adrián Fernández ¿qué le manifestó respecto de Gutiérrez? ¿Qué le manifestó Adrián Fernández respecto de Marcelo Gutiérrez?, a lo que conjetura que ¿Así que no conoces a Marcelo Gutiérrez? Ya ahora le iba hacer escuchar algo y ese hombre moreno puso un casete en una radio, y ahí escuchó ella eso es lo que le pasó a Gutiérrez por negarse a cooperar, y es lo mismo que te va a

pasar a ti, dijo el Capitán Fernández. Consulta el tribunal ¿Cómo se obtuvo la información que la víctima transitaba en un determinado bus cid transporte colectivo? ¿Cómo se llegó a esa información que él transitaba en un bus de transporte colectivo? Soflame que él les manifestó a ellos que se iba en el bus a Bahía Mansa, personalmente lo manifestó, el mismo día, una media hora antes de irse, cuando fue a retirar a la casa de la señora Ema las cosas que ella le mandó a su hijo. El tribunal consulta en el casete que le hicieron oír a usted de, supuestamente Marcelo Gutiérrez Gómez, ¿usted pudo reconocer la voz de él? A lo que sugiere que sí, es que él era un chico jovencito, ella no sabe, tendría 16, 17 años o 18 por ahí, no cree que haya tenido más, era bien jovencito y tenía una voz bien particular, no era de la voz de un hombre, era de un chico jovencito.

A.19. .JUAN SEGUNDO MOREIRA GARCES (23 años de edad para fecha de ocurrencia de los hechos). Declara de fs. 256 a 257, 294 a 296 (Tomo I) y de fs. 338 a 346 (tomo I).

En declaración extrajudicial prestada con fecha 07 de diciembre de 2014, **rolante de fs. 256 a 257 (tomo I)**, apunta que con fecha 01 de enero de 1970, fue contratado por Carabineros de Chile, en la Prefectura de Osorno, siendo puesto a disposición de la Primera Comisaría de Carabineros de Osorno. Con fecha 01 de febrero del año 1972. Aduce que realizó en curso de recluta en la Prefectura de Osorno, el cual tuvo una duración de nueve meses, y una vez finalizado, regresó a prestar servicios en la Primera Comisaría de Osorno. Advierte que durante la primera quincena del mes de enero del año 1973, fue destinado como chofer a la Tercera Comisaría de Osorno, donde el Comisario Jefe, era el Capitán Adrián Fernández Hernández. Se desempeñaba conduciendo los furgones policiales existentes en la señalada unidad, permaneciendo hasta el año 1979, ya que posteriormente fue enviado como Jefe al Retén San Juan de la Costa. Continúa haciendo una reseña de su carrera funcionaria. Adosa que con relación a las víctimas es primera vez que escucha mencionar dichas identidades, motivo por el cual no podría aportar antecedentes que permitan esclarecer las circunstancias en que ocurrieron sus detenciones y quienes fueron sus aprehensores. Asevera que una vez que llego a la Tercera Comisaría; y se realiza el pronunciamiento del Gobierno Militar, observaba que el señor Comisario, Capitán Adrián Fernández

Hernández, realizaba labores operativas junto a un grupo de funcionarios más antiguos, tales como Rolando Becker Solís, quien era chofer y conductor personal de Adrián Fernández Hernández; Rafael Pérez Torres; el enfermero de ganado Gustavo Muñoz Albornoz; Juan Canales Rodríguez; Oscar Vargas, Eliseo Aguilar Salgado, entre los que recuerda. Decanta que los vio llegar con gente detenida. Sus patrullajes y labores, las realizan en dos furgones marca Chevrolet, que pertenecían al SAG, y una camioneta marca Ford, color azul, la que pertenecía a la CORFO, vehículos que estaban requisados, una vez que asumió el gobierno militar. Destaca además, que cuando personal del ejército de Chile, llegaba a dejar gente en calidad de detenidos a las instalaciones de la Tercera Comisaría de Osorno, siendo interrogados por el señor Comisario anteriormente mencionado, en la sala ubicada en un subterráneo, la cual estaba destinada para el almacenamiento de los elementos que tenían que ver con los caballos de cargo: de la Comisaría.

En declaración extrajudicial de fecha 05 de marzo de 201e, **rolante a de fs. 294 a fs. 296 (tomo I)**, destaca que desde el año 1972 y por 10 años fue chofer de la Tercera Comisaría del Carabineros de Osorno. Sin embargo, no puede aportar antecedentes de la víctima Marcelo Gutiérrez, pues nada sabe de este señor. Detalla que nunca fue a Bahía Mansa durante la época que se dice fue asaltada la Tenencia de ese lugar, donde decían habían muerto algunos asaltantes que fueron derivados a la morgue de esta ciudad. A la vez puntualiza que en esa época tenía apenas 20 años y, por eso no era cotizado por el Capitán Fernández, quién decía que él era un mocoso. Sin embargo, soflama que él manejaba los vehículos policiales 667 y 777, que efectuaban recorridos por la Población. Fernández ocupaba vehículos del SAG que habían sido requisados. Acota que es cierto que supo de detenidos que eran llevados al subterráneo de la Tercera Comisaría, los que eran torturados en la noche, como desde las 22:00 horas hasta tal vez las 02:00 de la madrugada. Aduce que cuando le tocaba turno de noche escuchó los lamentos de esos detenidos al ser interrogados por Adrián Fernández, a quién vio llegar en la noche a la Unidad. Él se hacía acompañar por Becker Salís, Juan Canales, Oscar Vargas, Eliseo Águila, Rosas Silva, Rafael Pérez Torres y Gustavo Muñoz Albornoz, entre otros. Adosa que recuerda que cuando se escuchaba los lamentos de los torturados, Intentaban no escucharlos yéndose a algún vehículo a descansar.

Esto ocurría dos o tres veces por semana, así de reiterativo eran estos interrogatorios y torturas, los que siempre eran de hombres, nunca de mujeres. A su pregunta puntualiza que Fernández entregó personalmente la Tercera Comisaría al Capitán Rolando Ríos García, lo cual sucedió en marzo de 1974. Luego Fernández se fue a Santiago. Lo que sí vio, es que en la noche llegaban camiones militares a bajar detenidos y dejárselos a Fernández, durante el período de septiembre a octubre del año 1973, los que luego, presume era torturados en el subterráneo, porque cuando los debían trasladar a la Justicia Militar, se veían machucados. Descarga que de la época del golpe militar y el período posterior, recuerda a Roberto Foller Lanigno, Fiscal de Ejército y a Fredy Rosas Arriagada, Fiscal de Carabineros. A su pregunta destaca que el personal militar siempre se contactó directamente con el Capitán Fernández, nunca pasó por el oficial de guardia. El Teniente del Ejército era uno de contextura alemana y siempre vestía tenida militar. A los choferes militares no los ubicó. Espeta que Adrián Fernández era movilizado por dos choferes, Becker y Maragaño, nadie más servía para estas labores. A la vez expresa que en la guardia había un libro oficial, pero además, había otro que era el que contenía la realidad de lo que pasaba. Era como un libro más completo, donde se tenían datos de detenidos y de sus familiares incluso. No sabe que habrá pasado con ese libro. Puntualiza efectivamente conoció algunos funcionarios del Retén de Ovejería, entre los cuales recuerda a liderando Benavides, que era boxeador, "mal agestado", de poco hablar y cortante actualmente fallecido. Finalmente soflama que según lo que escuchó, cada tres años se incineraban los documentos que mantenían en la Tenencia. Eso se hacía en la fragua del enfermero de ganado Gustavo Muñoz, antes mencionado como parte del grupo de Fernández.

En declaración judicial prestada con fecha 03 de enero de 2005, rolante a de fs. 338 a 346 (tomo I), anexa que después de 11 de septiembre de 1973 los destacamentos fueron recogidos y el primero de ellos fue el de San Juan de La Costa, más o menos como el 14 de septiembre de 1973, el cual estaba a cargo del Sargento Segundo David Martínez Arcos y al que se había integrado recién en octubre de 1972. Aduce que el recogimiento se debió a que la base necesitaba de mayor personal para atender las necesidades. En ésta aparte del Comisario no había ningún otro oficial y el que cumplía la función de

segundo jefe era el suboficial Mayor Oscar Vargas Vargas, quién además estaba a cargo de la Comisión Vestuario y Equipo que estaba ubicada en el segundo piso, labor en que se desempeñó hasta 1980, época en que la asumió el Sargento primero Francisco Inostroza Baeza. Aduce que el Retén de San Juan de la Costa no tenía vehículos y solamente había caballares. Advierte que su primera licencia de conducir la obtuvo en 1974 pero desde antes manejaba pues sabía hacerlo y lo hacía bajo la responsabilidad del señor Comisario. Desarrolla que desde septiembre de 1973 en adelante desempeño funciones de chofer y en las bases existían tres furgones Fiat pero el único que estaba en funciones era el furgón N° 777 y además una campagnola también marca Fiat N° 446 y de uso exclusivo del Comisario y que la manejaba personalmente. Añade que en el patio de la base había más o menos 18 vehículos requisados, entre ellos de CORA, INDAP y SAG. Apunta que habían cuatro camionetas Chevrolet carrozadas de color verde oscuro, que tenían puertas traseras con vidrios y que fueron ocupadas para efectuar patrullajes dentro y fuera de la ciudad, de día y de noche, y que eran prácticamente nuevas; eran manejadas por Carabineros de grado más antiguo, con grado de Cabo o Sargento. Apunta que en todo caso cuando él llegó a la base ya estaban esos vehículos. Asegura que manejaba el furgón N°777 y solo en servicios de día y no nocturnos y que aparte de Maragaño, Becker y Padilla, que eran choferes e incluso tenían un distintivo como tales, también manejaban los vehículos con autorización del Comisario Canales y Cheo Águila. Decanta que los que eran operativos eran los choferes antes mencionados y los funcionarios Inostroza, Águila, Rosas Silva, Melian y Canales. Puntualiza respecto a su declaración de fs. 1.607, que cuando depuso que las detenciones por razones políticas fueron asumidas por personal más antiguo se refería a funcionarios con grado de Cabo o Sargento, salvo en caso de Melian que era Carabinero y tenía ese grado hace bastante tiempo, como 16 años. Detalla que el mismo día 11 de septiembre de 1973 se decretó el acuartelamiento en primer grado y por ellos los solteros pasaron a dormir en el segundo piso y los casados en lo que era el casino, primer piso. Colige que a la gente que él menciona como operativa la vio en base trabajando desde septiembre hasta fines de 1973. Cuenta que Rafael Pérez también era operativo de la base y estaba en esa época allí era uno medio gordito, coloradito y un cabo antiguo que debe haber tenido unos quince años

de servicio. Revela que Rubén Molina González, el veterinario Juan Fischer y el Marenga, Gustavo Muñoz, a quienes veía en la base entre septiembre y diciembre de 1973, no eran operativos, salvo Muñoz que salía a patrullajes, quién era uno alto y que en esos años tiene que haber sido sargento segundo, delgado, medio calvo, cara alargada y medio narigón. Destaca que en ese tiempo había toque de queda y él y colegas de más o menos su misma antigüedad salían a patrullar el sector de Raque Bajo, pero también se dio cuenta de que el Comisario llamaba a personal antiguo a su oficina y de ahí los citaba a una hora determinada y que generalmente eran más, o menos como a las 18:00 horas y a esa hora se reunían y salían en vehículos del SAG; generalmente era uno de esos vehículos con cuatro o cinco funcionarios más el chofer acompañados del propio Capitán y con fusiles SIG, que eran los que en ese momento se usaban. Espeta que siempre regresaban tarde, más o menos como a la 1:00 de la madrugada cuando el personal estaba durmiendo. Cuando no estaba a cargo el comisario quien iba al mando era el suboficial Inostroza. Nuevamente consultado narra que más o menos en noviembre de 1973 carabineros volvió a usar gorra y el revolver pues desde septiembre usaban casco y fusil. En la base sabían que el Comisario y ese personal antiguo salían a hacer detenciones a ex partidarios de la Unidad Popular, a quienes seguramente ubicaban desde antes, a diferentes sectores de la jurisdicción de la Tercera Comisaría, como ser Puerto Octay, Pajaritos, Entrelagos, San Pablo, Bahía Mansa. Precisa que en ese tiempo todas las detenciones políticas se concentraron en la Base de la Tercera Comisaría e incluso se llevaron detenidos desde Ovejería y del sector de la Primera Comisaría. Recuerda que el propio Comisario interrogaba, a los detenidos y participaban el escribiente quién redactaba las declaraciones para enviarlas al Tribunal y además del personal antiguo que él refirió, quienes actuaban violentamente pues golpeaban a los detenidos con golpes de puños con el objeto de sacar una información, soflama que eso lo supo porque lo escuchaba desde el dormitorio y además alguno de ellos lo comentaban, lo cual se hacía en el pasillo que existía entre la guardia y el casino y para lo cual cerraban las puertas que daban a la guardia y al pasillo. Acota que uno de los que comentaba era Canales a quién le gustaba un poco el trago quién contaba las preguntas y las cosas que hacían para que los detenidos les dieran información sobre sus compañeros y agitadores. Aduce

que él nos decía "Ustedes son ciegos, sordos y mudos cabritos". Consultado advierte que no puede descartarlo pero en septiembre de 1973 y en los meses siguientes veía en el subterráneo unas cajas de cartón, una mesa de ping pong y que estaba como bodega pero él no vio que llevaran gente abajo. Atestigua que el subterráneo servía como bodega y no presentaba ningún problema y escucho que hasta 1968 o 1969 cuando salía el río se inundaba pero después de eso no. Nuevamente consultado recalca que los que salían con el capitán Fernández o Inostroza en las patrullas para detener a ex partidarios de la Unidad Popular eran Muñoz, Canales, Becker, Rosas Silva, Pérez Torres y Cheo Águila; esos eran los más antiguos y conocían a mucha gente y especialmente el Cheo Águila pues había trabajado en la Comisión Civil muchos años. Consultado relata que en ese tiempo dadas las circunstancias que se vivían, era perfectamente posible que cualquiera de ellos hubiera podido detener a ex partidarios de la UP sin necesidad de una orden expresa de la Fiscalía, se imagina que ese grupo también haría detenciones en la ciudad de Osorno pues ellos salían a diferentes lugares. Recuerda que estando de centinela en la base, meses después del 11 de septiembre, la mamá de Rodolfo Leveque le preguntó por él ya que eran amigos y allí sospechó que a lo mejor ese grupo lo había detenido pero él no lo vio en la base y eso fue lo que le respondió a la señora. Ella le contó que un furgón verde había sido en el que se trajo a su hijo desde calle Tarapacá y que un sobrino de ellos lo siguió hasta la esquina de la Comisaría en Iquique con República y vio cuando el furgón llegó a la Comisaría. También le tocó escuchar cuando la esposa de un señor Aguilar Duhau le preguntó a su mayor René Varas, de quién era su chofer, sobre el paradero de su marido, ocasión en la que él la envió a preguntar a Puerto Montt. Descarga que no conocía a Guillermo Peters Casas, aunque si a sus hermanos Roberto y Frida por intermedio de su tío José Basen Gales, quien era chofer de Varmon tt, donde Roberto era su auxiliar. Expresa que en octubre de 1974 contrajo matrimonio y allí Roberto contó que su hermano había sido detenido por Carabineros. Textualmente le dijo "Juanito, Adrián Fernández fue a detener a mi hermano" y después al escuchar conversaciones Roberto se juntó nuevamente con él y le dio las características físicas de los demás, según lo que vio su hermana en Chahuilco, y en base a eso él concluyo que los que anduvieron esa noche con el capitán Fernández junto al chofer Maragaño, el

Cheo Águila y Rafael Pérez. Aduce que le habló de quien andaba aparte de Fernández, era grande y robusto, cree que era Águila, uno negrito que podría ser Maragaño y uno colorado que él cree era Pérez. Desconoce quién conduciría la citroneta de Peters pues también se enteró que la trajeron. No sabe si andaría Muñoz pero por lo que recuerda él también manejaba por esa época, se refiere a 1973 al igual que Águila. Insiste que no participó en la detención ni trabajó con Guillermo Peters pues no lo conocía. Entiende que Roberto conocía desde antes al Capitán Fernández pero no escuchó comentarios de parte de colegas al respecto y tampoco vio la citroneta en la base a pesar de que había como 18 vehículos. Afínca que el capitán Fernández también salía fuera de la jurisdicción de la Tercera Comisaría pues efectuaba detenciones dentro de la Primera Comisaría y porque Chahuilco queda al lado del límite entre la Segunda y Tercera Comisaría. Alega que al ver la fotografía de fs. 4.999, agrega que los funcionarios que aparecen allí de izquierda a derecha son el segundo al parecer Rafael Pérez. El tercero el capitán Fernández, el cuarto Nelson Rosas u Oscar Vargas, el quinto Gustavo Muñoz, el sexto Canales y el séptimo no lo reconoce. Ellos usaban el casco y fusil que se ocupó después de septiembre de 1.973. Acerca de lo sucedido en Bahía Mansa no recuerda que hubiera existido un enfrentamiento en ese Retén pero sí que hubo uno en el sector de Pucomo Pascal que queda de Bahía Mansa para Osorno, unos 15 kilómetros más o menos. Arguye que el Sargento Pinol y el Cabo Rosas del Retén de Bahía Mansa dieron cuenta al Comisario Fernández que habían detenido a dos personas de sexo masculino por actividades políticas, porque tenían información de que pretendían asaltar el retén, pero la verdad es que nunca hubo algo concreto. El Capitán Fernández dispuso un movimiento de funcionarios para que esa misma noche fueran a reforzar al Retén. Salió una patrulla compuesta por Águila, Melián, Conejeros que era un carabinero retirado, el Cabo David Guerrero pero no recuerda a otros; al otro día en la mañana, como a las 8:30 horas, el Capitán Fernández se constituyó en el lugar, en la campagnola, la que fue conducida por el cabo Becker. Este cabo Becker no es el mismo carabinero Bécar Quezada pues el segundo apellido de aquél es Solís. Apunta que no se hablaba de que se hubiera detenido a una mujer y menos que hubiera habido muertos en ese enfrentamiento. Eso fue más o menos en una fecha de fines de septiembre a

principios de octubre de 1973. Soflame que Rafael Pérez y Gustavo Muñoz tienen que haber andado también porque ellos formaban parte del grupo que salían a patrullar para detener a ex partidarios de la Unidad Popular, diligencias en las que como dijo, a veces eran comandadas por el capitán Fernández. Dice que se derivaban a la Fiscalía o a la Cárcel pero no puede dar fe de ello pues ahora se ha escuchado que los mismos funcionarios que los detenían los ejecutaban aunque desconoce en qué lugares. Atestigua que siempre escuchó que los llevaban al puente Pilmaiquén de la Ruta 5, y que ahí se escuchaban disparos a altas horas de la noche, los lugareños conversaban que llegaban los vehículos con la luz apagada y que se escuchaban los disparos. Nunca le tocó llevar detenidos a ese lugar pues el Comisario tenía su gente antigua para eso. Por otra parte difunde que en cuanto a las diferentes declaraciones que ha prestado puede decir que cuando los citaban a un Tribunal sus jefes los instruían para que evitaran decir la edad de los hechos, recomendándole no precisar fechas y señalar desconocimiento de los hechos y limitarnos a declarar cuáles eran sus funciones normales. Por ello se daba cuenta y sabía de qué se estaba tratando de ocultar la verdad pues se hacía y eran órdenes y eso explica sus primeras declaraciones y en las cuales señaló no saber nada. Se refiere a otro hecho.

A.20. MARÍA EUFEMIA MILLAQUIPAI GUICHAQUELEN (24 años de edad a la época de los hechos) de fs. 260 a 264 (Tomo I) y de fs. 297 a 299 (Tomo I).

En **declaración extrajudicial** de fecha 08 de diciembre del año 2014 de **fs. 260 a 264 (Tomo I)**, espeta que entre los años 1970 - 1971, se fue a vivir con su pareja de nombre Juan Maragaño, y su hijo Ernesto Robinson de 5 años aproximadamente, a un campamento que tenía por nombre "Elmo Catalan", el cual se ubicaba en el sector sur oriente de Osorno, donde residían alrededor de 500 familias. Es el caso, que en dicho campamento se formaron dos centro de madres, de los cuales integraba uno, ocupando el cargo de secretaria. En las actividades que se realizaban en estos centros de madres, conoció a doña Pascuala Uriber, quien era una de las coordinadoras de todos los centros de madres que existían en la ciudad de Osorno, quien le hace participar de las diversas actividades que se efectuaban en otros centros de madres. Es así como nace una amistad y pasado un año de tener contacto con Pascuala,

estando en una reunión masiva de los centros de madres que militaban en los partidos de izquierda y de derecha, se pudo percatar que Pascuala era militante del Partido Socialista, ya que ella andaba coordinando todas las actividades que se iban a realizar e incluso le indicó porque persona tenía que votar, ya que se iba a elegir la directiva, señalándole que la persona era del partido socialista, partido que militaba ella. Después de esa actividad, se siguieron viendo y reuniendo, siempre en las actividades del centro de madre al cual ella pertenecía. Recuerda además, que Pascuala en una ocasión le pidió que se inscribiera en el Partido socialista, pero ella le manifestó que no podía porque era menor de edad. Tiempo después, en el período de las elecciones presidenciales, donde estaba postulando don Salvador Allende, la Pascuales le solicitó que la acompañara a entregar volantes promocionando la postulación del señor Allende, y esa fue su única relación con el Partido Socialista. Una vez que asume el gobierno militar, el 11 de septiembre del año 1973, su vida siguió en forma normal, hasta que el día 05 de octubre del año anteriormente señalado, siendo alrededor de las 17:00 horas, en circunstancias que se encontraba en la casa de sus padres, ubicada en calle Ernesto Riquelme N° 168, sector de Ovejería Bajo, junto a su pareja nombrado en el presente relato, dispuestos a tomar once, cuando en forma repentina tocan la puerta, por lo que sale a atender, percatándose que eran alrededor de ocho a diez funcionarios de Carabineros de Chile, todos de dotación del Retén de la Ovejería, entre los que andaba el Sargento Manuel Montiel, Jefe del Reten, un funcionario de apellido Benavides, el carabinero Rojas, otro de apellido Aguilar y Cabo Barrientos, todos portando metralletas y el Sargento Montiel, pregunta por María Millaquipai, respondiéndole que era ella, indicándole que tenía una orden de detención en su contra, sin mostrarle documento alguno que acreditara lo que me decía, y por su desconocimiento, le pidió que le dejara ir a buscar su carnet de identidad, a lo que accedió, por lo que ingreso a su pieza, saca su carnet de su cartera, saca un abrigo y se va con unos Carabineros al Retén de Ovejería, quedándose otros funcionarios policiales en las afueras de la casa de sus padres, quienes posteriormente y en su ausencia, allanaron el domicilio de sus padres, registrándolo y desordenándolo completamente, además de destruir algunos muebles y camas. Una vez en el retén de Ovejería, la ingresan a una pieza, donde le dejan bajo llave. Rato después, aparece en la pieza el

Carabinero Benavides, quien sin mediar palabra alguna le propina un golpe de puño en la cabeza, perdiendo medianamente el conocimiento que quedó media aturdida, para luego comenzar a preguntarse donde tenía escondidas las armas, a lo que le responde que no tenía ningún arma en la casa, que la única arma era una honda. Luego le pregunta porque se había ido a esconder a la casa de un tío ubicada en Chahuilco, ubicada en el sector de Río Negro, a lo que le responde que nunca estuvo escondida, que siempre ms mantuvo haciendo sus cosas habituales en su casa del campamento, respuesta que al parecer a este carabinero le molestó, ya que le propinó un gran golpe con un objeto contundente en la parte posterior del muslo de la pierna derecha, ya que hasta el día de hoy, siente molestia en su pierna producto de ese golpe e incluso en ocasiones llega a cojear. Además de ese golpe, le agredió con golpes de puño en diferentes partes del cuerpo, sobre todo en el rostro, trisándole una pieza dental y otra se la soltó, para luego llevarle a un pasillo donde a un costado de este se ubicaban unas celdas y tenía salida al patio del retén. Siendo alrededor de las 23:30 a 00:00 horas, del mismo día 05 de octubre del año 1973, aparece nuevamente el Carabinero Benavides, observando que se encontraba ebrio, quien a viva fuerza la lleva hasta la parte final del pasillo, con uno de sus brazos le toma ambos brazos, a viva fuerza la inclina hacia adelante, le baja el pantalón y sus cuadros para comenzar a violentarla sexualmente, sin poder pedir ayuda ya que le tenía la boca tapada. Recuerda que mientras este Carabinero la violaba, apareció el cabo Barrientos, quien al percatarse de lo que le estaba haciendo, lo tomó de las ropas por la espalda y lo sacó a empujones del lugar, sin recibir ningún tipo de ayuda. Alrededor de las 04:00 horas, estando ella sentada en el suelo del pasillo del sector de celdas, aparece nuevamente el Cabo Barrientos, quien le manifiesta que no comentara nada de lo sucedido con el Benavides, pero que el motivo de su detención, era producto de que desde la familia Álvarez quienes vivían cerca de sus padres, habían dicho de que ella era comunista, que estaba escondida y que tenía armas, por lo que en ese instante pudo deducir que toda la información que manejaban los Carabineros de su familia, provenía de los Álvarez, ya que las niñas de esa casa, siempre andaban metida en el Retén de Ovejería, además le daban la pensión a los Carabineros solteros. Siendo alrededor de las 07:40 horas, fue trasladada a las dependencias de la Tercera

Comisaría de Osorno, por el Sargento Manuel Montiel, en un furgón de Carabineros, donde es recibida por el Comisario Jefe de la Tercera Comisaría de Rahue, del cual hasta ese momento desconocía todo tipo de antecedentes, el cual conversó con el Sargento Montiel, y realizaron los trámites de entrega y recepción de su persona e incluso Montiel le dice al Comisario Rahue que le trataran con guantes de seda, ignorando porque le dijo eso al Capitán. Acto seguido es ingresada mediatamente a una celda, donde estuvo completamente sola hasta las 14:00 horas aproximadamente, ya que llegó en calidad de detenida doña Ana López con quien no cruzó palabra alguna, hasta alrededor de las 18:00 horas, cuando de la nada comenzó a llorar y se acercó a ella, preguntándole que le sucedía y ella le comentó que a esa hora su esposo ya estaba sepultado, sin desconocer porque le dijo eso, hasta que en un instante le contó que a su marido Jorge Aguilar, lo habían matado a balazos los Carabineros, en el río Choroy. Recuerda que en horas de la noche, Ana es sacada desde la celda por unos funcionarios de Carabineros, quienes le vendan los ojos y la trasladan con destino desconocido y después haber pasado unas horas, unos policías la regresan al calabozo, donde se percata que venía en muy malas condiciones físicas, señalándole que había sido torturada con aplicaciones de corriente y golpes. A medida que pasaban las horas y las conversaciones entre las dos, ella le comentó que había sido detenida por haberle mandado provisiones a su marido con un joven, el cual también resultó detenido, pero que desconocía que había ocurrido con él. Recuerda que las celdas de la tercera Comisaría de Osorno, durante los ocho días que estuvo detenida en este lugar, siempre estuvieron llenas de civiles privados de libertad, tanto hombres como mujeres y jóvenes menores de edad, los cuales la gran mayoría fueron torturados y prácticamente todas las mujeres fueron violadas e incluso una de estas jóvenes, la que tendría unos 17 años aproximadamente, de la cual recuerda solo su nombre como "Dalila", resultó embarazada producto de estas violaciones, según la información que tuvo tiempo después. Es dable señalar, que durante su tiempo de detención en la Tercera Comisaría de Rahue, fue torturada prácticamente todos los días y en dos ocasiones, se le aplicó corriente por largos minutos, para lo cual le colocaron cables en los senos, vagina, brazos, codos, en la cien, cuello, piernas, rodillas y tobillos, siendo interrogada por personas de sexo masculino,

pero a través de las conversaciones que existían entre sus interrogadores y torturadores pudo reconocer la voz del Capitán Adrián Fernández Hernández, todas estas torturas eran realizadas en un subterráneo existente en dicha comisaría, ya que cada vez que se les sacaba vendadas de las celdas, las hacían caminar por una especie de pasillo, para luego descender una estrecha escalera donde incluso, la primera vez que fue llevada a ese lugar, fue lanzada, después de haber bajado el primer o segundo peldaño, con un fuerte golpe de culata en la espalda, lo que hizo que perdiera equilibrio y cayera hasta el final de la escalera sobre el carabinero que se desplazaba delante de ella. Quiere exponer además, que las torturas que les aplicaban, sobre todo cuando le colocaban corriente, eran tan fuertes, desgastantes y prolongadas, que ya nunca pudo, ni puede recordar como regresaba a su celda. Después de ocho días de haber estado en la Tercera Comisaría de Rahue, fue llevada a las dependencias de la Fiscalía Militar, en la ciudad de Osorno, donde la ingresan a una sala grande, la que estaba llena de gente custodiada por funcionarios armados del ejército, desde donde comenzaban a llamar y hacerles ingresar a una sala donde los fichaban, luego regresaban al grupo para posteriormente ser llamados nuevamente, siendo escoltados por un funcionario de ejército, el cual los hacía bajar unas escaleras, con dirección a una puerta, la que se habría y salía otro funcionario de ejército, quien inmediatamente colocaba una venda en los ojos, luego los hacían caminar con dirección a alguna pieza donde se le ordenó que se acostara en una camilla y siente que comienza a colocarme amarras en los brazos y piernas, para luego instalarle cables en distintas partes del cuerpo, por lo que entre llantos suplicó que no le colocaran corriente nuevamente, ya que el día anterior le habían aplicado descargas eléctricas en la Comisaría, por lo que una voz de sexo masculino ordenó que la dejaran tranquila y la sentaran, por lo que la sacaron de la camilla, le hicieron caminar alrededor de cuatro a cinco pasos y la sentaron, para luego sacarle la venda de los ojos, viendo que detrás de un escritorio había un oficial de alto rango del Ejército y que a un costado de donde se encontraba había un biombo, ignorando que existía detrás de este, pero suponía que estaba la camilla donde la hicieron acostarse y la amarraron para aplicarle corriente. Después de que este oficial del Ejército le interroga y le toma una declaración, la envía destinada a las dependencias de la Policía de Investigaciones de Chile,

en la ciudad de Osorno, donde estuvo por un lapso indeterminado. Quiere agregar además que durante su tiempo de detención en la Tercera Comisaría de Carabineros de Rahue, un día, en horas de la noche, un Carabinero joven, al ver que no habían comido durante días, les regaló su pan, para que comieran con la Ana y ella, señalándoles además, que no hicieran ningún comentario, ya que todo lo que ocurría en el interior de la Comisaría era por orden del Capitán Fernández. Urde que cuando fue enviada a las dependencias de la Fiscalía Militar, Ana López, quedó en las instalaciones de la Tercera Comisaría de Rahue, ignorando que fue lo que sucedió con ella desde ese momento. Conforme a los sucesos señala que es primera vez que escucha el nombre de Marcelo del Carmen Gutierrez Gómez, pero piensa que debe tratarse del joven que ayudaba a Ana, a través del cual enviaba provisiones y alimentos a su marido, quien estaba escondido en la zona cordillerana, ya que lo acusaban de ser contrario al gobierno militar.

En **declaración judicial** de fecha 05 de marzo de 2015 rolante a **fs. 297 a 299 (Tomo I)** ratifica íntegramente la declaración extrajudicial. Con fecha 5 de octubre del año 1973 fue detenida por personal del Retén de Ovejería, entre los que recuerda al Sargento Manuel Montiel, Benavides, Rojas, Águila y Barrientos. Ellos la llevaron al mismo Retén, donde fue torturada en muchas oportunidades, primero por el Carabinero Benavides con golpes de puño en el oído, con golpes de pie en el resto del cuerpo mientras la insultaba y, con un objeto contundente en el muslo y en la espalda, agresiones por las cuales se le trizó un diente y hasta el día de hoy tiene molestias en su pierna derecha. Además, esa misma noche, como a las tres de mañana fue violada por el propio Benavides, quién ebrio le tomó a viva fuerza. Gracias a la intervención del Cabo Barrientos la dejó su agresor, siendo después advertida de guardar silencio respecto de lo que le había pasado y, además, de que sus sufrimientos se debían a una acusación de unas vecinas de apellido Álvarez. A esa fecha ella tenía 24 años. Posteriormente, al día siguiente fue trasladada hasta la Tercera Comisaría de Osorno donde fue recibida por el Capitán Adrián Fernández. A ese lugar llegó también detenida doña Ana López, la que le comentó sobre la muerte de su esposo Jorge Aguilar, mientras lloraba apesadumbrada. Mientras estuvo detenida con Ana, una vez vio que un sujeto era traído como un saco por dos funcionarios, joven que luego supo era de

nombre Nolberto o Alberto. Este joven en algún momento le dijo a Ana en silencio, que dijera que no sabía nada. Posteriormente Ana fue torturada y cuando regresó de esos vejámenes le dijo a este joven que la hicieron escuchar una grabación donde torturaban a una persona y, además, le dijo que Marcelo había sido bajado de la micro y que lo tenían los "pacos". Ella presume que a este joven lo hicieron desaparecer por el puente de Pucatrihue que es como un cruce, donde se ponían los Carabineros. También recuerda que Ana le dijo al joven que no dijera nada de una guagua, porque ella había respondido que nada sabía al respecto. A Nolberto o Alberto supo que le hicieron "la rueda", es decir, lo pusieron al medio de un círculo de funcionarios y le empezaron a dar golpes de puños, pies y con las culatas de sus fusiles. Después que llegó hecho trizas este joven, nunca más lo escuchó y cuando los dejaron en libertad, él tampoco salió. Quiere decir que en la Tercera Comisaría fue torturada con golpes y electrocutada en dos oportunidades en una habitación que estaba bajo la Comisaría. En esos momentos se encontraba vendada con un paño negro y la corriente se la aplicaron en muchas partes de su cuerpo, pues le quitaron la ropa. No sabe si fue violentada sexualmente en esa Comisaría, pues ante las torturas sufridas, perdía el conocimiento. Mientras la golpeaban y electrocutaban le preguntaban por armas y por una tal Rapunzel, situaciones de las cuales desconocía cualquier antecedente. A su pregunta dice que mientras fue torturada, escuchó al Capitán Adrián Fernández Hernández, al cual reconoció por su tono de voz. También estuvo en las torturas que le hicieron a Nolberto. Aclara que todas las torturas ocurrían cuando ya se ocultaba el sol. Durante todas las noches que estuvo detenida escuchó los lamentos de los torturados. Incluso recuerda a un señor Marisevic, de nacionalidad argentina, al cual lo hicieron sufrir muchísimo. Días después fue llevada a la Fiscalía Militar que funcionaba en el Cuartel de Investigaciones, donde nuevamente fue desnudada y puesta en una camilla para ser interrogada. En esa oportunidad, y cuando le empezaron a poner los alambres para aplicarle corriente, les rogó que no lo hicieran argumentando entre llantos que ya lo habían hecho los días anteriores. Ante sus súplicas no le aplicaron corriente, siendo detenida por un oficial de grado, tosco de cara, de mediana contextura y como de 40 años, que le exhibió muchas fichas de personas, entre las que reconoció a muchos integrantes del partido socialista, como a la conocida "Chica Ester". Quiere

también decir que por orden de la Fiscalía Militar, le revisó las lesiones el médico Horacio Tarico, que era pediatra y que le dejó una lista de remedios para curarse. Un detective daba los remedios mientras estuvo detenida en Investigaciones. A su pregunta señala que la niña de nombre "Dalila", de unos 17 años y que tenía algún retardo mental, resultó embarazada producto de las violaciones de los funcionarios de la Tercera comisaría de Osorno. Eso no fue un caso aislado, porque supo de varias niñas que resultaron embarazadas. Dentro de las torturas que les hacían, era sacarles de noche a fusilamientos falsos. Invoca que en el primer llamado que se hizo para el informe Valech, nunca se presentó para ser incluida, por miedo a represalias. Luego, por insistencia de una amiga lo hizo, obteniendo una reparación económica por sus sufrimientos.

A.21 DE GUILLERMO ANTILEF QUINTUL (26 años de edad a la época de los hechos). Depone de fs. 347 a 348 (Tomo I), 349 a 350 (Tomo I) y de fs. 520 a 521 (Tomo II).

En **diligencia de careo con Luis Pinol Carrillanca** de fecha 12 de enero de 2005 de **fs. 347 a 348 (Tomo I)**, dice que no ubica a la persona que está su lado y ahora que escucha su nombre sí recuerda que él era el jefe del retén de Bahía Mansa para el año 1973. No es efectivo que él hubiera escrito una constancia en el Libro de Novedades de ese Retén porque no corresponde, ya que el libro al ser del Retén solo puede ser escrito por el funcionario de Guardia o el jefe del Retén. Preguntado acerca de si un jefe oficial le hubiera ordenado hacer eso responde que tendría que haber cumplido la orden pero insiste en que no fue el caso. Nunca ha tenido un problema con la persona que está a su lado y prácticamente lo ubicaba de vista. Le da la impresión de que él no recuerda bien los hechos. Es efectivo que escribía bien a máquina y que su letra es regular, pero insiste en que no participó en ese procedimiento.

En **diligencia de careo judicial con Jorge Daniel Garcés Yáñez** de fecha 13 de enero de 2005 de **fs. 349 a 350 (Tomo I)**, funda que ubica a la persona que está a su lado como de apellido Garcés y como Marenga en la base de la tercera comisara en la época de 1973. Sobre lo que se le pregunta debe decir que cuando declaró en Santiago que el capitán Fernández ordenaba detenciones por motivos políticos y que pasa eso se apoyaba en los funcionarios que mencionó en esa declaración y que también reforzaban a ese

grupo los únicos marengas que había en la base, es decir Muñoz y Garcés, debe decir que el Garcés a que se refería es la persona que está a su lado. Él era uno de los que reforzaba al grupo, que practicaba estas detenciones porque él era el marenga. En ese tiempo todos estaban acuartelados e incluso lo de servicios especiales. Lo que dice es que el señor Garcés salía con el capitán Fernández y ese grupo de gente no era fijo. No puede asegurar de qué formara parte permanente del grupo, pero sí de que salía con ellos, reforzándolos cuando el capitán lo ordenaba. Sobre lo que se le pregunta dice que no puede decir quienes acompañarían al capitán Fernández cuando se produjo el ataque en Bahía Mansa.

En **declaración extrajudicial** de fecha 27 de agosto del año 2015 rolante a **fs. 520 a fs. 521 (Tomo II)**, hace una breve reseña de su carrera funcionara. A su pregunta, en el mes de septiembre del año 1973, efectivamente integró la dotación de la 3ª Comisaría de Osorno, la cual estaba ubicada en calle Iquique, no recuerda numeración. Recuerda que el comisario de la época fue el Capitán Adrián Fernández Hernández y la dotación estaba compuesta por unos 30 funcionarios aproximadamente. Respecto a las funciones que le correspondió desarrollar en dicha época, debe decir que realizaba las labores de carácter administrativo en la Oficina de Partes y en la Oficina de Empadronamientos, quedando al margen de las funciones netamente operativas como detenciones, patrullajes y allanamientos, recuerda que en más de alguna oportunidad realizó guardia de cuartel los días sábados. En este mismo contexto desea añadir que existía un grupo encabezado por el Capitán y Comisario Adrián Fernández Hernández e integrado por él Suboficial Mayor de Oscar Vargas Vargas (fallecido), Sargentos Eliseo Águila (fallecido), Francisco Inostroza (fallecido), Cabos Juan Canales (fallecido), Rafael Pérez, Gustavo Muñoz y el conductor Rolando Becker, todos los que están vivos actualmente están procesados y condenados por casos de derechos humanos ocurridos en Osorno y Bahía Mansa, ellos se caracterizaban por actuar de manera hermética, pero se comentaba que eran procedimientos al margen de la ley, desconoce detalles. Referente a los límites jurisdiccionales de la 3ª Comisaría, debe decir que incluía toda la zona rural, costera y cordillerana de Osorno. En cuanto al parque automotriz de la unidad estos básicamente eran furgones marca Fiat, incluso existía un furgón color verde perteneciente a un

organismo del Estado, no recuerda cual. En cuanto a los hechos por los cuales se le consulta y que guardan relación con la muerte de Marcelo Gutiérrez Gómez, ocurrida en el mes de octubre del año 1973, en el sector de Bahía Mansa, siendo los responsables al parecer funcionarios de Carabineros de la zona, no tiene nada que decir, nunca conoció a ese joven, como señaló anteriormente existen Carabineros de la 3ª Comisaría del año 1973, actualmente procesados y condenados por casos ocurridos en la misma zona, así como también en Osorno.

A.22 MARÍA ANGÉLICA VERGARA HERRERA (20 años de edad a la época de los hechos) quien declara de fs. 352 a fs. 355 (Tomo I) y de fs. 444 a 445 (Tomo II).

En **declaración judicial** de fecha 08 de marzo de 2004 rolante a **fs. 352 a 355 (Tomo I)** ratifica su declaración extrajudicial leída en el acto. Efectivamente fue la esposa de Edgard Eugenio Cárdenas Gómez con quien se casó en el año 1969 y tuvo dos hijos. Para el año 1973 su esposo era mecánico titulado y técnico en radio y televisión. Proclama que era militante del partido socialista, ignora si ocupaba algún cargo. El 10 de septiembre de 1973 su esposo salió de la casa sin decirle dónde, ella presumió que a trabajar, ese día su esposo no regresó en la tarde, al día siguiente 11 de septiembre una vecina le fue a ver y le dijo si sabía lo que había pasado, encendieron la radio y se enteró del golpe militar, se asustó por lo que pasaba. Narra que se preocupó por Edgar ya que del día anterior no sabía nada de él. Posteriormente con sus dos hijos se fue a casa de sus padres en calle Chillán con David Rosas. Deben haber pasado dos semanas después del 11 de septiembre cuando en horas de la mañana apareció Edgar en la casa de sus padres y le pidió que se cuidara y lo mismo hiciera con los niños. Le advirtió que después que todo se calmara él iba a volver con ellos, para seguir viviendo juntos. Cerca de las 16:00 horas del mismo día se retiró de la casa, no quiso decirle hacia dónde se dirigía. Al día siguiente más o menos se regresó a casa con sus hijos con la esperanza de que Edgard regresaría con ellos, no sabe realmente cuantos días pasaron, pero una vecina llegó a su casa y le preguntó cómo estaba su esposo, ella pensó que por el hecho de que reparaba artefactos. Al darle el nombre de Edgard le hizo entrega del diario la prensa, en el cual figuraba la muerte de tres extremistas en Bahía Mansa, y entre ellos el nombre de su esposo, también recuerda el nombre de Ester Bustamante y Jorge Aguilar

Cubillos, personas a quien nunca antes había oído nombrar a su esposo. Su papá se enteró de los hechos también por el diario por lo que le fue a buscar a su casa, pero como era día sábado no pudieron hacer nada sino hasta el día lunes. Ese día se trasladaron a la fiscalía militar que en ese entonces se ubicaba en el hospital base, donde fue atendida por el fiscal militar quien le atendió bien, pero en los pasillos había un carabinero alto y moreno, bastante corpulento quien le trato muy mal, la insultó en forma grosera y le decía para que lloraba tanto si era una de las mismas y le sacaba la madre. En ese mismo lugar el fiscal le exhibió una pistola, un pañuelo y el carnet de identidad de su esposo, ella obviamente reconoció el pañuelo y su carnet ya que la pistola que le mostraron no pertenecía a su esposo, además su esposo jamás tuvo armas de fuego. En la fiscalía le entregaron un documento para concurrir a retirar el cuerpo de su esposo en la morgue donde también se le limitaba hora para su velatorio. Suma que cuando ingresó a reconocer el cuerpo de su esposo, en el suelo de la morgue había bastante sangre, su esposo estaba íntegramente vendado, se notaba como que habían juntado su cuerpo, los otros dos cuerpos estaban totalmente destruidos. Como dijo antes había sangre por todas partes, en el suelo como en las paredes al parecer tiraron sus cuerpos, esto la impactó bastante, piensa que no era necesario hacer tanto daño aunque hayan tenido sus ideas, el velatorio de su esposo se hizo en casa de sus padres. Pasados unos dos días de la sepultación de Edgard en circunstancias que ella andaba en el cementerio llegó a la casa, según le dijo su padre, un teniente de carabineros para allanar la casa, al parecer buscaban armas. Ese mismo día se llevaron detenido a su padre, Irenio Vergara Muñoz, actualmente fallecido y a su hermano Héctor Vergara Herrera, estos permanecieron detenidos como una semana y media según le contaban le preguntaban sobre Edgard, incluso pasaron a la cárcel de la ciudad. Destaca que un día antes que mataran a su esposo, llegó a su casa, su cuñado Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez, quien le dijo que él sabía dónde estaba Edgard y que lo iba a ir a ver, ella incluso le dio algunas cosas para que llevara y le pidió que ambos se volvieran, pero hasta la fecha no ha vuelto a ver a su cuñado. Marcelo en esa fecha tenía 17 años, era un niño y muy bueno, jamás estuvo metido en nada. Al pasar de los años y hacer averiguaciones respecto a su paradero una tía que vivía en Bahía Mansa de nombre Emilia Moyano, actualmente fallecida, le contó que en el sector se rumoreaba que Marcelo había sido bajado por

carabineros de la micro de Tuchie que hacía recorridos al sector el día antes que mataran a su esposo, por lo se presume que lo torturaron y mataron. Según su tía, se comentaba que el cuerpo de Marcelo había sido tirado al mar.

En **declaración extrajudicial** de fecha 09 de junio de 2015 rolante a **fs. 444 a fs. 445 (Tomo II)** funda que Marcelo Gutiérrez Gómez, era hermano por parte de madre de su esposo Edgard Eugenio Cárdenas Gómez, quien también falleció en Bahía Mansa, por Carabineros de la Tercera Comisaría de Raque bajo. Ratifica íntegramente, la declaración judicial. Cuenta que se enteró de la muerte de Marcelo, por un comunicado de la señora Inés Bertín Mansilla, (fallecida), quien días después a la muerte y sepultura de Edgar, quien se encuentra en el cementerio católico de Osorno, comunicándole que a Marcelo, Carabineros de la Tercera Comisaría de Raque Bajo, quienes andaban con sus uniformes respectivos, habrían bajado a Marcelo de la micro del recorrido que va en dirección de Osorno a Bahía mansa, locomoción la cual se tomaba en la feria de Raque Bajo, de propiedad de los señores "Tuche", ignorando quien les contó esta situación a su cuñada. Apunta que por un familiar que vive en Bahía Mansa de nombre Emilia Moyano Moyano, le ratificó lo que le había mencionado su cuñada, enterándose por comentarios de la gente del sector, ya que en esa época había muy pocos habitantes. Respecto a quienes podrían haber sido testigos de la detención de Marcelo, no tiene antecedentes de ellos, solamente se enteró de los hechos sucedidos a través de su tía Emilia. Utiliza que más antecedentes de las personas que dieron muerte a Marcelo, se podrían obtener de la causa de su marido, la cual fue juzgada en el Juzgado Osorno. Proclama que Marcelo tuvo que haber sido detenido primero que Edgar, quien fue torturado para entregar información respecto a su hermano y debido a lo anterior fueron a buscar a su marido, a una choza, ubicada en Bahía Mansa, que pertenecía al padrastro de ellos, de nombre Segundo Cárcamo, quien también se encuentra fallecido. Uno de los Carabineros que participó en la muerte de su marido se llamaba Rolando Becker, en la actualidad se encuentra fallecido. Delibera que Marcelo a la fecha de su detención, no tenía militancia política, él era un chico de diecisiete años, se imagina que su muerte fue por que buscaban a Edgar. Por último quien podría tener más información respecto a la muerte de Marcelo, podría ser su hijo de nombre Edgar Marcelo Gutiérrez Bertín.

A.23 HÉCTOR VARGAS SOTO (32 años de edad a la época de los hechos), quien expone de fs. 367 a 369 (Tomo II), 482 a 488 (Tomo II) y de fs. 653 a 654 (Tomo II).

En **declaración extrajudicial** de fecha 26 de enero de 2015 rolante a **fs. 367 a 369 (Tomo II)** aduce que para el mes de septiembre del año 1973 residía junto a su esposa y sus hijos en la localidad de Bahía Mansa. Recuerda que a los días posteriores al 11 de septiembre, Carabineros de la 3ª Comisaría, de los cuales nombra a Osvaldo Nelson Rosas Cárdenas, detuvieron a tres jóvenes, de los cuales una era mujer de nombre Ester Bustamante, que se encontraban refugiados en una casa ubicada a unos mil metros aproximadamente del Retén de Carabineros de Bahía Mansa y vecinos del sector avisaron de la presencia de éstos y es así que son detenidos. Espeta que un vecino le preguntó si había sentido la balacera, a lo cual le indicó que no, y es de esta forma se enteró de la detención de estos jóvenes. Delibera que le dijeron que tres personas habían sido detenidas por el Cabo Nelson Rosas y llevadas al Retén. Estos jóvenes supuestamente estaban preparando un asalto al Retén de Carabineros, lo cual era completamente falso, ya que no contaban con ningún tipo de armamento. Al día siguiente en la mañana, junto a su esposa y otros vecinos de quienes no recuerda sus nombres, concurren hasta un local comercial del tipo restaurant, el cual tenía un patio cuya visibilidad daba hacia el Retén de Carabineros y pudo observar junto a los que estábamos en dicho lugar, cómo éstos jóvenes eran subidos al Jeep del Retén, siendo la última vez que se supo de ellos, solamente se supo que fueron trasladados a Osorno, según los comentarios que realizó Carabineros. Luego de esto, siguió con su rutina diaria y salió a pintar hacia el sector del cruce Bahía Mansa con Pucatrihue, debido a un pedido que le realizó un amigo del Ejército de nombre Jorge Jara (fallecido), quien le pidió que le pintara el Río con Las Piedras Tigres que se ubica en el lugar. Estando bocetando el tema, vio llegar un furgón que utilizaba personal del SAG de color verde oliva, del cual se bajaron alrededor de seis a siete Carabineros, entre los cuales se encontraba el Cabo Nelson Rosas, quien, por lo que pudo observar, estaba a cargo del grupo. Unos minutos después hicieron detener un bus que venía proveniente de Osorno a Bahía Mansa, del cual bajan a un joven de unos 18 a 20 años, que vestía una parka de color azul desteñido y le dan la orden al chofer del bus que siguiera su camino. Acto seguido, el Cabo Nelson Rosas comienza a interrogar a viva voz al

detenido y en medio de este interrogatorio este Cabo le propina un culatazo con su fusil en el estómago, lo cual hace que éste caiga al piso tomándose el estómago y comienzan todos los Carabineros a golpear con las culatas de los fusiles en la cabeza de este joven, lo cual hacia que pedazos del cuero cabelludo y cráneo saltaran. Al ver esta situación, decidió con el mayor sigilo, salir del lugar para dirigirse a su casa. Al día siguiente, con la finalidad de poder hablar lo que había visto con alguien y pedir consejo, decidió viajar a Osorno para hablar con el Suboficial Jorge Jara, quien trabajaba en la Comandancia del Ejército, con quien tenía una linda amistad, sin embargo en trayecto, específicamente en calle República de Raque, es detenido por personal Civil de Carabineros de la 3ª Comisaría de Osorno, de los cuales recuerda como aprehensores a Mario Flores y Zenen Conejeros, quienes lo trasladan a la 3ª Comisaría y a su ingreso observa al Comisario Adrián Fernández Hernández, quien le pregunta a sus aprehensores el motivo de su detención, contestando Mario Flores "por contrabando de armas y extremista", a lo que Fernández Hernández señaló: "para que lo traen vivo", momentos en que le pegan un empujón y lo meten en una bodega, donde habían cajas y unos seis a siete Carabineros en su interior, de quienes recuerda a Eliseo Águila Salgado, quien le da la orden de levantar sus manos lo más alto que pudiera, a punta garabatos y gritos, en esos momentos le propina un culatazo en su estómago y al caer arrodillado de dolor alcanzo a mirar que me iba a dar otro golpe con la culata del fusil en su cabeza y solamente le alcanza a hundir un poco su parietal izquierdo, sin embargo recibió por parte de los demás, culatazos en las diferentes partes de su cuerpo y rostro, lo cual a la fecha le ha traído muchas complicaciones con su salud. Luego de esto, le ingresan a una celda sólo, y bien tarde en la noche y como quedaba casi al frente de la guardia, siente que le dan la orden a unos Carabineros a los que le dijeron: "Ya sáquenlo ahora", lo sacan de su celda y llevan donde se encontraba el Suboficial de Guardia de nombre Diego Rocha, quien le señala: "si aparecí en los listados de encargados a nivel nacional por política, hasta ahí nos llegai", mientras dos Carabineros le apuntaban con su armas, culminó de leer el listado y espero los resultados radiales, y al no ver que aparecía lo devolvieron a su celda, donde estuvo aislado cuatro noches y cinco días. A la quinta noche, le cambian a una celda donde había unas veinte personas aproximadamente, de quienes recuerda a Balderas, Rozas, Vásquez, quien era de la localidad de San Pablo y tenía muy buena situación económica, y a un padre

con hijo que eran de Hacienda Ñuble Rupanco, ambos tractoristas, con quienes hizo una pequeña amistad y quienes quedaron en ese lugar, ya que fue dejado en libertad, pero debía presentarse en la Fiscalía Militar. Es así, que durante tres meses estuvo asistiendo a la Fiscalía y luego le señalaron que no fuera más. Posteriormente, en el año 1974 es citado por el Fiscal de Carabineros de nombre Freddy Rozas, a quien al consultarle el porqué de su citación, éste muy agresivamente le gritó que se callara, que nadie le había preguntado nada y si no guardaba silencio respecto a los hechos que rodearon la muerte del menor en Bahía Mansa, aparecería flotando en el Río Raque. Después de esto, nunca más fue citado a dicha Fiscalía. Luego, no recuerda fecha de exacta, pasó a alojar a su casa un muy buen amigo de nombre Jorge Garcés Yáñez, Carabinero de dotación de la 3ª Comisaría de Osorno, con quien tiene una muy linda amistad, quien actualmente ya no vive en Osorno, ignorando su actual paradero, quien en una noche mientras dormía comenzó a gritar a viva voz: Dios mío, Dios mío!, por lo que se acercó a él y le preguntó que le pasaba, indicándole que no podía estar tranquilo producto de una situación que le correspondió vivir, ante esto le pregunto qué le había pasado, y éste le contó que le habían ordenado acompañar a Adrián Fernández Hernández, y presenció el momento en que éste ejecutó con su arma de puño a los tres jóvenes que fueron detenidos en Bahía Mansa, a quienes le propinó un tiro en la cabeza a cada uno. Finalmente, y ante los sucesos que le correspondió presenciar y vivir durante este período, decidió guardar esta información hasta ahora que pueda ser útil para el esclarecimiento de hechos que se investigan en materias de Derechos Humanos y de Crímenes de Lesa Humanidad.

En **declaración judicial** de fecha 25 de agosto de 2015 de **fs. 482 a 488 (Tomo II)** sustenta que desde el año 1970 a 1980 vivió en Bahía Mansa junto a su cónyuge doña Silvia Irene Lagos Martínez dedicándose a la pintura de atril y costumbrista, un día determinado, luego del golpe militar, conversó con un pescador de la zona que le conto sobre la detención de unas personas, las cuales serían trasladadas al día siguiente para Osorno, ante esa noticia, junto a su señora fueron al día siguiente a ver el traslado de los detenidos, observando desde unos 50 metros. De distancia lo que pasaba, ahí se reunieron como 10 a 12 personas de Bahía Mansa para mirar, percatándose que primero salió una detenida y fue subida al jeep cuadrado medio verdoso (vehículo inglés) que era el

único vehículo que estaba en el lugar. Luego sacaron a dos jóvenes que casi no podían moverse por sí mismos, no se distinguía si ellos iban heridos, pero impresionaban como personas que se encontraban muy debilitadas. Eran unos jóvenes de tal vez unos 22 años, mientras que la niña debe haber tenido unos 18 años. Recuerda a Nelson Rosas, Ademar Catalán y unos tres más cuyas identidades no recuerda, esos eran funcionarios del retén de Bahía Mansa. No vio funcionarios de otros destacamentos, solo del retén mencionado. Continuando con su testimonio los jóvenes son subidos al jeep, este se desplaza por el único camino que daba hacia Osorno, perdiéndose de vista. En bahía mansa no tenían ni radio, así que el golpe militar no afectó en un comienzo sus vidas, así que en ese mismo día en horas de la tarde se dirigió al cruce Pucatrihue, demorándose como una hora y veinte minutos en llegar, con la intención de pintar un paisaje de las piedras tigre del río Contaco, a petición del sargento Jorge Jara de la comandancia del ejército. Siendo como las 17:15 horas aproximadamente, vio llegar al lugar un furgón alargado que usaba el SAG en esa época, desde donde se bajan 5 o 6 carabineros con castos y botas de comando. A diferencia de los de la mañana que usaban carabinas, estos tenían fusiles. Al único que logró identificar fue a Nelson Rosas, a quien conocía por su voz y estructura física. Él no les tomó mayor atención y siguió con su boceto, sin que le pudieran ver los carabineros. Minutos más tarde se acercó la micro que recorría de Bahía Mansa a Osorno, la cual fue hecha parar por los funcionarios, subiéndose Rosas con otros dos carabineros, para luego hacer bajar a un joven que tendría no más de 24 años, la micro siguió su camino. Después empezaron a interrogar al joven hasta que Nelson Rosas le propinó un culatazo en el estómago que hizo caer al detenido, oportunidad que aprovechó para darle otro golpe con su arma en la cabeza, la que le debe haber causado la muerte, sin embargo, entre todos comenzaron a golpearlo con sus fusiles al lesionado, al que incluso le destruyeron por completo su cabeza, él vio como saltaban los trozos de cráneo, lo que lo ha traumatado hasta el día de hoy. (El tribunal deja constancia de lo afectado que se ve el testigo al declarar) al ver lo sucedido, lenta y asustadamente se fue sin saber qué pasó con el occiso. Asevera que desde ese lugar la distancia al mar era sólo de 4 kilómetros. Al día siguiente cuando se dirigía a la ciudad de Osorno, fue detenido sin motivo alguno por Mario Flores y Zenen Conejeros, los que lo llevan a la 3° comisaria de Raque a cargo de Adrián Fernández Hernández quien al

preguntar por qué lo traían, Flores dijo que por extremista y contrabandista de armas, por lo que Fernández dice ¿y por qué lo traen vivo? Así que de inmediato lo llevaron al frente de la guardia donde había un calabozo donde lo golpeó con la culata en el estómago el carabinero Águila, lo que le hizo perder el equilibrio y caer, para luego ser golpeado por él y otros funcionarios en todo su cuerpo con sus culatas, le rompieron la cabeza, el codo, las manos, le hirieron el estómago, le soltaron los dientes, estuvo incluso orinando sangre por tres meses y debieron sacarle 52 radiografías estomacales por las lesiones que sufrió y por las costillas rotas. Aclara que cuando torturaron subieron el volumen de la radio para que no se escuchen sus quejidos. Explica que en la noche lo sacó Diego Rocha, apuntándole dos carabineros con bala pasada, le dijo que si aparecía en la lista de extremistas hasta ahí no más llegaba, como no aparecía, le regresaron a la celda sin matarlo. En la noche lo cambiaron a una celda con más detenidos, pudiendo conversar con algunas personas que ubicaba de vista, dos de ellos eran tractoristas del sector ñuble rupanco, quienes le dijeron que los matarían. También estaba un señor Vásquez de San Pablo, que era acusado de izquierdista y tenía casa en la calle Cochrane de Osorno. Supo después que este señor estuvo 6 meses detenidos, y que luego había muerto, presume por los tratos y golpes recibidos. Cinco o seis días después lo dejaron en libertad, dejando recluido a Edulio Rozas, que trabajaba en la CONAF, sin embargo, tuvo que presentarse todos los viernes, por 3 meses, en la fiscalía militar que tenía una sede en la Policía de Investigaciones. Después le dijeron que no fuera más. Colige, era conocido del militar Santiago Herrera, quien decía que había habido un asalto al retén de Bahía Mansa, tuvieron discusiones al respecto, pues él alegaba que los detenidos no tenían la posibilidad de haber atacado el retén, porque con suerte tenían para comer. Por eso, Herrera lo acusó en la fiscalía militar y fue citado por el fiscal, llevándole la citación un carabinero de apellido Gamin que le advirtió que le querían hacer un gran daño, sin decirle más, él era de Bahía Mansa y aún vive. Al llegar a la fiscalía se entrevistó con el fiscal Freddy Rozas, un sujeto muy prepotente que le dijo que le daría un consejo: “si usted no cierra la boca, cualquier día amanecerá flotando en el río Raque” por ese hecho hizo un reclamo ante la cuarta zona del ejército ante el señor Valdabinos, después de eso no tuvo más problemas. Delibera que es que él es amigo de Marenga Jorge Garcés. Quien una noche se quedó en su casa a dormir en Bahía Mansa y en la noche

empezó Jorge a gritar “dios mío, dios mío”, al ir a verlo, este le contó sobresaltado que Adrián Fernández lo había llevado hasta donde estaban detenidas las 3 personas de Bahía Mansa a quienes Adrián Fernández mató con su arma disparándoles en la cabeza eso traumó a Jorge, quien sufría al recordar esos hechos de muerte. Él debió ir obligado, obedeciendo a su jefe. De estos hechos también supo el jefe del retén de Bahía Mansa, el señor Pinol. Basa que Jorge no le comentó ni le preguntó qué sucedió con los cadáveres. Consultado el testigo si recuerda la vestimenta del joven que fue sacado de la cárcel. Depone usaba una casaca media azulada y puede ser que jeans. Blasona que el furgón del SAG era usado por los funcionarios de carabineros de Osorno, no de Bahía Blanca, por lo tanto, Nelson Rozas estaba ayudando a los de Osorno.

En **diligencia de careo judicial** con Jorge Daniel Garcés Yáñez de fecha 26 de abril de 2016 con la persona de, rolante a **fs. 653 a 654 (Tomo II)** aduce que no reconoce a la persona que está a su lado. El Tribunal le hace presente al testigo la identidad del señor Yáñez, ante lo cual el testigo Vargas lo saluda cordialmente pidiéndole disculpas por no haberlo reconocido, para luego comenzar a conversar cordialmente y recordar hechos vividos. Se le pregunta al testigo si mantiene sus dichos en cuanto señalan que Jorge Garcés estuvo alojando en su casa, que gritó dormido en la noche y que luego sobresaltado le contó que había visto como Adrián Fernández mató a tres personas y responde: Sí, mantiene su declaración. Es efectivo que Jorge una noche llegó algo tomado a su casa y le pidió alojamiento, ante lo cual accedió. En la noche, mientras dormía gritó alterado y luego, ante sus consultas, le comentó sobre los hechos de muerte que tuvo que ver. Aclara que en ningún momento ha inculpado a Jorge como autor de esos hechos, sino como un funcionario que debió obedecer la orden de un superior y estar presente cuando mataron a esas tres personas. El testigo recuerda cuando vio al Sargento Rosas y a otros funcionarios más bajar a un joven desde una micro de recorrido en el Cruce de Bahía Mansa con Pucatrihue, para luego darle culatazos hasta destruirle el cráneo. Ellos andaban en una camioneta o furgón del SAG. El testigo se emociona al recordar lo sucedido.

A.24 JORGE RICARDO CORONADO HENZI (21 años de edad a la época de los hechos). En **declaración judicial** de fecha 14 de mayo de 2015 rolante a **fs. 397 a 398 (Tomo II)** espeta que recién salido del curso de formación de Carabineros fue destinado a la Tercera Comisaría de Osorno, unidad que estaba a

cargo del Capitán Adrián Fernández y con una dotación de alrededor de unas 25 personas aproximadamente. Sus funciones como "chiporro", consistían desde barrer hasta ser vigilantes. Debían obedecer todo lo que sus superiores les ordenaran. Dentro de la dotación había un grupo más cercano al Capitán, con el que éste regularmente salía a hacer procedimientos los que terminaban con detenciones. Esos detenidos eran dejados en el calabozo, pero cuando tenían que interrogarlos, los llevaban al subterráneo desde donde muchísimas veces escuchó gritos de lamentaciones, lo que oyó ya que dormía en la misma Comisaría, en el segundo piso, en su calidad de Carabinero soltero. En el grupo recuerda a Becker, el Loly Muñoz, Eliseo Águila, Pérez Torres, Canales y uno de apellido Conejeros, que estaba jubilado y que acompañaba a estos individuos en sus operativos. Todas estas personas eran de vida nocturna, buenos para el trago y agresivos. Les molestaba que uno pudiera tener cualquier gesto amable con los detenidos, como por ejemplo darles agua. Por eso y sumado a su casi nula antigüedad, le tenían alejado de todo. Es más, incluso le llegaron a decir que era un infiltrado de los subversivos y sólo como dijo, por haber hecho un gesto humanitario, llegando al punto de que los oficiales cada vez que él fue trasladado, advertían a la superioridad que él no era una persona confiable para Carabineros. Agrega que cuando se realizaban los interrogatorios, habitualmente estos eran dirigidos por el Capitán Adrián Fernández, aunque también otras veces, estos mismos personajes de confianza hacían de las suyas sin la presencia de Fernández, aunque lógicamente avalados por éste. No recuerda bien hasta cuando estuvo Fernández a cargo de la Comisaría, pero luego llegó el Capitán Rolando Ríos García, era una persona que tenía las mismas actitudes que su antecesor, por ello puede decir que las cosas no mejoraron substancialmente. En relación con Jorge Garcés, lo recuerda como Marenga, supeditado a las órdenes de otro Marenga de nombre Gustavo Muñoz Albornoz (apodado el Loly). Aquél, se refiere a Garcés, tenía una especie de oficina al final de un corredor de la Tercera Comisaría, en donde guardaba todos sus materiales para el cuidado del ganado. A él nunca lo vio salir en algún procedimiento con el grupo de confianza de Fernández, pero presume que como tenía la misma antigüedad y grado que aquellos, debe haberlo hecho. Describe a Garcés como una persona muy tranquila y educada, pasaba desapercibido y trataba de aislarse de todo. En cuanto a los hechos ocurridos en el Retén de Bahía Mansa, es decir, sobre un supuesto ataque al mismo, esto lo

supo por comentarios, sin saber si ese hecho existió o no realmente. Tampoco supo si hubo detenidos o muertos como consecuencia de ese ataque. En cuanto al joven Marcelo Gutiérrez cuya desaparición habría ocurrido en el sector de Bahía Mansa con Pucatrihue, según lo que este Tribunal le da a conocer en este acto, nada puede señalar. Él no trabajaba en esa unidad en el año 1973, sino hasta mucho tiempo después, oportunidad en que conoció al señor Pinol que era el jefe máximo de esa unidad y de quien tiene un excelente recuerdo como un gran superior, honesto y de una humildad envidiable, lo que lo hizo grande entre sus pares. Informa que el año 1983, luego de que se le acusara injustamente de una infracción de tránsito "de favor", lo echaron de Carabineros, lo que le causó gran pesar. Finalmente expresa a este Tribunal su disposición absoluta para cualquier diligencia en que se le sea requerido.

25. RUBEN MOLINA GONZALEZ (38 años de edad a la fecha de ocurrencia de los hechos). Quien declaro de fs. 246 a 248 (Tomo I) y de fs. 288 a 289 (tomo I).

En declaración extrajudicial con fecha 06 de diciembre de 2014, **rolante de fs. 246 a 248 (tomo I)** comienza haciendo una breve reseña de su carrera funcionaria. Advierte que para el 11 de septiembre del año 1973, fecha en que se produce el pronunciamiento del gobierno militar, teniendo el grado de Sargento Segundo, se desempeñaba en dependencias de la Tercera Comisaría de Osorno, siempre cumpliendo sus funciones de practicante, unidad en la cual ocupaba el cargo de, Comisario o Jefe de unidad, el Capitán Adrián José Fernández Hernández, quien informó a la superioridad de la Prefectura de Osorno, una vez asumido el señalado gobierno, que él, junto al Cabo José Delis Rocha Hormazabal, Cabo José Rodemil Ríos Vergara, Cabo José Oberto Santana Oyarzún y el Carabinero Roberto Armando Ubilla Soto, eran peligrosos extremistas infiltrados en Carabineros de Chile, situación de la cual tomó conocimiento a través de otros colegas, quienes incluso le advirtieron que tuviera cuidado, ya que al parecer el señalado Capitán, estaba tramando algo para atentar en contra de su persona, pero hacerlo pasar como un accidente, y desde ese momento comenzó a sentir la presión y persecución de parte del Capitán Adrián Fernández Hernández. Adosa que, respecto a la identidad de la Víctima que se le menciona en esta ocasión, es dable señalar que es primera vez que la oye mencionar, razón por la cual ignora todo tipo de antecedentes de

esta persona y cuál puede ser su paradero. Afirma que en relación a Carmen Gutiérrez Gómez, desconoce todo tipo de antecedentes que tengan relación a esta víctima. Asevera que una vez que se instaura el Gobierno Militar, el Capitán Adrián Fernández Hernández, asume una labor operativa y de inteligencia, ya que junto a otros funcionarios de Carabineros de la misma comisaría, tales como Rolando Becker Solís, Gustavo Muñoz Albornoz apodado "El Loli", Rafael Pérez Torres, y otro funcionario de apellido Canal, es, entre los que recuerda, salían juntos a efectuar detenciones de personas civiles por toda la jurisdicción a cargo de la Tercera Comisaría de Osorno, las cuales eran llevadas a las instalaciones de la mencionada comisaría, en calidad de detenidos, muchos de los cuales, fueron torturados y muertos en la misma unidad policial. Destaca que uno de los cuales tuvo conocimiento hace muy poco tiempo atrás, ya que le fue comentado por otro ex funcionario de Carabineros de la Tercera Comisaría de Osorno, de nombre Juan Segundo Moreira Garcés, fue el relacionado con la muerte de Santiago Aguilar Duhau, quien le comentó que días después de la detención de don Santiago Aguilar, por parte del Capitán Hernández, escuchó un disparo que provenía del subterráneo, de la Comisaría, donde existía un sala donde normalmente se guardaban cachureos, pero comenzado el 11 de septiembre del año 1973, fue utilizada para interrogar y torturar detenidos y que en ese lugar estaba el mencionado Oficial. A la vez detalla que su estadía en la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno, una vez asumido el gobierno militar, fue testigo de cómo ingresaban civiles, ya sean hombres o mujeres, en calidad de tenidos, desconocido cuál era el motivo de esa calidad, por sus funciones que desarrollaba, pero nunca fue testigo presencial de algún tipo de tortura, toda la información que tiene es solo por comentarios que hacía el mismo personal policial. Esgrime que nunca observó que se hubiese sacado a alguna persona muerta desde las instalaciones de la comisaría en cuestión, como señaló anteriormente toda la información que maneja es producto de los comentarios, los cuales estos en resumen señalan que el gestor de las detenciones ocurridas por parte de personal de la Tercera Comisaría de Osorno, estaban en pleno conocimiento del Capitán Adrián Fernández Hernández, quien además dirigía y presenciaba los procedimientos de torturas que se aplicaba a los detenidos. A la vez expresa que si mal no recuerda, el día 12 de septiembre del año 1973,

siendo el medio día, en las instalaciones de la Tercera Comisaría de Osorno, se hizo presente doña Dina Uribe, cónyuge de Santiago Aguilar, quien tomo contacto con su persona, ya que se encontraba en el servicio de guardia, y le consultó por Santiago Aguilar, ya que había concurrido a la Comisaría a conversar con el Capitán Fernández Hernández, para solicitarle un nuevo salvoconducto, ya que habían quedado en pane en el camino, en el camión que trasladaba sus pertenencias desde La Unión, respondiéndole que no sabía nada de su esposo, por lo que se retiró de la unidad, ya que además, el Capitán en cuestión, se negó a recibirla. Finaliza e indica que Inmediatamente después, una vez que doña Dina sale del cuartel policial, el Capitán Fernández Hernández; le llama a su despacho y le señala que lo que pasaba en el interior de la Comisaría, no puede salir de esta.

En declaración judicial con fecha 05 de marzo de 2015, **rolante de fs. 288 a 289 (tomo I)** Ratifica íntegramente la declaración extrajudicial. Se mantiene en sus dichos en cuanto ignora cualquier antecedente relacionado con la víctima Marcelo Gutiérrez Gómez. Recalca que mientras estuvo trabajando en la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno, el jefe de Tenencia era el Capitán Adrián Fernández Hernández, el que luego del golpe militar, instauró una especie de grupo de muerte compuesto por Rafael Pérez Torres, Gustavo Muñoz Albornoz (apodado Loli), Rolando Becker Salís, Canales, Rosas Silva y Eliseo Águila Salgado, no recuerda los nombres de los otros funcionarios, que incluso fueron juramentados en secreto por el mismo Fernández en forma previa de sus actividades ilegales. Este grupo de personas salía habitualmente a hacer operativos y luego regresaban con personas detenidas, las cuales dejaban en los calabozos. Invoca que posteriormente, en horas de la noche, ellos eran llevados hasta el subterráneo de la misma Comisaría, donde eran torturados, llegando incluso a ser asesinados en el mismo lugar. Esto lo supo por comentarios de otros colegas que se filtraron en esa época, sin que recuerde actualmente quiénes se lo dijeron. Sin embargo, un hecho que recuerda claramente, es el comentado por el Jefe de la Tenencia de Bahía Mansa de apellido Rosas, quién le dijo que estuvo presente en un interrogatorio donde Becker Salís en su desenfreno y agresividad, empezó a darle de culatazos al detenido con intención de matarlo, pero aquél señor simplemente no moría. Por ello, Becker sacó un cuchillo y lo degolló, para luego

chupar la sangre que quedó en el arma blanca y decirle al cadáver "así que no querías morir". Ese hecho fue visto por el Capitán Fernández que incluso movió la cabeza sorprendido., a ese nivel actuaba este grupo de personas. Por otra parte recalca que nunca estuvo en los calabozos ni en el subterráneo, por miedo a las represalias de este grupo de personas, pero nada de lo que dice está ajeno a la verdad, pues como dijo los comentarios se filtraban. Es más, recuerda también que se comentaba de la persecución que Demandes tenía respecto de los funcionarios Santana y Ubilla, a los cuales quisieron acusar de terroristas una vez, haciendo uso de dos prostitutas que estaban detenidas, a las cuales instruyó que acusaran a dos funcionarios de lentes. Luego hizo que el personal se levantara a medianoche y, por suerte divina, los funcionarios no se pusieron sus lentes, salvándose esa noche de ser acusados y condenados por esta mentira inventada por Fernández. Expresa que otro tema es el ocurrido a Santiago Aguilar, a quien conoció desde joven. Indica que este señor era amigo de Fernández, porque la señora del Capitán era secretaria de Santiago Aguilar y se visitaban. El día en que fue detenido Aguilar al momento de ir a renovar su salvoconducto, estando con la vista tapada escuchó la voz de Fernández, a quién le dice algo así como "qué bueno que llegaste Adrián, ahora las cosas se arreglarán", momento en que Fernández desenfundó su arma y le dispara en la cabeza a Santiago. Musita que eso se lo contó su colega Juan Moreira. Otro hecho destacable, es que presencio dos días después del Golpe, cuando Fernández hablaba por teléfono con el Prefecto de Carabineros y le decía "Comandante, estoy cumpliendo las órdenes de Patria y Libertad y espero sus órdenes". Es decir, así estaban las cosas en ese momento, tanto que Fernández se regía por un partido político. A la vez precisa que de las tres personas detenidas y ejecutadas luego de ser acusadas como asaltantes del Retén de Bahía Mansa, don Jorge Aguilar, María Bustamante y Edgard Cárdenas, nada puedo aportar. Soflama que no tiene antecedentes que puedan ayudar a esta investigación. Aclara que incluso personalmente fue acusado por Fernández por ser un "peligroso extremista infiltrado en Carabineros" junto con otros cuatro o cinco funcionarios más. Por suerte, nunca pudo lograr su objetivo y logró seguir trabajando hasta su retiro. Acota que no recuerda que Fernández se haya alejado de la Comisaría, para irse destinado a la ciudad de Santiago en enero del año 1974, sin embargo, no puede

asegararlo. Lo que sí sabe, es que luego de que Fernández ya no estaba, lo siguió el Capitán Rolando Ríos García. Este Comisario no siguió los pasos de Fernández, por lo que el grupo -cree- que no siguió con sus fechorías, porque era el Capitán quién daba las órdenes. Sin embargo, no puede asegurarlo, especialmente, porque el año 1974 fue trasladado a la Primera Comisaría. Aclara que el subterráneo utilizado para las torturas es el que se inundaba en el invierno, como bien se le pregunta. Por otra parte acompaña dos fotocopias ante la Policía de Investigaciones y que el Tribunal le da a conocer. A la vez manifiesta que se mantiene en dichos en cuanto ignora cualquier antecedente relacionado con la víctima de autos don Marcelo Gutiérrez Gómez. Respecto de lo que Ssa. le pregunta narra que mientras estuvo trabajando en la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno, el jefe de Tenencia era el Capitán Adrián Fernández Hernández, el que luego del golpe militar instauró una especie de grupo de muerte compuesto por Rafael Pérez Torres, Gustavo Muñoz Albornoz (apodado Loli), Rolando Becker Salís, Canales, Rosas Silva y Eliseo Águila Salgado, no recordando los nombres de los otros funcionarios, que incluso fueron juramentados en secreto por el mismo Fernández en forma previa de sus actividades ilegales. A la vez relata que este grupo de personas salía habitualmente a hacer operativos y luego regresaban con personas detenidas, las cuales dejaban en los calabozos. Acota que en horas de la noche, ellos eran llevados hasta el subterráneo de la misma Comisaría, donde eran torturados, llegando incluso a ser asesinados en el mismo lugar. Esto lo supo por comentarios de otros colegas que se filtraron en esa época, sin recordar actualmente quiénes se lo dijeron. No obstante, un hecho que recuerda claramente, es el comentado por el Jefe de la Tenencia de Bahía Mansa de apellido Rosas, quién le dijo que estuvo presente en un interrogatorio donde Becker Salís en su desenfreno y agresividad, empezó a darle de culatazos al detenido con intención de matarlo, pero aquél señor simplemente no moría. Por ello, Becker sacó un cuchillo y lo degolló, para luego chupar la sangre que quedó en el arma blanca y decirle al cadáver "así que no querías morir". Afirma que ese hecho fue visto por el Capitán Fernández que incluso movió la cabeza sorprendido. Agrega que a ese nivel actuaba este grupo de personas. Por otra parte añade que nunca estuvo en los calabozos ni en el subterráneo, por miedo a las represalias de ese grupo de personas, pero nada de lo que dice está ajeno

a la verdad, pues como dijo los comentarios se filtraban. A la vez comunica que también se comentaba de la persecución que Fernández tenía respecto de los funcionarios Santana y Ubilla, a los cuales quiso acusar de terroristas una vez, haciendo uso de dos prostitutas que estaban detenidas, a las cuales instruyó que acusaran a dos funcionarios de lentes. A la vez descarga que Luego hizo que el personal se levantara a medianoche y, por suerte divina, los funcionarios no se pusieron sus lentes, salvándose esa noche de ser acusados y condenados por esta mentira inventada por Fernández. Otro tema es el ocurrido a Santiago Aguilar, a quien conoció desde joven. Destaca que este señor era amigo de Fernández, porque la señora del Capitán era secretaria de Santiago Aguilar y se visitaban. El día en que fue detenido Aguilar al momento de ir a renovar su salvoconducto, estando con la vista tapada escuchó la voz de Fernández, a quién le dice algo así como "qué bueno que llegaste Adrián, ahora las cosas se arreglarán", momento en que Fernández desenfundó su arma y le dispara en la cabeza a Santiago. Detalla que eso se lo contó su colega Juan Moreira. Otro hecho destacable, es que presencio dos días después del Golpe, cuando Fernández hablaba por teléfono con el Prefecto de Carabineros y le decía "Comandante, estoy cumpliendo las órdenes de Patria y Libertad y espero sus órdenes". Es decir, así estaban las cosas en ese momento, tanto que Fernández se regía por un partido político. A su consulta y respecto de las tres personas detenidas y ejecutadas luego de ser acusadas como asaltantes del Retén de Bahía Mansa, don Jorge Aguilar, María Bustamante y Edgard Cárdenas, glosa que nada puede aportar y No tiene antecedentes que puedan ayudar a esta investigación. Por otra parte aclara que incluso personalmente fue acusado por Fernández por ser un "peligroso extremista infiltrado en Carabineros" junto con otros cuatro o cinco funcionarios más. Por suerte, nunca pudo lograr su objetivo y logró seguir trabajando hasta su retiro. A su pregunta indica que no recuerda que Fernández se haya alejado de la Comisaría, para irse destinado a la ciudad de Santiago en enero del año 1974, sin embargo, no puedo asegurarlo. Lo que sí sabe, es que luego de que Fernández ya no está, lo siguió el Capitán Rolando Ríos García. Este Comisario no siguió los pasos de Fernández, por lo que el grupo -cree- que no siguió con sus fechorías, porque era el Capitán quién daba las órdenes. Sin embargo, no puede asegurarlo, especialmente, porque el año 1974 fue trasladado a la Primera Comisaría.

Finalmente Aclara que el subterráneo utilizado para las torturas es el que se inundaba.

B. DOCUMENTOS (30):

1. Documentos acompañados a querella criminal presentada por Rodrigo Ubilla Mackenney, Subsecretario del Interior.
2. Documento acompañado en querella criminal presentada por la abogada Rose Marie Vásquez Garrido en representación de Edgar Marcelo Gutierrez Bertín.
3. Certificación del Segundo Juzgado de Letras de Osorno que indica que revisados el libro de ingreso criminal del Segundo Juzgado de Letras de Osorno, a contar del mes de octubre del año 1973 a la fecha, en él no hay constancia de haberse ingresado causa seguida por Muerte de don Marcelo Del Carmen Gutiérrez Gómez, ocurrido el 5 de octubre de 1973.
4. Informe del Arzobispado de Santiago, Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad,
5. Informe del Primer Juzgado de Letras de Osorno.
6. Informe del Servicio de Registro Civil e Identificación.
7. Informe del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
8. Ejemplar N° 1/3/Hoja N° 1/1/ JEMGE.AUGE. SC. le (R) N° 1595/2093 del Estado Mayor General del Ejército de Chile.
9. Oficio N° 375, del Departamento de Derechos Humanos de la Subdirección General de Carabineros de Chile.
10. Publicación de diario de la época La Prensa.
11. Publicación del diario de la época La Prensa, que titula ex cabo de carabineros confesó destino de detenidos desaparecidos "fueron arrojados al río" José Ríos Vergara
- dijo que osorninos eran acribillados en puente Pilmaiquén y Rucatayo.
12. Certificados de domicilio emitidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación.
13. Oficio N° 644 del Departamento Pensiones P.4 de la Dirección de Gestión de Personas de Carabineros de Chile.
- 14 Certificado de defunción.
15. Oficio N° 268, de fecha 22 de julio de 2015, del Departamento de Derechos Humanos de la Subdirección e Inspectoría General del Carabineros de Chile.
16. Oficio N° 7, de fecha 07 de enero de 2016, del Departamento de Derechos Humanos, Subdirección General de Carabineros de Chile.
- 17.Hoja de vida de funcionario de Carabineros de Chile Rafael Pérez Torres.
18. Oficio N° 144, de fecha 08 de abril de 2016, del Departamento de Derechos Humanos, Subdirección General de Carabineros de Chile.
19. Oficio N° 182, de fecha 8 de febrero de 1974 de Carabineros de Chile.
- 20 Oficio N° 229, de fecha 21 de junio de 2016, del Departamento Derechos Humanos, Subdirección General de Carabineros de Chile
21. Informe pericial fotográfico N° 165-2016 de fecha 26 de mayo de 2016, de la Brigada de Homicidios de Valdivia de la Policía de Investigaciones de Chile.
22. Informe pericial Planimétrico N° 131/2016 del Laboratorio de Criminalística Regional Valdivia de la Policía de Investigaciones de Chile.

23. Copia simple de sentencia de paternidad en causa RIT C-1474-2006, del Juzgado de Familia de Osorno.

24. Certificado de nacimiento de Edgar Marcelo Gutiérrez Bertín.

25. Órdenes de investigar debidamente diligenciadas por la Brigada de Homicidios de Valdivia de la Policía de Investigaciones de Chile.

26. Órdenes de investigar debidamente diligenciadas por la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de Policía de Investigaciones de Chile.

27. Párrafos pertinentes de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso "Almonacid Arellano y otros v/s Chile"

28. Copia simple de Sentencia definitiva de Segunda Instancia Rol 17-2012 de la Lima. Corte de Apelaciones de Temuco, que incide en causa Rol 1673-03 de Osorno del Sr. Ministro en Visita Darío Caretta, caratulada "Aguilar Cubillos, Jorge Ricardo y otros".

29 Copia simple de Sentencia ejecutoriada de la Excma. Corte Suprema Rol 1686-13.

30 Página del diario de la época, del 23 de octubre de 1973 de la ciudad de Osorno.

B.1. Documentos acompañados a querella criminal presentada por Rodrigo Ubilla Mackenney, Subsecretario del Interior, que se desglosan de la siguiente manera:

a. Páginas 415 y 416, volumen I, tomo II del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, calificando como víctima de violaciones a sus derechos humanos a Marcelo del Carmen Gutiérrez Palma de **fs. 1 a 2 (Tomo I)**.

b. De fs. 26 a fs. 27 (Tomo I), certificado y partida de nacimiento de Marcelo Del Carmen Gutiérrez Gómez.

c. A fs. 28 a. 31 (Tomo I), Informe individual del caso para la comisión que señala que de los antecedentes evaluados, resulta razonable concluir que Marcelo Gutiérrez Gómez fue detenido por efectivos policiales del Retén de Bahía Mansa, apoyados por personal de la dotación de la 3ª Comisaría de Raque, de la cual dependía, trasladado probablemente a este último recinto, donde habría sido torturado y seguramente ejecutado por sus captores.

d. Copia de declaración de Elena Bertín Yáñez de **fs. 32 a 33 (Tomo I)**.

e. Copia de declaración de José Adolfo Panqueco Calpulef de **fs. 34 a 35 (Tomo I)**.

B.2. De fs. 979 a fs. 985 (Tomo III), certificado de nacimiento de Edgar Marcelo Gutierrez Bertín, acompañado en querella criminal presentada por la abogada Rose Marie Vásquez Garrido en representación de Edgar Marcelo Gutierrez Bertín.

B.3 De fs. 55 a fs. 57 (Tomo I) Certificación del Segundo Juzgado de Letras de Osorno que indica que revisados el libro de ingreso criminal del Segundo Juzgado de Letras de Osorno, a contar del mes de octubre del año 1973 a la fecha, en él no hay constancia de haberse ingresado causa seguida por Muerte de don Marcelo Del Carmen Gutiérrez Gómez, ocurrido el 5 de octubre de 1973.

B.4. de fs. 59 a fs. 60 (Tomo I) Informe del Arzobispado de Santiago, Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, el que señala como situación represiva lo siguiente: Con fecha 5 de octubre de 1973, Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez, obrero de la construcción, salió de su domicilio en la ciudad de Osorno con destino a Bahía Mansa, a llevarle alimentos a su hermanastro Edgar Eugenio Cárdenas Gómez, militante socialista y muy buscado en la zona con posterioridad al 11 de septiembre de 1973. Testigos presenciales relataron a la familia que fue obligado a descender del microbús en que viajaba por carabineros que lo detuvieron y llevaron con rumbo desconocido. Hasta la fecha se ignora la suerte corrida por el afectado. El hermanastro de la víctima, Edgar Cárdenas Gómez fue ejecutado por Carabineros el 5 de octubre de 1973 junto a Jorge Aguilar Cubillos, funcionario de la Corporación de Reforma Agraria (CORA), militante, radical y María Ester Bustamante Llanamil militante socialista. Los tres habían ido a refugiarse a una choza de pescadores cuando carabineros de la 3° Comisaría de Raque y del Retén de Bahía Mansa irrumpieron en el lugar dándoles muerte de inmediato. La versión oficial de las autoridades de la época fue que tres extremistas resultaron muertos cuando un grupo llevó a cabo una acción terrorista contra el retén de Bahía Mansa, la misma Versión agregaba que había habido enfrentamiento y que las víctimas estaban involucradas en un plan subversivo contra las Fuerzas Armadas y que en su poder se había encontrado gran cantidad de armamento y explosivos. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación se formó la convicción que la versión oficial de la época fue falsa y que estas tres víctimas fueron ejecutadas al margen de toda norma legal. También se forma convicción que la desaparición de Marcelo Gutiérrez Gómez es de responsabilidad de personal de la Comisaría de Raque, quienes lo detienen entre Osorno y Bahía Mansa cuando este iba a entregar alimentos a su hermanastro.

B.5. de fs. 62 a fs. 63 (Tomo I) Informe del Primer Juzgado de Letras de Osorno que certifica que revisado el libro de ingreso criminal desde el 02 de enero

de 1973 al 31 de diciembre de 1975 en él no hay constancia de haberse ingresado causa por la desaparición de Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez, además que revisado dicho libro desde el 02 de enero de 1973 al 31 de diciembre de 1975 existen causa ingresadas por muertes de N.N y por muerte de “un desconocido”. Todas en poder del archivero judicial.

B.6. de fs. 65 a fs. 66 (Tomo I) Informe del Servicio de Registro Civil e Identificación, que remite los antecedentes familiares de Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez.

B.7. de fs. 68 a fs. 76 (Tomo I) Informe del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos que contiene en resumen: a fs. 71 partida de nacimiento de Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez, a fs. 72 informe del arzobispado de Santiago, vicaría de la solidaridad, a fs. 73 informe de la comisión nacional verdad y reconciliación. Ver

B.8. de fs. 129 (Tomo I) Ejemplar N° 1/3/Hoja N° 1/1/ JEMGE.AUGE. SC. le (R) N° 1595/2093 del Estado Mayor General del Ejército de Chile, de fecha 25 de marzo de 2014 que informa que se revisó la base documental relacionada con los procesos instruidos por los tribunales militares en tiempo de guerra a partir del año 1973 en poder del archivo general del ejército, no encontrándose causas caratuladas con Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez.

B.9. de fs. 140 a fs. 143 (Tomo I) Oficio N° 375, del Departamento de Derechos Humanos de la Subdirección General de Carabineros de Chile, de fecha 15 de mayo de 2014 que adjunta relaciones del personal que al período de tiempo septiembre y octubre de 1973, figura de dotación de la Tenencia Raque Alto y del Retén Bahía Mansa, haciendo presente a US. Ilتما. que la mismas sólo contienen información nominal de carácter mensual, toda vez que en lo pertinente a los movimientos administrativos, las anotaciones correspondientes se efectuaban en forma manual en dicha época, de manera que en determinados casos es factible que no exista coincidencia entre las fechas del traslado y la anotación, despacho y presentación material de un funcionario en su nueva Unidad, no existiendo en consecuencia absoluta certeza, acerca del lugar exacto donde alguno de ellos se encontraba destinado durante el período de tiempo consultado.

B.10. de fs. 290 (Tomo I) publicación de diario de la época La Prensa que en resumen señala: ex carabineros rompen su silencio sobre el paradero de detenidos desaparecidos. “los cuerpos nunca aparecerán” José Ríos Vergara y

Luis Toledo Puggins denunciaron a altos mandos en crímenes contra osorninos. “le pisaban la cabeza a las víctimas, les pegaran un tiro y luego los arrojaban, aunque estuvieran vivos, desde el puente Pilmaiquén”. Ríos Vergara indicó que durante los meses de septiembre y octubre de ese año tuvo que trasladar a varias personas para que, supuestamente, fueran interrogadas, no obstante, según su versión, después de prestar declaraciones eran llevadas hasta el puente Pilmaiquén, donde las ejecutaban y lanzaban al río del mismo nombre. Según el relato de este ex uniformado; adolescentes, mujeres y niños eran derivadas hasta la unidad policial de Raque Bajo, la que en esa fecha estaba a cargo del capitán Adrián Fernández Hernández. En ese lugar recibían múltiples castigos. “no había compasión para nadie, las mujeres eran violadas y los hombres eran brutalmente golpeados por los uniformados... uno trataba de no mirar y hacerse el leso, porque si poníamos mala cara, nos trataban de comunistas, y hasta nos querían pegar a nosotros mismos”, relató el ex funcionario.

B.11. A fs. 291 (Tomo I) Publicación del diario de la época La Prensa, que titula ex cabo de carabineros confesó destino de detenidos desaparecidos “fueron arrojados al río” José Ríos Vergara dijo que osorninos eran acribillados en puente Pilmaiquén y Rucatayo. Según la confesión de un cabo de Carabineros varias personas fueron fusiladas y arrojadas al río desde el puente Pilmaiquén. Una impactante confesión realizó el cabo primero de Carabineros, José Rodemil Ríos Vergara, quien reveló a los familiares de detenidos desaparecidos de la provincia de Osorno deberán conformarse con el recuerdo de sus seres queridos, al señalar que los cuerpos no van a ser encontrados porque habrían sido lanzado a las aguas del río Pilmaiquén, después de ser fusilados en el puente del mismo nombre. Según el ex funcionario de la institución, quien según sus propias declaraciones se desempeñaba como chofer de uno de los móviles policiales en 1973, eran caravanas de autos que llevaban a detenidos con la finalidad de declarar a las diferentes comisarias, pero estos nunca volvieron debido a que eran fusilados para luego ser arrojados a las aguas del río Pilmaiquén, agregó a radio Biobío que estos hechos se registraron en septiembre y octubre de 1973, tanto en este puente como en sector Rucatayo, ubicado en el límite entre las comunas de Puyehue y Río Bueno.

B.12. de fs. 317 (Tomo I) de fs. 373 a fs. 378 (Tomo II), de fs. 384 (Tomo II), de fs. 655 (Tomo II), de fs. 697 (Tomo III) Certificados de domicilio emitidos

por el Servicio de Registro Civil e Identificación respecto de Ana del Carmen López Barría, Heriberto Eugenio Silva Álvarez, Alamberto Valentín Aguilera Álvarez, Jorge Ricardo Coronado Henzi Jorge Daniel Garcés Yáñez, Estanislao Juan Bautista Huentrutripay Villarroel, Mario Lenis Flores Conejeros, Rodolfo Segundo Cheuquela Lorenzo, respectivamente.

B.13. De fs. 391 y fs. 407 a fs. 439 (Tomo II) Oficio N° 644 del Departamento Pensiones P.4 de la Dirección de Gestión de Personas de Carabineros de Chile, que contiene la hoja de vida de Juan Bautista Huentrutripay Villarroel.

B.14. De fs. 401 (Tomo II) Certificado de defunción de Osvaldo Nelson Rosas Cárdenas causa de muerte insuficiencia hepática/ metástasis hepáticas/ cáncer gástrico avanzado.

B.15. De fs. 472 a fs. 478 (Tomo II) Oficio N° 268, de fecha 22 de julio de 2015, del Departamento de Derechos Humanos de la Subdirección e Inspectoría General del Carabineros de Chile, que contiene copias de los únicos registros fotográficos de los Suboficial Mayor en retiro de Luis Humberto Pinol Carillanca y Osvaldo Nelson Rosas Cárdenas, del Sargento en retiro Ademár Catalán Aguilar, Suboficial en retiro Estanislao Juan Bautista Huentrutripay Villarroel y del ex Cabo 2° Jorge Ricardo Coronado Henzi.

B.16. De fs. 591 a 611 (Tomo II) Oficio N° 7, de fecha 07 de enero de 2016, del Departamento de Derechos Humanos, Subdirección General de Carabineros de Chile, que contiene planillas de imposiciones digitalizadas por la Dirección de Previsión de Carabineros,, que establece que las remuneraciones del Coronel en retiro Adrián Fernández Hernández fueron enviadas a: a) los meses de enero, febrero y marzo a la prefectura de Osorno, Tercera Comisaria Rural. B) los meses de abril, mayo y junio fueron enviadas a la escuela de Carabineros escuadrón aplicación, lugar donde fue trasladado el 01.01.1974, según consta en Hoja de vida que se adjunta.

B.17. De fs. 634 a 646 (Tomo II) Hoja de vida de funcionario de Carabineros de Chile Rafael Pérez Torres.

B.18. A fs. 651 (Tomo II) Oficio N° 144, de fecha 08 de abril de 2016, del Departamento de Derechos Humanos, Subdirección General de Carabineros de Chile, que informa que en la tercera comisaria de Osorno se registra al sargento 2° ® Mario Lenis Flores Conejero., quien se acogió a retiro el 01.06.1973.

B.19. A fs. 663 (Tomo III) Oficio N° 182, de fecha 8 de febrero de 1974 de Carabineros de Chile, firmado por Adrián Fernández Hernández, que señala que en la unidad existe de cargo el furgón N° 777 y no la patrulla que menciona el citado oficio, vehículo que cubre los servicios policiales de esta comisaria, tanto en el sector rural como en el urbano. En relación a que si el ciudadano Cesar Ávila Jara, habría sido detenidos en los días posteriores al 11 de septiembre del año recién pasado se informa: el día 27 de septiembre de 1973 a las 16:30 horas, fue detenido por sospechoso, por personal de esta unidad Cesar Osvaldo del Carmen Ávila Jara, 36 años, casado, profesor, c/id. Nr. 96.704 de Osorno, el que fue ingresado al libro de guardia, en calidad de sospechoso, según consta en el párrafo o N° 9, folio 155. Posteriormente el día 28 del mismo mes, el citado detenido, fue puesto en libertad, por no haber habido reclamos en su contra ni méritos para prolongar su detención, según consta en el folio 157, párrafo N° 24 del libro de novedades de la Guardia.

B.20 De fs. 698 a 719 (Tomo III) Oficio N° 229, de fecha 21 de junio de 2016, del Departamento Derechos Humanos, Subdirección General de Carabineros de Chile, que contiene hoja de vida del Sargento 1° Rodolfo Segundo Cheuquelaf Lorenzo.

B.21. De fs. 723 a 725 (Tomo III) informe pericial fotográfico N° 165-2016 de fecha 26 de mayo de 2016, de la Brigada de Homicidios de Valdivia de la Policía de Investigaciones de Chile, realizado en el cruce Pucatrihue-Bahía Mansa.

B.22. De fs. 726 a 755 (Tomo III) Informe pericial Planimétrico N° 131/2016 del Laboratorio de Criminalística Regional Valdivia de la Policía de Investigaciones de Chile, realizado en el cruce Pucatrihue-Bahía Mansa.

B.23. De fs. 796 a 805 (Tomo III) Copia simple de sentencia de paternidad en causa RIT C-1474-2006, del Juzgado de Familia de Osorno, de fecha 26 de mayo de 2015, que señala en sus conclusiones: se acoge la demanda interpuesta por don Edgar Marcelo Gutierrez Bertín, en contra de don Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez, declarándose que éste último es su padre biológico, nacido el 9 de noviembre de 1973, - inscrito] en la Oficio de Registro Civil e Identificación de Osorno bajo el N° 187, registro S del año 1983.

B.24. De fs. 979 (Tomo III) Certificado de nacimiento de Edgar Marcelo Gutiérrez Bertín, registra como fecha de nacimiento 09 de noviembre de 1973,

como padre a Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez y como madre a Inés Elena Del Carmen Bertín Yáñez.

B.25. Órdenes de investigar debidamente diligenciadas por la Brigada de Homicidios de Valdivia de la Policía de Investigaciones de Chile, que se desglosan de la siguiente forma:

- a) **de fs. 386 a 387 (Tomo II)** informe policial N°252/702 de fecha 24 de abril de 2015 que contiene ubicación y citación de Héctor Vargas Soto.
- b) **de fs. 557 a 576 (Tomo II)** informe policial N° 694/702 de fecha 05 de noviembre de 2015 que contiene ubicación e individualización de testigos de la época; Guillermo Tuchie Rossenberg, Erico Carrasco Sanhueza, Carlos Delgado Muñoz, Pablo Vidal Ruiz, José Fernando Huanquil Almonacid, José Alfredo Cofián Cofián, Florencio Segundo Cárdenas Oporto, Sergio Conejeros Ortega, declaración de Rosario Barrientos Cáceres, Carmen Carrasco Maragaño.
- c) **de fs. 619 a 625 (Tomo II)** informe policial N° 49/702 de fecha 03 de marzo de 2016 que contiene declaración de Héctor Vargas Soto.
- d) **de fs. 678 a 691 (Tomo III)** informe policial N° 407/702 de fecha 24 de mayo de 2016 que contiene declaración voluntaria de Florencio Segundo Cárdenas Oporto
- e) **de fs. 757 a 762 (Tomo III)** informe policial N° 600/702 de fecha 23 de julio de 2016 que contiene declaración voluntaria de Rodolfo Cheuquelaf Lorenzo.
- f) **de fs. 775 a 780 (Tomo III)** informe policial N° 798/702 de fecha 28 de septiembre de 2016 que contiene declaración voluntaria de Juan Guarda Castro.
- g) **de fs. 782 a 789 (Tomo III)** informe policial N° 895/7020 de fecha 28 de octubre de 2016 que contiene declaración voluntaria de Ecar Adolfo Guarda Castro y de Adolfo Segundo Acum Colpiante.
- h) **de fs. 822 a 832 (Tomo III)** informe policial N° 192/702 de fecha 15 de marzo de 2017 que contiene individualización de la dotación del retén de carabineros de Bahía Mansa para el año 1973 y declaración voluntaria de Ademar Catalán Aguilar.

B.26. Órdenes de investigar debidamente diligenciadas por la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de Policía de Investigaciones de Chile, que se desglosan de la siguiente forma:

- a) **De fs. 84 a 86 (Tomo I)** informe policial N°747/799 de fecha 03 de febrero de 2014 que contiene individualización de José Adolfo Panqueco Calfuléf
- b) **De fs. 100 a 104 (Tomo I)** informe policial N° 750/799 de fecha 03 de febrero de 2014 que contiene declaración voluntaria de Edgar Marcelo Gutiérrez Bertín.
- c) **De fs. 148 a 184 (Tomo I)** informe policial N° 4722/703 de fecha 13 de agosto de 2014 que contiene declaración voluntaria de José Oberto Santana Oyarzún, Ademar Catalán Aguilar, Luis Humberto Pinol Carrillanca, Oscar Fernández Águila, Leopoldo Arcos Rodríguez.
- d) **De fs. 188 a 199 (Tomo I)** informe policial N° 5176/799 de fecha 04 de septiembre de 2014 que contiene declaración voluntaria de Ana del Carmen López Barría.
- e) **De fs. 227 a 265 (Tomo I)** informe policial N° 191/202 de fecha 08 de enero de 2018 que contiene individualización de carabineros fallecidos de la época y declaración voluntaria de Juan Segundo Moreira Garcés
- f) **De fs. 363 a 369 (Tomo II)** informe policial N° 1458/202 de fecha 24 de marzo de 2015 que contiene declaración voluntaria de Héctor Vargas Soto.
- g) **De fs. 441 a 446 (Tomo II)** informe policial N° 3506/702 de fecha 26 de junio de 2015 declaración voluntaria de María Angélica Vergara Herrera.
- h) **De fs. 453 a 458 (Tomo II)** informe policial N°3799/202 de fecha 06 de julio de 2015 que contiene declaración voluntaria de Jorge Daniel Garcés Yáñez.
- i) **De fs. 460 a 467 (Tomo II)** informe policial N°3887/00202 de fecha 07 de julio de 2015 que contiene declaración voluntaria de Ana del Carmen López Barría.
- j) **De fs. 489 a 496 (Tomo II)** informe policial N° 7667/702 de fecha 14 de agosto de 2015 que contiene declaración voluntaria de Heriberto Eugenio Silva Álvarez.
- k) **De fs. 501 a 508 (Tomo II)** informe policial N° 5313/702 de fecha 10 de septiembre de 2015 que contiene declaración voluntaria de Gladys González Menares.

- l) **De fs. 510 a 528 (Tomo II)** informe policial N° 5444/702 de fecha 21 de septiembre de 2015 que contiene declaración voluntaria de Guillermo Antilef Quintul, Patricio Tomasevic Cañas, Sigisfredo Ernesto González González, Ellio Edgardo Mella San Martín.
- m) **De fs. 530 a 543 (Tomo II)** informe policial N° 685/702 de fecha 04 de noviembre de 2015 que contiene declaración voluntaria de María Judith Aucapán Ancapán, Aristeo Maripan Queipuyao, Margot Silvia Arteaga Arriagada.
- n) **De fs. 545 a 555 (Tomo II)** informe policial N°6215/702 de fecha 22 de octubre de 2015 que contiene declaración voluntaria de Vladimiro Fernández Rojas, Rafael Pérez Torres, Gustavo del Carmen Muñoz Albornoz.
- o) **De fs. 578 a 585 (Tomo II)** informe policial N° 6836/702 de fecha 23 de noviembre de 2015 que contiene Rolando del Carmen Ríos García.
- p) **De fs. 765 a 770 (Tomo III)** informe policial N° 4303/203 de fecha 09 de agosto de 2016 que contiene declaración voluntaria de Hernán Horacio Taricco Lavín.

B.27. Fs. 904 a fs. 915 (Tomo III) Párrafos pertinentes de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso "Almonacid Arellano y otros v/s Chile", correspondientes a fs. 27 a fs. 29; de fs. 46; de fs. 49 a fs. 54 y de fs. 61 (Tomo I) e Informe en Derecho de don Hernán Quezada Cabrera, Doctor en Derecho, Universidad de Hamburgo (R.F.A9 y Universidad de Estrasburgo (Francia), de diciembre de 2.003, de fs. 916 a fs. 954 (Tomo III).

B.28. De fs. 1049 a fs. 1077 (Tomo IV) Copia simple de Sentencia definitiva de Segunda Instancia Rol 17-2012 de la lima. Corte de Apelaciones de Temuco, que incide en causa Rol 1673-03 de Osorno del Sr. Ministro en Visita Darío Caretta, caratulada "Aguilar Cubillos, Jorge Ricardo y otros".

B.29 De fs. 1078 a 1107 (Tomo IV) Copia simple de Sentencia ejecutoriada de la Excma. Corte Suprema Rol 1686-13, que incide en Sentencia definitiva de Segunda Instancia Rol 17-2012 de la lima. Corte de Apelaciones de Temuco, la que a su vez incide en causa Rol 1673-03 de Osorno del Sr. Ministro en Visita Darío Caretta, caratulada "Aguilar Cubillos, Jorge Ricardo y otros".

B.30 De fs. 309 (Tomo I), Página del diario de la época, del 23 de octubre de 1973 de la ciudad de Osorno, en lo pertinente indica que quedó en libertad doña María Eufemia Milaquipai Huichaquillen.

11°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Que los elementos de convicción antes reseñados constituyen presunciones judiciales, que por reunir las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener legalmente acreditado que:

A. Que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública el día 11 de Septiembre de 1973 asumieron el mando Supremo de la Nación, reuniendo los poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo en la Junta de Gobierno según se dejó establecido en el Bando N° 5, de igual fecha, así como en el Decreto Ley N° 1, posteriormente aclarado y complementado por los Decretos Leyes N° 128, 527 y 788, se dispuso entre otras medidas el Estado de Sitio en todo el territorio nacional, ordenándose acuartelamiento en grado uno para las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

B. Que a partir del 11 de septiembre de 1973 el mando en la 3ª Comisaría de Carabineros de Osorno se encontraba a cargo del capitán Adrián Fernández Hernández, unidad a la que se sumó, entre otros, el Retén de Bahía Mansa, en consideración a los acontecimientos que ocurrían en el país, quien organizó y coordinó un grupo especial de carabineros entre los que se encontraban Mario Maragaño Oyarzún (fallecido, según consta a fs. 1042 Tomo III), Guillermo Antilef Quintul, Sergio Rozas Silva (fallecido según consta a fs. 1040 Tomo III), Gustavo del Carmen Muñoz Albornoz (fallecido según consta a fs. 1041 Tomo III), Rafael Pérez Torres, Juan Canales, José Ríos Vergara (fallecido según consta a fs. 1039 Tomo III), Elíseo Águila Salgado (fallecido según consta a fs. 1036, Tomo III), Juan Segundo Moreira Garcés, Vladimiro Fernández Rojas, Oscar Vargas Vargas, Rolando Vargas Vargas (fallecido según consta a fs. 1037 Tomo III) y Francisco Inostroza Baeza (fallecido según consta a fs. 1046 Tomo IV), entre otros, según declaración de Rubén Molina González de fs. 246 a fs. 248 (Tomo I), de fs. 288 a fs. 289 (Tomo I), de José Oberto Santana Oyarzún, de fs. 162 a fs. 164 (Tomo I), de fs. 251 a fs. 253 (Tomo I), de fs. 292 a fs. 293 (Tomo I), de Ademar Catalán Aguilar de fs. 169 a fs. 171 (Tomo I), de fs. 319 a fs. 323 (Tomo I), de Leopoldo Arcos Rodríguez de fs. 181 a fs. 183 (Tomo I), de Luis Humberto Pinol Carillanca de fs. 173 a 176 (Tomo I), 254 a 255 (Tomo I), 267 a 268 (Tomo

I), 324 a 329 (Tomo I), 335 a 336 (Tomo I), 347 a 348 (Tomo I), 829 a 831 (Tomo III), 837 a 838 (Tomo III) y de fs. 975 a 976 (Tomo III), grupo que realizaba patrullajes por la zona dependiente de la unidad policial antes indicada, a la vez que procedían a detener personas que posteriormente eran llevadas a la Comisaría para ser interrogadas en dependencias de esa unidad; o que fueron retiradas por este grupo especial de carabineros para ser llevados a lugares desconocidos hasta la fecha.

C. Que la dependencia usada preferentemente para los interrogatorios era el sótano de la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno, según testimonios, entre otros, de María Gladys Ávila Rosas de fs. 657 a 658 (Tomo III), de Antonio Ewaldo Molina López de fs. 659 a 662 (Tomo III), de María Eufemia Millaquipai Guichaquelen de fs. 260 a 264 (Tomo I), de fs. 297 a 299 (Tomo I), lugar en el que se encontraban detenidos indistintamente hombres y mujeres, consistiendo las torturas en aplicación de corriente eléctrica en varias partes del cuerpo, violaciones o intentos de violaciones hacia las mujeres detenidas, introducción de palos en el ano de los hombres, entre otras torturas descritas, figurando como dando las órdenes el capitán Adrián Fernández Hernández, quién se encontraba a cargo de la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno, secundado por su grupo de confianza.

D. Que posterior al 11 de septiembre de 1973 Carabineros de Chile estableció un puesto de control frecuente en el Cruce Pucatrihue, en el trayecto que une Osorno con Bahía Mansa, según testimonios, entre otros, de Federrina del Rosario Barrientos Cancino de fs. 567 a fs. 569 (Tomo II), de Héctor Vargas Soto de fs. 367 a fs. 369 (Tomo II), de fs. 482 a fs. 488 (Tomo II), de María Judith Aucapán Ancapán de fs. 535 a fs. 537 (Tomo II). En este lugar eran controlados los vehículos que transitaban, entre ellos los buses que hacían el recorrido diario uniendo estos dos destinos, los que pertenecían a la Empresa Carrasco o Tuchie. Carabineros, tanto del Retén Bahía Mansa como de la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno, procedían a identificar y registrar a los pasajeros de los mismos, bajando en ocasiones a alguno o algunos de ellos, en ocasiones reteniéndolos, para posteriormente indicarle al chofer de las máquinas que siguieran su camino.

E. Que con fecha 5 de octubre de 1973, Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez, 17 años de edad, obrero de la construcción, miembro del Frente de

Estudiantes Revolucionarios (FER), salió de su domicilio en la ciudad de Osorno con destino a Bahía Mansa, a llevarle alimentos a su hermanastro Edgar Eugenio Cárdenas Gómez, militante socialista y muy buscado en la zona con posterioridad al 11 de septiembre de 1973. Testigos presenciales relataron a la familia que fue obligado a descender del microbús que viajaba por Carabineros que lo detuvieron y llevaron con rumbo desconocido. Hasta la fecha se ignora la suerte corrida por el afectado.

El hermanastro de la víctima, Edgar Cárdenas Gómez fue ejecutado por Carabineros el día 5 de octubre de 1973 junto a Jorge Aguilar Cubillos, funcionario de la Corporación de Reforma Agraria (CORA), militante radical y María Ester Bustamante Llancamil, militante socialista. Los tres habían ido a refugiarse a una choza de pescadores cuando carabineros de la 3ª Comisaría de Rahue de Osorno y del Retén de Bahía Mansa irrumpieron en el lugar dándoles muerte de inmediato, según declaración, entre otras de Ana del Carmen López Barría de fs. 188 a fs. 192 (Tomo I), de fs. 302 a fs. 308 (Tomo I), de fs. 356 a fs. 361 (Tomo I), de fs. 466 (Tomo II).

La versión oficial de las autoridades de la época fue que los tres extremistas resultaron muertos cuando un grupo llevó a cabo una acción terrorista contra el Retén de Bahía Mansa, la misma versión agregaba que había habido un enfrentamiento y que las víctimas estaban involucradas en un plan subversivo contra las Fuerzas Armadas y que en su poder se había encontrado gran cantidad de armamento y explosivos, según declaración, entre otros, de Ramón Plaza de los Reyes Bachmann de fs. 312 a fs. 316 (Tomo I)

F. Que días previos a su detención, es decir el día 5 de octubre de 1973, Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez viajó a la casa de su padraastro en el lugar Bahía Mansa a dejarle comida a su hermano Edgar Cárdenas Gómez, según relato de Inés Elena Bertín Yáñez (fs. 32, Tomo I), quién se encontraba refugiado ahí junto a Ester Bustamante Llancamil y Jorge Aguilar Cubillos, quiénes eran intensamente buscados por la nuevas autoridades del país, según la letra E) precedente. Asimismo, el día 4 de octubre de 1973, Gutiérrez Gómez, viajó de regreso a Osorno a comprar alimentos y remedios en la farmacia en la que trabajaba la esposa de Jorge Aguilar Cubillos, regresando el día 5 de octubre a Bahía Mansa, tal como se ha señalado. La prensa informó el día 6 de octubre de 1973 que el hermano de Gutiérrez y las otras dos personas habían sido fusilados

cuando trataron de asaltar un retén, lo que según testimonios de carabineros que prestaron servicio en el Retén de Bahía Mansa para la fecha, fue falso, puesto que nunca sucedió lo del asalto al Retén de Bahía Mansa, sino que los detenidos por Carabineros del mismo retén fueron entregados a una patrulla de Carabineros de Osorno comandada por el capitán Adrián Fernández Hernández, según relato de Luis Humberto Pinol Carillanca de fs. 173 a 176 (Tomo I), 254 a 255 (Tomo I), 267 a 268 (Tomo I), 324 a 329 (Tomo I), 335 a 336 (Tomo I), 347 a 348 (Tomo I), de 829 a 831 (Tomo III), de 837 a 838 (Tomo III), de 975 a 976 (Tomo III) y de Héctor Vargas Soto de 367 a 369 (Tomo II), de fs. 482 a fs. 488 (Tomo II), de fs. 653 a fs. 654 (Tomo II).

G. Que según relato de Rodolfo Segundo Cheuquelaf Lorenzo fs. 760 a 762 (Tomo III), 772 a 773 (Tomo III), 1017 a 1018 (Tomo III)), hubo un día en que un joven se encontraba detenido por sospecha en el Retén de Bahía Mansa, a quien se le dio la libertad. Señala que el día anterior a su detención sus colegas lo habían visto por los alrededores y lo habían aprehendido; que cuando ocurrió lo del asalto al Retén de Bahía Mansa, llegó hasta el destacamento el Capitán Adrián Fernández Hernández junto a los carabineros Rafael Pérez Torres, Muñoz Albornoz y el fallecido Juan Canales. Ellos procedieron con el operativo y en un momento Fernández llama a Osvaldo Nelson Rosas Cárdenas (fallecido según consta a fs. 1045 (Tomo III). Acto seguido Rosas Cárdenas llama a Cheuquelaf junto a otro de sus compañeros y les dice que por órdenes del Capitán Fernández debían ir a detener a una persona que se trasladaba en uno de los buses que iban de Osorno a Bahía Mansa, que podía ser de la empresa Tuchie o Carrasco, persona que tendría entre 18 y 20 años y que portaba víveres. Se dirigieron al cruce Pucatrihue en una camioneta doble cabina color verde que les había facilitado el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la que era ocupada en su momento por Jorge Aguilar Cubillos en su calidad de funcionario del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), según testimonio de Ana del Carmen López Barría de fs. 188 a 192 (Tomo I), 302 a 308 (Tomo I), 356 a 361 (Tomo I), de fs. 466 (Tomo II). Hacen parar el bus, lo controlan y se encuentran con el mismo joven al que se le había dado la libertad unos dos o tres días antes. Quien efectivamente llevaba un bolso con víveres, acción que se encontraba llevando al mismo tiempo Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez, al llevarle alimentos a su hermano Edgar Cárdenas Gómez, quien se encontraba oculto en Bahía Mansa, según lo narrado en la letra

E) precedente. Se le Indica a éste joven que baje del bus, dándosele orden al chofer del mismo que continuara su camino. Osvaldo Nelson Rosas Cárdenas identifica a la persona confirmando el nombre que le había dado el Capitán Fernández, el cual llevaba anotado. Rosas Cárdenas le da un culatazo en el estómago, ordena subirlo a la camioneta y toman dirección al retén, lugar en el cual el joven es entregado al Capitán Fernández. Posteriormente los detenidos son subidos a los vehículos en los que se trasladaban los carabineros a cargo del Capitán Fernández, es decir, los que fueron imputados como atacantes del Retén Bahía Mansa junto al joven que fue detenido en el bus que se señala precedentemente.

Posteriormente, el Diario La Prensa de la época informa que tres detenidos acusados del asalto al retén habían muerto, según testimonios señalados precedentemente; Informe de la Comisión Nacional del Verdad y Reconciliación de fs. 2 (Tomo I); información individual del caso de fs. 28 a fs. 30 (Tomo I); Informe del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de fs. 68 a fs. 76 (Tomo I).

H. Que de acuerdo a Héctor Vargas Soto, según declaraciones de fs. 367 a fs. 369 (Tomo II), de fs. 482 a fs. 488 (Tomo II) y de fs. 653 a fs. 654 (Tomo II) señala haber sido testigo cuando carabineros, entre ellos el Sargento Rosas Cárdenas (fallecido según consta a fs. 1045 Tomo III), hacen bajar a un joven desde una micro de recorrido Osorno-Bahía Mansa, específicamente en el cruce Pucatrihue, para luego darle culatazos hasta destruirle el cráneo. Los carabineros en número de seis o siete llegaron hasta ese lugar en un vehículo perteneciente al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

I. Que por otro lado doña Ana del Carmen López Barría, según su relato de fs. 188 a fs. 192 (Tomo I), de fs. 302 a fs. 308 (Tomo I), de fs. 356 a fs. 361 (Tomo I), de fs. 466 (Tomo II) señala haber sido pareja de Jorge Aguilar Cubillos, uno de los supuestos extremistas que asaltaron el Retén de Bahía Mansa el 5 de octubre de 1973. Que una vez que se produjo el golpe de estado éste huyó hacia un sector rural junto a Edgar Cárdenas Gómez y María Ester Bustamante, puesto que su nombre había aparecido en los bandos emitidos por las nuevas autoridades. Que nunca más supo de Jorge Aguilar Cubillos hasta el día 06 de octubre de 1973 en que tomó conocimiento de que éste se encontraba fallecido en la morgue del hospital de Osorno. Concurrió al hospital en conjunto con la madre

de Jorge Aguilar Cubillos, doña Ema Cubillos y su cuñada de nombre Onorinda Aguilar Cubillos, lugar en el cual un enfermero les permite ver el cuerpo de Jorge Aguilar Cubillos, además del cuerpo de María Ester Bustamante y de Edgar Cárdenas Gómez, todos con impactos balísticos, teniendo Jorge Aguilar Cubillos 36 impactos de bala, uno de ellos entre las cejas con salida de proyectil y el cuerpo de María Ester Bustamante con un gran forado en la espalda, enterándose que ésta última se encontraba embarazada.

J. Que continuando su relato doña Ana del Carmen López Barría señala que estando en la morgue del hospital de Osorno se hacen presentes tres funcionarios de Carabineros de la Tercera Comisaría de Osorno con la orden de llevarlas ante el capitán Adrián Fernández Hernández. Llegada a la comisaría queda detenida por 22 días, lapso de tiempo en el cual es sometida a distintos tipos de interrogatorios, los que incluían, entre otras torturas, aplicación de corriente eléctrica en sus senos. Señala, además, que en la primera ocasión en la que la interrogan le hacen oír un cassette con la grabación de un joven que se identificaba como Marcelo Gutiérrez Gómez, dándose cuenta de que se trataba del hermano de Edgar Cárdenas Gómez, quien según le dijo Fernández, había sido detenido por Carabineros de la Tercera Comisaría bajo su mando el día 05 de octubre de 1973, a quien lo habían sometido a un intenso interrogatorio y tortura para obtener el paradero de Edgar, Jorge y María Ester, y se escuchaba como Marcelo Gutiérrez Gómez gritaba y suplicaba que no lo siguieran sometiendo a torturas; lloraba e indicaba que no sabía dónde estaba su hermano. Agrega que durante el tiempo que le hicieron escuchar la grabación, esto es por alrededor de tres minutos, Marcelo Gutiérrez Gómez nunca señaló el lugar donde se encontraba su hermano en compañía de Jorge Aguilar Cubillos y María Ester Bustamante Llancamil. Acto seguido el capitán Adrián Fernández Hernández le manifestó que si no cooperaba le iba a ocurrir lo mismo a ella.

K. Que en el mismo sentido declara doña María Eufemia Millaqulpai Guíchaquelen de fs. 260 a fs. 264 (Tomo I), de fs. 297 a fs. 299 (Tomo I), señalando que estuvo detenida junto a doña Ana del Carmen López Barría en la Tercera Comisaría de Carabineros Rahue de Osorno, lugar en el cual también fue sometida a torturas, las que incluían aplicación de corriente, por largos minutos, en los senos, vagina, brazos, codos, sienes, cuellos, piernas, rodillas y tobillos; sus torturadores eran hombres, reconociendo entre ellos, por la voz, al Capitán Adrián

Fernández Hernández. Todas las sesiones de torturas eran en el subterráneo de la Comisaría y con la vista vendada. Señala, además, que cuando pudo conversar don Ana del Carmen López Barría, esta le comentó llorando que a su marido Jorge Aguilar Cubillos lo habían matado y que ya estaba sepultado y que a ella la habían detenido por haberle enviando comida a su marido con un joven, el cual también resultó detenido y que desconocía que había ocurrido con él.

L. Que según declaración de María Angélica Vergara Herrera de fs. 352 a fs. 355 (Tomo I) y de fs. 444 a fs. 445 (Tomo II), señala haber sido esposa de Edgar Eugenio Cárdenas Gómez y que se enteró de la muerte de Marcelo Gutiérrez Gómez de boca de su señora doña Inés Bertín Yáñez (fallecida, según consta a fs. 1047 Tomo IV), quién le señaló que Marcelo Gutiérrez Gómez fue detenido por Carabineros de la Tercera Comisaría de Osorno, quienes andaban de uniforme y habrían bajado a Marcelo Gutiérrez Gómez de la micro que hacia el recorrido Osorno-Bahía Mansa.

M. Que de conformidad a lo obrado en las letras E) a L) precedentes, se colige que la persona de la cual se discurre es Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez, 17 años de edad a la fecha de su detención, quien viajó a Bahía Mansa, sector costero de Osorno, con el fin de llevarle alimentos a su hermanastro Edgar Cárdenas Gómez, quién se encontraba oculto en aquel lugar junto a otras dos personas; que el día 05 de octubre de 1973 Marcelo Del Carmen Gutiérrez Gómez es detenido por una patrulla de carabineros en el cruce Pucatrihue que une Osorno con Bahía Mansa, quienes cumplían una orden del capitán Adrián Fernández Hernández, comisario de la Tercera Comisaria de Carabineros de Osorno, con jurisdicción sobre el Retén de Carabineros de Bahía Mansa, patrulla que estuvo compuesta, entre otros, por el carabinero Cheuquelaf Lorenzo; Que previo a su detención el día 05 de octubre de 1973 Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez había estado detenido por sospecha en el retén de la localidad señalada y se le había dado su libertad, como señaló Luis Humberto Pinol Carillanca, quien era el jefe del Retén Bahía Mansa a la fecha de ocurridos los hechos; que de acuerdo al mérito de los antecedentes descritos, hasta la fecha se desconoce el paradero de Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez desde la fecha en que fue detenido por carabineros pertenecientes a la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno.

12°) Calificación. Que los hechos reseñados en esta etapa procesal es constitutivo del delito de **secuestro calificado**, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de **Marcelo del Carmen Gutierrez Gómez** previsto y sancionado en artículo 141 del Código Penal, en su texto vigente a la época de los hechos.

13°) Calificación. Que el ilícito antes reseñado, es además delito de **lesa humanidad**. Así se ha pronunciado este Tribunal, la Iltna. Corte de Apelaciones de Temuco y la Excm. Corte Suprema en las siguientes causas tramitadas ante este Ministro en Visita Extraordinaria:

A. Causa rol 27.525 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidios calificados de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014;

B. Causa rol 27.526 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014;

C. Causa rol 45.345 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidios calificados de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014;

D. Causa rol 113.990 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015;

E. Causa rol 113.989, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016;

F. Causa rol 18.780 del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015;

G. Causa rol 29.877, del ingreso del Juzgado de Letras de Pitrufrquén, seguida por el delito de homicidios calificados de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016;

H. Causa rol 45.344, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016;

I. Causa rol 45.371, del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016;

J. Causa rol 45.342, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumerindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015;

K. Causa rol 29.869, del Juzgado de Letras de Pitrufquén, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016;

L. Causa rol 27.527, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016;

M. Causa rol 114.001, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016;

N. Causa rol 113.986, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016;

O. Causa rol 63.541, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016;

P. Causa rol 45.363, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017;

Q. Causa rol 114.048, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017;

R. Causa rol 10.868, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017;

S. Causa rol 114.003, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017;

T. Causa rol 10.851, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, seguida por el homicidio simple, en carácter de reiterado de Pedro Antonio

Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 20 de enero de 2016;

V. Causa rol 10.854, del Primer Juzgado de Letras de Puerto Montt, seguida por el homicidios calificados en las personas de Dagoberto Segundo Cárcamo Navarro, José René Argel Marilicán, Adolfo Omar Arismendi Pérez, Carlos Mansilla Coñuecar, Jorge Melipillán Aros, José Armando Ñancuman Maldonado, sentencia de 28 de octubre de 2017;

W. Causa rol 45.359 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de Domingo Huenul Huaquil, sentencia de 31 de agosto de 2017.

X. Causa rol 54.035 del Primer Juzgado de Crimen de Puerto Montt, apremios ilegítimos en las personas de Mario Enrique Contreras Vega, Cesar Vladimir Leiva Garrido, Domingo Álvarez Cárdenas, Raúl Ángel Andrade Oyarzún, Marco Antonio Romero Arias, Enrique Becker Álvarez, Carlos Jerges Torres Vera, Noé Alejandro Cárdenas Alvarado, Werne Víctor Haro Oyarzún, sentencia de 23 de diciembre de 2017.

Y. Causa rol 65.535 del Juzgado de Letras de Angol, seguida por los apremios ilegítimos en las personas de Manuel Marcelino Ramírez Zurita, sentencia de 25 de mayo de 2018.

Z. Causa rol 45.343, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidios calificados en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaiquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 09 de noviembre de 2020.

A.1 Causa rol 57.071, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el Homicidios calificados en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia de 09 abril de 2021.

B.2. Causa rol 113.997, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco para investigar el delito de Secuestro Calificado en la persona de Segundo Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia de 02 de junio de 2021.

C.3 Causa rol 45.354, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia de 16 de junio de 2021.

D.4 Causa rol 45.361, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020;

E.5 Causa rol 114.000, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020;

F.6 Causa rol 4-2010, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidios calificados en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018;

G.7 Causa rol 45.362, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018.

H.8 Causa rol 114.007, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidios calificados en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018.

I.9 Causa rol 114.042, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidios calificados en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018.

J.10 Causa rol 113.996, del Primer Juzgado del crimen de Temuco, seguida por el Homicidios calificados y apremios ilegítimos en la persona de Tomás Segundo Esparza Osorio y apremios ilegítimos en la persona de Javier Enrique Esparza Osorio, sentencia de 30 de junio de 2018.

K.11 Causa rol 29.979 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidios calificados de Domingo Obreque Obreque, sentencia de 07 de abril de 2014.

LL.12 Causa rol 45.365, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Luis Armando Horn Roa, sentencia de 25 de febrero de 2021.

M.13 Causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Pedro Millalén Huenchuñir, sentencia de 11 de mayo de 2022.

N.14 Causa rol 44.305 del juzgado del Crimen de Puerto Varas, seguida por el homicidios calificados en las personas de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, sentencia de 25 de enero de 2019.

O.15 Causa rol 45.368 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de José Bernardino Cuevas Cifuentes, sentencia de 30 de marzo de 2019.

P.16. Causa rol 114.103 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de secuestro calificado en la persona de Alejandro Ancao Paine, sentencia de 03 de septiembre de 2021.

Q.17. Causa rol 113.991 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de homicidio calificado en la persona de Ramón Carrero Chanqueo, sentencia de 21 de noviembre de 2022.

R.18. Causa rol 113.478 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de homicidio calificado en la persona de Luis Omar Torres Antinao, sentencia del 13 de junio de 2019.

O.19. Causa rol 114.051 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de secuestro calificado en la persona de José Edulio Muñoz Concha, sentencia del 30 de abril de 2021. Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados.

T.20. Causa rol 5-2013 del ingreso Criminal de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el delito de aplicación de tormentos en la persona de Harry Cohen Vera, sentencia de fecha 30 de septiembre de 2019.

U.21. Causa rol 113.999 del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de aplicación de tormentos con resultado de muerte de Nolberto Enrique Teodoro Seiffert Dossow, sentencia de fecha 03 de octubre de 2019.

V.22. Causa rol 114.058 del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de apremios ilegítimos (tormentos) en la persona de Manuel Antivil Huenuqueo, sentencia de 30 de octubre de 2019.

W.22. Causa rol 6.345 del ingreso Juzgado del Crimen de Chile Chico, seguida por el delito de Homicidio calificado de José Ananías Zapata Carrasco, sentencia de fecha 09 de marzo de 2020.

X.23. Causa rol 114.043 del ingreso criminal Primer Juzgado del Crimen de Temuco seguida por el delito de homicidio calificado en la persona de Gonzalo Hernández Morales, sentencia de fecha 15 de mayo de 2020.

Y.24. Causa rol 45.464 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Secuestro Calificado de Benedicto Poo Álvarez, sentencia de fecha 06 de junio de 2021.

Z.25. Causa rol 18.782 del ingreso del Juzgado de Letras de Curacautín, para investigar los delitos de secuestro simple, apremios ilegítimos y homicidio calificado de Julio San Martín San Martín, sentencia de fecha 28 de julio de 2022.

A.26. Causa rol 114.039 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, para investigar el delito de Homicidio Calificado en las personas de Diego Celso Saldías Cid, sentencia de fecha 21 de septiembre de 2022.

B.27. Causa rol 45.355 del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, para investigar el delito de Secuestro Calificado de José Ignacio Beltrán Meliqueo, sentencia de 20 de abril de 2023.

C. 28. Causa rol 18-2011 del ingreso de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, para investigar el delito de homicidio simple de José Avelino Runca, sentencia de 27 de julio de 2020.

C.29. Causa rol 63.551 de ingreso del Juzgado de Letras de Angol, para investigar el delito de secuestro calificado de Patricio Rivas Sepúlveda, sentencia de 23 de diciembre de 2022.

14°) Concepto de Lesa Humanidad. Que sobre lo anterior y en cuanto al origen, evolución histórica y definición de los delitos de lesa humanidad el concepto de delitos de "lesa humanidad" o de "leyes o normas de la humanidad", surgieron durante el siglo XX y ha permanecido en constante evolución a través del tiempo. Este concepto, tuvo su origen en varios instrumentos internacionales a saber:

A. Convención de la Haya sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y 1907. Fundamento del concepto de: "leyes de la humanidad" plasmado en la Cláusula Martens: "Mientras que se forma un código más completo de las leyes de la guerra, las altas partes contratantes juzgan oportuno declarar que en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del derecho de gentes preconizados por los usos

establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública" (**Óscar López Goldaracena**. *Derecho Internacional y crímenes contra la humanidad*. 2008. Fundación de Cultura Universitaria, Uruguay. pp. 29 – 34).

B. Que en la Declaración de 28 de mayo de 1915 de los Gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia en la que denunciaron las masacres a los armenios por parte del Imperio Otomano como crímenes de lesa humanidad, tal como lo expresan los autores (Derechos Humanos: Justicia y Reparación. **Ricardo Lorenzetti**, editorial Sudamericana). Hay que precisar, como lo ha dicho la literatura, que el crimen contra la humanidad excede con mucho en su conducta el contenido ilícito de cualquier otro delito. Asimismo, el Derecho Penal no está legitimado para exigir la prescripción de las acciones emergentes de estos delitos y si lo hiciere sufriría un grave desmedro ético: no hay argumento jurídico ni ético que le permita invocar la prescripción (Nueva Doctrina Penal, "Notas Sobre el Fundamentos de la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad" **Eugenio Raúl Zaffaroni**, pág. 437 a 446). Del mismo modo, el crimen de lesa humanidad es aquel injusto que no solo contraviene los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, esto es, se mira al individuo como cosa. La característica principal es la forma cruel y bestial con que diversos hechos criminales son perpetrados. Sin perjuicio de otros elementos que también lo constituyen como son la indefensión, la impunidad, que serán analizados con posterioridad. Es un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes.

15°) Que en una reflexión más integral podemos indicar que una perspectiva para abordar la justicia de transición es el valor social y jurídico de la verdad, esto es, la función que asume el concepto de verdad no sólo en contextos específicos, sino también en la justicia de transición y en especial en el plano más amplio de la dinámica social política y jurídica. Así Bernard Williams nos plantea las virtudes de la verdad como la sinceridad y la precisión en referencia a la realidad, son factores esenciales en la dinámica social. El mismo autor plantea la conexión entre verdad y política e indica que la verdad constituye una

característica esencial de la democracia por cuanto asegura la libertad de los ciudadanos contra el poder tiránico. Plantea también que la exigencia de que el poder actúe el valor de la verdad determina el factor efectivamente democrático en el ámbito del sistema político liberal. Esto es, el valor político de la verdad deriva del hecho de que la medida de un sistema político funda sus relaciones entre el poder y los ciudadanos en la verdad y determina el grado de democracia del sistema. El poder tiránico se funda en una verdad envenenada, es decir, sobre una mentira, mientras que el sistema democrático se funda en el principio de verdad. Por su lado, Michael Lynch insiste en el valor fundamental de la verdad en el contexto de la democracia liberal, puesto que señala que si nos importan los valores liberales, nos debe importar la verdad. Por otro lado, desde un punto de vista más amplio el principio de la verdad se configura como una condición esencial para la efectividad del ordenamiento jurídico, esto es, la efectividad del ordenamiento jurídico se funda en la hipótesis de que el sistema sea capaz de establecer la verdad respecto de tales conductas. Más específico, la consideración del valor jurídico de la verdad se refiera a la administración de justicia. En términos más simples, en palabras de Gerome Frank, no existe una decisión justa que se funde en hechos equivocados. Es decir, la verdad de los hechos es una condición necesaria para que se arribe a una decisión justa. A propósito de la justicia de transición ha habido un discurso ambiguo, puesto que se ha expresado que el silencio y el olvido respecto de los crímenes pasados son el mejor método para facilitar la construcción de la nueva sociedad. Esto puede ser respondido no solo por las víctimas sino por la sociedad entera en cuanto puede ser difícil o imposible aceptar que los graves actos de violencia cometidos contra miles de personas sean silenciados en nombre de la pacificación social. Hay que reflexionar sobre las dudas que surgen, sobre el tipo de paz social que se quiere lograr sobre la base de la falta de verdad efectiva sobre los crímenes y las correspondientes responsabilidades relacionadas con los hechos cometidos. El principal efecto del silencio es que antiguos criminales escapan masivamente de la justicia (ejemplos caso del Alemania post nazista y la Italia post fascista) se convierten en buenos y honorables ciudadanos de la democracia, en ese sentido se pregunta el autor si realmente se puede hablar de democracia cuando se habla de un sistema político que evita sistemáticamente la búsqueda de la verdad sobre sus precedentes históricos inmediatos, no obstante ser clara la cantidad y calidad

de los crímenes cometidos. En consecuencia, citando nuevamente a Williams, es que el diagnóstico es negativo respecto a las pretendidas democracias que sistemáticamente rechazan la búsqueda de la verdad. (**Michele Taruffo** (2018): “La verdad. Consideraciones sobre la verdad y justicia de transición” En Revista de Estudios Judiciales, año 2018, n° 5, ediciones DER. pp. 19 – 30).

C. DECLARACIONES INDAGATORIAS.

16°) Que prestando declaración indagatoria de **JORGE DANIEL GARCÉS YÁÑEZ (29 años de edad para la fecha de ocurrencia de los hechos)**, quien declaro de fs. 331 a 334 (tomo I), de 335 a 336 (tomo I), 349 a 350 (tomo I), 394 a 396 (tomo II), 456 a 457 (tomo II), 495 (tomo II) y de fs. 653 a 654 (tomo II).

En declaración extrajudicial del 11 de abril de 2014, **de fs. 331 a 334 (tomo I)**, acota que ingreso a Carabineros en el año 1965 y se acogió a retiro en el grupo de instrucción de la Prefectura de Temuco en el año 1996. Aduce que entre 1966 a 1968 cumplió funciones en la guardia del palacio de la Moneda, bajo las órdenes del teniente Adrián Fernández Hernández, entro otros. Advierte que en el año 1969 hizo un curso de Marenga y más o menos como el 8 de septiembre de 1973 llego a la Tercera Comisaría de Osorno, donde nuevamente se encontró con Adrián Fernández Hernández, quien era capitán. Adosa que debido a que la situación estaba muy revuelta y como era hombre de confianza de él le dio la misión de custodiar su casa ubicada en la calle por lo cual se salía hacia Puerto Montt, como una cuadra más allá de otra que bajaba hacia el cruce Lynch, parece que la calle se llamaba Manuel Rodríguez, agrega que se trataba de una casita nueva y allí cuidaba a su familia compuesta por su señora, que trabajaba en la Municipalidad al parecer, dos mellicitos, una niñita y la suegra, Basa que a él le mandaron antes del 11 de septiembre y después siguió allí al punto de que vivía y comía allí, cumplía sus funciones de uniforme y su labor consistía en acompañar a los niños y custodiar a la familia. Consultado de porque existía esa custodia, comunica que antes del 11 habían tomas y después del 11 con mayor razón porque había más movimiento, había toque de queda. Él dormía en una pieza que había y el comisario por lo general dormía en su casa. Delibera que a fines de diciembre o los primeros días de enero, coincidente con el traslado del capitán, volvió a la tercera Comisaría y se hizo cargo de su especialidad, referente al manejo de caballos, labor en la que le ayudo Gustavo Muñoz Albornoz, con quien

era amigo y al que había conocido en Santiago cuando él estaba a cargo de una clínica veterinaria, esto es, cuando le correspondió hacer el curso de marenga. Dice que no tiene ninguna información sobre lo que ocurrió en la base de la Tercera Comisaría entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, tampoco sabe lo que sucedió o pasó en los destacamentos de la Tercera comisaria en ese periodo. Eso aconteció pues él se encontraba en la casa del Capitán. Niega haber participado en procedimientos ordenados por el capitán Fernández entre el 11 de septiembre y 31 de diciembre de 1973, a sectores de la tercera comisaria, por la misma razón, esto es porque tenía que cumplir la misión de custodiar la casa del capitán. Difunde que entre el 11 de septiembre y 31 de diciembre de 1973 si fue a la base de la tercera comisaria seguramente a buscar ropas pero no lo recuerda, o el día de pago. Dice que en ese tiempo hubo mayor movimiento, se refiere a que había toque de queda y carabineros tenía que salir a controlar. No sabe si se detuvieron a personas por motivos políticos o partidarios de la Unidad Popular en ese periodo, pues él no hizo servicios. Basa que está seguro que no salió a ningún procedimiento para detener personas o retirar detenidos, respecto de lo cual no tiene ninguna duda. Destaca que en ese mismo periodo no fue requerido para cumplir ninguna función que dijera relación con su especialidad de marenga. Tampoco supo de ninguna instrucción relativa a su especialidad entre septiembre y diciembre de 1973 y tampoco específicamente que se hubiera dispuesto o instruido sobre los caballares. Detalla que después se habían agregado caballos al recinto de la SAGO. Da gracias a Dios de no haber estado involucrado en ninguna detención o tortura pues si a él lo hubieran mandado a hacer no sabe si hubiera dado cumplimiento ya que él tiene principios. Glosa que cuando estuvo custodiando la casa del capitán Fernández no le tocó ver dirigentes poblacionales que preguntarán por el capitán Fernández y fueran recibidos por él. Es efectivo que en Osorno existió un grupo de instrucciones que dependía de la prefectura, que debió tener más o menos unos sesenta alumnos. También es cierto que le ordenaron acompañar a ese grupo cuando hizo una instrucción con campaña en el sector de Trumao a orillas del río Bueno, allá por el año 1975, si mal no recuerda, ese grupo estaba a cargo del jefe que uno de sus apellidos era Kreisel, andaban más oficiales pero no recuerda quienes eran. Esgrime que estuvieron como una semana instalados en la casa de un señor vals, con carpas de campañas y las actividades consistieron en reconocimiento de

terrenos efectuados a pie o caballo. Indica que no salió con el grupo y su función era cumplida en el mismo campamento que consistía en la atención del ganado. Explana que no vio otras actividades. No vio que practicaran detenciones de personas. Tampoco que trajeran detenidos a la casa de Vals. Eso fue en invierno pues llovía. Justifica que no recuerda nada especial que hubiera salido de las actividades normales de la instrucción. No sabe si falleció alguna persona con motivo de las actividades del grupo de instrucción. Puntualiza que se vino como dos días antes que terminara la instrucción, insiste en que nunca se enteró de que falleciera alguna persona. Ahora que el tribunal lo menciona indica que supo que una persona se ahorco en la casa del señor Vals, aunque no sabe si estaría detenida o no. Ostenta que supo por la prensa que esa persona se había ahorcado por asuntos de abigeato o porque lo andaban persiguiendo, se imagina los carabineros. Parece que se ahorco después de que hubo esa instrucción y él no estaba allí parece que estaba en la base. Invoca que ahora recuerda que esa muerte ocurrió cuando ese grupo estaba haciendo instrucción pero no recuerda si él estaba presente cuando eso sucedió. Precisa que en las mañanas se daban las novedades y no recuerda haber escuchado una cosa así. Consultado propone que aunque es una especulación seguramente esa persona no fue bien allanada por los alumnos y la gente inocente se aflige mucho por una detención y reacción inadecuadamente. Insiste en que no sabe quién sería esa persona y no escucho otra versión al respecto. No sabe que procedimiento se haría.

En diligencia de careo con Luis Humberto Pinol Carrillanca, de fecha 30 de noviembre de 2004 **de fs. 335 a 336 (tomo I)** destaca que el señor que está a su lado, a quien reconoce como carabinero del Reten Bahía mansa debe estar confundido porque para empezar él era Cabo y al tiempo después ascendió a Sargento, en el año 1974 o fines de 1975, no recuerda bien, y él no acompañó al Capitán Fernández en esa ocasión. Detalla que no tiene ningún problema personal con él y le sorprende escuchar lo que está diciendo. Distingue que naturalmente que él no lo conoció después de diciembre de 1973 pues a partir de esa fecha comenzó a salir a herrar a los retenes porque además él había llegado en septiembre de 1973 a la tercera comisaria. Glosa que a pesar de que, a Gustavo Muñoz lo conocía de antes, cuando llegó a la Tercera Comisaria en septiembre de 1973, se enteró de que le decían “Loly”, aunque no sabe porque. Insiste en que no participo en ese procedimiento. Por otra parte espeta que lo que

ha dicho es lo que sabe y que no sabe nada más. Efectivamente en esa época escucho que había existido un ataque al retén y que habían muerto personas, aunque no sabe si son civiles o carabineros. No supo que hubiera fallecido algún colega con ocasión de ese ataque. Ni se percató de huellas o rastros de ese ataque cuando le toco estar de agregado en ese retén.

En diligencia de careo con Guillermo Antilef Quintul de fecha 13 de enero de 2005 de fs. 349 a 350 (tomo I), decanta que la persona que está a su lado la ubica como ex carabinero pero no sabe su identidad. Ahora que escucha su nombre recuerda que efectivamente era de apellido Antilef. Él salía con el capitán Fernández pero en el año 1974 y en visitas de inspección a los retenes y donde él le llevaba como secretario para tomar notas. Incluso en una oportunidad lo acompañó a cascadas y pasamos a un campo de su suegra a ver sus animales. Decanta que él no participo en ningún operativo de detención pues la mayor parte de los meses estuvo de punto fijo en el domicilio del capitán Fernández. Preguntado porque ha variado en su declaración pues anteriormente señaló que había estado en esa función desde el mismo 11 de septiembre hasta que el capitán Fernández se fue. Descarga que en esa labor estuvo desde el mismo día 11 hasta los primeros días de enero de 1974. Apunta que nunca fue testigo ocular de algo relacionado con la investigación. Tomo conocimiento de que había habido un ataque al retén pero no sabe nada más.

En declaración judicial de fecha 14 de mayo de 2015, de fs. 394 a fs. 396 (tomo II), su función en Carabineros era ser Marenga, lo que significa ser enfermero de ganado. Esa fue su función durante toda su carrera. Específicamente el año 1973, se encontraba integrando la dotación de la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno, a cargo del Capitán Adrián Fernández. Esa unidad tenía como 10 destacamentos donde había ganado, por lo que permanecía muy poco en la Comisaría, pues debía ir a atender al ganado de todos esos lugares. En general, firmaba en la mañana y luego salía a realizar sus funciones, regresando en horas de la tarde. Aduce que excepcionalmente realizó funciones de vigilancia cuando, por ejemplo, había un espectáculo, un partido de fútbol o algo similar y, se necesitaba más personal, pero como dijo esto sólo fue ocasionalmente. Advierte que después del Golpe Militar, siguió siendo Marenga, pero a la vez, el Capitán Fernández le dio la

orden de custodiar su hogar y a sus familiares. Esto lo hacía en el domicilio que él tenía en Osorno, no recuerda la calle, pero está en la salida norte que da hacia Puerto Montt. Ahí vivía su señora, su suegra y tres hijos menores. Adosa que esto ocurrió desde el mismo 11 de septiembre en adelante y por un período largo, más hasta enero del año siguiente aproximadamente, no lo recuerda bien y, desde ese domicilio se dirigía a los otros destacamentos a cubrir sus labores como Marenga cuando era requerido. Apunta que esto se lo informaba generalmente el mismo Capitán Fernández cuando llegaba en la tarde. Cuenta que permanecía permanentemente en la casa de Fernández y las noches las pasaba despierto vigilando. Sólo dormía en las mañanas un par de horas. Delibera a su casa iba a cambiarse ropa y por escasos momentos. Fue una época muy dura. Destaca que él era Cabo 1º y debe haber tenido unos 28 a 30 años. Detalla que en cuanto a los hechos materia de esta causa, nunca supo nada de la víctima señor Gutiérrez que se le da a conocer en este acto. Es más, nunca le tocó participar en procedimiento sobre detenciones o actos de esa naturaleza. Distingue que efectivamente conoció al señor Nelson Rozas, quién era Carabinero y trabajaba en Bahía Mansa como auxiliar de enfermería atendiendo la posta. A él no puede imputarle ningún hecho irregular. Nunca supo de nada malo que hubiera cometido. Entiende que actualmente está fallecido. Al ser consultado por si conoció al grupo de confianza del Capitán Fernández el tribunal glosa que nunca supo de ese grupo que se le pregunta. Conocía a todos los funcionarios de la Comisaría, pero entendía que realizaban sus funciones comunes y nada más. No se comentaba que algunos tuvieran alguna actividad extra con el Capitán. Consultado nuevamente el testigo si supo para qué se ocupaba el subterráneo de la Comisaría, expone que: En alguna oportunidad vio que la Comisión Civil utilizó el subterráneo para interrogar detenidos. En ese tiempo él no sabía por qué se ocupaba ese lugar, pero ahora, al pasar los años y saber más cosas, entiende que se utilizó como lugar de torturas. Espeta que no supo de ningún funcionario de la Tercera Comisaría que hubiera utilizado este lugar para torturar, pero debe aclarar al Tribunal que sus colegas no le querían porque decían que él era cobarde y, por ello, no tenían contacto con él. Consultado el testigo los horarios en que llegaba el Capitán Fernández a su hogar, explica que él llegaba siempre tarde, entre doce de la noche y una de la mañana, le daba alguna instrucción, se encerraba

en la cocina y luego se iba a dormir, para después levantarse muy temprano y seguir sus actividades. Narra que en relación con el Retén Bahía Mansa y de acuerdo a lo preguntado, efectivamente escuchó que esa Unidad había sido atacada y que habían muerto algunos extremistas. Esa fue la versión oficial que incluso salió en los diarios y que alteró a la gente del pueblo de Bahía Mansa. Posteriormente se le pregunta al testigo cómo es que no sabe más de estos hechos si, de acuerdo con lo señalado por el señor Pinol Carrillanca y agregado a fojas 335 de autos, él lo vio junto al grupo de funcionarios que Fernández utilizó para detener a los tres imputados por el supuesto ataque al Retén de Bahía Mansa, a lo que el deponente relata que eso no es cierto, Pinol se equivoca, él no participó de esa detención ni de ninguna otra por motivos políticos. Contrainterrogado el testigo si conoció a los funcionarios Huentrutripay, Gaete, Antilef, Inostroza, Águila, Canales, Albornoz, Pérez y Conejeros, acota que el primero trabajaba en la Tercera Comisaría; a Gaete no lo recuerda; sobre Antilef era de la oficina de partes y ayudaba al escribiente; Inostroza era guardia de almacén; Águila era uno grande y buen investigador en delitos de abigeato, se decía que era un perro que no tenía compasión con nadie; Albornoz lo conoció como Marenga a cargo del Club ecuestre de Osorno y apodado "el loly"; Pérez era un funcionario de la Tercera y, de Conejeros supo muy poco, porque era un funcionario que estaba jubilado y muy apegado a la Comisaría. Aduce que siempre estaba ahí, tenía hartos amigos y era bueno para las "pichangas". Glosa que Fernández no le comentaba nada mientras estuvo en su hogar, él sólo daba órdenes, que en su caso consistían en el resguardo de su familiar y en ir a ciertas unidades a ver los animales. Revela que en esa época no se cuestionaban las órdenes ni se preguntaba el motivo de ellas. Reitera que nada tuvo que ver en las detenciones de Bahía Mansa y respecto del señor Gutiérrez. Esto lo jura ante Dios.

En declaración judicial de fecha 11 de junio de 2015, **de fs. 456 a 457 (tomo II)**, revela que en el año 2004 fue detenido durante seis días en la Tercera Comisaría de Osorno. Se refiere a otra víctima. Ensaya que para septiembre del año 1973, era dotación de la Tercera Comisaría de Osorno, debiendo custodiar desde el mismo 11 de septiembre en adelante; por periodo de tres meses, la casa del Capitán Adrián Fernández Hernández, por lo tanto no participó nunca en labores operativas, una vez que terminó esta custodia,

regresó a sus labores habituales, como enfermero de ganado atendía a los diferentes destacamentos, estando siempre pendientes de los animales. Invoca que ni siquiera tenía contacto con la guardia, debiendo pasar a realizar sus funciones por diferentes retenes constatando el estado de los caballos de la institución, registrando sus salidas cada vez que salía y regresaba a ella. Indica que en agosto del año 1974, era de dotación de la tercera Comisaría de Carabineros de Osorno, hasta el año 1980, en la cual fue destinado a la ciudad de Santiago. Puntualiza que no recuerda la fecha. Sugiere que en general, tenía muy poco contacto con los Carabineros de la comisaría, se dedicaba específicamente a labores con los animales. Recuerda que para la época, quien estaba a cargo de la comisión civil, era el Sargento Muñoz Estuardo, no se recuerda de los demás funcionarios.

En declaración judicial de fecha 09 de septiembre de 2015, **de fs. 495 (tomo II)**, en cuanto a los dichos de Héctor Vargas Soto, que el Tribunal le da a conocer en este acto, reitera sus dichos anteriores, es decir, que aunque trabajó en la casa de Adrián Fernández, él no vio ni tuvo nada que ver con ningún hecho de muerte. Descarta rotundamente haber alojado en la casa de Héctor y, menos que él haya tenido pesadillas o haber confesado haber visto a Fernández matar a tres personas. Eso no es cierto. Aduce que Héctor debe estar equivocado, posiblemente, porque en esa época él bebía mucho. Desconocía que Héctor estuvo detenido en la Tercera Comisaría, nunca se lo dijo. Adopta que no es amigo de Héctor Vargas, que es conocido de él y que en la época de ocurrencia de los hechos investigados le compró dos cuadros, motivo por el cual lo conoció. Ninguna otra relación tienen. Anexa que en una ocasión le tocó acompañar al Capitán Fernández al campo que tenía éste en Cascada, donde debió atender a sus animales. Para eso nomás le llevo. Asevera que viene de una familia que por lo general tienen pesadillas, pero ese es una simple coincidencia con lo relatado por el señor Vargas. Reitera que no conoce ningún hecho de relevancia jurídica que pueda aportar a este Tribunal.

Diligencia de careo con Héctor Vargas Soto, de fs. 653 a 654 (tomo II), ratifica íntegramente las declaraciones prestadas con anterioridad ante este Tribunal. Acota que si conoce al señor Vargas, además, que en algunas oportunidades se reunieron en la casa de la señora Teresita para beber un trago y, que en algunas ocasiones alojó en otra casa en Osorno, pero lo hizo en

casa de esa señora, no en la de Héctor. No conoce a la señora de Héctor, porque cuando éste alojó también en casa de doña Teresita venía sólo. Aduce que lo que pudo haber pasado es que durante las conversaciones que tuvieron cuando se reunían, se comentó del carácter de Fernández y hasta dónde él podía llegar con sus acciones, por lo cual el señor Vargas debe haberse equivocado. Por otra parte advierte que Héctor le comentó ese hecho una vez en la casa de Teresita cuando estaba convaleciente. Adopta que nunca alojó en casa de Héctor y por lo mismo, nunca pudo haber gritado y reconocido un hecho de tal envergadura. Eso no pasó, el nunca acompañó a Fernández en ningún operativo. El Tribunal insiste en la diferencia de versiones respecto de haber alojado o no el señor Yáñez en casa de Vargas y señala el primero: Apunta que él no recuerda eso, solo tiene en la memoria que visitó la casa de Héctor para ver unos cuadros, pero nunca que haya alojado ahí. El Tribunal le consulta al testigo Yáñez si Nelson Rosas, debió haber actuado por orden de Adrián Fernández o, dicho de otra forma, si alguno de los fraccionarios de la Tercera Comisaría pudo haber actuado sin el beneplácito de Fernández, a lo que decanta que la disciplina de Carabineros era obedecer órdenes, pero pudo alguno haber tomado una decisión personal. El tribunal insiste al testigo si el carácter de Adrián Fernández era como para desobedecerlo o para tomar estas decisiones autónomas. A lo que descarga que el carácter del Capitán era fuerte, pero la formación de un Carabinero indica que debe rechazar cualquier acción que él estime contraria a derecho.

17°) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **JORGE DANIEL GARCÉS YÁÑEZ**, quien fue sometido a proceso a **fs. 1125 a 1171 (Tomo IV)** con fecha 01 de julio de 2020. **Acusado** según el auto de **fs. 1681 a 1725 (Tomo V)** con fecha 29 de diciembre de 2021, como autor del delito de secuestro calificado en su carácter de lesa humanidad, de Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez, perpetrado en el sector de Bahía Mansa de Osorno, a contar del 5 de octubre de 1973. Que si bien el acusado se ubica en la fecha y lugar, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas y ponderadas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados y específicos relacionados y aquilatados puntualizando lo siguiente:

A. DECLARACIONES.

A parte de lo que se ha detallado en la prueba de los testigos conviene puntualizar respecto de éstas personas lo siguiente:

A.1 Rubén Molina González. Quien declaro de fs. 246 a 248 (Tomo I) y de fs. 288 a 289 (tomo I), funda que mientras estuvo trabajando en la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno, el jefe de Tenencia era el Capitán Adrián Fernández Hernández, el que luego del golpe militar instauró una especie de grupo de muerte compuesto por Rafael Pérez Torres, Gustavo Muñoz Albornoz (apodado Loli), Rolando Becker Salís, Canales, Rosas Silva y Eliseo Águila Salgado, no recordando los nombres de los otros funcionarios, que incluso fueron juramentados en secreto por Fernández en forma previa de sus actividades ilegales. Soflame que este grupo de personas salía habitualmente a hacer operativos y luego regresaban con personas detenidas, las cuales dejaban en los calabozos. Acota que en horas de la noche, ellos eran llevados hasta el subterráneo de la misma Comisaría, donde eran torturados, llegando incluso a ser asesinados en el mismo lugar. Esto lo supo por comentarios de otros colegas que se filtraron en esa época, sin recordar actualmente quiénes se lo dijeron. No obstante, un hecho que recuerda claramente, fue que el Jefe de la Tenencia de Bahía Mansa de apellido Rosas, le dijo que estuvo presente en un interrogatorio donde Becker Salís en su desenfreno y agresividad, empezó a darle de culatazos al detenido con intención de matarlo, pero aquél señor simplemente no moría. Por ello, Becker sacó un cuchillo y lo degolló, para luego chupar la sangre que quedó en el arma blanca y decirle al cadáver "así que no querías morir". Se comentaba de la persecución que Fernández tenía respecto de los funcionarios Santana y Ubilla, a los cuales quiso acusar de terroristas una vez, haciendo uso de dos prostitutas que estaban detenidas, a las cuales instruyó que acusaran a dos funcionarios de lentes. Suma, hecho ocurrido a Santiago Aguilar, a quien conoció desde joven. Destaca que este señor era amigo de Fernández, porque la señora del Capitán era secretaria de Santiago Aguilar y se visitaban. El día en que fue detenido Aguilar al momento de ir a renovar su salvoconducto, estando con la vista tapada escuchó la voz de Fernández, a quién le dice algo así como "qué

bueno que llegaste Adrián, ahora las cosas se arreglarán", momento en que Fernández desenfundó su arma y le dispara en la cabeza a Santiago. Detalla que eso se lo contó su colega Juan Moreira. Delibera que fue acusado por Fernández por ser un "peligroso extremista infiltrado en Carabineros" junto con otros cuatro o cinco funcionarios más. Por suerte, nunca pudo lograr su objetivo y logró seguir trabajando hasta su retiro. Aclara que el subterráneo utilizado para las torturas es el que se inundaba.

A.2. Rafael Pérez Torres, quien declaró a fs. 553 a 554 (Tomo II), 627 a 630 (Tomo II) y de fs. 632 a 633 (Tomo II), en lo pertinente atina que en el mismo mes de septiembre se ordenó cerrar el retén y los enviaron a la Tercera Comisaría de Osorno, a cargo del capitán Adrián Fernández Hernández y cuya dotación era como de treinta personas. Aduce que el capitán Fernández les entregaba regularmente, no todos los días, los distintos bandos con el detalle de los nombre de las personas que debían detener. Esos documentos eran escritos a máquina, aunque no sabe quién escribía esos documentos. Que Fernández también salía hacer patrullaje y detenciones. Era muy severo con sus propios funcionarios. A finca que del asalto al Retén de Bahía Mansa tuvo conocimiento, aunque no puede dar fe de que ello haya ocurrido. También supo que los atacantes fueron detenidos y muertos, lo que llegaron fallecidos a la comisaría. En ese procedimiento estuvo el capitán Fernández y Sergio Rosas, por su parte Nelson Rosas Cárdenas estaba en esa época en el mismo Retén de Bahía Mansa. Que él no fue a ese sector aunque lo han inculpado de haber sido partícipe de hechos ilícitos. Preguntado si en el operativo pudo haber participado el marenga Jorge Garcés responde que no sabe si este estuvo o no, pero también participaba de operativos. Éste siempre andaba con Adrián Fernández, al igual que Canales y Eliseo Águila. Dice que Garcés era el guardaespaldas de Fernández. Agrega, Garcés era cabo antiguo mandaba a todos los que tenían menos tiempos en la filas. Éste era medio agresivo, especialmente cuando solía andar con trago, ya que era protegido del jefe Fernández.

A.3 Federrina Del Rosario Barrientos Cancino. En **declaración extrajudicial** de fecha 01 de septiembre de 2015, rolante de **fs. 567 a 569 (Tomo II)**, sostuvo en lo pertinente que su marido Carlos Delgado Muñoz falleció el año 2003, y trabajaba como conductor de la empresa de buses "Mar Bus" realizando viajes de Osorno a Bahía Mansa, que para el año 1973 después del golpe de

Estado, su marido le contaba que en algunos viajes los carabineros paraban el bus, generalmente antes del cruce con Pocatrihue o en la "Visera", sector que queda como a 14 kilómetros de Bahía Mansa. En esos controles los carabineros les pedían carnet de identidad a los pasajeros, revisaban el equipaje y en algunas ocasiones bajaban a pasajeros. Decía que con los fusiles los carabineros le pegaban a esa gente y luego hacían que el bus siguiera su camino, quedándose ellos con las personas que bajaban, le parece que detenidas, siendo esos los únicos incidentes que le contaba su marido.

A.4 María Gladys Ávila Rosas. En **declaración extrajudicial** de fecha 26 de febrero de 2003, rolante de **fs. 657 a 658 (Tomo III)**, arguye que en el año 1973 no tenía militancia política, pero era presidenta de un sindicato agrícola y delegada ante la CUT de Osorno. Vivía en ese entonces en el sector El Volcán, Las Cascadas, comuna de Puerto Octay. El día 17 de septiembre de 1973, supo que era requerida, su nombre salió en un bando militar. Presentándose en el Retén de carabineros de Las Cascadas, narrando lo vivido en ese contexto, que posteriormente fue trasladada a diferentes unidades policiales entre ellas la Tercera Comisaría de Osorno, donde solo estuvo un momento, siendo enviada a la Tercera Comisaría de Raque a cargo de Adrián Fernández, a quien conocía desde mucho antes porque compraba en el almacén del sector Las Cascadas y animales a su abuelo. Arguye que en dicho lugar estuvo detenida por alrededor de siete días y torturada, siendo llevada al subterráneo utilizada como sala de tortura, detallando todo lo acontecido con ella y las cosas que pudo observar en dicho lugar. Destaca que Adrián Fernández era quien daba las órdenes de las torturas. Revela que muchas veces llegaban militares y era el propio Fernández el que entregaba a algunos detenidos a ellos o a investigaciones. Continúa relatando lo vivido. Esgrime que la segunda vez que fue detenida en la Tercera Comisaría de Raque, estaba Adrián Fernández y pudo ver a su primo Cesar Ávila en el subterráneo donde torturaban, no volviéndolo a ver. Sigue refiriendo a su contexto propio

A.5 Ecar Adolfo Guarda Rosas, declaro de fs. 787 a 788 (Tomo III) y de fs. 892 a 893 (Tomo III). A finca que cuando joven trabajó como cuatro años para la empresa de buses de Tuchie, como auxiliar del recorrido de la micro que iba de Bahía Mansa a Osorno. Dos veces carabineros detuvieron el bus y en la segunda vez se llevaron a un "gallo" más joven, ese joven tiene que haber tenido 17 años,

esto ocurrió en 1973. Detalla que carabineros no dijo nada, solo lo tomaron de la mano, esto fue en el kilómetro 30 con dirección a Bahía Mansa, lo recuerda con claridad porque ese joven era casi de su edad, no supo qué pasó con ese joven después del 73. Atestigua que no sabe de qué retén eran esos carabineros, porque estaban en mitad del camino, eran como tres carabineros, dos tomaron al chico y lo dejaron al lado de la patrulla, y ellos siguieron el viaje. Este joven iba "pelaito", no llevaba ninguna cosa. Anexa que en otra oportunidad un carabinero bajó dos personas del bus, porque parece que habían robado, esto también ocurrió en el trayecto a Bahía Mansa, hasta Bahía Mansa serían unos 60 kilómetros. Sustenta que cuando detuvieron a este joven, él no decía nada, pero les dijo: "aquí estoy señores, aquí está mi cabeza, háganla pedazo", frente a ellos los carabineros no le hicieron ninguna cosa.

A.6 José Oberto Santana Oyarzún, depone de fs. 162 a 164 (Tomo I), fs. 251 a 253 (Tomo I) y de fs. 292 a 293 (Tomo I), en lo pertinente depuso que en la Tercera Comisaría Osorno, el Comisario Jefe era el Capitán de Carabineros don Adrián Fernández Hernández, quién antes de llegar a la mencionada, era el ayudante del señor Intendente o Gobernador de Osorno en la época, oficial que tenía bastantes problemas con el personal subalterno que no compartía sus ideologías y actividades sociales que realizaba dentro de la unidad policial, ya que era bastante prepotente. Recuerda que junto al Carabinero Roberto Ubilla Soto los dejaron a cargo del servicio de guardia en forma permanente, hasta que el día 14 de septiembre del año 1973 se les acerca el Suboficial Mayor Oscar Vargas Vargas, quien les informa que tenían que presentarse en la oficina del Capitán Adrián Fernández Hernández, por lo que junto a Ubilla llegaron alrededor de las 06:00 a 07.00 horas a la oficina del oficial, quién les comunica que desde ese instante estaban en calidad de arrestados, por lo que iban a ser trasladados a las dependencias de la Tenencia Raque Alto; esta situación le extrañó bastante, por lo que le pidió al Capitán Fernández que le señalara los motivos por los cuales estaban siendo puestos en calidad de arrestados, respondiéndole que se quedara callado, pero como insistió en su pregunta, le señaló que mejor se quedara calado o lo pondría a disposición de guerra, pero de igual forma le señaló que era por traición a los principios institucionales y al gobierno imperante, agregando que todo eso ocurrió en presencia del personal que se encontraba afuera de su oficina, ya que en ningún momento cerró la puerta. Luego, el capitán mencionado hace

ingresar a personal de la Comisaría, quienes se encontraban portando fusiles sic, tales como el Suboficial Mayor Oscar Vargas Vargas, el escribiente Vladimiro Fernández Rojas, el Sargento Segundo Eliseo Águila Salgado, Gustavo Muñoz Albornoz, Rafael Pérez Torres, Sergio Rozas Silva, Juan Canales y Rolando Becker Solís, quienes los apuntaban y los trasladaron a que reunieran sus pertenencias y quedaron a la espera de la llegada del Teniente Sergio Saavedra Olmedo, Jefe de la Tenencia de Raque Alto, quién una vez que llegaron a la Tenencia señalada, les comunicó que no podían portar armamento ni podían salir de las instalaciones del cuartel policial. En esa condición estuvieron hasta diciembre del año 1973, si mal no recuerda. Ignora todo antecedente respecto de la víctima de la presente investigación, y que a través del tiempo y por comentarios que realizaban los mismos funcionarios de la Tercera Comisaría de Osorno, que el Comisario Adrián Fernández Hernández, junto al grupo de funcionarios anteriormente nombrados, cumplió funciones operativas una vez que se instauró el gobierno militar, realizando diversas detenciones de personas civiles en distintas partes de la jurisdicción de la Tercera Comisaría de Osorno, y que presenciaba las torturas de las distintas personas que llegaron detenidas. Destaca que escuchó que habían habilitado el subterráneo de la Tercera Comisaría para efectuar las torturas de los detenidos, pero eso no le consta. Lo único que observó fue una noche cuando les hicieron levantarse y formarse frente a varias mujeres, incluso algunas estudiantes, las que fueron torturadas a golpes de puño y con las culatas de los fusiles, insistiéndoles que reconocieran que ellos eran del grupo partidista contrario a los del golpe militar. Por suerte esa noche las mujeres estoicas mantuvieron su posición de no conocerlos, lo que era cierto por lo demás. Como nota ilustrativa tiene conocimiento que en la solicitud efectuada por el colega Becker como exonerado político, explica que le habían dado órdenes de matar a tres colegas, entre los que salía mencionado. Señala, además, que los hechos demuestran que Adrián Fernández tuvo mucho poder en esa zona, lo que aún no logra explicarse. Por eso hizo lo que quiso y anduvo por toda la zona, incluso por territorios que no eran de su jurisdicción. Señala que aunque nunca vio a Fernández personalmente, sí supo que él salía con su grupo a realizar operativos y detener personas. Descarga que según supo por comentarios, Adrián Fernández participó tanto de las detenciones como de las torturas.

A.7 Luis Humberto Pinol Carillanca. Depone de fs. 173 a 176 (Tomo I), 335 a 336 (Tomo I), 254 a 255 (Tomo I), 267 a 268 (Tomo I), 324 a 329 (Tomo I), 335 a 336 (Tomo I), 347 a 348 (Tomo I), 829 a 831 (Tomo II) 837 a fs. 838 (Tomo II) y de fs. 975 a 976 (Tomo III). En lo pertinente glosa, que el Capitán Fernández le señaló que sabía que habían detenido unos extremistas y que él se personaría en el Retén al día siguiente. Cuando llegó al Retén se dio cuenta que las tres personas antes señaladas se encontraban nuevamente detenidas, esta vez como sospechosas de tener 14 molotov, algunas armas en mal estado y un mapa de la casa del Jefe de Retén. Esta vez esas personas quedaron recluidas en espera de ser puestas a disposición de la Tercera Comisaría de Osorno y del señor Fernández. Al día siguiente, en horas de la mañana, el Capitán Fernández llegó al Retén acompañado de unos cuatro vehículos y unos 15 funcionarios, incluso andaba acompañado de civiles que reconoció como ex militares. Después pidió el libro de guardia, sacó la hoja donde se registró la detención y le ordenó a uno de sus funcionarios que escribiera lo que él le dictaría, creando una historia de la detención de esas personas distinta a la verdadera. Luego subieron a los detenidos a los vehículos y se retiraron, llevándose consigo el Capitán Fernández el libro de guardia y ordenándole que concurriera al día siguiente a firmar el parte policial que él confeccionaría. Al día siguiente fue cerca de la cárcel, donde estaba el personal del Tribunal Militar, donde firmó el parte y donde debió corroborar falsamente toda la historia de Fernández, entre la que se señalaba que esas tres personas habían atacado el Retén y, además, habían fallecido cuando se repelió el ataque. Anexa en diligencia de careo con Jorge Garcés Yáñez, de fs. 335 a 336 (Tomo I), refiere en lo pertinente es a quién se refiere como “Sargento Garcés que era Marenga”, en su declaración de fs. 5.568; él era uno de los funcionarios que andaba con el Capitán Fernández cuando se retiraron a los tres detenidos que estaban en el Retén de Bahía Mansa, grupo en el que andaban las demás personas que mencionó en esa declaración; no tiene dudas sobre eso. Insiste que ubicaba bien a esta persona, y él dice que estaba cuidando la casa del Capitán, cosa que no puede ser, porque no lo vio allá, no podría ser, porque cómo lo iban a destinar a eso solamente, y además, porque lo vio en la Tercera Comisaría no sólo una vez, sino que varios días en calidad de disponible. No agrega nada más porque no tiene dudas al respecto. En dichos posteriores, colige que cuando llegó el Capitán Fernández al Retén, sacó la hoja del Libro de Guardia y la tiró al

papelero, luego de eso dio instrucciones y se fue con los tres detenidos en caravana a Osorno, llevándose el Libro de Guardia con ellos, dejándolo citado a la Fiscalía Militar al día siguiente, sin saber nada más por ese día. Al día siguiente fue a Osorno y ahí declaró con miedo porque los militares estaba armados, por lo que tuvo que mentir y decir que efectivamente habían atentado contra el Retén de Bahía Mansa, en tanto que de los detenidos supo que ellos los habían matado en el camino, hasta la fecha nadie le ha dicho el lugar donde los mataron. Tiempo después de lo que acaba de relatar, años después mejor dicho, fue interrogado por un Juez por la muerte de esos jóvenes, y ahí se enteró que había un cuarto joven que había ido a comprar cosas a Osorno, y que al regreso no había llegado a Bahía Mansa, por lo que ahora haciendo memoria, ese joven pudo ser el cuarto integrante de los que les dio la libertad en el Retén. Por otra parte, si bien el Jefe del Retén era él, el Capitán Fernández cuando pasó todo eso era su superior, y él no le contaba nada, tenía su grupo de gente seleccionada con la que realizaba todas las cosas, de hecho el libro al que le sacó la hoja fue reescrito por sus hombres de confianza, entre los que estaba Nelson Rosas de Bahía Mansa. Urde, en lo pertinente de fs. 837 a 838 (Tomo III), recuerda muy bien que mucho tiempo después de ese episodio de los jóvenes, Jorge Garcés le comentó personalmente que él sabía el lugar exacto donde habían pasado a darles muerte a los jóvenes. Supuestamente el lugar fue como a 2 kilómetros del Retén de Raque. Además, Garcés andaba en el grupo con Fernández, tiene que saber dónde específicamente se ejecutó a los jóvenes. El Tribunal le lee la declaración de fs. 772 y siguientes, depone que es efectivo lo que relata Cheuquelaf. Respecto al parte que fue a firmar, indica que no aparecía el cuarto joven en ese documento, solo 3 personas. El que más sabe del cuarto integrante del grupo de los detenidos es Cheuquelaf junto con Rosas.

A.8 Juan Segundo Moreira Garcés. Declara de fs. 256 a 257, 294 a 296 (Tomo I) y de fs. 338 a 346 (tomo I), funda en lo pertinente que en ese tiempo había toque de queda y el deponente junto a sus colegas, de más o menos su misma antigüedad salían a patrullar el sector de Raque Bajo, pero también se dio cuenta de que el Comisario llamaba a personal antiguo a su oficina y de ahí los citaba a una hora determinada y que generalmente eran más, o menos como a las 18:00 horas y a esa hora se reunían y salían en vehículos del SAG; generalmente era uno de esos vehículos con cuatro o cinco funcionarios más el chofer

acompañados del propio Capitán y con fusiles SIG, que eran los que en ese momento se usaban. Espeta que siempre regresaban tarde, más o menos como a la 1:00 de la madrugada cuando el personal estaba durmiendo. Cuando no estaba a cargo el comisario quien iba al mando era el suboficial Inostroza. En la base sabían que el Comisario y ese personal antiguo salían a hacer detenciones a ex partidarios de la Unidad Popular, a quienes seguramente ubicaban desde antes, a diferentes sectores de la jurisdicción de la Tercera Comisaría. Recuerda que el propio Comisario interrogaba, a los detenidos y participaban el escribiente quién redactaba las declaraciones para enviarlas al Tribunal y además del personal antiguo que él refirió, quienes actuaban violentamente pues golpeaban a los detenidos con golpes de puños con el objeto de sacar una información, soflama que eso lo supo porque lo escuchaba desde el dormitorio y además alguno de ellos lo comentaban, lo cual se hacía en el pasillo que existía entre la guardia y el casino y para lo cual cerraban las puertas que daban a la guardia y al pasillo. Acota que uno de los que comentaba era Canales decía "Ustedes son ciegos, sordos y mudos cabritos". Relata que en ese tiempo dadas las circunstancias que se vivían, era perfectamente posible que cualquiera de ellos hubiera podido detener a ex partidarios de la UP sin necesidad de una orden expresa de la Fiscalía, se imagina que ese grupo también haría detenciones en la ciudad de Osorno pues ellos salían a diferentes lugares. Recuerda que estando de centinela en la base, meses después del 11 de septiembre, la mamá de Rodolfo Leveque le preguntó por él ya que eran amigos y allí sospechó que a lo mejor ese grupo lo había detenido pero él no lo vio en la base y eso fue lo que le respondió a la señora. Ella le contó que un furgón verde había sido en el que se trajo a su hijo desde calle Tarapacá y que un sobrino de ellos lo siguió hasta la esquina de la Comisaría en Iquique con República y vio cuando el furgón llegó a la Comisaría. Expresa que en octubre de 1974 contrajo matrimonio y allí Roberto contó que su hermano había sido detenido por Carabineros. Textualmente le dijo "Juanito, Adrián Fernández fue a detener a mi hermano" y después al escuchar conversaciones Roberto se juntó nuevamente con él y le dio las características físicas de los demás, según lo que vio su hermana en Chahuilco, y en base a eso él concluyo que los que anduvieron esa noche con el capitán Fernández junto al chofer Maragaño, el Cheo Águila y Rafael Pérez. Acerca de lo sucedido en Bahía Mansa no recuerda que hubiera existido un enfrentamiento en ese Retén pero sí

que hubo uno en el sector de Pucomo Pascal que queda de Bahía Mansa para Osorno, unos 15 kilómetros más o menos. Arguye que el Sargento Pinol y el Cabo Rosas del Retén de Bahía Mansa dieron cuenta al Comisario Fernández que habían detenido a dos personas de sexo masculino por actividades políticas, porque tenían información de que pretendían asaltar el retén, pero la verdad es que nunca hubo algo concreto.

A.9 María Judith Aucapán Ancapán. En **declaración extrajudicial** prestada con fecha 02 de noviembre de 2015, **rolante a de fs. 535 a 537 (tomo II)**. En lo pertinente precisa que en momentos que se encontraba en casa junto a su marido, sintieron muchos disparos, motivo por el cual después de que terminara la balacera, salieron a la puerta de la calle ya que incluso algunos de esos disparos llegaron a la casa. Recuerda que salió a la puerta y sintió el llanto de una mujer que venía desde una casa que estaba ubicada frente a la suya, como a unos 100 metros, propiedad que era de uno de los tres jóvenes que estaban viviendo ahí. Uno de estos jóvenes era de Osorno y los otros dos de Panguipulli, en total eran dos hombres y una mujer. Precisa que esa tarde noche ella sólo sintió el ruido de los disparos y vio desde la ventana de su casa un furgón de Carabineros, no visualizando a los funcionarios, motivo por el cual no puede proporcionar sus identidades, pero indica que si era el furgón blanco con negro de Bahía Mansa, el único que había en aquellos años en la zona. Recalca que no ubica y nunca había escuchado el nombre de Marcelo Gutiérrez Gómez pero lo que está segura, es que después del 11 de septiembre de 1973 era costumbre que los Carabineros y Militares pararan a los dos únicos buses que viajaban entre Osorno y Bahía Mansa, es decir, el de Carrasco y el de Tuchie, estos controles los hacían tanto en Bahía Mansa, Caleta Pocatrihue, sector Pucomo y otros lugares más de la ruta a Osorno. En dichos controles los Carabineros bajaban a toda la gente, le registraban sus cosas y a veces dejaban detenidas a personas y el bus seguía su ruta, al menos eso le tocó ver en los viajes que efectuaba a Osorno. Volviendo al tema de los tres jóvenes que se estaban quedando frente a su casa y que los Carabineros les dispararon a su hogar, haciendo memoria, años atrás fue entrevistada por una Ministra que le dijo que era de Santiago, a ella le contó lo mismo que está diciendo y además fue dos veces con ella a su ex casa. La primera llevaron una máquina detectora de metales para encontrar las balas, y al

parecer se las llevaron, además de los impactos que dejaron las balas en su casa, la cual dicho sea de paso hoy es habitada por Eleodoro Huiscas Cárcamo.

A.10 Ana Del Carmen López Barría. Depone de fs. 188 a 192, 302 a 308, 356 (tomo I), 466 (tomo II) y de fs. 1506 a 1509 (tomo V). Aquilata que el 12 de septiembre escucho que se llamaba a Jorge por un bando Militar, su cuñado Carlos Hurtado casado con Margoth Aguilar Cubillos, le aviso que Jorge estaba en el Asentamiento Puacho, en el sector “Lomas de la Piedra”, el día 13 de septiembre fue con su cuñado en camioneta y ella hablo con Jorge en el lugar en que estaba, que era una casita de un campesino cuyo nombre le parece es Luis Pinol que actualmente tiene más de setenta años y vive donde mismo. Apunta que le conto lo del bando y él le dijo que habían llegado a esa casita otras personas pero que eran del Partido Socialista, a lo que él le dijo que estaba en compás de espera y que no se podía presentar a las autoridades de la época porque el bando daba veinticuatro horas para hacerlo y si no lo hacían serian ejecutados. Como ella sabía que podía estar vigilada se vistió como campesina y como momentos antes había encontrado en la ciudad a gente que era del Asentamiento y que le dijeron que andaban en un tractor, les pidió que le llevaran a lo que accedieron. Decanta que llegaron al lugar y ella se fue a la casa del Presidente del Asentamiento cuyo nombre era Bernardo, pero no recuerda el apellido, había llegado hacia poquísimo rato, esto fue en la tarde tipo 18:00 horas, cuando vieron que venía la camioneta que usaban Jorge en el servicio, unos furgones verdes que el B.I.D, había entregado al SAG y la cuca de Carabineros con muchos Carabineros. Destaca que por temor se escondió en un baño exterior que hay en el campo, sintió que Carabineros disparaba y la gente gritaba y lloraba. Continúa, allanaron todo pero no buscaron en el baño en que ella estaba, como quedaron carabineros en el lugar, ella arrastrándose y aprovechando la oscuridad se dirigió hacia el monte. Describe que estaba escondida en el monte cuando sintió ruido y era un hijo de don Bernardo, cuyo nombre ahora no recuerda, y le dijo que no se asustara ya que él estaba con su perro. El día 03 de octubre llego en la mañana un joven llamado Marcelo Gutiérrez de unos 18 años de edad. Actualmente desaparecido y le dijo que había visto a Jorge (se había refugiado en el mismo lugar) y que estaba muy preocupado por sus hijos que había nacido el 11 de noviembre de 1972, y dijo que no tenía alimentos y que Jorge necesitaba calcetines y ropa para que llevara. Cimenta que en la mañana del día domingo 07

de octubre de 1973, fueron al hospital y al preguntar por las personas heridas el portero consulto con un carabinero y le dijo que pasa, ahí le dijeron que Jorge estaba muerto. Atestigua que el mismo portero del hospital los llevo a la morgue y ahí vio a Jorge en la mesa del centro con heridas de bala en todo el lado izquierdo y sobre la oreja izquierda se encontraba la cabeza destapada. Cuando retiraban el cadáver llevo a la morgue carabineros y le dijo que por orden del capitán Adrián Fernández Hernández debía presentarse a las 15:00 horas, a la tercera comisaria. Descarga que fue acompañada por su cuñada Angélica Luco y Erwin Brickesak. Destaca que cuando llegaron no dejaron que entrara su cuñada y un hombre bastante mayor de edad vestido de carabinero los hizo pasar a Erwin y a ella en calidad de detenidos. Detalla que a Erwin le empezaron a pegar entre varios carabineros de inmediato. A ella le hicieron pasar a una habitación para que esperara al capitán Fernández y le sacaron el cinturón, pañuelo, cordones de zapatos y todo lo que llevaba en los bolsillos. Glosa que cuando llegó el capitán Fernández le hicieron salir a un pasillo y el mismo carabinero viejo, preguntaba quién más estaba con Jorge en bahía mansa, como ella no sabía se los hizo notar y ese carabinero, delante de otros y del capitán Fernández, le dio un golpe de puño en la cara que lo boto al suelo. Después le llevaron a una pieza donde estaba el Capitán Fernández, otros carabineros y un hombre de civil. Escruta que la interrogaron siempre sobre las otras personas que andaban con Jorge y le insultaban diciéndole que era una comunista y como ella le dijera al capitán Fernández que él había sido amigo de Jorge Aguilar ya que varias veces había ido a la casa e incluso le pedía la camioneta prestada y le respondió que no era amigo de ningún comunista y que estos tenían que morir y que le iba a pasar lo mismo que le paso a Marcelo Gutiérrez, que había dicho todo y que ella debía corroborar la declaración de Gutiérrez, para lo cual le pusieron un casete en que se sentían gritos y como que se quebraban tablas, diciéndole Fernández “esto es lo que hicimos con Gutiérrez” Musita que por boca de ellos mismos se enteró que Marcelo Gutiérrez Gómez era hermano de Edgardo Cárdenas Gómez. Expone que el capitán ordenó que la sacaran y los carabineros la llevaron a un calabozo donde quedo con otra mujer de su edad, 24 años, cuyo nombre no recuerda pero supo que era secretaria o trabajaba en la juventud socialista. Invoca que todas las demás celdas estaban llenas de hombres y cuando habría la reja y nombraban a uno lo sacaban y después volvía gritando y quejándose. Puntualiza que estuvo

detenida seis o siete días pasando por lo mismo y en las noches carabineros se embriagaban y ellos iban a buscar a su compañera de celda y cuando volvía le decía que la habían violado, lo que se repetía constantemente. Aduce que a Fernández no lo vio después que la pusieron en la celda, y la llevaron poniéndole una capucha de saco de papa a un lugar como de subterráneo donde pusieron en una silla o sillón y le amarraron de los pies y las manos. Uno de ellos se metió por la cintura del pantalón unos cables y le ponían la corriente para que ella les dijera quienes eran los otros que estaban con Jorge y cuáles eran los comunistas que con él estaban. Musita que ella lo ignoraba. El encargado de la reja de los calabozos, un carnicero, una noche le convido un cigarro y también le pasaba una manta que retiraba como a las 05:00 de la mañana para que se abrigara. Interpreta que ella preguntaba cuando le pasarían a la fiscalía y él le dijo que “si no lo hacía a las 6:00 de la mañana alguien debería rezar ya que le harían desaparecer” Relata que al día siguiente llegaron dos patrullas, una de carabineros y una del ejército y preguntaron por ella, debido a contactos que hizo Angélica Luco y negaron los carabineros que ella estuviera en la tercera comisaria. Narra que como los Militares insistieron les mostraron una lista en la que aparecían los que habían sido puestos a disposición de la fiscalía y en ella aparecía ella. Acota que en la tarde, como a las 17:00 horas, llegó a su celda el carabinero viejo y le dijo que saliera y se fuera haciendo movimientos de preparación de su arma. Aduce que ella pensó que se mataría, al llegar a la guardia un carabinero le dijo ándate son mirar para atrás y allí están sus cosas. Anexa en lo pertinente, que una vez en la casa del presidente llegó un niño de 16 años y comento que Jorge se había ido de Puacho mas a la cordillera, a este niño le dejó las pocas cosas que andaba trayendo ya que dijo que se las entregaría a Jorge. El mismo día salió a la carretera hizo dedo a un señor que viajaba en una camioneta quien al parecer era conocido de carabineros ya que no lo revisaron y lo trajo a Osorno. Este niño de unos 16 años dijo que su hermano con su cuñada que estaba embarazada, estaban con Jorge y ella deduce se trataba de Ester. Sugiere que su suegra quedo en enviar una encomienda a Jorge, la que fue a buscar el día jueves, este chico se llamaba Manuel Gutiérrez, dijo ser de Osorno y que él se había ido a reunir con su hermano que estaba junto con Jorge. Alega que el detective que era bajo y moreno le mostró un cassette que tenía ruidos de quejidos y señaló que eso le había pasado a Marcelo, ella dedujo a

Marcelo Gutiérrez, hermano de Edgar, y que eso mismo le podía pasar a él. Cuando le interrogaron él dijo que lo habían bajado de un bus y escuchaba ella como le golpeaban, como lo torturaban, porque pusieron un cassette con ese hombre que era moreno, que andaba vestido de civil. El tribunal consulta si en el caso de Marcelo Gutiérrez, la información que tiene, que él habría, presuntamente fallecido. A lo que distingue que falleció el mismo 5, porque a ellos los mataron en la noche, y se imagina que a él lo interceptaron en el camino a Bahía Mansa tipo 3 o 4 de la tarde, y por lo que decía en el cassette o lo que ella escuchó en el cassette o le hicieron escuchar es que él gritaba y pedía de favor que no lo siguieran golpeando, torturando, era bien horroroso escuchar y ella cree que a él lo hicieron confesar y a raíz, de eso los carabineros llegaron a Bahía Mansa. Respecto a declaración de fs. 772 declara que no tiene conocimiento de las órdenes que Adrián Fernández dio a Cheuquelaf y Pinol, pues no estaba con ellos, pero era una persecución encarnizada que tenía Fernández contra estas personas, así es que ella no cree que los señores carabineros se iban a mandar por sí solos. Él era el Capitán de la Tercera Comisaría de Raque. El tribunal consulta ¿En el casete que le hicieron oír a usted de, supuestamente Marcelo Gutiérrez Gómez, ¿usted pudo reconocer la voz de él? A lo que sugiere que sí, es que él era un chico jovencito, ella no sabe, tendría 16, 17 años o 18 por ahí, no cree que haya tenido más, era bien jovencito y tenía una voz bien particular, no era de la voz de un hombre, era de un chico jovencito.

A.11 María Eufemia Millaquipai Guichaquelen. Depone de fs. 260 a 264 (Tomo I) y de fs. 297 a 299 (Tomo I), en lo pertinente blasona que con fecha 5 de octubre del año 1973 fue detenida por personal del Retén de Ovejería, entre los que recuerda al Sargento Manuel Montiel, Benavides, Rojas, Águila y Barrientos. Ellos la llevaron al mismo Retén, donde fue torturada en muchas oportunidades, primero por el Carabinero Benavides con golpes de puño en el oído, con golpes de pie en el resto del cuerpo mientras la insultaba y, con un objeto contundente en el muslo y en la espalda, agresiones por las cuales se le trizó un diente y hasta el día de hoy tiene molestias en su pierna derecha. Además, esa misma noche, como a las tres de mañana fue violada por el propio Benavides, quién ebrio le tomó a viva fuerza. Gracias a la intervención del Cabo Barrientos la dejó su agresor, siendo después advertida de guardar silencio respecto de lo que le había pasado y, además, de que sus sufrimientos se debían a una acusación de unas vecinas de

apellido Álvarez. A esa fecha ella tenía 24 años. Posteriormente, al día siguiente fue trasladada hasta la Tercera Comisaría de Osorno donde fue recibida por el Capitán Adrián Fernández. A ese lugar llegó también detenida doña Ana López, la que le comentó sobre la muerte de su esposo Jorge Aguilar, mientras lloraba apesadumbrada. Mientras estuvo detenida con Ana, una vez vio que un sujeto era traído como un saco por dos funcionarios, joven que luego supo era de nombre Nolberto o Alberto. Este joven en algún momento le dijo a Ana en silencio, que dijera que no sabía nada. Posteriormente Ana fue torturada y cuando regresó de esos vejámenes le dijo a este joven que la hicieron escuchar una grabación donde torturaban a una persona y, además, le dijo que Marcelo había sido bajado de la micro y que lo tenían los "pacos". Ella presume que a este joven lo hicieron desaparecer por el puente de Pucatrihue que es como un cruce, donde se ponían los Carabineros. También recuerda que Ana le dijo al joven que no dijera nada de una guagua, porque ella había respondido que nada sabía al respecto. A Nolberto o Alberto supo que le hicieron "la rueda", es decir, lo pusieron al medio de un círculo de funcionarios y le empezaron a dar golpes de puños, pies y con las culatas de sus fusiles. Después que llegó hecho trizas este joven, nunca más lo escuchó y cuando los dejaron en libertad, él tampoco salió. Quiere decir que en la Tercera Comisaría fue torturada con golpes y electrocutada en dos oportunidades en una habitación que estaba bajo la Comisaría. En esos momentos se encontraba vendada con un paño negro y la corriente se la aplicaron en muchas partes de su cuerpo, pues le quitaron la ropa. No sabe si fue violentada sexualmente en esa Comisaría, pues ante las torturas sufridas, perdía el conocimiento. Mientras la golpeaban y electrocutaban le preguntaban por armas y por una tal Rapunzel, situaciones de las cuales desconocía cualquier antecedente. A su pregunta dice que mientras fue torturada, escuchó al Capitán Adrián Fernández Hernández, al cual reconoció por su tono de voz. También estuvo en las torturas que le hicieron a Nolberto. Aclara que todas las torturas ocurrían cuando ya se ocultaba el sol. Durante todas las noches que estuvo detenida escuchó los lamentos de los torturados. Incluso recuerda a un señor Marisevic, de nacionalidad argentina, al cual lo hicieron sufrir muchísimo. Días después fue llevada a la Fiscalía Militar que funcionaba en el Cuartel de Investigaciones, donde nuevamente fue desnudada y puesta en una camilla para ser interrogada. En esa oportunidad, y cuando le empezaron a poner los alambres para aplicarle corriente,

les rogó que no lo hicieran argumentando entre llantos que ya lo habían hecho los días anteriores. Ante sus súplicas no le aplicaron corriente, siendo detenida por un oficial de grado, tosco de cara, de mediana contextura y como de 40 años, que le exhibió muchas fichas de personas, entre las que reconoció a muchos integrantes del partido socialista, como a la conocida "Chica Ester". Quiere también decir que por orden de la Fiscalía Militar, le revisó las lesiones el médico Horacio Tarico, que era pediatra y que le dejó una lista de remedios para curarse. Un detective daba los remedios mientras estuvo detenida en Investigaciones. A su pregunta señala que la niña de nombre "Dalila", de unos 17 años y que tenía algún retardo mental, resultó embarazada producto de las violaciones de los funcionarios de la Tercera comisaría de Osorno. Eso no fue un caso aislado, porque supo de varias niñas que resultaron embarazadas.

A.12 De Guillermo Antilef Quintul. Depone de fs. 347 a 348 (Tomo I), 349 a 350 (Tomo I) y de fs. 520 a 521 (Tomo II), cuenta en diligencia de careo con Jorge Garcés que era Marenga en la base de la tercera comisara en la época de 1973. Atina que cuando declaró en Santiago que el capitán Fernández ordenaba detenciones por motivos políticos y se apoyaba en los funcionarios que mencionó en esa declaración y que también reforzaban a ese grupo, los únicos marengas que había en la base, es decir Muñoz y Garcés, debe decir que el Garcés a que se refería es la persona que está a su lado. Él era uno de los que reforzaba al grupo, que practicaba estas detenciones. Dice que el señor Garcés salía con el capitán Fernández y ese grupo de gente no era fijo. No puede asegurar de qué formara parte permanente del grupo, pero sí de que salía con ellos, reforzándolos cuando el capitán lo ordenaba.

A.13 Héctor Vargas Soto, quien expone de fs. 367 a 369 (Tomo II), 482 a 488 (Tomo II) y de fs. 653 a 654 (Tomo II) blasona que, luego del golpe militar, conversó con un pescador de la zona que le conto sobre la detención de unas personas, las cuales serían trasladadas al día siguiente para Osorno, ante esa noticia, junto a su señora fueron al día siguiente a ver el traslado de los detenidos, observando desde unos 50 metros. De distancia lo que pasaba, ahí se reunieron como 10 a 12 personas de Bahía Mansa para mirar, percatándose que primero salió una detenida y fue subida al jeep cuadrado medio verdoso (vehículo inglés) que era el único vehículo que estaba en el lugar. Luego sacaron a dos jóvenes que casi no podían moverse por sí mismos, no se distinguía si ellos iban heridos,

pero impresionaban como personas que se encontraban muy debilitadas, ese mismo día en horas de la tarde se dirigió al cruce Pucatrihue, demorándose como una hora y veinte minutos en llegar, con la intención de pintar un paisaje de las piedras tigre del río Contaco, a petición del sargento Jorge Jara de la comandancia del ejército. Siendo como las 17:15 horas aproximadamente, vio llegar al lugar un furgón alargado que usaba el SAG en esa época, desde donde se bajan 5 o 6 carabineros con castos y botas de comando. A diferencia de los de la mañana, que usaban carabinas, estos tenían fusiles. Minutos más tarde se acercó la micro que recorría de Bahía Mansa a Osorno, la cual fue hecha parar por los funcionarios, subiéndose Rosas con otros dos carabineros, para luego hacer bajar a un joven que tendría no más de 24 años, la micro siguió su camino. Después empezaron a interrogar al joven hasta que Nelson Rosas le propinó un culatazo en el estómago que hizo caer al detenido, oportunidad que aprovechó para darle otro golpe con su arma en la cabeza, la que le debe haber causado la muerte, sin embargo, entre todos comenzaron a golpearlo con sus fusiles al lesionado, al que incluso le destruyeron por completo su cabeza, él vio como saltaban los trozos de cráneo, lo que lo ha traumatizado hasta el día de hoy. (el tribunal deja constancia de lo afectado que se ve el testigo al declarar) al ver lo sucedido, lenta y asustadamente se fue sin saber qué pasó con el occiso. Al día siguiente cuando se dirigía a la ciudad de Osorno, fue detenido sin motivo alguno por Mario Flores y Zenen Conejeros, los que lo llevan a la 3° comisaria de Raque a cargo de Adrián Fernández Hernández quien al preguntar por qué lo traían, Flores dijo que por extremista y contrabandista de armas, por lo que Fernández dice ¿y por qué lo traen vivo? Así que de inmediato lo llevaron al frente de la guardia donde había un calabozo donde lo golpeó con la culata en el estómago el carabinero Águila, lo que le hizo perder el equilibrio y caer, para luego ser golpeado por él y otros funcionarios en todo su cuerpo con sus culatas, le rompieron la cabeza, el codo, las manos, le hirieron el estómago, le soltaron los dientes, estuvo incluso orinando sangre por tres meses y debieron sacarle 52 radiografías estomacales por las lesiones que sufrió y por las costillas rotas. Colige, era conocido del militar Santiago Herrera, quien decía que había habido un asalto al retén de Bahía Mansa, tuvieron discusiones al respecto, pues él alegaba que los detenidos no tenían la posibilidad de haber atacado el retén, porque con suerte tenían para comer. Por eso, Herrera lo acusó en la fiscalía militar y fue

citado por el fiscal, llevándole la citación un carabinero de apellido Gamin que le advirtió que le querían hacer un gran daño, sin decirle más, él era de Bahía Mansa y aún vive. Al llegar a la fiscalía se entrevistó con el fiscal Freddy Rozas, un sujeto muy prepotente que le dijo que le daría un consejo: “si usted no cierra la boca, cualquier día amanecerá flotando en el río Raque” por ese hecho hizo un reclamo ante la cuarta zona del ejército ante el señor Valdabinos, después de eso no tuvo más problemas. Delibera que es que él es amigo de Marenga Jorge Garcés. Quien una noche se quedó en su casa a dormir en Bahía Mansa y mientras dormía empezó Jorge a gritar “dios mío, dios mío”, al ir a verlo, este le contó sobresaltado que Adrián Fernández lo había llevado hasta donde estaban detenidas las 3 personas de Bahía Mansa a quienes Adrián Fernández mató con su arma disparándoles en la cabeza eso traumó a Jorge, quien sufría al recordar esos hechos de muerte. Él debió ir obligado, obedeciendo a su jefe. De estos hechos también supo el jefe del retén de Bahía Mansa, el señor Pinol. Basa que Jorge no le comentó ni le preguntó qué sucedió con los cadáveres. Consultado el testigo si recuerda la vestimenta del joven que fue sacado de la cárcel. Depone usaba una casaca media azulada y puede ser que jeans. Blasona que el furgón del SAG era usado por los funcionarios de carabineros de Osorno, no de Bahía Blanca, por lo tanto, Nelson Rozas estaba ayudando a los de Osorno.

A.14 María Angélica Vergara Herrera. Quien declara de fs. 352 a fs. 355 (Tomo I) y de fs. 444 a 445 (Tomo II). Deben haber pasado dos semanas después del 11 de septiembre cuando en horas de la mañana apareció Edgar en la casa de sus padres y le pidió que se cuidara y lo mismo hiciera con los niños. Le advirtió que después que todo se calmara él iba a volver con ellos, para seguir viviendo juntos. Cerca de las 16:00 horas del mismo día se retiró de la casa, no quiso decirle hacia dónde se dirigía. Al día siguiente más o menos se regresó a casa con sus hijos con la esperanza de que Edgard regresaría con ellos, no sabe realmente cuantos días pasaron, pero una vecina llegó a su casa y le preguntó cómo estaba su esposo, ella pensó que por el hecho de que reparaba artefactos. Al darle el nombre de Edgard le hizo entrega del diario la prensa, en el cual figuraba la muerte de tres extremistas en Bahía Mansa, y entre ellos el nombre de su esposo, también recuerda el nombre de Ester Bustamante y Jorge Aguilar Cubillos, personas a quien nunca antes había oído nombrar a su esposo. Su papá se enteró de los hechos también por el diario por lo que le fue a buscar a su casa,

pero como era día sábado no pudieron hacer nada sino hasta el día lunes. Ese día se trasladaron a la fiscalía militar que en ese entonces se ubicaba en el hospital base, donde fue atendida por el fiscal militar quien le atendió bien, pero en los pasillos había un carabinero alto y moreno, bastante corpulento quien le trato muy mal, la insultó en forma grosera y le decía para que lloraba tanto si era una de las mismas y le sacaba la madre. En ese mismo lugar el fiscal le exhibió una pistola, un pañuelo y el carnet de identidad de su esposo, ella obviamente reconoció el pañuelo y su carnet ya que la pistola que le mostraron no pertenecía a su esposo, además su esposo jamás tuvo armas de fuego. En la fiscalía le entregaron un documento para concurrir a retirar el cuerpo de su esposo en la morgue donde también se le limitaba hora para su velatorio. Suma que cuando ingresó a reconocer el cuerpo de su esposo, en el suelo de la morgue había bastante sangre, su esposo estaba íntegramente vendado, se notaba como que habían juntado su cuerpo, los otros dos cuerpos estaban totalmente destruidos. Como dijo antes había sangre por todas partes, en el suelo como en las paredes al parecer tiraron sus cuerpos, esto la impactó bastante, piensa que no era necesario hacer tanto daño aunque hayan tenido sus ideas, el velatorio de su esposo se hizo en casa de sus padres. Pasados unos dos días de la sepultación de Edgard en circunstancias que ella andaba en el cementerio llegó a la casa, según le dijo su padre, un teniente de carabineros para allanar la casa, al parecer buscaban armas. Ese mismo día se llevaron detenido a su padre, Irenio Vergara Muñoz, actualmente fallecido y a su hermano Héctor Vergara Herrera, estos permanecieron detenidos como una semana y media según le contaban le preguntaban sobre Edgard, incluso pasaron a la cárcel de la ciudad. Destaca que un día antes que mataran a su esposo, llegó a su casa, su cuñado Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez, quien le dijo que él sabía dónde estaba Edgard y que lo iba a ir a ver, ella incluso le dio algunas cosas para que llevara y le pidió que ambos se volvieran, pero hasta la fecha no ha vuelto a ver a su cuñado. Marcelo en esa fecha tenía 17 años, era un niño y muy bueno, jamás estuvo metido en nada. Al pasar de los años y hacer averiguaciones respecto a su paradero una tía que vivía en Bahía Mansa de nombre Emilia Moyano, actualmente fallecida, le contó que en el sector se rumoreaba que Marcelo había sido bajado por carabineros de la micro de Tuchia que hacía recorridos al sector el día antes que

mataran a su esposo, por lo se presume que lo torturaron y mataron. Según su tía, se comentaba que el cuerpo de Marcelo había sido tirado al mar.

A.15 Inés Elena Bertín Yáñez. En **declaración extrajudicial** del 03 de septiembre de 1990, **de fs. 32 a 35 (Tomo I)**, en lo pertinente arguye que cuanto a los hechos, antes de 5 de octubre de 1973 fue a la casa de su padrastro que quedaba en Bahía Mansa. Ahí estaba refugiado su hermano Edgar Cárdenas Gómez. Con él estaba una niña de nombre Ester Bustamante y Jorge Aguilar. A ellos los estaban buscando. El 4 de octubre de eses año volvió a Osorno para comprar alimentos y remedios en la farmacia donde trabajaba la señora de Jorge Aguilar y el 5 volvió a Bahía Mansa. Esa señora fue la última persona en verlo, ya que el día 4 en la noche fue allanada la casa de Bahía Mansa, donde mataron a los tres ocupantes. Esto lo supo a través de la prensa del domingo 6 de octubre de 1973, en que se señalaba que ellos tres habían sido fusilados cuando trataron de asaltar un retén. Al leer esto su cuñado Luis Gregorio Cárcamo Gómez, actualmente fallecido, fue a Bahía Mansa donde un pescador de lugar de apellido, al parecer Bañales, cuyo paradero desconoce, y le dijo que lo habían bajado de la micro a la altura del puente Contaco, no sabe si carabineros o militares, pero el camino estaba custodiado por militares en esa fecha. Su cuñado no fue a la casa ya que tenía temor. Ella recorrió diversos lugares para saber de él, en el hospital Nuevo, Copresur, la cárcel, la primera Comisaría, la morgue. En ninguna parte le dieron respuesta. Nadie le ha dado pistas, nadie lo vio.

B. DOCUMENTOS.

B.1 De fs. 1 y 2 (Tomo I) páginas 415 y 416, volumen I, tomo II del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, calificando como víctima de violaciones a sus derechos humanos a Marcelo del Carmen Gutiérrez Palma.

B.2 De fs. 28 a fs. 31 (Tomo I) Informe individual del caso para la comisión que señala que de los antecedentes evaluados, resulta razonable concluir que Marcelo Gutiérrez Gómez fue detenido por efectivos policiales del Retén de Bahía Mansa, apoyados por personal de la dotación de la 3ª Comisaria de Raque, de la cual dependía, trasladado probablemente a este último recinto, donde habría sido torturado y seguramente ejecutado por sus captores.

B.3 De fs. 59 a fs. 60 (Tomo I) Informe del Arzobispado de Santiago, Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, el que señala como situación represiva lo siguiente: Con fecha 5 de octubre de 1973, Marcelo

del Carmen Gutiérrez Gómez, obrero de la construcción, salió de su domicilio en la ciudad de Osorno con destino a Bahía Mansa, a llevarle alimentos a su hermanastro Edgar Eugenio Cárdenas Gómez, militante socialista y muy buscado en la zona con posterioridad al 11 de septiembre de 1973. Testigos presenciales relataron a la familia que fue obligado a descender del microbús en que viajaba por carabineros que lo detuvieron y llevaron con rumbo desconocido. Hasta la fecha se ignora la suerte corrida por el afectado. El hermanastro de la víctima, Edgar Cárdenas Gómez fue ejecutado por Carabineros el 5 de octubre de 1973 junto a Jorge Aguilar Cubillos, funcionario de la Corporación de Reforma Agraria (CORA), militante, radical y María Ester Bustamante Llanccamil militante socialista. Los tres habían ido a refugiarse a una choza de pescadores cuando carabineros de la 3a. Comisaría de Raque y del Retén de Bahía Mansa irrumpieron en el lugar dándoles muerte de inmediato. La versión oficial de las autoridades de la época fue que tres extremistas resultaron muertos cuando un grupo llevó a cabo una acción terrorista contra el retén de Bahía Mansa, la misma Versión agregaba que había habido enfrentamiento y que las víctimas estaban involucradas en un plan subversivo contra las Fuerzas Armadas y que en su poder se había encontrado gran cantidad de armamento y explosivos. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación se formó la convicción que la versión oficial de la época fue falsa y que estas tres víctimas fueron ejecutadas al margen de toda norma legal. También se forma convicción que la desaparición de Marcelo Gutiérrez Gómez es de responsabilidad de personal de la Comisaría de Raque, quienes lo detienen entre Osorno y Bahía Mansa cuando este iba a entregar alimentos a su hermanastro.

B.4 De fs. 65 a 66 (Tomo I) Informe del Servicio de Registro Civil e Identificación, que remite los antecedentes familiares de Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez.

B.5 De fs. 698 a 719 (Tomo III) Oficio N° 229, de fecha 21 de junio de 2016, del Departamento Derechos Humanos, Subdirección General de Carabineros de Chile, que contiene hoja de vida del Sargento 1°. Rodolfo Segundo Cheuquela Lorenz.

B.6 De fs. 723 a 725 (Tomo III) informe pericial fotográfico N° 165-2016 de fecha 26 de mayo de 2016, de la Brigada de Homicidios de Valdivia de la Policía de Investigaciones de Chile, realizado en el cruce Pucatrihue-Bahía Mansa.

B.7. De fs. 726 a 755 (Tomo III) Informe pericial Planimétrico N° 131/2016 del Laboratorio de Criminalística Regional Valdivia de la Policía de Investigaciones de Chile, realizado en el cruce Pucatrihue-Bahía Mansa.

B.8 De fs. 796 a 805 (Tomo III) Copia simple de sentencia de paternidad en causa RIT C-1474-2006, del Juzgado de Familia de Osorno, de fecha 26 de mayo de 2015, que señala en sus conclusiones: se acoge la demanda interpuesta por don Edgar Marcelo Gutierrez Bertín, en contra de don Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez, declarándose que éste último es su padre biológico, nacido el 9 de noviembre de 1973, - inscrito] en la Oficio de Registro Civil e Identificación de Osorno bajo el N° 187, registro S del año 1983.

18°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y relacionados generales y específicos, ponderados consistentes en testigos directos, indirectos y documentos antes señalados. Como además se indica en el auto acusatorio **fs. 1681 a 1725 (Tomo V)** permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallados y relacionados, llegar a la convicción:

A. Primero: que ha existido el delito de secuestro calificado en la persona de Marcelo del Carmen Gutierrez Gómez, previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal vigente a la época de los hechos, ilícito en su carácter de lesa humanidad.

B. Segundo: que en ese ilícito le ha correspondido la participación en calidad de **autor** en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal al acusado **JORGE DANIEL GARCÉS YÁÑEZ**, ello sin perjuicio de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y la defensa.

19°) Que prestando declaración indagatoria de **RODOLFO SEGUNDO CHEUQUELAF LORENZO** (23 años a la época de los hechos). Depone de fs. 760 a 762 (Tomo III), 772 a 773 (Tomo III), 1017 a 1018 (Tomo III) y de fs. 1519 a 1524 (Tomo V).

En **declaración extrajudicial** de fecha 06 de julio de 2016 **de fs. 760 a 762 (Tomo III)**, refiere que el 16 de agosto del año 1972 ingresó a Carabineros de Chile, efectuando el curso de formación en la ciudad de Temuco, para una vez culminado, ser destinado a la 1ª Comisaría de Osorno, donde cumplió funciones hasta junio de 1973, que lo trasladaron a la 3ª Comisaría de Osorno, específicamente al Retén Eleuterio Ramírez, que fue el lugar donde le tocó pasar

el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. Una vez ocurrido el golpe, al día siguiente se cerraron los retenes y lo mandaron a la Tenencia Pajaritos, donde se quedó hasta inicios del mes de octubre de ese año, cuando se abrió o reforzó el Retén Bahía Mansa, que fue donde lo destinaron para continuar trabajando. En ese entonces tenía el grado de Carabinero, quedando destinado en ese destacamento hasta mediados del año 1974, regresando al Retén Eleuterio Ramírez, el cual se había vuelto a abrir. Mientras cumplió funciones en el Retén de Bahía Mansa, estaba a cargo del Sargento Segundo Luis Pinol, no recuerda su otro apellido, además estaba el Segundo que era Nelson Rosas, Juan Bautista Huentrutripay, también Ademar Catalán y cree que el Carabinero Gaete. De todos ellos, Juan Huentrutripay, el carabinero Gaete y él llegaron al Retén solo de refuerzo en ese entonces. Dentro de las funciones que le tocó cumplir estaban los servicios ordinarios, tales como servicio de guardia, patrullaje de la población y control vehicular, siendo este último un servicio que se efectuaba no todos los días, pero cuando tocaba se realizaba en algunas oportunidades en el cruce de Bahía Mansa con Pucatrihue, por lo general en la tarde, cuando regresaba gente de Osorno a Bahía Mansa, momento en el que se paraban los buses, las dos únicas líneas de aquellos años Carrasco y Tuchie. Se controlaba a los pasajeros, por lo general era solo visual, ya que el personal de Carabineros de Bahía Mansa conocía a toda su gente, por lo que una vez efectuado el control, la gente seguía su camino normalmente. En los controles vehiculares efectuados en el cruce de Bahía Mansa, en una ocasión, se acuerda que se bajó una persona de un bus, no puede precisar si fue el de Tuchie o del de Carrasco, pero fue en el horario de la tarde, es decir, cuando los buses viajaban de Osorno a Bahía Mansa. Narra que a esa persona la bajaron por sospecha, y detuvieron para trasladarla al Retén de Bahía Mansa. No recuerda qué funcionarios estaban en ese procedimiento, al día siguiente esa persona quedó libre, sin cargos en su contra. Calcula que esa persona tenía como 20 años de edad o un poco más, siendo la única persona que, al menos cuando le tocó efectuar controles vehiculares en ese lugar, fue detenida, ya que no vio ni participó en otra detención en ese cruce ni control de autos. Ignora la identidad de la persona que fue detenida por sospecha en aquella oportunidad, aproxima fue al poco tiempo después de que llegara a reforzar el Retén de Bahía Mansa, esto es, en el mes de octubre de 1973, es decir, esa detención debe haber sido durante ese mismo mes. Otra detención de esa época

fue de dos o tres personas, una de esas, mujer, quienes por información de una persona, supuestamente iban a atentar contra el Retén, por eso fueron detenidas, dándole aviso al Capitán Adrián Fernández, quien llegó a Bahía Mansa con su gente desde Osorno, donde tomaron a los detenidos y trasladaron a Osorno, siendo lo único que recuerda, haciendo presente que de ese procedimiento no tuvo ninguna participación.

En **declaración judicial** del 06 de septiembre de 2016, **fs. 772 a 773 (Tomo III)**, arguye que para el año 1973, específicamente después del golpe de estado, fue destinado de la Tenencia Pajaritos al Retén Bahía Mansa, lo que sucedió los primeros días del mes de octubre, por orden del Capitán Adrián Fernández. En ese lugar cumplía funciones de guardia, servicios de población y patrullaje general, lo que se hacía a pie, vehículos o caballo. En esa época Bahía Mansa estaba constituida por un par de casas, por tratarse de una zona aislada. Del Retén recuerda a Juan Huentrútripay Villarroel. La dotación completa, entre la planta y los que fueron agregados eran unas nueve personas. Nombra al Carabinero Bernardo Fidel Gaete, Carabinero Coronado Henzi, al Sargento Luis Pinol Carillanca, que era el Jefe de Retén, el Practicante Cabo 1° Nelson Rosas, el Carabinero Ademar Catalán. Para ese año tenía 23 años y había egresado en el mes de enero de Carabineros. Tenía el grado de Carabinero y solo alcanzó a estar hasta julio del año 1974 en el Retén de Bahía Mansa. Un día determinado al llegar a su guardia, vio que había un joven detenido por sospecha, respecto del cual preguntó a su superior Pinol, y este le comentó que el día anterior sus colegas lo habían visto por los alrededores y como estaba permitida la detención por sospecha, lo habían aprehendido. Esa mañana se le dio la libertad al joven por falta de mérito. Posteriormente, unos días después, cuando ocurrió el supuesto ataque al Retén Bahía Mansa (que nunca sucedió en realidad) donde se detuvo a tres personas, una mujer y dos hombres, llegaron hasta el destacamento el Capitán Adrián Fernández, junto a los Carabineros Rafael Pérez Torres, Muñoz Albornoz y el fallecido Juan Canales. Ellos procedieron con el operativo, y en un momento dado, el propio Fernández llamó a Nelson Rosas y le habló directamente, sin que pudiera escuchar lo que le decía. Acto seguido, Rosas lo llamó junto a otro de sus compañeros, cuya identidad no recuerda, pero que era de los agregados al Retén, y les dice que por orden del Capitán tenían que ir a detener a una persona que se trasladaba en uno de los buses que iban de Osorno

a Bahía Mansa (que podía ser de las empresas de Tuchie o de Carrasco), persona que tendría entre 18 a 20 años y que portaba víveres. Ante la orden recibida, se fueron hasta el cruce Pucatrihue en una camioneta doble cabina de color verde que la había facilitado el SSG, y ahí hicieron parar el bus, controlaron y se encontraron con el mismo joven al que se le había dado la libertad unos dos tres días antes. Cree, aunque no recuerda tan bien, que andaba con un bolso y llevaba efectivamente víveres. Al bajar al sujeto, se dio la orden al chofer de que siguiera su camino y posteriormente Nelson Rosas le preguntó al sujeto si se trataba de “tal persona”, confirmando el nombre que le había dado el Capitán y que Rosas llevaba anotado. Al ratificar que se trataba de la misma persona, Rosas le pegó un culatazo en el estómago, lo subieron a la camioneta y en dirección al Retén, donde el joven fue entregado personalmente por Rosas al Capitán Fernández. De ahí subieron a todos los detenidos a los vehículos en los que se trasladaban, es decir, a los que fueron imputados como atacantes del Retén Bahía Mansa junto a éste último joven y se retiraron del sector. A los pocos días, a través del Diario La Prensa de la época, se enteraron que los tres detenidos acusados del asalto al Retén habían muerto. Ignora dónde y cómo ocurrieron esas muertes, porque el Capitán Fernández se los llevó. Sobre el joven detenido nunca supo nada más hasta ésta fecha. Hace presente que acompañó a Rosas porque era su superior jerárquico, y porque, además, él estaba cumpliendo una orden directa del Capitán de la época señor Fernández. Soflame que en esos tiempos no tenían ninguna posibilidad de cuestionar ninguna orden, porque de lo contrario eran acusados de opositores. No vio ninguna grabadora que fuera usada por el Capitán Fernández o su grupo. Los detenidos, cree, que iban con esposas, pero no está seguro. Tampoco recuerda si iban con vendas tapándoles el rostro. El joven que describe era flaquito, de tez blanca, andaba como si no se hubiera afeitado, de pelo castaño oscuro. No recuerda sus vestimentas. El Jefe Pinol parece que estaba en Osorno ese día, parece que no vio a los detenidos.

En **declaración judicial** de 28 de agosto de 2019, **fs. 1017 a 1018 (Tomo III)**, ratifica sus declaraciones de fs. 760 a 761 y de fs. 772 a 773, reconociendo como suya las firmas estampadas en ellas. En relación a la declaración policial precisa que llegó agregado al Retén de Bahía Mansa, al otro día estuvo de guardia. Entonces le preguntó al Jefe de Retén sobre ese joven, quién era el único detenido por sospecha, esto es al Sargento Luis Pinol que

pasaba con el detenido por sospecha, si se le daba la libertad o no, y ordenó que se le diera la libertad, firmó el libro y se fue. Al otro día el Capitán Adrián Fernández Hernández, Comisario, con su equipo compuesto por Gustavo Muñoz (fallecido), Rafael Pérez y Juan Canales (fallecido), entonces como él estaba de servicio, el oficial Fernández, dispuso que fueran a fiscalizar los buses que señaló y les dijo que ese joven iba a volver con víveres. Acompañó al Cabo 1° Nelson Rosas a fiscalizar los buses. Y allí detuvieron nuevamente a esa persona que antes habían detenido por sospecha y lo trasladaron al Retén de Bahía Mansa. Estando allí le entregaron personalmente a Adrián Fernández y su grupo a esa persona y se lo llevaron a Osorno. Agrega que Adrián Fernández ya había detenido a dos personas y a una mujer, y estaba esperando a ese joven que iba en una de las micros de regreso a Bahía Mansa. Indica que vio a esos detenidos en una pieza al interior del Retén de Bahía Mansa. Posteriormente se enteró de lo sucedido con esas personas por la interrogación que se efectuó la policía de investigaciones, que le señaló que había una persona desaparecida y se trataba de la misma persona que él había puesto en libertad días antes. El Capitán Adrián Fernández se llevó a los cuatro detenidos a Osorno.

En **declaración judicial** mediante plataforma zoom el 13 de agosto de 2021, de **fs. 1519 a 1524 (Tomo V)**, ratifica declaración extrajudicial que rola a fs. 760 a 762, asevera que la primera parte está de acuerdo. Rectificando, la fecha, porque después de que ya lo interrogaron la primera vez colocó que los primeros días de octubre, pero después cuando lo interrogó un señor oficial de la PDI, que fue como en junio del 2016, así que justo iba saliendo de su casa a trabajar, así que se identificó que era de la Corte de Apelaciones de Valdivia, tenía que interrogarlo, así que en esa oportunidad lo primero que le preguntó que si había estado en el Retén Bahía Mansa. Le dijo sí, efectivamente estuvo agregado en los primeros días de octubre el 73, pero de ahí, porque después ya empezó a analizar pues el señor oficial de investigaciones le mencionó alguno de los nombres que estaban en ese retén. Lamentablemente por el tiempo transcurrido se acordaba de algunos, solamente los apellidos. Incluso su servicio que tenía al otro día que llegó. Eso fue rectificado después ante el Sr. Ministro de Valdivia, el Ministro Juan Ignacio Correa. Ahí aprovechó de rectificar donde tuvo claro su llegada de agregado al Retén Bahía Mansa, que fue el día tres de octubre. Lamentablemente lo trasladaron de Pajaritos a la Tenencia de Pajaritos, porque

estuvo agregado allá el día tres, y llegó al Retén en la tarde. Al día siguiente, a saber el cuatro, se recibió de guardia en ese Retén, a las ocho de la mañana, con un detenido por sospecha. Entonces se recibió de guardia y le consultó al jefe de Retén, que era el Sargento Luis Pinol Catrillanca, que iba a suceder con el detenido, dándole la orden de otorgar libertad. Mientras tanto lo colocaba en libertad, este joven, el que se menciona en el documento de secuestro, tuvo contacto con él, cuando lo puso en libertad, pero no lo detuvo la primera vez, así que ya puesto en libertad, el día cuatro cerca de las nueve de la mañana. Al día siguiente estaba saliente de guardia, entregó el servicio a las ocho de la mañana a otro funcionario, el cual por el nombre no lo recuerda. Durmió hasta las trece horas y fue a almorzar a la pensión. Volvió entre las tres o tres y media para reintegrarse al servicio en la población. Continua, al regresar al Retén para colocarse el uniforme y salir o estar apresto, el de guardia le comunicó que estaba el Sr. Comisario en el lugar del Retén. Permaneció en la parte exterior del Retén atento, en caso que tuviera que concurrir a un procedimiento, así que mientras los dos detenidos y la mujer estaban en el cuartel en una pieza de dormitorio. Entonces llegó después, mientras el Sr. Comisario, en esa época que era el Sr. Fernández, con su equipo compuesto por personal antiguo. Interrogaban, pero él no tuvo ningún contacto en la interrogación. Entonces después, pero sí el cabo Rosas, que era el segundo jefe en antigüedad en el Retén; el capitán lo llamó y le dijo que por información de los mismos detenidos, había que detener a ese joven que había estado detenido en el Retén, así que el Cabo Rosas, como él estaba atento y presto para ayudar, lo llamó, le dijo vamos a ir a hacer control al Cruce Pucatrihue. En el trayecto, el capitán dispuso que detuvieran a un joven que había estado detenido en el Retén. Permaneció un solo día en el retén, así que no podía decir que no lo conocía, pero le dijo: sabe este joven estuvo detenido así que de orden del capitán habría que detenerlo. Controlaron los dos buses, Carrasco y Tuchie, sin poder precisar en cuál de los buses iba viajando ese menor, porque incluso como él lo puso en libertad no le preguntó edad, porque ya estaba en libertad, por falta de méritos, como se decía antiguamente en la Ley de Sospecha. De ahí llegó uno de los buses y se controló a los pasajeros; en uno de ellos viajaba a Bahía Mansa de Osorno el menor de nombre Marcelo. Lo bajaron y trasladaron en un furgón del SAG que estaba agregado, no sabe, a la Comisaría. Regresaron al Retén con el detenido y el Capitán Hernández dispuso el traslado de los cuatro en

los vehículos que andaban; no sabe si eran dos o tres vehículos, no puede asegurar porque si hubiese sido reciente el procedimiento o le hubiesen interrogado habría tenido bien más clara la manera del procedimiento, pero lamentablemente tantos años que transcurrieron, y siempre dice haber estado pendiente capaz que de repente, incluso los mismos personal antiguo le decían: “oye no te han citado”, no si, no tiene nada que ver. En ese tiempo estaba el Diario La Prensa y uno de los, una persona ni recuerda el nombre, le comentó, porque él estaba recién llegado a ese Retén, que habían matado, fusilado a tres personas, pero él no vio el diario, sino que fue comentario nomas. Así que como dice, esas cuatro personas, el cabo Rosas se las entregó personalmente al Capitán Fernández, y de ahí ya emigraron hacia Osorno con todos los cuatro detenidos y hasta ahí llegó su procedimiento nomas, porque él prácticamente estaba, era un carabinero que todavía no tenía ni un año y no podía decir que si, colocar algún obstáculo para decir que no podía acompañar al Cabo Rosas. Eso sería, así que ahí quedó todo el personal, tanto la dotación del Retén y los que eran agregados en el Retén. Se da lectura a la declaración de fs. 772 a 773 (Tomo III), 1017 a 1018 (Tomo III) a lo que depone estar de acuerdo. Se da lectura a las preguntas formuladas a fs. 1287. A la pregunta N°1 atestigua que al entregar a Marcelo Gutiérrez Gómez, junto al Cabo Rozas, en el Retén Bahía Mansa estuvieron estuvo junto a las víctimas del supuesto ataque al retén. Ellos entregaron personalmente al detenido al señor Comisario Fernández, ahí estuvieron juntos, porque resulta que se embarcó también en uno de los vehículos en dirección a Osorno. A la pregunta N°2 funda que siempre estuvo en la parte exterior del Retén, además que uno recién salido de grupo prácticamente no alcanzaba a llevar ni nueve meses, no podía estar metido con personal antiguo y menos con el señor Comisario. Estaba él a cargo del procedimiento en la pieza del dormitorio del personal, pero sí llamó al Cabo Rosas en forma privada y le entregó un documento. El cabo Rosas, lo llamó y ordenó que lo acompañe al cruce a detener una persona, pero más que eso, ignoraba qué persona era, nunca imaginó que sería el joven que había estado detenido y lo había puesto en libertad un día antes. A la pregunta N°3, barbullita que no tuvo contacto con las persona detenidas en el Retén, porque cuando volvió de la pensión después de almorzar (estaba saliente de guardia), ya, estaban los detenidos, y según comentarios posteriores, ellos mismos, los tres detenidos que estaban, posiblemente le

confesaron en la investigación que se les hizo, mencionaron a este joven que había estado detenido y había sido puesto en libertad, así que por eso. Especula de ahí debieron haber obtenida la información, que los mismo detenidos en el cuartel le informaron que estaba coludido éste joven y que iba a buscar víveres, porque en el momento de controlar los buses, cualquiera de los dos buses, justamente iba con víveres en un bolso y por eso lo condujeron al Retén, con las mismas características que había mencionado el Capitán. A la pregunta N°4, refiere que si bien no recordaba la identidad de la persona detenida por sospecha días antes en el Retén al momento de la entrevista. Después se impuso cuál era su nombre, ante los comentarios y manifestaciones de otros testigos. Atina que puede decir que la persona que estuvo detenida y dejado en libertad por falta de méritos es la misma que después detuvieron en el bus. A la pregunta N°5, reitera que no recuerda fecha exacta, pero sí después pensando y estudiando cuál fue su traslado y en qué día, puede asegurar que llegó el tres de octubre del 73 y el cuatro de octubre, a las ocho de la mañana se recibió de guardia y ahí pudo notar que había un detenido. Empero no participó de la detención, porque llegó en la tarde al retén, en calidad de agregado y al otro día si participó en la libertad, previa autorización del jefe de retén Luis Pinol. Colige que el Comisario Fernández llegó el 05 de octubre de 1973, al media día, porque como las tres o cuatro de la tarde, ya estaba en el retén, mientras el deponente fue almorzar. Al volver esta con los tres detenidos en una pieza, los que estaban arriba en el cerro. Luego, acompañó a Rosas, por orden, tras indicarle que debían detener a una persona, él llevaba la identidad. En el trayecto le dijo que se llama Marcelo Gutierrez Gómez y al parecer había estado detenido el día anterior. Así detuvieron a esa persona. Reitera es la misma persona que le dio la libertad días antes, al recibir la guardia. No tiene conocimiento dónde ni en qué momento se detuvo por primera vez a Marcelo Gutiérrez.

20°) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **RODOLFO SEGUNDO CHEUQUELAF LORENZO**, quien fue sometido a proceso a **fs. 1125 a 1171** con fecha 01 de julio de 2020. **Acusado** según el auto de **fs. 1681 a 1725** con fecha 29 de diciembre de 2021, como autor del delito de secuestro calificado en su carácter de lesa humanidad, de Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez, perpetrado en el sector de Bahía Mansa de Osorno, a contar del 5 de octubre de 1973. Que si bien el acusado se ubica en la fecha, lugar y sitio

del suceso, reconociendo que participó en la detención de la víctima, y que además lo reconoce como Marcelo Gutierrez Gómez, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas y ponderadas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados y específicos relacionados y aquilatados puntualizando lo siguiente:

A. DECLARACIONES.

A parte de lo que se ha detallado en la prueba de los testigos conviene puntualizar respecto de éstas personas lo siguiente:

A.1. Rubén Molina González. Quien declaro de fs. 246 a 248 (Tomo I) y de fs. 288 a 289 (tomo I), funda que mientras estuvo trabajando en la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno, el jefe de Tenencia era el Capitán Adrián Fernández Hernández, el que luego del golpe militar instauró una especie de grupo de muerte compuesto por Rafael Pérez Torres, Gustavo Muñoz Albornoz (apodado Loli), Rolando Becker Salís, Canales, Rosas Silva y Eliseo Águila Salgado, no recordando los nombres de los otros funcionarios, que incluso fueron juramentados en secreto por el mismo Fernández en forma previa de sus actividades ilegales. Soflame que este grupo de personas salía habitualmente a hacer operativos y luego regresaban con personas detenidas, las cuales dejaban en los calabozos. Acota que en horas de la noche, ellos eran llevados hasta el subterráneo de la misma Comisaría, donde eran torturados, llegando incluso a ser asesinados en el mismo lugar. Esto lo supo por comentarios de otros colegas que se filtraron en esa época, sin recordar actualmente quiénes se lo dijeron. No obstante, un hecho que recuerda claramente, fue que el Jefe de la Tenencia de Bahía Mansa de apellido Rosas, le dijo que estuvo presente en un interrogatorio donde Becker Salís en su desenfreno y agresividad, empezó a darle de culatazos al detenido con intención de matarlo, pero aquél señor simplemente no moría. Por ello, Becker sacó un cuchillo y lo degolló, para luego chupar la sangre que quedó en el arma blanca y decirle al cadáver "así que no querías morir". Se comentaba de la persecución que Fernández tenía respecto de los funcionarios Santana y Ubilla, a los cuales quiso acusar de terroristas una vez, haciendo uso de dos prostitutas que estaban detenidas, a las cuales instruyó que acusaran a dos

funcionarios de lentes. Suma, hecho ocurrido a Santiago Aguilar, a quien conoció desde joven. Destaca que este señor era amigo de Fernández, porque la señora del Capitán era secretaria de Santiago Aguilar y se visitaban. El día en que fue detenido Aguilar al momento de ir a renovar su salvoconducto, estando con la vista tapada escuchó la voz de Fernández, a quién le dice algo así como "qué bueno que llegaste Adrián, ahora las cosas se arreglarán", momento en que Fernández desenfundó su arma y le dispara en la cabeza a Santiago. Detalla que eso se lo contó su colega Juan Moreira. Delibera que fue acusado por Fernández por ser un "peligroso extremista infiltrado en Carabineros" junto con otros cuatro o cinco funcionarios más. Por suerte, nunca pudo lograr su objetivo y logró seguir trabajando hasta su retiro. Finalmente Aclara que el subterráneo utilizado para las torturas es el que se inundaba.

A.2 Rafael Pérez Torres, quien declaró a fs. 553 a 554 (Tomo II), 627 a fs. 630 (Tomo II) y de fs. 632 a 633 (Tomo II), en lo pertinente atina que en el mismo mes de septiembre se ordenó cerrar el retén y los enviaron a la Tercera Comisaría de Osorno, que estaba a cargo del capitán Adrián Fernández Hernández y cuya dotación era como de treinta personas. Aduce que el capitán Fernández les entregaba regularmente, no todos los días, los distintos bandos con el detalle de los nombre de las personas que debían detener. Esos documentos eran escritos a máquina, aunque no sabe quién escribía esos documentos. Que Fernández también salía hacer patrullaje y detenciones. Era muy severo con sus propios funcionarios. A finca que del asalto al Retén de Bahía Mansa tuvo conocimiento, aunque no puede dar fe de que ello haya ocurrido. También supo que los atacantes fueron detenidos y muertos, lo que llegaron fallecidos a la comisaría. En ese procedimiento estuvo el capitán Fernández y Sergio Rosas, por su parte Nelson Rosas Cárdenas estaba en esa época en el mismo Retén de Bahía Mansa. Que él no fue a ese sector aunque lo han inculpado de haber sido partícipe de hechos ilícitos. Preguntado si en el operativo pudo haber participado el marenga Jorge Garcés responde que no sabe si este estuvo o no, pero también participaba de operativos. Éste siempre andaba con Adrián Fernández, al igual que Canales y Eliseo Águila. Dice que Garcés era el guardaespaldas de Fernández. Agrega, Garcés era cabo antiguo mandaba a todos los que tenían menos tiempos en la filas. Éste era medio agresivo, especialmente cuando solía andar con trago, ya que era protegido del jefe Fernández.

A.3 Federrina Del Rosario Barrientos Cancino. En **declaración extrajudicial** de fecha 01 de septiembre de 2015, rolante de **fs. 567 a 569 (Tomo II)**, sostuvo en lo pertinente que su marido Carlos Delgado Muñoz falleció el año 2003, y trabajaba como conductor de la empresa de buses “Mar Bus” realizando viajes de Osorno a Bahía Mansa, que para el año 1973 después del golpe de Estado, su marido le contaba que en algunos viajes los carabineros paraban el bus, generalmente antes del cruce con Pocatrihue o en la “Visera”, sector que queda como a 14 kilómetros de Bahía Mansa. En esos controles los carabineros les pedían carnet de identidad a los pasajeros, revisaban el equipaje y en algunas ocasiones bajaban a pasajeros. Decían que con los fusiles los carabineros le pegaban a esa gente y luego hacían que el bus siguiera su camino, quedándose ellos con las personas que bajaban, le parece que detenidas, siendo esos los únicos incidentes que le contaba su marido.

A.4 María Gladys Ávila. En **declaración extrajudicial** de fecha 26 de febrero de 2003, rolante de **fs. 657 a 658 (Tomo III)**, arguye que en el año 1973 no tenía militancia política, pero era presidenta de un sindicato agrícola y delegada ante la CUT de Osorno. Vivía en ese entonces en el sector El Volcán, Las Cascadas, comuna de Puerto Octay. El día 17 de septiembre de 1973, supo que era requerida, su nombre salió en un bando militar. Presentándose en el Retén de carabineros de Las Cascadas, narrando lo vivido en ese contexto, que posteriormente fue trasladada a diferentes unidades policiales entre ellas la Tercera Comisaría de Osorno, donde solo estuvo un momento, siendo enviada a la Tercera Comisaría de Raque a cargo de Adrián Fernández, a quien conocía desde mucho antes porque compraba en el almacén del sector Las Cascadas y animales a su abuelo. Arguye que en dicho lugar estuvo detenida por alrededor de siete días y torturada, siendo llevada al subterráneo utilizada como sala de tortura, detallando todo lo acontecido con ella y las cosas que pudo observar en dicho lugar. Destaca que Adrián Fernández era quien daba las órdenes de las torturas. Revela que muchas veces llegaban militares y era el propio Fernández el que entregaba a algunos detenidos a ellos o a investigaciones. Continúa relatando lo vivido. Esgrime que la segunda vez que fue detenida en la Tercera Comisaría de Raque, estaba Adrián Fernández y pudo ver a su primo Cesar Ávila en el subterráneo donde torturaban, no volviéndolo a ver. Sigue refiriendo a su contexto propio.

A.5 Ecar Adolfo Guarda Rosas, declaro de fs. 787 a 788 (Tomo III) y de fs. 892 a 893 (Tomo III). A finca que cuando joven trabajó como cuatro años para la empresa de buses de Tuchie, como auxiliar del recorrido de la micro que iba de Bahía Mansa a Osorno. Dos veces carabineros detuvieron el bus y en la segunda vez se llevaron a un "gallo" más joven, ese joven tiene que haber tenido 17 años, esto ocurrió en 1973. Detalla que carabineros no dijo nada, solo lo tomaron de la mano, esto fue en el kilómetro 30 con dirección a Bahía Mansa, lo recuerda con claridad porque ese joven era casi de su edad, no supo qué pasó con ese joven después del 73. Atestigua que no sabe de qué retén eran esos carabineros, porque estaban en mitad del camino, eran como tres carabineros, dos tomaron al chico y lo dejaron al lado de la patrulla, y ellos siguieron el viaje. Este joven iba "pelaito", no llevaba ninguna cosa. Anexa que en otra oportunidad un carabinero bajó dos personas del bus, porque parece que habían robado, esto también ocurrió en el trayecto a Bahía Mansa, hasta Bahía Mansa serían unos 60 kilómetros. Sustenta que cuando detuvieron a este joven, él no decía nada, pero les dijo: "aquí estoy señores, aquí está mi cabeza, háganla pedazo", frente a ellos los carabineros no le hicieron ninguna cosa.

A.6 José Oberto Santana Oyarzún, depone de fs. 162 a 164 (Tomo I), fs. 251 a 253 (Tomo I) y de fs. 292 a 293 (Tomo I), en lo pertinente depuso que en la Tercera Comisaría Osorno, el Comisario Jefe era el Capitán de Carabineros don Adrián Fernández Hernández, quién antes de llegar a la mencionada, era el ayudante del señor Intendente o Gobernador de Osorno en la época, oficial que tenía bastantes problemas con el personal subalterno que no compartía sus ideologías y actividades sociales que realizaba dentro de la unidad policial, ya que era bastante prepotente. Recuerda que junto al Carabinero Roberto Ubilla Soto los dejaron a cargo del servicio de guardia en forma permanente, hasta que el día 14 de septiembre del año 1973 se les acerca el Suboficial Mayor Oscar Vargas Vargas, quien les informa que tenían que presentarse en la oficina del Capitán Adrián Fernández Hernández, por lo que junto a Ubilla llegaron alrededor de las 06:00 a 07.00 horas a la oficina del oficial, quién les comunica que desde ese instante estaban en calidad de arrestados, por lo que iban a ser trasladados a las dependencias de la Tenencia Raque Alto; esta situación le extrañó bastante, por lo que le pidió al Capitán Fernández que le señalara los motivos por los cuales estaban siendo puestos en calidad de arrestados, respondiéndole que se quedara

callado, pero como insistió en su pregunta, le señaló que mejor se quedara calado o lo pondría a disposición de guerra, pero de igual forma le señaló que era por traición a los principios institucionales y al gobierno imperante, agregando que todo eso ocurrió en presencia del personal que se encontraba afuera de su oficina, ya que en ningún momento cerró la puerta. Luego, el capitán mencionado hace ingresar a personal de la Comisaría, quienes se encontraban portando fusiles sic, tales como el Suboficial Mayor Oscar Vargas Vargas, el escribiente Vladimiro Fernández Rojas, el Sargento Segundo Eliseo Águila Salgado, Gustavo Muñoz Albornoz, Rafael Pérez Torres, Sergio Rozas Silva, Juan Canales y Rolando Becker Solís, quienes los apuntaban y los trasladaron a que reunieran sus pertenencias y quedaron a la espera de la llegada del Teniente Sergio Saavedra Olmedo, Jefe de la Tenencia de Raque Alto, quién una vez que llegaron a la Tenencia señalada, les comunicó que no podían portar armamento ni podían salir de las instalaciones del cuartel policial. En esa condición estuvieron hasta diciembre del año 1973, si mal no recuerda. Ignora todo antecedente respecto de la víctima de la presente investigación, y que a través del tiempo y por comentarios que realizaban los mismos funcionarios de la Tercera Comisaría de Osorno, que el Comisario Adrián Fernández Hernández, junto al grupo de funcionarios anteriormente nombrados, cumplió funciones operativas una vez que se instauró el gobierno militar, realizando diversas detenciones de personas civiles en distintas partes de la jurisdicción de la Tercera Comisaría de Osorno, y que presenciaba las torturas de las distintas personas que llegaron detenidas. Destaca que escuchó que habían habilitado el subterráneo de la Tercera Comisaría para efectuar las torturas de los detenidos, pero eso no le consta. Lo único que observó fue una noche cuando les hicieron levantarse y formarse frente a varias mujeres, incluso algunas estudiantes, las que fueron torturadas a golpes de puño y con las culatas de los fusiles, insistiéndoles que reconocieran que ellos eran del grupo partidista contrario a los del golpe militar. Por suerte esa noche las mujeres estoicas mantuvieron su posición de no conocerlos, lo que era cierto por lo demás. Como nota ilustrativa tiene conocimiento que en la solicitud efectuada por el colega Becker como exonerado político, explica que le habían dado órdenes de matar a tres colegas, entre los que salía mencionado. Señala, además, que los hechos demuestran que Adrián Fernández tuvo mucho poder en esa zona, lo que aún no logra explicarse. Por eso hizo lo que quiso y anduvo por toda la zona,

incluso por territorios que no eran de su jurisdicción. Señala que aunque nunca vio a Fernández personalmente, sí supo que él salía con su grupo a realizar operativos y detener personas. Descarga que según supo por comentarios, Adrián Fernández participó tanto de las detenciones como de las torturas.

A.7 Luis Humberto Pinol Carillanca. Depone de fs. 173 a 176 (Tomo I), 335 a 336 (Tomo I), 254 a 255 (Tomo I), 267 a 268 (Tomo I), 324 a 329 (Tomo I), 335 a 336 (Tomo I), 347 a 348 (Tomo I), 829 a 831 (Tomo II) 837 a fs. 838 (Tomo II) y de fs. 975 a 976 (Tomo III). En lo pertinente glosa, que el Capitán Fernández le señaló que sabía que habían detenido unos extremistas y que él se personaría en el Retén al día siguiente. Cuando llegó al Retén se dio cuenta que las tres personas antes señaladas se encontraban nuevamente detenidas, esta vez como sospechosas de tener 14 molotov, algunas armas en mal estado y un mapa de la casa del Jefe de Retén. Esta vez esas personas quedaron recluidas en espera de ser puestas a disposición de la Tercera Comisaría de Osorno y del señor Fernández. Al día siguiente, en horas de la mañana, el Capitán Fernández llegó al Retén acompañado de unos cuatro vehículos y unos 15 funcionarios, incluso andaba acompañado de civiles que reconoció como ex militares. Después pidió el libro de guardia, sacó la hoja donde se registró la detención y le ordenó a uno de sus funcionarios que escribiera lo que él le dictaría, creando una historia de la detención de esas personas distinta a la verdadera. Luego subieron a los detenidos a los vehículos y se retiraron, llevándose consigo el Capitán Fernández el libro de guardia y ordenándole que concurriera al día siguiente a firmar el parte policial que él confeccionaría. Al día siguiente fue cerca de la cárcel, donde estaba el personal del Tribunal Militar, donde firmó el parte y donde debió corroborar falsamente toda la historia de Fernández, entre la que se señalaba que esas tres personas habían atacado el Retén y, además, habían fallecido cuando se repelió el ataque. Anexa en diligencia de careo con Jorge Garcés Yáñez, de fs. 335 a 336 (Tomo I), refiere en lo pertinente es a quién se refiere como “Sargento Garcés que era Marenga”, en su declaración de fs. 5.568; él era uno de los funcionarios que andaba con el Capitán Fernández cuando se retiraron a los tres detenidos que estaban en el Retén de Bahía Mansa, grupo en el que andaban las demás personas que mencionó en esa declaración; no tiene dudas sobre eso. Insiste que ubicaba bien a esta persona, y él dice que estaba cuidando la casa del Capitán, cosa que no puede ser, porque no lo vio allá, no podría ser, porque cómo lo iban a

destinar a eso solamente, y además, porque lo vio en la Tercera Comisaría no sólo una vez, sino que varios días en calidad de disponible. No agrega nada más porque no tiene dudas al respecto. En dichos posteriores, colige que cuando llegó el Capitán Fernández al Retén, sacó la hoja del Libro de Guardia y la tiró al papelerero, luego de eso dio instrucciones y se fue con los tres detenidos en caravana a Osorno, llevándose el Libro de Guardia con ellos, dejándolo citado a la Fiscalía Militar al día siguiente, sin saber nada más por ese día. Al día siguiente fue a Osorno y ahí declaró con miedo porque los militares estaba armados, por lo que tuvo que mentir y decir que efectivamente habían atentado contra el Retén de Bahía Mansa, en tanto que de los detenidos supo que ellos los habían matado en el camino, hasta la fecha nadie le ha dicho el lugar donde los mataron. Tiempo después de lo que acaba de relatar, años después mejor dicho, fue interrogado por un Juez por la muerte de esos jóvenes, y ahí se enteró que había un cuarto joven que había ido a comprar cosas a Osorno, y que al regreso no había llegado a Bahía Mansa, por lo que ahora haciendo memoria, ese joven pudo ser el cuarto integrante de los que les dio la libertad en el Retén. Por otra parte, si bien el Jefe del Retén era él, el Capitán Fernández cuando pasó todo eso era su superior, y él no le contaba nada, tenía su grupo de gente seleccionada con la que realizaba todas las cosas, de hecho el libro al que le sacó la hoja fue reescrito por sus hombres de confianza, entre los que estaba Nelson Rosas de Bahía Mansa. Urde, en lo pertinente de fs. 837 a 838 (Tomo III), recuerda muy bien que mucho tiempo después de ese episodio de los jóvenes, Jorge Garcés le comentó personalmente que él sabía el lugar exacto donde habían pasado a darles muerte a los jóvenes. Supuestamente el lugar fue como a 2 kilómetros del Retén de Raque. Además, Garcés andaba en el grupo con Fernández, tiene que saber dónde específicamente se ejecutó a los jóvenes. El Tribunal le lee la declaración de fs. 772 y siguientes, depone que es efectivo lo que relata Cheuquelaf. Respecto al parte que fue a firmar, indica que no aparecía el cuarto joven en ese documento, solo 3 personas. El que más sabe del cuarto integrante del grupo de los detenidos es Cheuquelaf junto con Rosas.

A.8 Juan Segundo Moreira Garcés. Declara de fs. 256 a 257, 294 a 296 (Tomo I) y de fs. 338 a 346 (tomo I), funda en lo pertinente que en ese tiempo había toque de queda y el deponente junto a sus colegas, de más o menos su misma antigüedad salían a patrullar el sector de Raque Bajo, pero también se dio

cuenta de que el Comisario llamaba a personal antiguo a su oficina y de ahí los citaba a una hora determinada y que generalmente eran más, o menos como a las 18:00 horas y a esa hora se reunían y salían en vehículos del SAG; generalmente era uno de esos vehículos con cuatro o cinco funcionarios más el chofer acompañados del propio Capitán y con fusiles SIG, que eran los que en ese momento se usaban. Espeta que siempre regresaban tarde, más o menos como a la 1:00 de la madrugada cuando el personal estaba durmiendo. Cuando no estaba a cargo el comisario quien iba al mando era el suboficial Inostroza. En la base sabían que el Comisario y ese personal antiguo salían a hacer detenciones a ex partidarios de la Unidad Popular, a quienes seguramente ubicaban desde antes, a diferentes sectores de la jurisdicción de la Tercera Comisaría. Recuerda que el propio Comisario interrogaba, a los detenidos y participaban el escribiente quién redactaba las declaraciones para enviarlas al Tribunal y además del personal antiguo que él refirió, quienes actuaban violentamente pues golpeaban a los detenidos con golpes de puños con el objeto de sacar una información, soflama que eso lo supo porque lo escuchaba desde el dormitorio y además alguno de ellos lo comentaban, lo cual se hacía en el pasillo que existía entre la guardia y el casino y para lo cual cerraban las puertas que daban a la guardia y al pasillo. Acota que uno de los que comentaba era Canales decía "Ustedes son ciegos, sordos y mudos cabritos". Relata que en ese tiempo dadas las circunstancias que se vivían, era perfectamente posible que cualquiera de ellos hubiera podido detener a ex partidarios de la UP sin necesidad de una orden expresa de la Fiscalía, se imagina que ese grupo también haría detenciones en la ciudad de Osorno pues ellos salían a diferentes lugares. Recuerda que estando de centinela en la base, meses después del 11 de septiembre, la mamá de Rodolfo Leveque le preguntó por él ya que eran amigos y allí sospechó que a lo mejor ese grupo lo había detenido pero él no lo vio en la base y eso fue lo que le respondió a la señora. Ella le contó que un furgón verde había sido en el que se trajo a su hijo desde calle Tarapacá y que un sobrino de ellos lo siguió hasta la esquina de la Comisaría en Iquique con República y vio cuando el furgón llegó a la Comisaría. Expresa que en octubre de 1974 contrajo matrimonio y allí Roberto contó que su hermano había sido detenido por Carabineros. Textualmente le dijo "Juanito, Adrián Fernández fue a detener a mi hermano" y después al escuchar conversaciones Roberto se juntó nuevamente con él y le dio las características

físicas de los demás, según lo que vio su hermana en Chahuilco, y en base a eso él concluyo que los que anduvieron esa noche con el capitán Fernández junto al chofer Maragaño, el Cheo Águila y Rafael Pérez. Acerca de lo sucedido en Bahía Mansa no recuerda que hubiera existido un enfrentamiento en ese Retén pero sí que hubo uno en el sector de Pucomo Pascal que queda de Bahía Mansa para Osorno, unos 15 kilómetros más o menos. Arguye que el Sargento Pinol y el Cabo Rosas del Retén de Bahía Mansa dieron cuenta al Comisario Fernández que habían detenido a dos personas de sexo masculino por actividades políticas, porque tenían información de que pretendían asaltar el retén, pero la verdad es que nunca hubo algo concreto.

A.9 María Judith Aucapán Ancapán. En **declaración extrajudicial** prestada con fecha 02 de noviembre de 2015, **rolante a de fs. 535 a 537 (tomo II)**. En lo pertinente precisa que en momentos que se encontraba en casa junto a su marido, sintieron muchos disparos, motivo por el cual después de que terminara la balacera, salieron a la puerta de la calle ya que incluso algunos de esos disparos llegaron a la casa. Recuerda que salió a la puerta y sintió el llanto de una mujer que venía desde una casa que estaba ubicada frente a la suya, como a unos 100 metros, propiedad que era de uno de los tres jóvenes que estaban viviendo ahí. Uno de estos jóvenes era de Osorno y los otros dos de Panguipulli, en total eran dos hombres y una mujer. Precisa que esa tarde noche ella sólo sintió el ruido de los disparos y vio desde la ventana de su casa un furgón de Carabineros, no visualizando a los funcionarios, motivo por el cual no puede proporcionar sus identidades, pero indica que si era el furgón blanco con negro de Bahía Mansa, el único que había en aquellos años en la zona. Recalca que no ubica y nunca había escuchado el nombre de Marcelo Gutiérrez Gómez pero lo que está segura, es que después del 11 de septiembre de 1973 era costumbre que los Carabineros y Militares pararan a los dos únicos buses que viajaban entre Osorno y Bahía Mansa, es decir, el de Carrasco y el de Tuchie, estos controles los hacían tanto en Bahía Mansa, Caleta Pocatrihue, sector Pucomo y otros lugares más de la ruta a Osorno. En dichos controles los Carabineros bajaban a toda la gente, le registraban sus cosas y a veces dejaban detenidas a personas y el bus seguía su ruta, al menos eso le tocó ver en los viajes que efectuaba a Osorno. Volviendo al tema de los tres jóvenes que se estaban quedando frente a su casa y que los Carabineros les dispararon a su hogar, haciendo memoria, años atrás fue

entrevistada por una Ministra que le dijo que era de Santiago, a ella le contó lo mismo que está haciendo hoy y además fue dos veces con ella a su ex casa. La primera incluso llevaron una máquina detectora de metales para encontrar las balas, y al parecer se las llevaron, además de los impactos que dejaron las balas en su casa, la cual dicho sea de paso hoy es habitada por Eleodoro Huiscas Cárcamo.

A.10 Ana Del Carmen López Barría. Depone de fs. 188 a 192, 302 a 308, 356 (tomo I), 466 (tomo II) y de fs. 1506 a 1509 (tomo V). Aquilata que el 12 de septiembre escucho que se llamaba a Jorge por un bando Militar, su cuñado Carlos Hurtado casado con Margoth Aguilar Cubillos, le aviso que Jorge estaba en el Asentamiento Puacho, en el sector “Lomas de la Piedra”, el día 13 de septiembre fue con su cuñado en camioneta y ella hablo con Jorge en el lugar en que estaba, que era una casita de un campesino cuyo nombre le parece es Luis Pinol que actualmente tiene más de setenta años y vive donde mismo. Apunta que le conto lo del bando y él le dijo que habían llegado a esa casita otras personas pero que eran del Partido Socialista, a lo que él le dijo que estaba en compás de espera y que no se podía presentar a las autoridades de la época porque el bando daba veinticuatro horas para hacerlo y si no lo hacían serian ejecutados. Como ella sabía que podía estar vigilada se vistió como campesina y como momentos antes había encontrado en la ciudad a gente que era del Asentamiento y que le dijeron que andaban en un tractor, les pidió que le llevaran a lo que accedieron. Decanta que llegaron al lugar y ella se fue a la casa del Presidente del Asentamiento cuyo nombre era Bernardo, pero no recuerda el apellido, había llegado hacia poquísimo rato, esto fue en la tarde tipo 18:00 horas, cuando vieron que venía la camioneta que usaban Jorge en el servicio, unos furgones verdes que el B.I.D, había entregado al Sag, le parece y la cuca de Carabineros con muchos Carabineros. Destaca que por temor se escondió en un baño exterior que hay en el campo, sintió que Carabineros disparaba y la gente gritaba y lloraba. Continúa, allanaron todo pero no buscaron en el baño en que ella estaba, como quedaron carabineros en el lugar, ella arrastrándose y aprovechando la oscuridad se dirigió hacia el monte. Describe que estaba escondida en el monte cuando sintió ruido y era un hijo de don Bernardo, cuyo nombre ahora no recuerda, y le dijo que no se asustara ya que él estaba con su perro. El día 03 de octubre llego en la mañana un joven llamado Marcelo Gutiérrez de unos 18 años de edad.

Actualmente desaparecido y le dijo que había visto a Jorge (se había refugiado en el mismo lugar) y que estaba muy preocupado por sus hijos que había nacido el 11 de noviembre de 1972, y dijo que no tenía alimentos y que Jorge necesitaba calcetines y ropa para que llevara. Cimentó que en la mañana del día domingo 07 de octubre de 1973, fueron al hospital y al preguntar por las personas heridas el portero consultó con un carabinero y le dijo que pasa, ahí le dijeron que Jorge estaba muerto. Atestigua que el mismo portero del hospital los llevó a la morgue y ahí vio a Jorge en la mesa del centro con heridas de bala en todo el lado izquierdo y sobre la oreja izquierda se encontraba la cabeza destapada. Cuando retiraban el cadáver llegó a la morgue carabineros y le dijo que por orden del capitán Adrián Fernández Hernández debía presentarse a las 15:00 horas, a la tercera comisaria. Descarga que fue acompañada por su cuñada Angélica Luco y Erwin Brickesak. Destaca que cuando llegaron no dejaron que entrara su cuñada y un hombre bastante mayor de edad vestido de carabinero los hizo pasar a Erwin y a ella en calidad de detenidos. Detalla que a Erwin le empezaron a pegar entre varios carabineros de inmediato. A ella le hicieron pasar a una habitación para que esperara al capitán Fernández y le sacaron el cinturón, pañuelo, cordones de zapatos y todo lo que llevaba en los bolsillos. Glosa que cuando llegó el capitán Fernández le hicieron salir a un pasillo y el mismo carabinero viejo, preguntaba quién más estaba con Jorge en bahía mansa, como ella no sabía se los hizo notar y ese carabinero, delante de otros y del capitán Fernández, le dio un golpe de puño en la cara que lo botó al suelo. Después le llevaron a una pieza donde estaba el Capitán Fernández, otros carabineros y un hombre de civil. Escruta que la interrogaron siempre sobre las otras personas que andaban con Jorge y le insultaban diciéndole que era una comunista y como ella le dijera al capitán Fernández que él había sido amigo de Jorge Aguilar ya que varias veces había ido a la casa e incluso le pedía la camioneta prestada y le respondió que no era amigo de ningún comunista y que estos tenían que morir y que le iba a pasar lo mismo que le pasó a Marcelo Gutiérrez, que había dicho todo y que ella debía corroborar la declaración de Gutiérrez, para lo cual le pusieron un casete en que se sentían gritos y como que se quebraban tablas, diciéndole Fernández “esto es lo que hicimos con Gutiérrez” Musita que por boca de ellos mismos se enteró que Marcelo Gutiérrez Gómez era hermano de Edgardo Cárdenas Gómez. Expone que el capitán ordenó que la sacaran y los carabineros la llevaron a un calabozo

donde quedo con otra mujer de su edad, 24 años, cuyo nombre no recuerda pero supo que era secretaria o trabajaba en la juventud socialista. Invoca que todas las demás celdas estaban llenas de hombres y cuando habría la reja y nombraban a uno lo sacaban y después volvía gritando y quejándose. Puntualiza que estuvo detenida seis o siete días pasando por lo mismo y en las noches carabineros se embriagaban y ellos iban a buscar a su compañera de celda y cuando volvía le decía que la habían violado, lo que se repetía constantemente. Aduce que a Fernández no lo vio después que la pusieron en la celda, y la llevaron poniéndole una capucha de saco de papa a un lugar como de subterráneo donde pusieron en una silla o sillón y le amarraron de los pies y las manos. Uno de ellos se metió por la cintura del pantalón unos cables y le ponían la corriente para que ella les dijera quienes eran los otros que estaban con Jorge y cuáles eran los comunistas que con él estaban. Musita que ella lo ignoraba. El encargado de la reja de los calabozos, un carnicero, una noche le convido un cigarro y también le pasaba una manta que retiraba como a las 05:00 de la mañana para que se abrigara. Interpreta que ella preguntaba cuando le pasarían a la fiscalía y él le dijo que “si no lo hacía a las 6:00 de la mañana alguien debería rezar ya que le harían desaparecer” Relata que al día siguiente llegaron dos patrullas, una de carabineros y una del ejército y preguntaron por ella, debido a contactos que hizo Angélica Luco y negaron los carabineros que ella estuviera en la tercera comisaria. Narra que como los Militares insistieron les mostraron una lista en la que aparecían los que habían sido puestos a disposición de la fiscalía y en ella aparecía ella. Acota que en la tarde, como a las 17:00 horas, llego a su celda el carabinero viejo y le dijo que saliera y se fuera haciendo movimientos de preparación de su arma. Aduce que ella pensó que se mataría, al llegar a la guardia un carabinero le dijo ándate son mirar para atrás y allí están sus cosas. Anexa en lo pertinente, que una vez en la casa del presidente llegó un niño de 16 años y comento que Jorge se había ido de Puacho mas a la cordillera, a este niño le dejó las pocas cosas que andaba trayendo ya que dijo que se las entregaría a Jorge. El mismo día salió a la carretera hizo dedo a un señor que viajaba en una camioneta quien al parecer era conocido de carabineros ya que no lo revisaron y lo trajo a Osorno. Este niño de unos 16 años dijo que su hermano con su cuñada que estaba embarazada, estaban con Jorge y ella deduce se trataba de Ester. Sugiere que su suegra quedo en enviar una encomienda a Jorge,

la que fue a buscar el día jueves, este chico se llamaba Manuel Gutiérrez, dijo ser de Osorno y que él se había ido a reunir con su hermano que estaba junto con Jorge. Alega que el detective que era bajo y moreno le mostró un casete que tenía ruidos de quejidos y señaló que eso le había pasado a Marcelo, ella dedujo a Marcelo Gutiérrez, hermano de Edgar, y que eso mismo le podía pasar a él. Cuando le interrogaron él dijo que lo habían bajado de un bus y escuchaba ella como le golpeaban, como lo torturaban, porque pusieron un casete con ese hombre que era moreno, que andaba vestido de civil. El tribunal consulta si en el caso de Marcelo Gutiérrez, la información que tiene, que él habría, presuntamente fallecido. A lo que distingue que falleció el mismo 5, porque a ellos los mataron en la noche, y se imagina que a él lo interceptaron en el camino a Bahía Mansa tipo 3 o 4 de la tarde, y por lo que decía en el casete o lo que ella escuchó en el casete o le hicieron escuchar es que él gritaba y pedía de favor que no lo siguieran golpeando, torturando, era bien horroroso escuchar y ella cree que a él lo hicieron confesar y a raíz, de eso los carabineros llegaron a Bahía Mansa. Respecto a declaración de fs. 772 declara que no tiene conocimiento de las órdenes que Adrián Fernández dio a Cheuquelaf y Pinol, pues no estaba con ellos, pero era una persecución encarnizada que tenía Fernández contra estas personas, así es que ella no cree que los señores carabineros se iban a mandar por sí solos. Él era el Capitán de la Tercera Comisaría de Raque. El tribunal consulta ¿En el casete que le hicieron oír a usted de, supuestamente Marcelo Gutiérrez Gómez, ¿usted pudo reconocer la voz de él? A lo que sugiere que sí, es que él era un chico jovencito, ella no sabe, tendría 16, 17 años o 18 por ahí, no cree que haya tenido más, era bien jovencito y tenía una voz bien particular, no era de la voz de un hombre, era de un chico jovencito.

A.11 María Eufemia Millaquipai Guichaquelen. Depone de fs. 260 a 264 (Tomo I) y de fs. 297 a 299 (Tomo I), en lo pertinente blasona que con fecha 5 de octubre del año 1973 fue detenida por personal del Retén de Ovejería, entre los que recuerda al Sargento Manuel Montiel, Benavides, Rojas, Águila y Barrientos. Ellos la llevaron al mismo Retén, donde fue torturada en muchas oportunidades, primero por el Carabinero Benavides con golpes de puño en el oído, con golpes de pie en el resto del cuerpo mientras la insultaba y, con un objeto contundente en el muslo y en la espalda, agresiones por las cuales se le trizó un diente y hasta el día de hoy tiene molestias en su pierna derecha. Además, esa misma noche, como a

las tres de mañana fue violada por el propio Benavides, quién ebrio le tomó a viva fuerza. Gracias a la intervención del Cabo Barrientos la dejó su agresor, siendo después advertida de guardar silencio respecto de lo que le había pasado y, además, de que sus sufrimientos se debían a una acusación de unas vecinas de apellido Álvarez. A esa fecha ella tenía 24 años. Posteriormente, al día siguiente fue trasladada hasta la Tercera Comisaría de Osorno donde fue recibida por el Capitán Adrián Fernández. A ese lugar llegó también detenida doña Ana López, la que le comentó sobre la muerte de su esposo Jorge Aguilar, mientras lloraba apesadumbrada. Mientras estuvo detenida con Ana, una vez vio que un sujeto era traído como un saco por dos funcionarios, joven que luego supo era de nombre Nolberto o Alberto. Este joven en algún momento le dijo a Ana en silencio, que dijera que no sabía nada. Posteriormente Ana fue torturada y cuando regresó de esos vejámenes le dijo a este joven que la hicieron escuchar una grabación donde torturaban a una persona y, además, le dijo que Marcelo había sido bajado de la micro y que lo tenían los "pacos". Ella presume que a este joven lo hicieron desaparecer por el puente de Pucatrihue que es como un cruce, donde se ponían los Carabineros. También recuerda que Ana le dijo al joven que no dijera nada de una guagua, porque ella había respondido que nada sabía al respecto. A Nolberto o Alberto supo que le hicieron "la rueda", es decir, lo pusieron al medio de un círculo de funcionarios y le empezaron a dar golpes de puños, pies y con las culatas de sus fusiles. Después que llegó hecho trizas este joven, nunca más lo escuchó y cuando los dejaron en libertad, él tampoco salió. Quiere decir que en la Tercera Comisaría fue torturada con golpes y electrocutada en dos oportunidades en una habitación que estaba bajo la Comisaría. En esos momentos se encontraba vendada con un paño negro y la corriente se la aplicaron en muchas partes de su cuerpo, pues le quitaron la ropa. No sabe si fue violentada sexualmente en esa Comisaría, pues ante las torturas sufridas, perdía el conocimiento. Mientras la golpeaban y electrocutaban le preguntaban por armas y por una tal Rapunzel, situaciones de las cuales desconocía cualquier antecedente. A su pregunta dice que mientras fue torturada, escuchó al Capitán Adrián Fernández Hernández, al cual reconoció por su tono de voz. También estuvo en las torturas que le hicieron a Nolberto. Aclara que todas las torturas ocurrían cuando ya se ocultaba el sol. Durante todas las noches que estuvo detenida escuchó los lamentos de los torturados. Incluso recuerda a un señor Marisevic, de

nacionalidad argentina, al cual lo hicieron sufrir muchísimo. Días después fue llevada a la Fiscalía Militar que funcionaba en el Cuartel de Investigaciones, donde nuevamente fue desnudada y puesta en una camilla para ser interrogada. En esa oportunidad, y cuando le empezaron a poner los alambres para aplicarle corriente, les rogó que no lo hicieran argumentando entre llantos que ya lo habían hecho los días anteriores. Ante sus súplicas no le aplicaron corriente, siendo detenida por un oficial de grado, tosco de cara, de mediana contextura y como de 40 años, que le exhibió muchas fichas de personas, entre las que reconoció a muchos integrantes del partido socialista, como a la conocida "Chica Ester". Quiere también decir que por orden de la Fiscalía Militar, le revisó las lesiones el médico Horacio Tarico, que era pediatra y que le dejó una lista de remedios para curarse. Un detective daba los remedios mientras estuvo detenida en Investigaciones. A su pregunta señala que la niña de nombre "Dalila", de unos 17 años y que tenía algún retardo mental, resultó embarazada producto de las violaciones de los funcionarios de la Tercera comisaría de Osorno. Eso no fue un caso aislado, porque supo de varias niñas que resultaron embarazadas.

A.12 De Guillermo Antilef Quintul. Depone de fs. 347 a 348 (Tomo I), 349 a 350 (Tomo I) y de fs. 520 a 521 (Tomo II), cuenta en diligencia de careo con Jorge Garcés que era Marenga en la base de la tercera comisara en la época de 1973. Sobre lo que se le pregunta debe decir que cuando declaró en Santiago que el capitán Fernández ordenaba detenciones por motivos políticos y que pasa eso se apodaba en los funcionarios que mencionó en esa declaración y que también reforzaban a ese grupo los únicos marengas que había en la base, es decir Muñoz y Garcés, debe decir que el Garcés a que se refería es la persona que está a su lado. Él era uno de los que reforzaba al grupo, que practicaba estas detenciones. Lo que dice es que el señor Garcés salía con el capitán Fernández y ese grupo de gente no era fijo. No puede asegurar de qué formara parte permanente del grupo, pero sí de que salía con ellos, reforzándolos cuando el capitán lo ordenaba.

A.13 Héctor Vargas Soto. Quien expone de fs. 367 a 369 (Tomo II), 482 a 488 (Tomo II) y de fs. 653 a 654 (Tomo II) blasona que, luego del golpe militar, conversó con un pescador de la zona que le conto sobre la detención de unas personas, las cuales serían trasladadas al día siguiente para Osorno, ante esa noticia, junto a su señora fueron al día siguiente a ver el traslado de los detenidos, observando desde unos 50 metros. De distancia lo que pasaba, ahí se reunieron

como 10 a 12 personas de Bahía Mansa para mirar, percatándose que primero salió una detenida y fue subida al jeep cuadrado medio verdoso (vehículo inglés) que era el único vehículo que estaba en el lugar. Luego sacaron a dos jóvenes que casi no podían moverse por sí mismos, no se distinguía si ellos iban heridos, pero impresionaban como personas que se encontraban muy debilitadas, ese mismo día en horas de la tarde se dirigió al cruce Pucatrihue, demorándose como una hora y veinte minutos en llegar, con la intención de pintar un paisaje de las piedras tigre del río Contaco, a petición del sargento Jorge Jara de la comandancia del ejército. Siendo como las 17:15 horas aproximadamente, vio llegar al lugar un furgón alargado que usaba el SAG en esa época, desde donde se bajan 5 o 6 carabineros con castos y botas de comando. A diferencia de los de la mañana, que usaban carabinas, estos tenían fusiles. Minutos más tarde se acercó la micro que recorría de Bahía Mansa a Osorno, la cual fue hecha parar por los funcionarios, subiéndose Rosas con otros dos carabineros, para luego hacer bajar a un joven que tendría no más de 24 años, la micro siguió su camino. Después empezaron a interrogar al joven hasta que Nelson Rosas le propinó un culatazo en el estómago que hizo caer al detenido, oportunidad que aprovechó para darle otro golpe con su arma en la cabeza, la que le debe haber causado la muerte, sin embargo, entre todos comenzaron a golpearlo con sus fusiles al lesionado, al que incluso le destruyeron por completo su cabeza, él vio como saltaban los trozos de cráneo, lo que lo ha traumatado hasta el día de hoy. (el tribunal deja constancia de lo afectado que se ve el testigo al declarar) al ver lo sucedido, lenta y asustadamente se fue sin saber qué pasó con el occiso. Al día siguiente cuando se dirigía a la ciudad de Osorno, fue detenido sin motivo alguno por Mario Flores y Zenen Conejeros, los que lo llevan a la 3° comisaria de Raque a cargo de Adrián Fernández Hernández quien al preguntar por qué lo traían, Flores dijo que por extremista y contrabandista de armas, por lo que Fernández dice ¿y por qué lo traen vivo? Así que de inmediato lo llevaron al frente de la guardia donde había un calabozo donde lo golpeó con la culata en el estómago el carabinero Águila, lo que le hizo perder el equilibrio y caer, para luego ser golpeado por él y otros funcionarios en todo su cuerpo con sus culatas, le rompieron la cabeza, el codo, las manos, le hirieron el estómago, le soltaron los dientes, estuvo incluso orinando sangre por tres meses y debieron sacarle 52 radiografías estomacales por las lesiones que sufrió y por las costillas rotas.

Colige, era conocido del militar Santiago Herrera, quien decía que había habido un asalto al retén de Bahía Mansa, tuvieron discusiones al respecto, pues él alegaba que los detenidos no tenían la posibilidad de haber atacado el retén, porque con suerte tenían para comer. Por eso, Herrera lo acusó en la fiscalía militar y fue citado por el fiscal, llevándole la citación un carabinero de apellido Gamin que le advirtió que le querían hacer un gran daño, sin decirle más, él era de Bahía Mansa y aún vive. Al llegar a la fiscalía se entrevistó con el fiscal Freddy Rozas, un sujeto muy prepotente que le dijo que le daría un consejo: “si usted no cierra la boca, cualquier día amanecerá flotando en el río Raque” por ese hecho hizo un reclamo ante la cuarta zona del ejército ante el señor Valdabinos, después de eso no tuvo más problemas. Delibera que es que él es amigo de Marenga Jorge Garcés. Quien una noche se quedó en su casa a dormir en Bahía Mansa y mientras dormía empezó Jorge a gritar “dios mío, dios mío”, al ir a verlo, este le contó sobresaltado que Adrián Fernández lo había llevado hasta donde estaban detenidas las 3 personas de Bahía Mansa a quienes Adrián Fernández mató con su arma disparándoles en la cabeza eso traumó a Jorge, quien sufría al recordar esos hechos de muerte. Él debió ir obligado, obedeciendo a su jefe. De estos hechos también supo el jefe del retén de Bahía Mansa, el señor Pinol. Basa que Jorge no le comentó ni le preguntó qué sucedió con los cadáveres. Consultado el testigo si recuerda la vestimenta del joven que fue sacado de la cárcel. Depone usaba una casaca media azulada y puede ser que jeans. Blasona que el furgón del SAG era usado por los funcionarios de carabineros de Osorno, no de Bahía Blanca, por lo tanto, Nelson Rozas estaba ayudando a los de Osorno.

A.14. María Angélica Vergara Herrera. Quien declara de fs. 352 a fs. 355 (Tomo I) y de fs. 444 a 445 (Tomo II). Deben haber pasado dos semanas después del 11 de septiembre cuando en horas de la mañana apareció Edgar en la casa de sus padres y le pidió que se cuidara y lo mismo hiciera con los niños. Le advirtió que después que todo se calmara él iba a volver con ellos, para seguir viviendo juntos. Cerca de las 16:00 horas del mismo día se retiró de la casa, no quiso decirle hacia dónde se dirigía. Al día siguiente más o menos se regresó a casa con sus hijos con la esperanza de que Edgard regresaría con ellos, no sabe realmente cuantos días pasaron, pero una vecina llegó a su casa y le preguntó cómo estaba su esposo, ella pensó que por el hecho de que reparaba artefactos. Al darle el nombre de Edgard le hizo entrega del diario la prensa, en el cual

figuraba la muerte de tres extremistas en Bahía Mansa, y entre ellos el nombre de su esposo, también recuerda el nombre de Ester Bustamante y Jorge Aguilar Cubillos, personas a quien nunca antes había oído nombrar a su esposo. Su papá se enteró de los hechos también por el diario por lo que le fue a buscar a su casa, pero como era día sábado no pudieron hacer nada sino hasta el día lunes. Ese día se trasladaron a la fiscalía militar que en ese entonces se ubicaba en el hospital base, donde fue atendida por el fiscal militar quien le atendió bien, pero en los pasillos había un carabinero alto y moreno, bastante corpulento quien le trato muy mal, la insultó en forma grosera y le decía para que lloraba tanto si era una de las mismas y le sacaba la madre. En ese mismo lugar el fiscal le exhibió una pistola, un pañuelo y el carnet de identidad de su esposo, ella obviamente reconoció el pañuelo y su carnet ya que la pistola que le mostraron no pertenecía a su esposo, además su esposo jamás tuvo armas de fuego. En la fiscalía le entregaron un documento para concurrir a retirar el cuerpo de su esposo en la morgue donde también se le limitaba hora para su velatorio. Suma que cuando ingresó a reconocer el cuerpo de su esposo, en el suelo de la morgue había bastante sangre, su esposo estaba íntegramente vendado, se notaba como que habían juntado su cuerpo, los otros dos cuerpos estaban totalmente destruidos. Como dijo antes había sangre por todas partes, en el suelo como en las paredes al parecer tiraron sus cuerpos, esto la impactó bastante, piensa que no era necesario hacer tanto daño aunque hayan tenido sus ideas, el velatorio de su esposo se hizo en casa de sus padres. Pasados unos dos días de la sepultación de Edgard en circunstancias que ella andaba en el cementerio llegó a la casa, según le dijo su padre, un teniente de carabineros para allanar la casa, al parecer buscaban armas. Ese mismo día se llevaron detenido a su padre, Irenio Vergara Muñoz, actualmente fallecido y a su hermano Héctor Vergara Herrera, estos permanecieron detenidos como una semana y media según le contaban le preguntaban sobre Edgard, incluso pasaron a la cárcel de la ciudad. Destaca que un día antes que mataran a su esposo, llegó a su casa, su cuñado Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez, quien le dijo que él sabía dónde estaba Edgard y que lo iba a ir a ver, ella incluso le dio algunas cosas para que llevara y le pidió que ambos se volvieron, pero hasta la fecha no ha vuelto a ver a su cuñado. Marcelo en esa fecha tenía 17 años, era un niño y muy bueno, jamás estuvo metido en nada. Al pasar de los años y hacer averiguaciones respecto a su paradero una tía

que vivía en Bahía Mansa de nombre Emilia Moyano, actualmente fallecida, le contó que en el sector se rumoreaba que Marcelo había sido bajado por carabineros de la micro de Tuchie que hacía recorridos al sector el día antes que mataran a su esposo, por lo se presume que lo torturaron y mataron. Según su tía, se comentaba que el cuerpo de Marcelo había sido tirado al mar.

A.15 Inés Elena Bertín Yáñez. En **declaración extrajudicial** del 03 de septiembre de 1990, **de fs. 32 a 35 (Tomo I)**, en lo pertinente arguye que cuanto a los hechos, antes de 5 de octubre de 1973 fue a la casa de su padrastro que quedaba en Bahía Mansa. Ahí estaba refugiado su hermano Edgar Cárdenas Gómez. Con él estaba una niña de nombre Ester Bustamante y Jorge Aguilar. A ellos los estaban buscando. El 4 de octubre de ese año volvió a Osorno para comprar alimentos y remedios en la farmacia donde trabajaba la señora de Jorge Aguilar y el 5 volvió a Bahía Mansa. Esa señora fue la última persona en verlo, ya que el día 4 en la noche fue allanada la casa de Bahía Mansa, donde mataron a los tres ocupantes. Esto lo supo a través de la prensa del domingo 6 de octubre de 1973, en que se señalaba que ellos tres habían sido fusilados cuando trataron de asaltar un retén. Al leer esto su cuñado Luis Gregorio Cárcamo Gómez, actualmente fallecido, fue a Bahía Mansa donde un pescador de lugar de apellido, al parecer Bañales, cuyo paradero desconoce, y le dijo que lo habían bajado de la micro a la altura del puente Contaco, no sabe si carabineros o militares, pero el camino estaba custodiado por militares en esa fecha. Su cuñado no fue a la casa ya que tenía temor. Ella recorrió diversos lugares para saber de él, en el hospital Nuevo, Copresur, la cárcel, la primera Comisaría, la morgue. En ninguna parte le dieron respuesta. Nadie le ha dado pistas, nadie lo vio.

B. DOCUMENTOS.

B.1 De fs. 1 y 2 (Tomo I) páginas 415 y 416, volumen I, tomo II del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, calificando como víctima de violaciones a sus derechos humanos a Marcelo del Carmen Gutiérrez Palma.

B.2 De fs. 28 a fs. 31 (Tomo I) Informe individual del caso para la comisión que señala que de los antecedentes evaluados, resulta razonable concluir que Marcelo Gutiérrez Gómez fue detenido por efectivos policiales del Retén de Bahía Mansa, apoyados por personal de la dotación de la 3ª Comisaria de Raque, de la cual dependía, trasladado probablemente a este último recinto, donde habría sido torturado y seguramente ejecutado por sus captores.

B.3 De fs. 59 a fs. 60 (Tomo I) Informe del Arzobispado de Santiago, Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, el que señala como situación represiva lo siguiente: Con fecha 5 de octubre de 1973, Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez, obrero de la construcción, salió de su domicilio en la ciudad de Osorno con destino a Bahía Mansa, a llevarle alimentos a su hermanastro Edgar Eugenio Cárdenas Gómez, militante socialista y muy buscado en la zona con posterioridad al 11 de septiembre de 1973. Testigos presenciales relataron a la familia que fue obligado a descender del microbús en que viajaba por carabineros que lo detuvieron y llevaron con rumbo desconocido. Hasta la fecha se ignora la suerte corrida por el afectado. El hermanastro de la víctima, Edgar Cárdenas Gómez fue ejecutado por Carabineros el 5 de octubre de 1973 junto a Jorge Aguilar Cubillos, funcionario de la Corporación de Reforma Agraria (CORA), militante, radical y María Ester Bustamante Llancamil militante socialista. Los tres habían ido a refugiarse a una choza de pescadores cuando carabineros de la 3a. Comisaría de Raque y del Retén de Bahía Mansa irrumpieron en el lugar dándoles muerte de inmediato. La versión oficial de las autoridades de la época fue que tres extremistas resultaron muertos cuando un grupo llevó a cabo una acción terrorista contra el retén de Bahía Mansa, la misma Versión agregaba que había habido enfrentamiento y que las víctimas estaban involucradas en un plan subversivo contra las Fuerzas Armadas y que en su poder se había encontrado gran cantidad de armamento y explosivos. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación se formó la convicción que la versión oficial de la época fue falsa y que estas tres víctimas fueron ejecutadas al margen de toda norma legal. También se forma convicción que la desaparición de Marcelo Gutiérrez Gómez es de responsabilidad de personal de la Comisaría de Raque, quienes lo detienen entre Osorno y Bahía Mansa cuando este iba a entregar alimentos a su hermanastro.

B.4 De fs. 65 a fs. 66 (Tomo I) Informe del Servicio de Registro Civil e Identificación, que remite los antecedentes familiares de Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez.

B.5 de fs. 698 a 719 (Tomo III) Oficio N° 229, de fecha 21 de junio de 2016, del Departamento Derechos Humanos, Subdirección General de Carabineros de Chile, que contiene hoja de vida del Sargento 1° Rodolfo Segundo Cheuquelaf Lorenzo.

B.6 De fs. 723 a 725 (Tomo III) informe pericial fotográfico N° 165-2016 de fecha 26 de mayo de 2016, de la Brigada de Homicidios de Valdivia de la Policía de Investigaciones de Chile, realizado en el cruce Pucatrihue-Bahía Mansa.

B.7 De fs. 726 a 755 (Tomo III) Informe pericial Planimétrico N° 131/2016 del Laboratorio de Criminalística Regional Valdivia de la Policía de Investigaciones de Chile, realizado en el cruce Pucatrihue-Bahía Mansa.

B.8 De fs. 796 a 805 (Tomo III) Copia simple de sentencia de paternidad en causa RIT C-1474-2006, del Juzgado de Familia de Osorno, de fecha 26 de mayo de 2015, que señala en sus conclusiones: se acoge la demanda interpuesta por don Edgar Marcelo Gutierrez Bertín, en contra de don Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez, declarándose que éste último es su padre biológico, nacido el 9 de noviembre de 1973, - inscrito] en la Oficio de Registro Civil e Identificación de Osorno bajo el N° 187, registro S del año 1983.

21°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y relacionados generales y específicos, ponderados consistentes en testigos directos, indirectos y documentos antes señalados. Como además se indica en el auto acusatorio **fs. 1681 a 1725 (Tomo V)** permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallados y relacionados, llegar a la convicción:

A. Primero: que ha existido el delito de secuestro calificado en la persona de Marcelo del Carmen Gutierrez Gómez, previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal vigente a la época de los hechos, ilícito en su carácter de lesa humanidad.

B. Segundo: que en ese ilícito le ha correspondido la participación en calidad de **autor** en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal al acusado **RODOLFO SEGUNDO CHEUQUELAF LORENZO**, ello sin perjuicio de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y la defensa.

D. EN CUANTO A LAS DEFENSAS:

22°) Defensa de **JOSÉ ADRIAN FERNANDEZ HERNANDEZ**.

Que **de fs. 2024 a 2098 (Tomo VI)** el abogado Maximiliano Murath en representación de **José Adrián Fernández Hernández**, en lo principal de su escrito solicita inhabilidad por falta de imparcialidad; al primer otrosí en subsidio solicita inhabilidad del juez por control de convencionalidad; al segundo otrosí

solicita suspensión del procedimiento; al tercer otrosí nulidad de todas las declaraciones del proceso que indica y rectificación del auto acusatoria en la forma que indica; al cuarto otrosí solicita la nulidad de todas las declaraciones del proceso que indica y rectificación del auto acusatorio. Al quinto otrosí opone excepciones de previo y especial pronunciamiento; al sexto otrosí, contesta acusación de oficio y adhesiones a la acusación; al séptimo otrosí, solicita oficio a gendarmería de Chile; al octavo otrosí, acompaña documentos y al noveno otrosí: medios de prueba. Respecto a lo cual el Tribunal estará a lo ya resuelto en el sobreseimiento definitivo y parcial de **fs. 2582 (Tomo VIII)**.

23°) Defensa de JORGE GARCÉS YÁÑEZ.

Que **de fs. 1948 a 1972 (Tomo VI)**, el abogado Gonzalo Cruz Gutierrez en representación de **Jorge Daniel Garcés Yáñez**, en lo principal de su escrito opone excepciones de previo y especial pronunciamiento, las que fueron resueltas a fs. 2401 a 2403 (Tomo VII). En el primer otrosí en subsidio contesta acusación judicial y acusaciones particulares. Al segundo otrosí ofrece medios de prueba. Al tercer otrosí solicita beneficios de la ley 18.216.

Para un mejor entendimiento se estructura de la siguiente manera:

A. Solicitud de absolución.

a. Análisis de los testimonios y diligencias probatorias de autos

B. Derecho.

a. Doctrina y jurisprudencia sobre el tipo penal.

b. Análisis del concepto de autoría en el artículo 15 del Código Penal.

c. La Autoría Indirecta,

d. La autoría complicidad.

e. Análisis del concepto de complicidad en el Código Penal.

f. La carrera profesional del sr. Garcés.

g. Análisis de las eventuales presunciones judiciales que pudiesen hacerse valer en contra de don Jorge Garcés Yáñez respecto del delito de secuestro calificado.

C. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

D. Beneficios de la ley 18.216.

A. Solicitud de Absolución. La defensa comienza haciendo una breve reseña de la carrera funcionaria de su representando, aseverando que el 08 de septiembre de 1973 fue destinado a la Tercera Comisaría de Osorno, debiendo

custodiar la casa fiscal del capitán y su familia. De los hechos atribuidos a su representado arguye que no es efectivo, toda vez que en el expediente judicial no consta que García Yáñez hubiese realizado actividades policiales operativas ni menos haber integrado una patrulla policial.

a. Análisis de los testimonios y diligencias probatorias de autos, cita en lo pertinente declaraciones de María Angélica Vergara Herrera de fs. 444, María Eufemia Millaquipai Guichaquelén de fs. 260, Ecar Adolfo Guarda Rosas de fs. 892, Rodolfo Segundo Cheuquelaf Lorenzo de fs. 760, Héctor Vargas Soto de fs. 367 y Ana del Carmen López Barría de fs. 188 respecto a las cuales fundamentan que consta que la detención de Marcelo Gutierrez Gómez, es un hecho anterior o posterior, asociada a la aprehensión de otras tres jóvenes acusados de asaltar al retén de Bahía Mansa los que fueron ejecutados por personal de Carabineros de la Tercera Comisaria de Osorno , evidenciando que para el caso de Marcelo Gutierrez Gómez es un delito independiente, no existiendo evidencia en el expediente que permita atribuir que el desaparecido fue entregado en su oportunidad al capitán Fernández. Arguye que la declaración de fs. 397 es la única que lo menciona de manera referencial y sin asignarle labor operativa alguna. Utiliza que no existe evidencia alguna que su representado sea vinculado con la detención, muerte y desaparición de Marcelo Gutierrez Gómez.

B. En cuanto al derecho.

a. Doctrina y jurisprudencia sobre el tipo penal. Reproduce la hipótesis del artículo 141 del Código Penal. Nombra los requisitos copulativos para que se configure la hipótesis delictiva. *El régimen de autoría y participación en un delito de secuestro se encuentra vinculado necesariamente con la conducta de encerrar o detener. Determinada la persona que procedió a ejecutar estas conductas, habrá de continuarse con la indagación en las personas que pueden haber tenido participación en este - y no en otro- hecho, de acuerdo a los criterios y normas de participación criminal.* Pues bien, para acreditar la calidad "de Autor", que tan injustamente se le atribuye a su representado, se requiere que éste con dolo de autor haya desplegado todos y cada uno de los extremos de esta figura con plena convergencia objetiva y subjetiva, lo que no aconteció en este caso como se señaló previamente a propósito del análisis de los hechos acreditados en autos. La participación que se le atribuye en los hechos de autos no se ha acreditado y

ello jamás podrá serlo, por cuanto no intervino ni directa ni indirectamente en ellos. No dispuso la orden de detención ni dispuso el secuestro de la víctima.

b. Análisis del concepto de autoría en el artículo 15 del Código Penal, se refiere a la hipótesis n°1 del artículo precitado, especie de autoría que contempla las hipótesis diversas: **a) Tomar parte en la ejecución del hecho de una manera inmediata y directa**, en el caso sub lite, no existe antecedente alguno en el proceso, que permita calificar a don Jorge Garcés Yáñez bajo esta hipótesis de autoría, ya que jamás ejecutó conducta alguna constitutiva de los delitos que en esta causa se le imputan, por lo demás, nadie en la causa ha acreditado algo semejante, ni dirigió ni provocó las conductas que constituyen los tipos penales imputados. Tampoco ha existido concierto con otras personas sometidas a proceso para la ejecución de las conductas punibles. Conforme a las diversas piezas que obran en autos queda claro que en su posición no mantuvo dominio del hecho, es decir no realizó la conducta típica por sí mismo en forma material, que es lo que se recoge en la autoría directa del artículo 15 N° 1. Cita jurisprudencia de la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago; **b) Tomar parte en la ejecución del hecho, impidiendo o procurando impedir que se evite**, bajo esta hipótesis de autoría el sujeto no realiza la conducta descrita por el tipo penal, ejecuta otra conducta, consistente en impedir (objetivo logrado), o procurar impedir (objetivo frustrado), que el hecho se evite. Cita a Cury. Tampoco resulta admisible que se pretenda afincar la supuesta responsabilidad penal de don Jorge Garcés Yáñez bajo esta modalidad de autoría. Desde luego, no existe antecedente alguno en la causa que permita suponer que su defendido se haya concertado con alguien: menos aún que tal concierto versara sobre una conducta como la descrita consistente en obstaculizar la evitación de los hechos punibles atribuidos, en el contexto de un plan común con división del trabajo.

c. La Autoría Indirecta, se refiere al concepto de autoría el artículo 15 N°2 del Código Penal. En términos generales y sin adentrarnos en la discusión técnica que fluye dentro de esta forma de autoría, no hay discusión alguna en el sentido que esta hipótesis importa valerse de la conducta de un tercero para cometer el delito, sea que a su respecto se ejerza fuerza (moral) o vis compulsiva o se haga nacer en el otro la determinación de ejecutar el hecho prohibido por la Ley (inducción o instigación). En efecto, no existe en autos antecedente alguno que revele o haga suponer que su defendido, con el propósito tomado de ejecutar una

conducta constitutiva de secuestro calificado, se haya valido de una tercera merced de coacción, intimidación o amenazas para llevarlo a cabo.

d. La Autoría - Complicidad. A pesar de las disputas doctrinarias en torno a la denominación de esta forma de autoría, para efectos de una mayor claridad en la exposición utilizaremos la denominación del encabezado para describir a la hipótesis que considera autores, de acuerdo al artículo 15 N°3. Desde el punto de vista subjetivo, la coautoría requiere de un acuerdo de voluntades y, desde el objetivo, la recién mencionada prestación de una contribución que sea funcional a la realización del hecho común". (Sentencia de la lima. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 5702-2018. de 03 de agosto de 2020). Incluso, se ha recogido por nuestros tribunales que lo decisivo en esta especie de autoría es que se contribuya de algún modo en la realización del hecho, así se ha sostenido que "en relación a la coautoría, ésta supone la realización del hecho por varios sujetos conjuntamente. En un sentido amplio, se podría decir que el hecho lo realiza todos lo que intervienen en él. Materia en la que mayoritariamente se acepta en nuestra doctrina la teoría del dominio funcional del hecho, esto es. el dominio compartido se deriva para cada sujeto de la función que realiza en el hecho, y desde este punto de vista, es coautor quien, en el marco de un acuerdo o plan común con división de funciones, aporta con una contribución que para la mayoría de los autores se conforma con una especie de conocimiento o dolo común; puede entenderse por tanto que habrá coautoría, cuando existe la realización conjunta o compartida de la acción (o acciones) típica, que se concreta la determinación (o dominio) positiva conjunta o compartida del hecho. De lo expuesto y, de la prueba hecha valer por el Tribunal, para acusar a su acusado se infiere de manera categórica y definitiva que don Jorge Garcés Yáñez: a) No tomó parte en la ejecución de los hechos imputados de manera inmediata y directa; b) No tomó parte en la ejecución de los hechos imputados impidiendo o procurando impedir que estos se evitaran; c) Que no forzó o indujo a otros a ejecutar los delitos; d) Que no se concertó con nadie para cometer los delitos ni tampoco facilitó medios para que estos se llevaran a cabo; e) Que no se concertó con nadie para la ejecución de los delitos atribuidos presenciándolos sin tomar parte inmediata en ellos. f) No tuvo dominio del hecho. Cita al catedrático español Quintero Olivares. En síntesis, se debe concluir que don Jorge Garcés Yáñez no tiene la calidad de "Autor", tampoco se le puede atribuir la calidad de "Co-Autor". Cita a Enrique Cury.

Enumera los requisitos para que se configure la coautoría. Esgrime que el encausado, no concurren ninguno de los requisitos que la moderna dogmática exige para que exista "Co-Autoría", ni realizó conducta alguna que pueda asimilarse a una hipótesis de autoría en los términos exigidos en el art. 141 del Código Penal, vigente a la época en que se verificaron los hechos. Respecto al principio de culpabilidad apunta la defensa, que en doctrina extranjera, Bacigalupo ha considerado, en términos generales, que de acuerdo con el principio de culpabilidad se requiere que la aplicación de una pena esté condicionada por la existencia de dolo o culpa, de conciencia de la antijuridicidad o de la punibilidad, de capacidad de comportarse de acuerdo con las exigencias del derecho (imputabilidad), de una situación normal para la motivación del autor (exigibilidad). Asimismo, en el momento de la individualización de la pena, el principio de culpabilidad exige que la sanción sea proporcionada al hecho cometido

e. Análisis del concepto de complicidad en el Código Penal, cita el artículo 16 del Código penal. El cómplice, por lo tanto, coopera dolosamente en la ejecución del hecho ajeno, actúa con dolo que le es propio, su finalidad es que el autor alcance su designio criminal. Cita jurisprudencia de la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago y Corte Suprema. Teniendo en cuenta lo referido precedentemente y lo señalado por la doctrina son condiciones de la complicidad: a) Que el sujeto no sea autor b) que haya realizado una actividad de colaboración a la de autor, sea antes o durante la ejecución del hecho. c) Que esa colaboración la haya tomado en cuenta el autor Tal como se ha precisado reiteradamente, el señor Garcés no tiene la calidad de autor, en ninguna de las modalidades posibles, de los hechos que se le imputan. De allí entonces que queda preguntarse si puede atribuírsele la calidad jurídica de cómplice. Ciertamente la primera exigencia se cumple, más no las dos restantes. En la actuación del señor Garcés no existe por finalidad auxiliar a los autores de los delitos en esta causa investigados para que alcancen sus propósitos. No ayuda, no auxilia a la actividad de los autores, ni antes ni durante la ejecución de los delitos. Tampoco su actividad puede erigirse en conductas que se hayan lomado en cuenta por el o los autores para emplearlas o servirles de elemento para continuar o concretar el delito. Su conducta no fue tomada en cuenta en ningún momento por el o los autores del delito. Tampoco debe perderse de vista para desvirtuar cualquier posible aplicación de tipo de participación que la complicidad es siempre dolosa,

requiere de una voluntad dirigida a prestar ayuda a la actividad de él o los autores. lodos presupuestos que no concurrieron en el proceder del señor Garcés.

f. La carrera profesional del señor Garcés, aproxima la defensa que durante su carrera funcionaria de 30 años, jamás se vio involucrado en episodio alguno que pudiese configurar una conducta delictiva, como consta en su hoja de vida, acompañada en esta causa. Tampoco formó parte de algún organismo de inteligencia perteneciente a su institución u otra de las Fuerzas Armadas, ni participó en interrogatorio alguno, por las labores que le tocó desempeñar. Consta en su hoja de vida que toda su carrera posterior desempeñó cargo como Enfermero de Ganado, sin cumplir funciones operativas policiales.

g. Análisis de las eventuales presunciones judiciales que pudiesen hacerse valer en contra de don Jorge Garcés Yáñez respecto del delito de secuestro calificado, sobre la prueba de presunciones, reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema ha sostenido que: "La llamada prueba de presunción consiste en un razonamiento que partiendo de un hecho conocido proporciona certeza sobre el hecho desconocido por la vinculación o relación lógica existente entre uno y otro. Este razonamiento está integrado no sólo por los principios de la lógica sino también por los de la experiencia que permiten juzgar sobre la certeza de la conclusión". Ahora bien, en materia penal cabe tener a la vista los requisitos necesarios para poder formar convicción de culpabilidad en base a presunciones, y al efecto el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. La norma recién transcrita debe armonizarse con lo dispuesto en el artículo 456 bis del mismo cuerpo de normas. Aplicando los criterios de la lógica más elemental y las máximas de experiencia, no se puede concluir de manera alguna, como concluye mecánicamente el auto acusatorio, que se le puede atribuir la calidad de autor del delito de secuestro. En otros términos, de los antecedentes que obran en la presente investigación no puede extraerse como conclusión lógica y cierta que su representado tiene algún grado de participación en los delitos atribuidos. En el presente caso, para esta defensa no existe la duda si existe la más absoluta convicción de que los elementos probatorios de que se disponen en el proceso no pueden servir de base para una sentencia condenatoria en la forma exigida por el art. 456 bis del Código de Procedimiento Penal.

C. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, en subsidio, para el evento absolutamente improbable que desestimare las alegaciones hechas

por la Defensa, alego a favor de su representado la atenuante del 11 N°6 y 103 del Código Penal.

D. Beneficios de la ley 18.216, fundamenta la defensa que a su representado se le aplique pena sustitutiva de remisión condicional, libertad o libertad vigilada intensiva. En subsidio, solicita se le conceda a su defendido el beneficio de la reclusión parcial domiciliaria.

Defensa de **Rodolfo Segundo Cheuquelaf Lorenzo**.

24°) Que **de fs. 1948 a 1972 (Tomo VI)**, el abogado Mauricio Scheuch Araya, en representación de **Rodolfo Segundo Cheuquelaf Lorenzo**, en lo principal de su escrito opone excepciones de previo y especial pronunciamiento, las que fueron resueltas a fs. 2407 a 2409 vta. (Tomo VII). En el primer otrosí, en subsidio contesta acusación judicial y acusaciones particulares. Al segundo otrosí, ofrece medios de prueba. Al tercer otrosí, solicita beneficios de la ley 18.216.

Para un mejor entendimiento se estructura de la siguiente manera:

- A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento.
- B. Solicitud de absolución
- C. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.
- D. Beneficios de la ley 18.216.
- E. Excepción de fondo.

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento, se refiere al D.L. N°5 del 12 de septiembre de 1973 y artículos 180 a 196 del título IV del Libro II del Código de Justicia Militar, Constitución Política de la República en sus artículos N°11, 12 y 19 N°3. Que en el caso sub lite el Tribunal ha conocido esta causa sin tener jurisdicción para ello, tramitándose además conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal. Continúa, el artículo 95 de Código Penal, establece la prescripción. Destaca que el auto acusatorio en parte alguna sostiene que sean delitos de lesa humanidad. Se refiere al artículo 44 de la ley 20.357 y Estatuto de Roma.

B. Solicitud de absolución, comienza reiterando la inocencia de su representado, respecto de los cargos que se le acusan. Sin perjuicio de ello, es necesario considerar al tiempo de dictar sentencia de primera instancia conforme al mérito objetivo de los elementos procesales reunidos, y de ellos en relación con el derecho que les es aplicable en el marco del recto ejercicio de la misión jurisdiccional de un Tribunal de Derecho estricto como lo es y debe ser el de US.

ltima., de necesidad absoluta resulta tener presente, en este caso particular que, a la persona procesada injustificadamente, y luego acusada del mismo modo, nunca le correspondió participación alguna en los hechos materia de la presente investigación penal. Anexa que en el expediente no hay ninguna prueba que acredite la participación en un secuestro ni tampoco que el encausado, tuviera participación en algún hecho delictuoso. Aproxima que la acusación de autos no cumple con el artículo 424 del Código de Procedimiento Penal, que señala que el auto acusatorio será un Auto Motivado en el cual dejara testimonio de los hechos que constituyen los delitos que resultan haberse cometido y la participación que ha cabido en él o en cada uno de los procesados de la causa con expresión de los medios de pruebas que obran en el sumario para acreditar unos u otros. Ni la participación ni los medios de prueba, aparecen señalados claramente en parte alguna y más aún ni siquiera el tipo de autoría que se le atribuye. Reitera la excepción de previo y especial pronunciamiento alegada en lo principal, esta vez como alegación de fondo. Se refiere a los hechos narrados en la acusación fiscal. Sin embargo, de lo expuesto no se dice nada de qué forma intervino Rodolfo Segundo Cheuquelaf Lorenzo, más aún, se afirma que Osvaldo Nelson Rosas Cárdenas identifica a Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez en el bus del trayecto, propinándole un culatazo en el estómago, ordenando subir al vehículo policial, tan solo lo que asevera de su representado es que habría sido mandado por orden del capitán Adrián Fernández Hernández a detener a una persona (que no se individualiza, solo se da característica etarias) que se trasladaba desde Osorno a Bahía Mansa, con exactitud, en el cruce Pucatrihue. Por último, se menciona que días previos a la presunta comisión del delito de secuestro calificado, Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez habría viajado a la casa de su padrastro en el lugar de Bahía Mansa a dejarle comida a Edgar Cárdenas Gómez y regresando Osorno, con el objetivo de nuevamente abastecerse de insumos para llevar ser llevados al poblado de Bahía Mansa. De esta forma se desprende claramente que, entre el supuesto delito ya mencionado con anterioridad y el inicio de la acción penal han transcurrido casi de 49 años, superando con creces el plazo requerido por la Ley para la prescripción de la acción penal. Reproduce los artículos 93 y 94 del mencionado Código Penal. En este mismo sentido, en nuestra Corte Suprema de Justicia existe una fuerte corriente doctrinaria que sostiene que la prescripción de los delitos cometidos durante el régimen militar prescribiría al igual que los delitos

comunes. En este sentido se hace obligatorio a esta parte referirse a la discusión si el supuesto delito cometido en la presente causa, el cual se habría realizado luego del golpe militar de septiembre de 1973, podría ser considerado un delito de lesa humanidad, al cual le serían aplicables los Convenios de Ginebra de 1949, específicamente el II protocolo adicional al convenio de Ginebra relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter Internacional, el cual de ser aplicable en este caso concreto volvería inutilizable el artículo 94 del Código Penal relativo a la prescripción de la presente acción. En este sentido, se ha señalado por notables juristas nacionales que los mencionados convenios de Ginebra se aplican a conflictos armados entre dos o varias de las Altas Partes Contratantes, aunque el estado de guerra no haya sido reconocido por cualquiera de ellas. Excepcionalmente dichos convenios se aplicarán en caso de conflicto armado sin carácter de internacional, conforme a lo previsto en el artículo 3° común para todos los Convenios de Ginebra. Así el Señor Jean Pictet, jurista a quien se le considera el padre de los Convenios de Ginebra, reconoció que las partes que negociaron los Convenios de Ginebra decidieron no definir el concepto de conflicto armado no internacional. Con todo, para efectos prácticos, este destacado jurista enumeró una lista de tales condiciones, de lo cual se evidencia que no se cumplen en forma alguna durante el tiempo que se mantuvo el denominado régimen militar o dictadura producida en septiembre del año 1973, por lo que no podría entenderse de ninguna forma que existió un conflicto armado no internacional en dicho periodo. En atención a los argumentos antes señalados, es innegable que en el presente caso si procede la prescripción de la acción penal, por lo que ésta debe declararse de oficio por el presente Tribunal, liberando de esta forma a su representado de todos los cargos que se le imputan. Apoya que la jurisprudencia nacional ha utilizado planteamientos diferentes para los delitos de secuestro, concediendo el beneficio de la prescripción gradual a los responsables. En efecto, la propia Corte había señalado en el fallo pronunciado por secuestro de Diana Aran, que se trata de un delito de ejecución permanente, no siendo viable establecer una fecha de finalización de la consumación para los efectos de iniciar el cómputo de los plazos de prescripción. Así, para superar este importante argumento, en los casos ejemplificados nuestro máximo tribunal recalificó los hechos subsumiéndolos en el tipo de homicidio, con la sola finalidad de poder aplicar la prescripción gradual. En consecuencia, por un lado, se puede

aseverar que es un criterio reafirmado por la Corte Suprema, el de la prescripción, al menos la gradual en este tipo de casos y, por otro lado, que, sin desconocerse la naturaleza imprescriptible de aquellos delitos, ello no obsta a la posibilidad de ser otorgado en beneficio de los sujetos que habrían sido responsables por la declaraciones: no resulta suficientemente claro que el señor Rodolfo Segundo Cheuquelaf Lorenzo haya tenido participación en el hecho delictivo por el cual se le acusa. El principal antecedente probatorio existente y que es reiteradamente sostenido por las acusaciones tanto respecto en la forma en que se habría perpetrado el ilícito por el cual se acusa, como la participación de los autores entre ellos su representado, en relación al secuestro calificado de don Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez, provendrían de las declaraciones realizadas por Ana del Carmen López Barría, Rodolfo Segundo Cheuquelaf Lorenzo y Héctor Vargas Soto. No obstante, estas declaraciones no son suficientes para poder acreditar el delito que se señala. En ningún momento se hace referencia a acciones u omisiones efectuadas o no efectuadas por don Rodolfo Segundo Cheuquelaf Lorenzo, lo que deja entrever la ausencia de relación de causalidad entre el delito que se acusa y hechos en que efectivamente intervino su representado. En definitiva, por lo que se desprende de las acusaciones, no se sabe de qué manera participó don Rodolfo Segundo Cheuquelaf Lorenzo, en consonancia de lo que estipula el artículo 15 del Código Penal. Lo anteriormente dicho, en vista de que se le acusa de autor del delito de secuestro calificado. Es más, resulta llamativo que en las referidas acusaciones de las que son materia de este caso, no se otorgue mayor argumentación y ahondamiento con respecto del grado de participación o de la conducta desplegada en relación al ilícito de cada sujeto que ha sido procesado por los delitos de autos, se arguye principalmente de modo genéricamente sobre las declaraciones prestadas por Ana del Carmen López Barría, Rodolfo Segundo Cheuquelaf Lorenzo y Héctor Vargas Soto. Entre la afirmación del delito perpetrado y el hecho de recibir la orden de detener a una persona, no existen antecedentes conducentes que permitan concluir lo primero, no ha de haber un nexo causal entre ambas aseveraciones. Dicho de otro modo, correlación de situaciones no es causalidad. Encima, se utiliza una exageración que es falaz, ya que se plantea que el único campo para que fuese adecuada la concepción de la argumentación que maneja la lógica es la de la matemática pura, pues si bien la lógica puramente formal debe poseer su justa adecuación también

la exacerbada apreciación desconectada de sus premisas lleva a conclusiones aún más complejas y sin un nexo casual, como se puede advertir de la acusación a Rodolfo Segundo Cheuquelaf Lorenzo. En términos claros y simples, a don Rodolfo Segundo Cheuquelaf Lorenzo se le imputa como autor del delito de secuestro calificado, pero no se señala, cuáles son los hechos por el cual él habría actuado, y que permitan efectuar la correspondiente calificación delictiva que se le atribuye. Es decir, no se indica de qué manera estuvo presente en el delito que se le imputa y cuál sería la extensión de este. De esta manera, es manifiestamente insuficiente e injusto que la resolución que acusa a su representado, no contenga una descripción lo adecuadamente precisa y clara de las conductas que se le imputan para que pueda preparar satisfactoriamente su defensa. Si no se le indican con precisión qué es lo que se le acusa, el procesado se ve imposibilitado de defenderse en términos eficientes violentándose la garantía del debido proceso. La exigencia reclamada e incumplida en la acusación, no sólo emana de las normas Procedimentales antes señalada, sí no que también encuentra su apoyo en el artículo 7.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación al Derecho a la Libertad Personal. En este contexto, vale la pena referirse a la obediencia debida, para lo cual nos sostendremos a partir del artículo 211 del Código de Justicia Militar que expresa: "fuera de los casos previstos en el inciso segundo del artículo 214. Y si ellas fueren relativas al servicio podrá ser considerada como atenuante muy calificada". Por su parte, la jurisprudencia nos menciona que la obediencia debida plantea que, "la única exigencia es que la orden sea emitida por el superior en el ejercicio de sus atribuciones legítimas. Sin embargo, para el fallo no basta la orden -que tampoco la da por establecida-, sino que exige que tal sea relativa al servicio, requisito que no está establecido en la ley penal para que opere la atenuante simple reclamada". Dicho esto, resulta claro que en el caso de haber sido verdaderas las pretensiones manifestadas por las supuestas declaraciones de los acusados, estos no hubieran intervenido porque sí, sino porque ha habido una operación militar que ha venido con órdenes desde oficiales hasta suboficiales. De esta forma, y, teniendo presente que la Convicción debe alcanzarse a través de los medios de prueba legales, aparece necesario citar el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, norma que recoge el estándar exigido por la ley para dictar una sentencia condenatoria, la cual es

congruente con un sistema de prueba legal reglada o tasada, como es aquel que contempla dicho cuerpo legal.

C. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, para el evento altamente probable que dicte sentencia condenatoria, como ha sido su desempeño en su cargo de ministro en visita para casos de derechos humanos, invoca para don Rodolfo Cheuquelaf Lorenzo, se le reconozcan las atenuantes establecidas en el artículo 11 N°6 y 9 del Código Penal. La del N° 10 del artículo 10 del Código Penal, eximente incompleta, "el que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, ello en atención que el entonces Carabinero Rodolfo Cheuquelaf Lorenzo, concurrió junto a su superior jerárquico a cumplir con la orden de un superior, esto es a detener a un joven de entre 18 y 20 años, que viajaba de Osorno a Bahía Mansa en un bus de la locomoción colectiva. Conforme a lo dispuesto por el artículo 68 bis del Código Penal. Al encausado le asiste la atenuante prevista en el artículo 103 del Código Penal, esto es la denominada Prescripción Gradual, parcial o incompleta, a efectos que el presente Tribunal considere el hecho como revestido de 2 o más circunstancias atenuantes muy calificadas y de ninguna agravante, aplicando las reglas de los artículos 65, 66, 67 y 68 del ya referido texto legal en la imposición de la pena.

D. Beneficios de la ley 18.216, si se dictara sentencia condenatoria en contra del encausado, solicita la aplicación de la pena sustitutiva de la remisión de la pena o libertad vigilada contenida en el actual texto de la Ley N° 18.126.

E. Excepciones de fondo, en subsidio de la contestación a la acusación que se plantea en el segundo otrosí, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 434 del Código de Procedimiento Penal, alega como defensas de fondo las excepciones de previo y especial pronunciamiento invocadas en lo principal, esto es **declinatoria de jurisdicción y prescripción de la acción penal**, del Código en referencia. Además, no se encuentra ante un delito de Lesa Humanidad.

E. ANÁLISIS DE LAS DEFENSAS

25°) CONSIDERACIONES PREVIAS AL ANÁLISIS DE LAS DEFENSAS ESPECÍFICAS:

Que previo al análisis de la defensa específica es necesario tener en consideración los antecedentes y reflexiones que seguidamente se detallarán:

A. Estado de derecho.

B. Obligación de investigar

C. Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos (delitos de lesa humanidad) pronunciada por los tribunales alemanes

D. Convenio de Ginebra

E. Complicidad.

F. Resumen ejecutivo del auto acusatorio.

A. ESTADO DE DERECHO:

A.1. Estado Autoritario: Un Estado autoritario, es aquel donde **el poder se encuentra concentrado en una persona o grupo de personas**. Hay una estructuración estatal, existe autoridad, pero las leyes no obedecen a órganos que tengan origen democrático y por lo general no hay subordinación ni respeto a ella. (Roberto Ruiz Díaz Labrano: El Estado de Derecho algunos elementos y condicionamientos para su efectiva vigencia, p. 3. Disponible en: www.tprmercosur.org/es/doc). La historia nos muestra demasiados casos de Estados autoritarios. Al hombre contemporáneo le resultan insoportables e indignos esos Estados autoritarios. Del mismo modo, el Estado autoritario- poder arbitrario- es la antítesis del Estado de Derecho. Las diversas perspectivas políticas que apoyan el Estado de Derecho comparten su aversión hacia el uso arbitrario del poder. En una sociedad abierta y pluralista, que ofrece espacio para hacer competir ideales del bien público, la noción del Estado de Derecho se torna una protección común contra el poder arbitrario. (Oscar Vilhena Vieira (2007): La desigualdad y la subversión del Estado de Derecho. Sur – Revista Internacional de Derechos Humanos. Número 6, Año 4. p.33). En esa línea el concepto de Estado de Derecho **es una respuesta al Estado absolutista**, caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder. De ahí que la garantía jurídica del Estado de Derecho corresponda al constitucionalismo moderno. (Dante Jaime Haro Reyes: Estado de Derecho, Derechos Humanos y Democracia. www.juridicas.unam.mx. p. 123). Puede sostenerse entonces, que **su búsqueda va dirigida a limitar y restringir el poder del Estado en favor de la libertad de los individuos**. Es decir, permite entender al Estado de Derecho como contraposición al estado de fuerza o de fuerza política. (Pablo Marshall Barberán (2010): El Estado de Derecho como

principio y su consagración en la Constitución Política. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte sección ensayos, año 17 - N° 2, pp. 185-204).

A.2. Origen: El Estado de Derecho nace como un Estado respetuoso de la ley y de las libertades del ciudadano frente al poder despótico del Estado Absolutista. Luego su tarea es el aseguramiento de la libertad y propiedad del ciudadano, su objeto la promoción del bienestar del individuo. Se trata de un orden estatal justo expresado a través de una constitución escrita, el reconocimiento de los derechos del hombre, la separación de poderes y garantizado por leyes producidas y promulgadas conforme a procedimientos debidamente establecidos (Luis Villar Borda (2007): Estado de Derecho y Estado Social de Derecho. Revista de Derecho del Estado N° 20, p. 74). En todo caso, el Estado de Derecho surge como el servidor, rigurosamente controlado, de la sociedad; queda sometido a un sistema cerrado de normas jurídicas o, sencillamente, identificado con ese sistema de normas, así que se convierte en solo norma o procedimiento (Haro, p. 118).

A.3. Fundamento: El fundamento del Estado de Derecho se encuentra en la doctrina del Derecho Natural Racional. En realidad, la explicación del término no debe entenderse, en su origen, como la sujeción del Estado al Derecho estatal, sino al Derecho Suprapositivo, permanente y universal que emana de la razón. Así, **su fundamento se encuentra en la naturaleza del individuo:** en la libertad y la igualdad de las personas que se reúnen en una comunidad y que se desarrollan en la autonomía moral, la igualdad jurídica y la posibilidad de lograr el bienestar económico a través de la adquisición de la propiedad y el ejercicio libre de la empresa. Es decir, el Estado de Derecho proyecta así, un criterio de legitimidad para el dominio del Estado, en la garantía de la libertad y la propiedad de los individuos. En Alemania, el argumento del Derecho Natural ha revivido en la forma de un Derecho de rango superior, frente al cual el Derecho estatal tiene que ceder (Marshall, pp. 187-188).

A.4. Concepto: El Estado de Derecho es aquel Estado en el que autoridades e individuos se rigen por el derecho, y éste incorpora los derechos y las libertades fundamentales, y es aplicado por instituciones imparciales y accesibles que generan certidumbre (Haro, p. 124). Del mismo modo, como expresa Guastini en primer sentido el Estado de Derecho es aquel en el que están garantizados los derechos de libertad de los ciudadanos, en un segundo sentido,

Estado de Derecho es aquel Estado en el cual el poder político está limitado por el derecho, en un tercer sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual todo acto de ejercicio del poder político está sujeto al principio de legalidad (Haro, p.123). Resumiendo, para nuestro objetivo el Estado de Derecho alude a un particular diseño institucional que, con el objeto de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas, intenta guiar, controlar y limitar el ejercicio del poder público a través de normas de carácter general, que conformen un sistema claro y conocido por todos (Haro, p. 126).

A.5. Elementos: Marshall siguiendo Böckenförde, expresa que las características originales del Estado de Derecho es la siguiente: **a)** el Estado es una creación de la comunidad política y está a su servicio, no es una creación de, ni está encomendado a, ningún orden superior o divino; **b)** los objetivos del Estado quedan restringidos a la garantía de la libertad, la seguridad y la propiedad de los individuos; y **c)** la organización y regulación de la actividad del Estado debe realizarse de acuerdo a principios racionales, incluyendo entre estos los siguientes: el reconocimiento de los derechos básicos de la ciudadanía (libertad, igualdad y propiedad), la independencia de los jueces, la responsabilidad del gobierno, el dominio de la ley, la representación del pueblo y la separación de funciones (**Marshall**, p.191). En esa línea Benda considera que el Estado de Derecho **involucra:** **a)** seguridad jurídica y justicia; **b)** que la Constitución sea la norma suprema; **c)** la vinculación de los poderes públicos a la ley y al Derecho; **d)** vinculación de los poderes públicos por la primacía y reserva de ley; **e)** división de poderes; **f)** protección de los derechos fundamentales; **g)** tutela judicial; **h)** protección de la confianza jurídica. (**Marshall**, p.191). Sobre lo anterior **Villar Borda** (p. 74-81) realiza una buena síntesis de los elementos del Estado de Derecho- principios racionales dirá Böckenförde-. En realidad, en Estado de Derecho hay una acumulación de ideas de **muchas fuentes y distintas épocas**, así: **a)** sometimiento del poder al derecho; **b)** el gobierno de la razón; **c)** El gobierno de la leyes y no de los hombres; **d)** La Obligación del gobernante de proteger el derecho, la separación del poder, las libertades de los ciudadanos, los derechos del hombre y Estado Constitucional.

A.6. Chile y el Estado de Derecho: Chile siempre mantuvo una disposición a proteger los derechos fundamentales. La conciencia jurídica ya estaba instalada. Así, se aprecia en los albores de la república, se verifica esto en

el Mensaje para la promulgación de la Constitución Política de 1828, que dentro de sus párrafos expresaba, que ha llegado el día solemne de la consolidación de nuestras libertades, cesaron para nosotros los tiempos en que la suerte nos condenada a la ciega obediencia de una autoridad sin límites. Los depositarios de la autoridad se convierten en verdaderos servidores de la causa pública. Del pueblo mismo. Depositarios de su seguridad. Barreras ante las cuales deben detenerse todas las usurpaciones y todas las injusticias. **La Constitución establece la más formidable garantía contra los abusos de toda especie de autoridad, de todo exceso de poder.** La libertad, la igualdad, la facultad de publicar vuestras opiniones, de presentar reclamaciones y quejas a los diferentes órganos de la soberanía nacional, están al abrigo de todo ataque. La constitución es un tesoro que no podemos perder, ni menoscabar, sin degradarnos, ni envilecernos. En esa perspectiva la Constitución de 1925 mantuvo el mismo temple jurídico. En efecto, se presenta como un Estado de Derecho toda vez que al analizar las normas esta Constitución - vigentes al 11 de septiembre de 1973- Había Constitución escrita, **Separación de Poderes, Principio de la legalidad, Principio de garantía de los Derechos Fundamentales, Seguridad jurídica y protección de la confianza y Principio de proporcionalidad.** Lo anterior, de inicio es comprobable por la práctica democrática desde 1932 hasta 1973 en la denominada Cuarta República o bien la República democrática (**Renato Cristi y Pablo Ruiz- Tagle** (2006): La República en Chile. Teoría y práctica del Constitucionalismo Republicano. Ediciones LOM. pp. 114- 130). Además de la lectura de la Constitución de 1925 esta consagra, además, **el principio constitucional del Estado de Derecho como un principio normativo.** Así es verificable en sus artículos 1 a 4 que consagra el gobierno republicano y democrático (1) la soberanía reside en la nación (2). Ninguna magistratura, ni reunión de personas puede atribuirse ni aún pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que lo que expresamente le haya conferido por la leyes (4). Del mismo modo, el capítulo III está consagrado a las garantías Constitucionales, que el capítulo IV está dedicado al Congreso Nacional; el capítulo V al Presidente de la República; el capítulo VII al Poder Judicial.

Por su lado la Constitución de 1980 (con todas sus precariedades, limitaciones e infinitas críticas) con las reformas realizadas desde 1980 en forma incipiente nos anuncia en su artículo 4 que Chile es una República democrática.

En su artículo 5 que la soberanía reside en la nación. El capítulo III prescribe De los Derechos y Deberes Constitucionales, el capítulo IV gobierno; el capítulo V Congreso Nacional; capítulo VI Poder Judicial. **Marshall** (pp.199-202) expresa de los artículos 5 a 7 de la carta fundamental se desprenden algunos principios constitucionales que contribuyen a darle forma al Estado de Derecho en la Constitución Política: Esta disposición plantea varias cuestiones interesantes. (i) El enunciado del artículo 5 inciso 2º como consagración del principio de distribución. La afirmación de que **el Estado tiene un deber de respetar los derechos fundamentales** es la afirmación central del Estado de Derecho e implementa de esa manera el principio de distribución entre lo permitido y lo no permitido para el Estado. Por su lado el principio de Organización en supremacía constitucional (art. 6 inc. 1º), legalidad en sentido amplio (arts. 6 inc. 1º y 7 inc. 1º), garantía del orden institucional (art. 6 inc. 1º), fuerza normativa de la Constitución (art. 6 inc. 2º); responsabilidad (art. 6 inc. 3º y 7 inc. 3º), distribución de competencias-separación de poderes- (art. 7 inc. 1º y 2º), legalidad en sentido estricto (art. 7º inc. 1º).

Todas estas ideas sugieren que la idea del Estado de Derecho es la concreción institucional de las ideas de la filosofía política liberal racional. El lugar que tiene la institución de la ley para el Estado de Derecho es central para afirmar la primacía del individuo frente al Estado y va a ser el eje de continuidad sobre el cual el concepto de Estado de Derecho se va a desarrollar. (Marshall, pp. 191-192).

En la actualidad la idea del Estado de Derecho se lo considera **uno de los pilares principales de un régimen democrático** Sería difícil encontrar otro ideal político encomiado por un público tan diverso. (Vilhena, p.30).

En este caso, los homicidios calificados (como indica el mérito del proceso y el auto acusatorio de **fs. 1681 a 1725** comenzó con una privación de libertad irregular e ilícita para luego terminar con el secuestro de **Marcelo Gutiérrez Gómez**. Siendo estos grupos formados para la privación arbitraria e ilícita de los opositores al régimen militar y como se describe en el auto acusatorio de **fs. 1681 a 1725**, las múltiples pruebas, directas e indirectas generales y específicas que se han detallado y ponderado precedentemente dan cuenta de lo razonado, lo que demuestra que los acusados actuaron en estos hechos descritos en el auto acusatorio de **1681 a 1725**. Luego se dan todos los elementos del Derecho

Internacional de los Derechos Humanos y los delitos de lesa humanidad para formularles a los acusados el reproche penal que se ha señalado. Ello sin perjuicio del análisis de las defensas.

Que como se aprecia, complementado e iluminando lo que se ha expresado con anterioridad hay que tener presente que las autoridades que tomaron el Poder tras el 11 de septiembre de 1973 tenían una mayor exigencia de respetar y garantizar sin discriminación los derechos de todas las personas. En especial, porque si desde ya hay un quiebre constitucional significa que las personas no pueden recurrir en forma normal a las instituciones que pueden resguardar sus derechos, por ello cualquier actuación de la autoridad debe ser con la mayor exigencia y cuidado respecto de los derechos de las personas, ya que, está actuando sin un mandato constitucional, legal y democrático. En este caso entonces las personas detenidas y llevadas a un centro o lugar de detención estaban en una alta indefensión. El secuestro calificado (como indica el mérito del proceso) de **Marcelo del Carmen Gutierrez Gómez** fue al margen de todo derecho. En consecuencia, tanto el mando superior como los subordinados respectivos y grupos especiales para detener a personas por motivos políticos o bien por capricho o abuso de poder, se encuentran en condiciones como se ha cavilado, de realizarles un **reproche penal** como se ha hecho en esta sentencia. Ello sin perjuicio del estudio de las defensas.

B. OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR:

Cabe hacer presente que para la ponderación y aquilatación de los medios de pruebas del proceso en materia de violación a los derechos humanos (delitos de Lesa Humanidad) debe estarse al contexto de la época y lo que significa la obligación de investigar como a continuación se indica:

B.1. Los estándares normativos e interpretativos en materia de graves violaciones a los de derechos humanos (delitos de lesa humanidad) en relación a la obligación de investigar. Partamos expresando que un estándar normativo en derechos humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5° inciso 2° de nuestra

Constitución que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales (García Pino, Gonzalo: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Tribunal que a partir de la normativa aludida, está debe ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo. En este caso sobre la **Obligación de investigar**.

B.2. Que sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 124, señaló: “La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

B.3. Que esta institución denominada **control de convencionalidad** puede ser definida, en términos simples, como el mecanismo que utiliza la Corte IDH tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo, como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana (García, Gonzalo (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: Nogueira, Humberto (coord.) La protección de los

Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Librotecnia. pp. 356-357).

B.4. Que para aplicar entonces el control de convencionalidad hay que observar por supuesto la Convención Americana- ya citada- en especial los artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado, su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

B.5. Que del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna Opinión Consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un estándar normativo en materia de derechos humanos. En este caso (obligación de investigar) en relación a cómo se deben desarrollar las investigaciones cuando han ocurrido graves violaciones a los DDHH (delitos de lesa humanidad). En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

B.6. Que siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

Sentencia en caso Velásquez Rodríguez versus Honduras de 29 de julio de 1988. Párrafos 176 y 177, afirma en el **176** que (...) el Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención. Por su lado en el **177** acota que (...) la de

investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala de 19 de noviembre de 1999. Párrafo 225, añade que del artículo 1.1 se desprende claramente la obligación de investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención como medio para garantizar tales derechos.

Sentencia caso Barrios Altos versus Perú de fecha 14 de marzo de 2001. Párrafo 41 asevera que esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Sentencia caso Las Palmeras versus Colombia de 6 de diciembre de 2001, en su párrafo 42 anexa que (...) La Corte estima que es posible que, en un caso determinado, se pueda interpretar la omisión de investigación como una forma de encubrir a los autores de un delito contra la vida, pero no puede erigirse este razonamiento en una norma válida para todos los casos. Independientemente de la cuestión de la validez de la pretendida norma, es de señalar que ella sería aplicable en ausencia de una investigación seria (...).

Sentencia caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras de 7 de junio de 2003. Párrafo 184 expresa que (...) el Estado parte de la Convención Americana tiene el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y

sancionar a los autores y a quienes encubran dichas violaciones. Y toda persona que se considere víctima de éstas o bien sus familiares tienen derecho de acceder a la justicia para conseguir que se cumpla, en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad, ese deber del Estado.

Sentencia caso Bulacio versus Argentina de 18 septiembre de 2003. En el párrafo 115 explicita que (...) el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos.

Sentencia caso Myrna Mack Chang versus Guatemala de 25 de noviembre de 2003. Párrafo 277 expresa que (...) asimismo, en el cumplimiento de esta obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad en el presente caso; otorgar las garantías de seguridad suficientes a las autoridades judiciales, fiscales, testigos, operadores de justicia y a los familiares de Myrna Mack Chang y utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso.

Sentencia caso Tibi versus Ecuador de 7 septiembre de 2004. Párrafo 159 acota que (...) la Corte entiende que, a la luz de la obligación general de los Estados partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana.

Sentencia caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador de 1 de marzo de 2005. Párrafo 83 añade que (...) la Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.

Sentencia caso Comunidad Moiwana versus Suriname de 15 de junio 2005. Párrafo 145 anexa que (...) está expresamente reconocido por Suriname, que agentes estatales estuvieron involucrados en el ataque del 29 de noviembre de 1986 en el que murieron al menos 39 residentes indefensos de la

aldea de Moiwana – entre los cuales había niños, mujeres y ancianos – y muchos otros resultaron heridos. De esta manera, los hechos muestran múltiples ejecuciones extrajudiciales; en tal situación, la jurisprudencia del Tribunal es inequívoca: el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva.

Sentencia caso de la Masacre de Mapiripán versus Colombia de 15 de septiembre de 2005. En sus párrafos 137, 233 y 299. Afirma en el **137** (...) Tal como se desarrolla en las consideraciones sobre los artículos 8 y 25 de la Convención una de las condiciones para garantizar efectivamente el derecho a la vida se refleja necesariamente en el deber de investigar las afectaciones a ese derecho. De tal manera, la obligación de investigar los casos de violaciones al derecho a la vida constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal en el presente caso. **233** (...) Este deber de investigar deriva de la obligación general que tienen los Estados partes en la Convención de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en ella, es decir, de la obligación establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado en conjunto con el derecho sustantivo que debió ser amparado, protegido o garantizado. De tal manera, en casos de violaciones al derecho a la vida, el cumplimiento de la obligación de investigar constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal por la inobservancia de las debidas garantías judiciales y protección judiciales; **299** (...) Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Colombia debe: **a)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **b)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **c)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de Mapiripán.

Sentencia caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia de 31 de enero de 2006. Párrafo **143** afirma que en particular, por constituir el goce pleno del derecho a la vida la condición previa para la realización de los demás derechos una de esas condiciones para garantizar efectivamente este derecho está constituida por el deber de investigar las afectaciones al mismo. De tal manera, en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y

otras graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

Sentencia caso Goiburú y otros versus Paraguay de 22 de septiembre de 2006. Párrafos 117, 129 y 130. Asevera que **117 (...)** Además, es preciso reiterar que esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Durante la investigación y el trámite judicial las víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación, de acuerdo con la ley interna y la Convención Americana. No obstante, la investigación y el proceso deben tener un propósito y ser asumidos por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. **129 (...)** una vez establecido el amplio alcance de las obligaciones internacionales erga omnes contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que en los términos del artículo 1.1 de la Convención Americana los Estados están obligados a investigar las violaciones de derechos humanos y a juzgar y sancionar a los responsables. **130 (...)** Por ende, según la obligación general de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Paraguay debe adoptar todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, inclusive impulsando por todos los medios a su alcance las solicitudes de extradición que correspondan. La inexistencia de tratados de extradición no

constituye una base o justificación suficiente para dejar de impulsar una solicitud en ese sentido.

Sentencia caso Almonacid Arellano y otros versus Chile de 26 de septiembre de 2006. Párrafos 111 y 114. Expresa **111** (...) Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. **114** (...) Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía.

Sentencia caso del penal Miguel Castro versus Perú de 25 de noviembre de 2006. Párrafo **387**. (...) Explicita que en primer término, esta Corte considera que el tiempo transcurrido entre el momento de los hechos y el inicio del proceso penal por la investigación de éstos sobrepasa por mucho un plazo razonable para que el Estado realice las primeras diligencias probatorias e investigativas para contar con los elementos necesarios para formular una acusación penal, máxime que a ese tiempo habrá que sumar el que tome la realización del proceso penal, con sus distintas etapas, hasta la sentencia firme. Esta falta de investigación durante tan largo período configura una violación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, por cuanto el Estado ha incumplido su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para investigar las violaciones, sancionar a los eventuales responsables y reparar a las víctimas y sus familiares.

Sentencia caso de la Masacre de La Rochela versus Colombia de 11 de mayo de 2007. Párrafos 155, 156 y 171. Explaya que, **155** (...) La Corte estima que la ineffectividad de tales procesos penales queda claramente evidenciada al analizar la falta de debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales de investigación. Esta falta de debida diligencia se manifiesta en la irrazonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la falta de adopción de las medidas necesarias de protección ante las amenazas que se presentaron durante las investigaciones, las demoras, obstáculos y obstrucciones en la realización de actuaciones procesales y graves omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. **156** (...) el eje central del análisis de la efectividad de los procesos en este caso es el cumplimiento de la obligación de investigar con debida diligencia. Según esta obligación, el órgano que investiga una violación de derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos. **171** (...) este Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismo.

Sentencia caso Escué Zapata versus Colombia de 4 de julio de 2007. Párrafo **106** indica que (...) Una debida diligencia en los procesos investigativos requiere que éstos tomen en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto y las circunstancias en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, en seguimiento de todas las líneas lógicas de investigación. Las autoridades judiciales deben intentar como mínimo, inter alia: **a)** identificar a la víctima; **b)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con los hechos; **c)** identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones; **d)** determinar

la causa, forma, lugar y momento en que se produjo el ilícito, así como cualquier patrón o práctica que lo pueda haber causado; y **e)** en caso de fallecimientos, distinguir entre muerte natural, accidental, suicidio y homicidio.

Sentencia caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú de 10 de julio de 2007. Párrafo 131 manifiesta que (...) el Tribunal reitera que la obligación de investigar es una obligación de medio, no de resultados. Lo anterior no significa, sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como “una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos.

Sentencia caso García Prieto y otros versus El Salvador de 20 de noviembre de 2007. Párrafos 104, 112 y 115. Menciona en **104**, (...) que cabe señalar que la obligación de investigar no sólo se desprende de las normas convencionales de Derecho Internacional imperativas para los Estados Parte; sino que además se deriva de la legislación interna que haga referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos. **112** (...) la obligación a cargo del Estado de actuar con debida diligencia en la práctica de una investigación implica que todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para que sea posible alcanzar los objetivos de una investigación. La autoridad encargada de la investigación debe velar para que se realicen las diligencias requeridas y, en el evento de que esto no ocurra, debe adoptar las medidas pertinentes conforme a la legislación interna. A su vez, las otras autoridades deben brindar al juez instructor la colaboración que éste les requiera y abstenerse de actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. En el presente caso se presentaron actos de esta naturaleza en lo que toca a la investigación relativa a la inspección de los libros de “entradas y salidas” del personal del Batallón San Benito de la extinta Policía Nacional. **115** (...) Para la Corte la falta de respuesta estatal es un elemento determinante al valorar si se ha dado un incumplimiento del contenido de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención

Americana, pues tiene relación directa con el principio de efectividad que debe irradiar el desarrollo de tales investigaciones. De tal forma el Estado al recibir una denuncia penal, debe realizar una investigación seria e imparcial, pero también debe brindar en un plazo razonable una resolución que resuelva el fondo de las circunstancias que le fueron planteadas.

Sentencia caso Heliodoro Portugal versus Panamá de 12 de agosto de 2008. Párrafo 142 narra que (...) la obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. La Corte ha sostenido que, para cumplir con esta obligación de garantizar derechos, los Estados deben no sólo prevenir, sino también investigar las violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Convención, como las alegadas en el presente caso, y procurar además, si es posible, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por las violaciones de los derechos humanos.

Sentencia caso Tiu Tojín versus Guatemala de 26 de noviembre de 2008. Párrafo 77 acota que (...) en base en lo anterior, el Estado deberá asegurar, como una forma de garantizar que la investigación iniciada ante la justicia ordinaria sea conducida con la debida diligencia que las autoridades encargadas de la investigación tengan a su alcance y utilicen todos los medios necesarios para llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado garantizará que las autoridades encargadas de la investigación cuenten con los recursos logísticos y científicos necesarios para la recaudación y procesamiento de pruebas y, en particular, tengan las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y puedan obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. En este sentido, cabe reiterar que en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes.

Sentencia caso Ríos y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. Párrafo **283** añade (...) que la investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados” incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de *ius cogens*. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Perozo y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. En su párrafo **298** apunta que (...) la obligación general de garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección. Por ello, corresponde determinar si en este caso, y en el contexto en que ocurrieron los hechos alegados, la obligación general de garantía imponía al Estado el deber de investigarlos efectivamente, como medio para garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la integridad personal, y evitar que continuaran ocurriendo. La investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados”, incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de *ius cogens*.

Cogens. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Anzualdo Castro versus Perú de 22 de septiembre de 2009. Párrafo 135 apoya que (...) este Tribunal ha establecido que para que una investigación de desaparición forzada sea llevada adelante eficazmente y con la debida diligencia, las autoridades encargadas de la investigación deben utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado debe dotar a las correspondientes autoridades de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. Asimismo, es fundamental que las autoridades a cargo de la investigación puedan tener acceso ilimitado a los lugares de detención, respecto a la documentación así como a las personas. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades

nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación.

Sentencia caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia de 26 de mayo de 2010. Párrafo 118 aproxima que (...) en casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial del Senador Cepeda sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.

Sentencia caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña versus Bolivia de 1 de septiembre de 2010. Párrafo 158 arguye que (...) la Corte considera pertinente reiterar, como lo ha hecho en otros casos, que la “verdad histórica” documentada en informes especiales, o las tareas, actividades o recomendaciones generadas por comisiones especiales, como la del presente caso, no completan o sustituyen la obligación del Estado de establecer la verdad e investigar delitos a través de procesos judiciales.

Sentencia caso Gelman versus Uruguay de 24 febrero de 2011. Párrafo 194 asevera que (...) la Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

Sentencia caso Núñez Naranjo y otros versus Ecuador del 23 de mayo de 2023. Párrafo 81 asevera que, De forma reiterada en su jurisprudencia, la Corte ha establecido que la desaparición forzada es una violación compleja y múltiple, que pone a la víctima en un estado de completa indefensión y atenta contra diversos bienes jurídicos protegidos por la Convención Americana. En particular, esta conducta genera la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal,

consagrados en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención, respectivamente. Asimismo, la Corte ha señalado que, si un Estado práctica, tolera o permite un acto de desaparición forzada, incumple las obligaciones previstas en el artículo I a) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que prohíbe tales conductas. Continúa, el **párrafo 83** que, asimismo, la Corte ha afirmado que la desaparición forzada es “un acto continuado o permanente, que permanece mientras no se conozca el paradero de la víctima o se hallen sus restos, y mientras no se determine con certeza la identidad de los mismos”. Este acto se configura cuando se presentan en forma concurrente los siguientes elementos: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o de personas que actúen con autorización, apoyo o aquiescencia de estos; y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada. Que el **párrafo 106** asienta que, Los Estados tienen el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, en su caso de imponerles las sanciones pertinentes, y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. En particular, cuando se trata de la investigación de violaciones en perjuicio de personas que se encontraban bajo custodia del Estado, las autoridades correspondientes tienen el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva, es decir, con la debida diligencia, sustanciada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad. Tales características del deber de investigar son aplicables, con mayor razón, en casos de posible desaparición forzada de una persona. Por último, el **párrafo 107** refiere, Frente a esta violación en particular, además del deber de investigar y sancionar a los responsables, la Corte ha subrayado la existencia de una obligación autónoma de buscar y localizar a las personas desaparecidas, derivada de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, del artículo X de la CIDFP y de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas. Este deber también ha sido desarrollado por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y por los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Estos últimos indican que las autoridades encargadas deben iniciar la búsqueda de oficio, incluso si no se ha presentado una denuncia o una

solicitud formal y agregan que “[l]a búsqueda de la persona desaparecida y la investigación penal de los responsables de la desaparición deben reforzarse mutuamente”, toda vez que “[e]l proceso de búsqueda integral de las personas desaparecidas debe iniciarse y llevarse a cabo con la misma efectividad que la investigación criminal.”

B.7. Síntesis de estos estándares normativos citados. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia sólida y robusta ha sostenido un estándar en relación a la **Obligación de Investigar** en materia de derechos humanos, en cuanto tratándose de graves violaciones a los derechos humanos (entre otros el delito lesa humanidad) los Estados deben realizar determinadas actividades. En concreto realizando un resumen de la Jurisprudencia anterior y apoyándonos además en Eduardo Ferrer Mac-Gregor- (Las siete principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicable a la justicia penal. Revista IIDH v. 59 pp.45-48). Autor además que es Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

B.7.1. Investigar efectivamente los hechos. En casos de ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida y castiguen a todos los responsables, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de no ser así se estarían creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para que se repitan estos hechos, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida.

B.7.2. Si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado. En este sentido, la Corte IDH ha establecido que en casos de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, las autoridades de un Estado deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que tengan conocimiento del hecho.

B.7.3. El deber de investigar es una obligación de medios, no de resultados, la investigación de este tipo de casos debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de intereses particulares que

dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares, o de la aportación privada de elementos probatorios. Esto último no se contrapone con el derecho que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares a ser escuchados durante el proceso de investigación y al trámite judicial, así como a participar ampliamente de los mismos.

B.7.4. Cabe destacar que cualquier carencia o defecto a los responsables materiales o intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida.

B.7.5. La Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.

B.7.6. Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, se debe: **1)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **2)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **3)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia.

B.7.7. La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

B.7.8. El Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”.

B.7.9. Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos.

B.7.10. El Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos.

B.7.11. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación y en algunos casos, la imposibilidad para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación

B.7.12. En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.

B.7.13. La Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

B.7.14. La Corte IDH ha establecido ciertos Principios Rectores, con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, para las investigaciones cuando se considera que una muerte pudo deberse a una

ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben: **1)** Identificar a la víctima; **2)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte con el fin de ayudar en cualquier investigación; **3)** Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones con relación a la muerte que se investiga; **4)** determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y **5)** distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen; se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados.

B.8. Que tal como se ha señalado latamente en los párrafos precedentes, estos son los estándares normativos e interpretativos que se deben ponderar tanto al momento de investigar, como al momento de valorar la prueba del proceso. El Tribunal debe considerar las dificultades de la época, el contexto para reunir la prueba y ver los patrones de conducta de los Agentes del Estado. **Tal como, lo que se ha realizado en esta sentencia** y que determinadas defensas nada expresan. Así del estudio de sus argumentos sucede que no hay un cotejo y ponderación adecuado de todos los testigos, documentos y peritajes, sino que se refieren a eventos parciales de su propio interés. Ocurre que estas defensas, deben situarse en la sede del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y lo que significa la violación de los Derechos Humanos y el delito de lesa humanidad.

C. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL SOBRE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS (DELITOS DE LESA HUMANIDAD) PRONUNCIADA POR LOS TRIBUNALES ALEMANES.

C.1. Que en todo caso a propósito de delitos de Lesa humanidad y la estructura legal y normativa que debe ponderarse en la sentencia (debe considerarse- con los ajustes hecho y derecho al contexto chileno- pues también los hechos investigados son graves violaciones a los derechos humanos, en este caso delitos de lesa humanidad y haremos los ajustes precisos y detallados al caso chileno, esto es, Centros de Detención, Regimientos, Destacamentos, Retenes, Tenencias, Comisarías, Bases Navales, Bases Aéreas, Cuarteles, Cárceles, Calabozos y todo otro lugar legal o ilegal que sirvió para detención, tortura o ejecución en la realidad chilena de la época) es muy significativo lo

razonado en derecho comparado en los **casos de Iwan Nikolai de Demjanjuk** (condenado el 12 de mayo 2011) y **Oskar Gröning** (condenado 15 de julio de 2015), quienes tenían 91 y 94 años de edad , respectivamente, al ser condenados por Tribunales Alemanes. A continuación se realiza un síntesis en lo pertinente de los artículos de Gerhard Werle y Boris Burghardt-Universidad Humboldt- Berlín sobre el caso Demjanjuk y de Claus Roxin sobre el caso Oskar Gröning.

C.2. Que el primer artículo versa sobre la complicidad en matanzas ocurridas en campos de exterminio nacionalsocialistas (el caso Demjanjuk en el contexto de la jurisprudencia de la República Federal Alemana). Gerhard Werle y Boris Burghardt-Universidad Humboldt- Berlín. Revista Penal México. N°9 septiembre 2015- febrero 2016, pp.181-193. Corresponde al análisis de la sentencia recaída contra Iwan Nikolai Demjanjuk, quien fue considerado cómplice en el exterminio masivo de personas. El 12 de mayo de 2011, el segundo Landgericht (LG, Tribunal Estatal) de Múnich condenó a Iwan Nikolai Demjanjuk, quien se había dado como nombre John para su segunda vida en Estados Unidos, a una pena única de cinco años por complicidad en 16 casos de homicidios calificados, de los que resultaron un total de 28060 muertes. Antes de la revisión de los recursos pendientes, que habían presentado tanto el condenado como la Fiscalía, Demjanjuk murió el 20 de marzo de 2012, a los 91 años. Lo que se razona es que antes de esta sentencia habría valido, conforme a la jurisprudencia de la República Federal Alemana, que una condena requeriría de la prueba de un hecho delictivo concreto (konkreten Einzeltatnachweis) imputable a cada acusado. Pero lo cierto es que los querellantes alegaron que la fundamentación de la responsabilidad como **cómplice** de Demjanjuk no se fundaría en un novum jurídico, sino que se vincularía con una jurisprudencia que habría sido olvidada solamente por razones de oportunidad política. El caso Demjanjuk implicaría una vuelta a la valoración correcta de acuerdo a la dogmática jurídico-penal. En efecto el segundo Landgericht de Múnich comprobó que Demjanjuk llegó a Sobibór como Trawniki (Se conocía como Trawniki a prisioneros de guerra y personas sometidas a trabajos forzados que recibieron entrenamiento por parte de las SS (Escuadras de Defensa) para colaborar en los campos de concentración y en llevar a cabo el genocidio. En su mayoría se trataba de ucranianos y los así llamados alemanes étnicos (Volksdeutsche) de la Unión Soviética. La denominación tiene su origen en el campo de Trawniki –donde tenía lugar el entrenamiento– que se ubicaba

aproximadamente a 40 kilómetros al este de Lublin) el día 27 de marzo de 1943, permaneciendo allí hasta mediados de septiembre del mismo año. El tribunal señaló que si bien no fue posible comprobar las actividades desarrolladas por Demjanjuk dentro del campo de concentración, se consideró el hecho de que **el campo de Sobibór se habría dedicado exclusivamente a la matanza de judíos deportados**. Los Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habrían colaborado en todas las fases del exterminio bajo las órdenes del personal alemán del campo. Se habrían repartido en tres turnos: uno de ellos habría estado dedicado a la seguridad externa del campo, otro habría vigilado las labores en el campo y el tercero habría permanecido de guardia. Los turnos habrían durado ocho horas y habrían rotado entre tres días de turnos de vigilancia y tres días de turnos de guardia. Al arribo de un transporte, los Trawniki se habrían ocupado de vigilar a los judíos que llegaban y a los prisioneros que estaban sometidos a trabajos forzosos, que consistían en descargar a los deportados, hacerlos pasar a las cámaras de gas, someterlos a gases letales, y luego el examen y la remoción de los cadáveres. **Cada Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habría sabido que formaba parte de un aparato que no buscaba otra cosa que la manera más eficiente de matar al mayor número posible de personas**. Además, todos los Trawniki habrían tenido conciencia de la manera en que los judíos eran exterminados, y de que esto acontecía exclusivamente por motivos de odio racial. Durante el periodo de tiempo en el que Demjanjuk cumplió labores como Trawniki en Sobibór habrían arribado comprobadamente 16 transportes con 29779 personas deportadas. De ellos, un total de 28060 fueron asesinadas inmediatamente tras su llegada, ya sea en las cámaras de gas o a tiros. En esa línea el homicidio de todas las personas que compartieron un transporte fue valorado por la sala como una unidad de acción desde el punto de vista jurídico. En cada uno de estos actos habría colaborado Demjanjuk como cómplice.

C.3. Que los principales hallazgos de la sentencia son, en este punto, que todos quienes formaban parte de la cadena de mando –comenzando con los miembros de la RSHA (Agencia Central de Seguridad Imperial) encargados de llevar adelante el exterminio de los judíos, pasando por los empleados ferroviarios, las personas en la administración del gobierno general, los directores de campos de concentración, los Oficiales de la SS (Schutzstaffel, fuerzas especiales nazis), los Oficiales de Policía en los campos de concentración individualmente

considerados y el personal de vigilancia directamente comandado por ellos—tenían, cada uno, una tarea asignada en la expulsión de ciudadanos judíos de Alemania, planeada y organizada desde Berlín, hacia los países ocupados y controlados por el ejército alemán; en su transporte en los campos de exterminio y —siempre que no fueran seleccionados para ser forzados a trabajar, lo que ocurría con un pequeño grupo de ellos— en su homicidio inmediato y organizado en las cámaras de gas, como en una línea de producción. Sostiene la sentencia que los tres campos de exterminio de Treblinka, Belzec y Sobibór sirvieron al solo propósito del asesinato masivo de la población judía de Europa, y que con ello toda actividad del imputado y de las demás personas que tenían a su cargo tareas de vigilancia era una promoción de la tarea principal del campo de exterminio. En ese contexto, daba lo mismo si debían vigilar los andenes de arribo del tren, guiar a los prisioneros hasta las cámaras de gas, vigilar a los judíos que debían incinerar los cadáveres de los muertos, vigilar a los prisioneros sujetos a trabajos forzados para mantener el funcionamiento del campo y apropiarse de las pertenencias de los difuntos, controlar desde la torre de vigilancia para contrarrestar sublevaciones desde el interior o defenderse ante eventuales ataques de partisanos o realizar el servicio de guardia de reserva para el caso de alguno de estos eventos. Sostiene el tribunal que el peso del actuar individual para el plan común no es relevante para satisfacer la tipicidad de la complicidad, sino que adquiere relevancia solamente para la determinación de la pena, y que, en particular, no es relevante una relación causal, en el sentido de que la contribución del cómplice deba originar la consumación del hecho principal.

C.4. Que asimismo la resolución con otros procesos seguidos por la justicia de la República Federal Alemana por matanzas en los campos de concentración exclusivamente dedicados al exterminio, la Jurisprudencia había seguido la misma posición que luego fue olvidada. Así es posible observarlo, ya en la **sentencia de la sala especial del Landgericht de 1950 contra Hubert Gomerski y Johann Klier** se dice con claridad ejemplar: “El campo Sobibór fue creado con el solo fin de dar muerte a un gran número de judíos”. La sala sigue: “Todos quienes trabajaban en ese campo —alemanes, ucranianos y judíos— tenían su tarea particular, sea que hayan participado inmediatamente de los homicidios o que hayan apoyado indirectamente las tareas del campo. Todas estas actividades fueron en último término causales para el resultado —la muerte de los judíos—,

pues sólo por haber existido este conjunto de actividades fue posible el resultado”. Esta argumentación la mantuvo la sala especial del Landgericht incluso para el Klier, quien hizo valer irrefutablemente que el solamente había trabajado en la panadería del campo y luego habría dirigido el comando de los zapatos (Schuhkommando), que se dedicaba a recolectar, seleccionar y almacenar los zapatos de los asesinados en las cámaras de gas. La sala especial del Landgericht hizo nuevamente hincapié en que **“todas las personas que trabajaban en el campo de Sobibór eran engranajes de un sistema que tenía por única finalidad matar a judíos. Toda acción que se llevó a cabo en ese campo servía directa o indirectamente a ese fin. Todas esas acciones fueron necesarias para la operación del campo.** De este modo, tanto la actividad del acusado Klier en la panadería como la actividad que tuvo a cargo de los zapatos fueron causales para el resultado”.

C.5. Que del mismo modo dieciséis años después, en el gran proceso de Sobibór, la sala especial del Landgericht tampoco dudó en clasificar como colaboraciones promotoras del resultado a aquellas que no estaban directamente vinculadas con la operación de exterminio, como por ejemplo el trabajo como tesorero o administrador del campo, o como responsable del abastecimiento de víveres y vestuario del personal del campo. La sentencia dijo sobre este punto: “Allí donde ellos [los acusados] formaban parte de la organización de los campos, [...] todos contribuyeron a hacer posible, por su colaboración funcional, los asesinatos masivos contra los judíos, siendo su causa y promoviéndolos en inmediata cercanía al hecho”. El Tribunal Federal alemán confirmó esa argumentación en cuanto conoció de la revisión de esas sentencias. Particularmente destacable resulta en ese contexto lo dicho respecto de la **sentencia de primera instancia de hechos en el proceso Kulmhof**, que se llevó adelante durante los años 1962 y 1963 ante el Landgericht de Bonn contra 12 acusados. Ante la **alegación por parte de algunos acusados de que se los habría condenado como cómplices mediando un error jurídico**, porque ellos solamente habrían llevado a cabo acciones “que [...] se enmarcaban dentro de las tareas entonces asignadas a la policía de protección [Schutzpolizei]”, y por lo mismo habrían sido “valorativamente neutrales” y no podrían ser valoradas como fundamento de complicidad en un asesinato, el Tribunal Federal Alemán respondió claramente: “Conforme a lo constatado [...] ya por su pertenencia al comando

especial que fue creado para el sólo fin de aniquilar a la población judía de Polonia y ciertos otros grupos de personas cuya vida era considerada útil, **los acusados han colaborado en el asesinato de las víctimas**. La naturaleza de las tareas que les correspondió realizar a cada uno en la ejecución de acciones individuales deviene en razón de ello –por lo menos en este contexto– irrelevante”. Tampoco en los procesos posteriores tuvieron éxito las revisiones fundadas en alegaciones contra la calificación del trabajo en campos de exterminio como complicidad en el asesinato masivo, que se llevó a cabo en esos campos de exterminio.

C.6. El caso Demjanjuk ha demostrado que el segundo Landgericht de Múnich en ningún caso ha penetrado en nuevo terreno jurídico en lo tocante a las valoraciones jurídicas centrales, sino que ha continuado con un camino que ya había sido trazado. La justicia de la República Federal alemana ha constatado desde siempre que **toda función desempeñada en el funcionamiento de los campos de concentración de Treblinka, Belzec, Sobibór y Chelmno era complicidad en el asesinato masivo**. La declaración principal podía resumirse diciendo que **allí no había actividades neutrales**. Es decir esta valoración fundamental fue confirmada en el proceso contra Demjanjuk. Ella es correcta y resulta de la aplicación de los fundamentos de la complicidad que desde hace tiempo están fijados por la jurisprudencia. Según ellos, se presta una colaboración por medio de cada comportamiento que promueve la comisión del hecho principal objetivamente de cualquier manera. En el caso de formas de comportamiento que, miradas en sí mismas son cotidianas y permitidas, **según la jurisprudencia la situación dependerá del conocimiento que tengan los partícipes: si saben que su actuar promueve la comisión del hecho principal, su acción pierde en todo caso su carácter de acción cotidiana**. Luego el caso Demjanjuk no creó una nueva construcción de la punibilidad a título de complicidad. El proceso se deja entender más bien como una reactivación de principios reconocidos de la complicidad en relación con homicidios masivos en la época nacionalsocialista. El caso llevó la atención a que estos principios fueron pasados por alto en muchos procesos por largo tiempo.

C.7. Que el segundo artículo versa sobre la **sentencia en el asesinato por medio del servicio en el campo de concentración de Auschwitz**. Sentencia del BGH y comentario de Claus Roxin (Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano. CEDPAL, Editores Kai Ambos John

Zuluaga, volumen 2, 2018, pp. 189-209). Se resumen en lo pertinente el análisis de la sentencia de la Tercera Sala Penal del Tribunal Supremo Federal, la que con fecha 20 de septiembre de 2016 decidió por unanimidad rechazar el recurso de revisión solicitado por el acusado (Oskar Gröning) en contra de la sentencia del Tribunal Regional de Luneburgo del 15 de julio de 2015.

C.8. Que el Tribunal Regional (Landgericht) sentenció al acusado a una pena de cuatro años de prisión en **calidad de cómplice** de asesinato en 300.000 casos, todos los casos legalmente coincidentes. Contra su condena, el acusado promovió recurso de revisión basado en la invocación de la violación al derecho formal y sustantivo. El recurso deviene infructuoso. El sentenciado murió a los 94 años antes de empezar a cumplir la sentencia condenatoria. Los fundamentos son: **a)** Una vez trasladado al campo de concentración de Auschwitz, el acusado fue asignado a un puesto en el área de Administración del dinero de los prisioneros. Entretanto había sido promovido al grado de Sargento Segundo de las SS (SSUnterscharführer) y asignado a la Operación Hungría, de igual manera que en la Operación Reinhard. De tal modo que en el transcurso de la Operación Hungría, el acusado, uniformado y armado con una pistola, desempeñó durante al menos tres días -no mayormente precisables-, las funciones de servicio de rampa en la denominada nueva rampa. En primer lugar, tenía la tarea de custodiar en el campo de concentración de Auschwitz el equipaje allí depositado durante la descarga de los trenes que llegaban a Auschwitz y, de esta manera, evitar el robo. Aunque en Auschwitz el robo por parte de los miembros de la SS estaba a la orden del día, la mayoría de estos hechos no fueron perseguidos ya que los autores cedían subrepticamente una parte del botín, a fin de mantener la moral de las tropas. En la rampa, sin embargo, debía impedirse en todo momento que los equipajes fueran abiertos, inspeccionados y saqueados a la vista de los deportados, para no levantar sospechas y evitar revueltas, que pudieran poner en riesgo el procedimiento ulterior de selección y gaseado. Al mismo tiempo y mediante sus funciones en el servicio de rampa, el acusado formó parte del contexto de intimidación usado para sofocar, ya desde el origen, cualquier idea de resistencia o huida. Además, del servicio de rampa, el acusado estaba encargado, conforme a su función en la sección de administración del dinero de los prisioneros, de la clasificación monetaria, la contabilidad, la administración y el transporte hacia Berlín del dinero de los deportados. Allí, lo entregaba en

intervalos irregulares a la Dirección General de Administración Financiera de las SS (SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt) o lo depositaba directamente en una cuenta de las SS en el Reichsbank. Asimismo, incumbía en todo momento a las funciones de servicio del acusado, la supervisión de los deportados y, en caso necesario, el impedir por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga; **b)** Desde su participación en la Operación Reinhard, el acusado conocía todos los detalles de los procedimientos empleados en el campo de concentración de Auschwitz. En particular, él sabía que los judíos deportados en forma masiva a Auschwitz eran masacrados aprovechándose deliberadamente de su calma e indefensión. Asimismo, él era consciente de que con sus actividades apoyaba la maquinaria de muerte que operaba en Auschwitz. Él fue -al menos- condescendiente con tal proceder, para evitar ser transferido a las unidades de las SS que combatían en el frente de batalla.

C.9. Que el profesor **Roxin** expresa que la afirmación de la Sala Penal según la cual el acusado ha prestado asistencia a todos estos hechos, no resulta objetable por motivos legales. Además, continúa que esto se aplica en primer lugar con relación a las víctimas frente a cuyo arribo en Auschwitz-Birkenau el acusado se encontraba cumpliendo con el servicio de rampa. No exige mayores discusiones el hecho de que, con su accionar, el acusado prestaba asistencia a los miembros de las SS, los que a su vez cometían asesinatos mediante la previa selección en la rampa y la inmediata ejecución a través del rociamiento del Zyklon B en las cámaras de gas. Añade que el acusado prestó asistencia entonces en el sentido del Art. 27 inciso 1 del Código Penal, por un lado –mediante la vigilancia del equipaje-, a conservar la calma de quienes llegaban y, por el otro -como una parte del contexto de intimidación-, a sofocar toda idea de resistencia o fuga. Ahora bien, razona que también resulta punible el acusado por complicidad en el asesinato respecto de las víctimas que arribaron y a las cuales él no prestó el servicio de rampa. En efecto, aunque no pueda aseverarse que con su accionar el acusado haya prestado asistencia física o psicológica directa a los médicos que participaron en la selección o a los miembros de las SS que realizaron la matanza, el Tribunal Regional no obstante tomó acertadamente como punto de partida que el acusado por medio del ejercicio general de su servicio en Auschwitz, ya había prestado asistencia a los dirigentes estatales y a las SS, quienes a principios de 1944 ordenaron la Operación Hungría, la que subsecuentemente desde una

posición de liderazgo, implementaron o dejaron implementar (para la autoría mediata en el marco de los aparatos de poder estatales).

C.10. Que desde esa perspectiva cavila el autor, que **el acusado tuvo participación en esta facilitación de los hechos**. Era parte del aparato de personal que ya estaba cumpliendo funciones al momento de la orden para llevar a cabo la Operación Hungría en Auschwitz. Él estaba vinculado a la organización de los asesinatos masivos, e independientemente de esto, le incumbía supervisar y vigilar la llegada de los deportados a la rampa y evitar por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga. Finalmente, más allá de esto, también estuvo involucrado en el aprovechamiento de los bienes de las víctimas, lo que hizo que las SS se beneficiaran incluso luego de la muerte de las víctimas. El hecho de que estas funciones fueran ejercidas en el campo de concentración de Auschwitz por miembros de las SS que eran activos allí, era bien conocido por los responsables cuando se ordenó la Operación Hungría y fue de fundamental importancia para su resolución de actuar y emitir las respectivas órdenes y mandatos. El hecho de que ellos no conocieran personalmente al acusado es jurídicamente irrelevante. Bastaba con que ellos sepan que todas las tareas a desarrollarse para poner en marcha esa mortífera maquinaria, serían cumplidas por subordinados confiables y obedientes, lo que garantizaba una implementación sin obstáculos de la Operación Hungría.

C.11. Que todo según el contexto general de los fundamentos del veredicto, era también conocido por el acusado, quien lo aprobó -al menos- con condescendencia. Ya estaba plenamente informado de los acontecimientos, poco después de su llegada a Auschwitz. Sin embargo, en su empeño por no ser transferido al frente, se unió a la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que se le impartieron. Él tenía en claro, por lo tanto, que a través de su servicio, en colaboración con otros, lograba asegurar en todo momento las condiciones necesarias para que las autoridades del Estado y de las SS pudieran decidir y ordenar la ejecución de una operación de exterminio en Auschwitz, ya que dependían de la ejecución a nivel local de sus órdenes criminales. Precisa Roxin que desde el punto de vista subjetivo, no se requiere más para tener por acreditada la contribución del acusado en todos los asesinatos que le fueran atribuidos en la sentencia impugnada por la Operación Hungría.

C.12. Que por ello Claus Roxin considera que la decisión anterior relatada, es correcta y cree que merece la relevancia que se le ha atribuido. Ella deja definitivamente en claro que **los miembros del equipo de un campo de concentración se hicieron culpables por complicidad en el asesinato**, si ellos sabían de los asesinatos cometidos durante su pertenencia al campo y apoyaron la operación del campo dirigida al exterminio a gran escala de vidas humanas.

C.13. Que el autor recuerda que tampoco la **Sentencia de la Segunda Sala Penal del 20.2.1969** (veinte de febrero de mil novecientos sesenta y nueve), a la que se ha remitido en la revisión del acusado y muchas órdenes de sobreseimiento de años anteriores, ha juzgado esto de un modo distinto. Allí se señala lo siguiente: “Una especificación más detallada de los hechos no era posible, pues las muertes en Auschwitz fueron tan numerosas que en su mayoría no pudieron ser identificadas por sus características específicas, como la persona del difunto o el momento exacto en que ello ocurrió... En ese sentido, si frente a asesinatos en masa uno quisiera colocar exigencias más estrictas respecto a la concretización de las ejecuciones individuales, entonces fracasaría la persecución de crímenes cometidos a escala masiva.”

C.14. Que precisa Roxin que **no existen causales de exculpación**. En especial, no viene en consideración el estado de necesidad como consecuencia de una orden (Befehlsnotstand). Tampoco el acusado mismo lo hizo valer para él. Tal como se dice en la sentencia de la Tercera Sala, él estaba “informado en su totalidad [sobre el suceso en el campo]. A pesar de ello, con el anhelo de no ser enviado al frente, él se integró en la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que le fueron impartidas.” Esto corresponde al reconocimiento general de que los miembros del campo no fueron obligados a realizar sus actos. Quien se negaba a cooperar, era enviado al frente. A los líderes les interesaba que el funcionamiento de la maquinaria de muerte no fuera impedida por la oposición de algunos. “Hasta hoy no se ha documentado ningún caso en el que un miembro de la unidad militar o policial alemana hubiere sido condenado a muerte, asesinado o por lo menos maltratado, por haberse negado a ejecutar una orden de asesinato.” Con mayor razón no se puede hablar de un error de prohibición exculpante. **Es difícilmente imaginable que quien actúa en un campo de concentración hubiera podido considerar que el asesinato de personas completamente inocentes resultaba conforme al derecho.** Pero incluso de haber sido éste el

caso – por ejemplo, debido a la autoría estatal –, una semejante “ceguera jurídica” no habría merecido ninguna disminución de la pena. En el caso que aquí se discute el acusado tampoco invocó un error de prohibición.

C.15. Que trazando un razonamiento de lo anterior para el caso de Chile y en especial en esta causa podemos escrutar lo siguiente:

C.15.1. Al 11 de septiembre de 1973 en Chile no había Estado de Derecho. Se había quebrado el orden institucional pues los Fuerzas Armadas y de Orden dieron un Golpe de Estado, derribando al gobierno constitucional que había ascendido al poder.

C.15.2. Es decir se retrocedió de inmediato 200 años, y al retroceder estos 200 años y romper el freno de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 se retrocedió por lo menos otros 2000 años, volviendo a vivir la sociedad chilena bajo autoridades despóticas y arbitrarias. Situación que en la historia abundan. Ahora bien, el Estado de Derecho al menos desde la Declaración del hombre y del Ciudadano de 1789 y la misma Constitución francesa de 1791 tiene por fin último proteger a la persona, proteger sus derechos, salvaguardar la libertad. Podemos releer los artículos 2 y 16 de la citada declaración. Artículo 2, la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión; artículo 16, Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución.

C.15.3. En este caso, como está documentado en forma amplia públicamente, durante 17 años de quiebre constitucional (régimen militar, dictadura militar), no hubo separación de poderes (al contrario, hubo concentración); se disolvió el poder más significativo de la representación popular como el congreso; el Poder Judicial no tuvo la independencia necesaria para salvaguardar los derechos de las personas. Luego en esa perspectiva, la autoridad tenía un doble resguardo de los derechos fundamentales de las personas. Primero, no había Estado de Derecho, en consecuencia el cuidado hacia los derechos y libertades de las personas le exigía un estándar mayor; en segundo lugar, reuniendo el poder político y militar en sus manos, cualquier afectación a los derechos de las persona se debía tener una necesidad,

proporcionalidad y mayor fundamentación, pues de otro modo era sospechosa cualquier actuación pues no se estaba bajo un Estado de Derecho.

C.15.4. En este caso entonces las personas detenidas y llevadas al centro o lugar de detención estaban en una alta indefensión, como puede observarse en las causas citadas por este Ministro en la ponderación de la prueba y en el análisis de las declaraciones indagatorias.

D. CONVENIO DE GINEBRA

A. Que a mayor abundamiento, además cabe hacer presente que sobre los Convenios de Ginebra la jurisprudencia ha sido uniforme. Así en causa rol 2182-98 del ingreso de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago "**Caso Luis Almonacid Dúmenez**" de 29 de octubre de 2013, en su considerando 18, **párrafo 6**, señala que "**los Convenios de Ginebra**" consagran el deber del Estado de persecución de los crímenes de guerra, sin poder "auto exonerarse" a su respecto. Tales convenios entraron en vigor en nuestro ordenamiento en las fechas en que fueron publicados en el Diario Oficial, esto es, entre los días 17 y 20 de abril de 1951. Los aludidos Convenios rigen también respecto de delitos cometidos en caso de conflictos armados sin carácter internacional, situación que, jurídicamente, existió en Chile a partir del 11 de septiembre 1973, como se ha afirmado por la doctrina; pero que también, aun cuando se estimare que dicha situación es una ficción, los aludidos convenios son aplicables en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° común a todos ellos y ya citado, donde se plasma el principio de humanidad, así como por los principios que emanan de los Convenios de Ginebra son vinculantes por ser parte del derecho internacional consuetudinario, que pertenece a la categoría del *Ius Cogens*. En efecto, el artículo 3°, común a los cuatro Convenios, prescribe: "en caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes: 1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquiera otra causa serán en toda circunstancia tratadas con humanidad. Al efecto, están y quedan prohibidas en cualquier tiempo y lugar, respecto de las personas arriba mencionadas: a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en toda sus formas, las

mutilaciones, los tratos crueles, las torturas y suplicios". En consecuencia, las normas sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad confirman el principio esencial en cuanto a que la imputabilidad, el juzgamiento y la condena por tales delitos son procedentes, cualquiera que sea la época en que se hubieren cometido. Se corrobora esta aseveración, por otra parte, en la sentencia de la Excm. Corte Suprema (Rol N°2664-04), en cuanto expresa en su considerando décimo séptimo "Que debe tenerse presente también la llamada Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968 que surge en la actualidad con categoría de norma de los Cogens o Principios Generales de Derecho Internacional".

E. EN CUANTO A LA COMPLICIDAD.

Que como ya se analizó en la causa 114.001 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, 1-2013 del Juzgado de Letras de Pucón y 113.969 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, es necesario cavilar sobre la complicidad. Tanto la doctrina Española como la Chilena, y tomando en cuenta la consagración legal que tiene la figura de la complicidad, esta tiene un carácter residual en el ámbito de la aplicabilidad. Es decir es una contribución a la realización del delito con actos anteriores o simultáneos a la misma, que no pueden en ningún caso ser considerados como de autoría. La complicidad según definición del artículo 16 del Código Penal, tiene una caracterización negativa; es decir, es cómplice aquel cuya contribución al delito no pueda calificarse, ni de autoría, ni de inducción, ni de cooperación necesaria. Francisco Muñoz Conde y otra (Derecho Penal, Parte General. Quinta edición. Editorial Tirant Lo Blanch, año 2002, páginas 357 a 413), expresa en síntesis que la conducta habrá de tener alguna eficacia causal, aunque sea mínima en el comportamiento del autor y reunir además una cierta peligrosidad. Precisa dicho autor que la conducta del cómplice ha de ser peligrosa de manera que, desde una perspectiva ex -ante represente un incremento relevante de las posibilidades de éxito del autor y con ello la de puesta en peligro o lesión del bien jurídico. Ello ocurrirá cuando, en el momento previo a la acción del cómplice, sea previsible que, con su aportación, la comisión del delito sea más rápida, más segura o más fácil o el resultado lesivo más intenso que sin ella. Se distingue entonces: 1.Naturaleza de la cooperación. Dolosa, pero basta la idea que el auxilio facilite o haga más expedita la ejecución. Incluso el simple auxilio intelectual o moral es suficiente. 2.Momento de la cooperación. Actos anteriores o

simultáneos. 3. Aprovechamiento de la cooperación por parte del autor. Que se haya servido efectivamente de ella. En el caso de autos, como se desprende del análisis de las declaraciones indagatorias analizadas precedentemente, es nítido que la complicidad es suficiente para que el auxilio facilite o haga más expedita la ejecución. Incluso el simple auxilio intelectual o moral es suficiente.

F. RESUMEN EJECUTIVO DEL AUTO ACUSATORIO.

A. Para un adecuado análisis de las defensas específicas es necesario hacer un resumen ejecutivo del auto acusatorio de fs. 1681 y siguientes (Tomo V), de fecha 29 de diciembre de 2021, en especial en la parte que describe los hechos:

B. En el numeral 33 letra A), se da cuenta del hecho que las Fuerzas Armadas y Seguridad Pública, el día 11 de septiembre de 1973 asumieron el mando supremo de la nación.

C. En la letra B) se da cuenta que a partir del 11 de septiembre de 1973 al mando de la 3° Comisaria de Carabineros de Osorno, se encontraba el capitán Adrián Fernández y se describe la formación de un grupo especial y los carabineros que la integraban. Grupo que realizaba patrullajes por la zona, dependiente de la unidad indicada, para efectos de detener personas, trasladarlas a la comisaria, ser interrogadas y llevarlas a lugares desconocidos.

D. En la letra C) se indica que la dependencia destinada para los interrogatorios, era el sótano de la 3° comisaria de Osorno y allí se aplicaron torturas de diferentes formas, tanto hombres como mujeres

E. La letra D), aquilata que posterior al 11 de septiembre de 1973, Carabineros de Chile estableció un punto de control frecuente en el puente Pucatrihue, en el trayecto que une Osorno con Bahía Mansa, en ese lugar eran fiscalizados los vehículos que transitaban, entre ellos buses de la empresa Carrasco o Tuchie, tanto Carabineros del retén Bahía Mansa como de la comisaria indicada, procedían a identificar y registrar a los pasajeros, bajándolos en ocasiones, inclusive deteniéndolos.

F. En la letra E) con precisión se indica que el 05 de octubre de 1973 la víctima Marcelo del Carmen Gutierrez Gómez, 17 años de edad, obrero de la construcción, miembro del Frente de Estudiantes Revolucionarios, salió de su domicilio de la ciudad de Osorno con destino a Bahía Mansa, a llevarle alimentos a su hermanastro Edgar Eugenio Cárdenas Gómez, militante socialista y muy

buscado con posterioridad al 11 de septiembre del año en comento. De la misma forma testigos presenciales le indicaron a la familia que fue obligado a descender del autobús en el que viajaba. En la misma letra se indica además la ejecución de la que fueron víctimas, el hermanastro de la víctima, a saber Edgar Cárdenas Gómez, Jorge Aguilar Cubillos y María Ester Bustamante Llanccamil, personas refugiadas en Bahía Mansa y que tras ser detenidas son ejecutadas por Carabineros.

G. En la letra F) se precisa que días previos a su detención, es decir 05 de octubre de 1973, Marcelo Gutiérrez Gómez, viajó de la casa de su padrastro a la casa de Bahía Mansa a dejarle comida a su hermanastro según relatos de Inés Bertín Yáñez. Edgar Cárdenas se encontraba refugiado ahí junto a Jorge Aguilar Cubillos y Ester Bustamante Llanccamil. En el mismo sentido, dice que Marcelo Gutiérrez Gómez, viajó de regreso a Osorno a comprar remedios a la farmacia donde trabajaba la esposa de Jorge Aguilar Cubillos. La prensa de la época indica que el hermano de Marcelo Gutiérrez Gómez el 06 de octubre de 1973 habría sido fusilado intentado asaltar un retén, junto a Jorge Aguilar Cubillos y Ester Bustamante Llanccamil. Que según testimonio de los propios carabineros que prestaban servicios en dicho reten, sería falso. Ya que esas personas detenidas, fueron entregadas a una patrulla de carabineros, comandada por Adrián Fernández según consta de dichos de Rubén Molina González, quien declaró de fs. 246 a 248 (Tomo I) y de fs. 288 a 289 (tomo I), funda que mientras estuvo trabajando en la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno, el jefe de Tenencia era el Capitán Adrián Fernández Hernández, el que luego del golpe militar instauró una especie de grupo de muerte compuesto por Rafael Pérez Torres, Gustavo Muñoz Albornoz (apodado Loli), Rolando Becker Salís, Canales, Rosas Silva y Eliseo Águila Salgado, no recordando los nombres de los otros funcionarios, que incluso fueron juramentados en secreto por el mismo Fernández en forma previa de sus actividades ilegales. Soflame que este grupo de personas salía habitualmente a hacer operativos y luego regresaban con personas detenidas, las cuales dejaban en los calabozos. Acota que en horas de la noche, ellos eran llevados hasta el subterráneo de la misma Comisaría, donde eran torturados, llegando incluso a ser asesinados en el mismo lugar. A mayor ahondamiento, dichos de José Oberto Santana Oyarzún, depone de fs. 162 a 164 (Tomo I), fs. 251 a 253 (Tomo I) y de fs. 292 a 293 (Tomo I), funda que el Comisario Adrián

Fernández Hernández, junto al grupo de funcionarios anteriormente nombrados, cumplió funciones operativas una vez que se instauró el gobierno militar, realizando diversas detenciones de personas civiles en distintas partes de la jurisdicción de la Tercera Comisaría de Osorno, y que presenciaba las torturas de las distintas personas que llegaron detenidas. Destaca que escuchó que habían habilitado el subterráneo de la Tercera Comisaría para efectuar las torturas de los detenidos.

H. De acuerdo a la letra G), en relato del propio Cheuquelaf da cuenta que un joven se encontraba detenido por sospecha en el retén de Bahía Mansa y que se le había ordenado su libertad, el día anterior. Lo cierto es que cuando ocurrió el supuesto asalto al retén llegó el capitán Adrián Fernández Hernández, junto a los carabineros Rafael Pérez Torres, Muñoz Albornoz, el fallecido Juan Canales. En un momento el capitán Fernández llamo a Osvaldo Rosas Cárdenas y este llamó a Cheuquelaf junto a otro de su compañeros y les dice que por orden del capitán Fernández debían ir a detener a una persona que transitaba en un bus, de la empresa Tuchie o Carrasco, la persona tendría entre tal edad y portaba víveres. Los carabineros llegaron en una camioneta doble cabina verde facilitada por el SAG al puente Pucatrihue. Carabineros detiene el bus, lo controlan y se encuentra con el joven, dejado en libertad hace uno o dos días atrás, efectivamente llevaba un bolso con víveres, es descendido del bus y dan la orden al chofer de continuar su recorrido. Rosas confirma que es la persona que buscaba. Le da un culetazo en el estómago, lo suben a la camioneta en dirección al retén, y lo entregan al capitán Fernández. Posteriormente son subidos a los vehículos a cargo precitado Capitán, es decir fueron subidos los jóvenes acusados de ser atacantes del retén Bahía Mansa y el joven que iba en el bus. Posteriormente la prensa de la época informa que tres detenidos, acusados del asalto al retén Bahía Mansa, murieron.

I. En la letra H), Héctor Vargas indica que fue testigo cuando carabineros, entre ellos el sargento rosas, hizo bajar un joven de una micro recorrido Osorno-Bahía Mansa, específicamente en el cruce Pucatrihue y le propina culetazos hasta romperle el cráneo. Los carabineros que llegaron ahí entre seis o siete, vehículo perteneciendo al SAG.

J. En la letra I) se describe el relato de Ana López Barría, pareja de Jorge Aguilar Cubillos, uno de los supuestos extremistas que asaltó el retén de bahía mansa el 05 de octubre de 1973, ella sabía que había huido junto a Edgar

Cárdenas Gómez y María Ester Bustamante, por salir su nombre en el bando de la época. Donde no supo más de él, hasta el 6 de octubre del año en cuestión, cuando se enteró que estaba fallecido en la morgue del hospital de Osorno. Concurrió al hospital con la madre de Jorge Cubillos, a saber Ema Cubillos y su cuñada Onorinda Aguilar Cubillos y vieron el cuerpo de Jorge Aguilar, Edgar Aguilar Cubillos y María Bustamante, todos con impactos balísticos.

K. En la letra J) se da cuenta del relato de Ana López, que fue llevada a la Comisaria y detenida por veintidós días, siendo objeto de torturas. En ese lugar le hacen oír un cassette con la grabación de un joven que se identificaba como Marcelo Gutierrez Gómez, dándose cuenta que se trataba del hermanastro de Edgar Cárdenas Gómez, persona que había sido detenido por personal de la 3° Comisaria de Osorno, el 5 de octubre de 1973. En lo que se escuchaba en el cassette, como Marcelo Gutierrez Gómez gritaba y suplicaba que no lo siguieran sometiendo a torturas.

L. En la letra K) la testigo María Millaquipai Guichaquelen, describe que estuvo detenida con Ana López Barría, también fue sometida a torturas y le comentó que a su marido Jorge Aguilar lo habían matado y que a ella habría sido detenida por enviarle comida con un joven, él cual también resultó detenido y desconocía que sucedió con él.

M. En la letra L) están los dichos de María Vergara Herrera, esposa de Edgar Cárdenas Gómez y que se enteró de la muerte de Marcelo Gutierrez de boca de Bertín Yáñez, quien le señaló que Marcelo Gutierrez Gómez fue detenido por Carabineros de la Tercera Comisaria de Osorno, quienes vestían uniforme y lo habrían hecho descender de la micro que une Osorno- Bahía Mansa.

N. En la letra M) se hace un resumen en cuanto a lo descrito en las letras E) a L), a la cronología desde el momento en que Marcelo del Carmen Gutierrez viajaba a Bahía Mansa y luego es detenido en el cruce Pucatrihue que une Osorno con Bahía Mansa, por carabineros, desconociendo hasta el día del hoy el paradero de Marcelo Gutierrez Gómez.

F. ANÁLISIS DE LAS DEFENSAS ESPECÍFICAS

En cuanto a la defensa de **JORGE DANIEL GARCÉS YÁÑEZ**.

26°) Que haciéndonos cargos de la defensa de **fs. 1948 y siguientes (Tomo VI)** interpuesta por el abogado Gonzalo Cruz Gutierrez, en representación de **JORGE DANIEL GARCÉS YÁÑEZ** el Tribunal estará a lo antes razonado,

respecto a la ponderación de las declaraciones indagatorias del acusado y todos los fundamentos pertinentes que se han dado respecto a la relación y valoración de la prueba, en especial lo que se detalló y ponderó con precisión en el título de las consideraciones generales para las defensas. En relación a esta defensa se precisa lo siguiente:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento: la defensa interpuso excepciones de previo y especial pronunciamiento, las que fueron falladas a fs. 2401 a 2403 y de fs. 2407 a 2409 (Tomo VII). Analizada la petición concreta no reiteró y no interpuso excepciones de fondo.

B. Sobre tachas de testigos y objeciones de documentos: la defensa no realizó tachas a testigos en los términos que exige el artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, ni tampoco objeto ningún documento en particular.

C. Contestación a la acusación.

a. Sin perjuicio del resumen que ya se hizo del auto acusatorio, cabe precisar en el caso del acusado **JORGE DANIEL GARCÉS YÁÑEZ**, lo siguiente: A diferencia de lo que expone la defensa, según la relación y análisis de la ponderación de todos los medios de prueba legal, es posible con claridad y profundidad determinar que se ha cometido un delito de secuestro y en el, le ha cabido participación al acusado **Jorge Garcés Yáñez**.

b. En efecto como se reiteró en las consideraciones generales a propósito del resumen del auto acusatorio y de la obligación de investigar con la debida diligencia los delitos de lesa humanidad, en conformidad al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como en este caso, el delito de secuestro calificado de Marcelo Gutierrez Gómez, cada prueba debe ser relacionada y ponderada con las otras, debiendo ser exhaustivamente valorada, a fin de encontrar patrones y relaciones comunes en relación a la ocurrencia de los hechos. De los medios de prueba legal se desprende un contexto de la época y el contexto de un falso atentado al retén de Bahía Mansa, en el cual se detuvo no solo a tres personas que fueron ejecutadas, si no también se detuvo al joven Marcelo Gutiérrez Gómez, todo lo anterior está plenamente acreditado, no solo en esta causa, sino que en la causa en virtud del cual se determinó la responsabilidad por la muerte de Edgar Cárdenas Gómez, Jorge Aguilar Cubillos y Ester Bustamante Llancamil.

c. La defensa reproduce una serie de declaraciones de testigos, no entendiendo el Tribunal cuál es su objetivo, pero se le puede hacer ver que cada uno de los testigos que reproduce, permiten ir delimitando los hechos y la participación de los acusados. Sobre lo anterior, es el propio Héctor Vargas Soto que a fs. 367 a 369 (Tomo II), 482 a 488 (Tomo II) y de fs. 653 a 654 (Tomo II) en lo pertinente explana que: *“él es amigo de Marenga Jorge Garcés. Quien una noche se quedó en su casa a dormir en Bahía Mansa y mientras dormía empezó Jorge a gritar “dios mío, dios mío”, al ir a verlo, este le contó sobresaltado que Adrián Fernández lo había llevado hasta donde estaban detenidas las 3 personas de Bahía Mansa a quienes Adrián Fernández mató con su arma disparándoles en la cabeza eso traumó a Jorge, quien sufría al recordar esos hecho de muerte. Él debió ir obligado, obedeciendo a su jefe. De estos hechos también supo el jefe del retén de Bahía Mansa, el señor Pinol. Basa que Jorge no le comentó ni le preguntó qué sucedió con los cadáveres. Consultado el testigo si recuerda la vestimenta del joven que fue sacado de la cárcel. Depone usaba una casaca media azulada y puede ser que jeans. Blasona que el furgón del SAG era usado por los funcionarios de carabineros de Osorno, no de Bahía Blanca, por lo tanto, Nelson Rozas estaba ayudando a los de Osorno”,* sobre este testigo la defensa no la objeto y la pregunta a realizarse es ¿Por qué habría de desechar el testimonio de esta persona?, desde un punto de vista procesal penal, no existe motivo y la defensa tampoco aporta ninguno.

d. Es dable destacar a la defensa los dichos **De Guillermo Antilef Quintul**. Depone de fs. 347 a 348 (Tomo I), 349 a 350 (Tomo I) y de fs. 520 a 521 (Tomo II), en lo pertinente cuenta que: *“en diligencia de careo con Jorge Garcés que era Marenga en la base de la tercera comisara en la época de 1973. Sobre lo que se le pregunta debe decir que cuando declaró en Santiago que el capitán Fernández ordenaba detenciones por motivos políticos y que pasa eso se apodaba en los funcionarios que mencionó en esa declaración y que también reforzaban a ese grupo los únicos marengas que había en la base, es decir Muñoz y Garcés, Juan Segundo Moreira Garcés de fs. 256 a 257, 294 a 296 (Tomo I) y de fs. 338 a 346 (tomo I), funda en lo pertinente: “en la base sabían que el Comisario y ese personal antiguo salían a hacer detenciones a ex partidarios de la Unidad Popular, a quienes seguramente ubicaban desde antes, a diferentes sectores de la jurisdicción de la Tercera Comisaría. Recuerda que el propio Comisario*

interrogaba, a los detenidos y participaban el escribiente quién redactaba las declaraciones para enviarlas al Tribunal y además del personal antiguo que él refirió, quienes actuaban violentamente pues golpeaban a los detenidos con golpes de puños con el objeto de sacar una información, soflama que eso lo supo porque lo escuchaba desde el dormitorio y además alguno de ellos lo comentaban, lo cual se hacía en el pasillo que existía entre la guardia y el casino y para lo cual cerraban las puertas que daban a la guardia y al pasillo.”; Rubén Molina González de fs. 246 a 248 (Tomo I) y de fs. 288 a 289 (tomo I), en lo pertinente declaro que: “mientras estuvo trabajando en la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno, el jefe de Tenencia era el Capitán Adrián Fernández Hernández, el que luego del golpe militar instauró una especie de grupo de muerte compuesto por Rafael Pérez Torres, Gustavo Muñoz Albornoz (apodado Loli), Rolando Becker Salís, Canales, Rosas Silva y Eliseo Águila Salgado, no recordando los nombres de los otros funcionarios, que incluso fueron juramentados en secreto por el mismo Fernández en forma previa de sus actividades ilegales. Soflame que este grupo de personas salía habitualmente a hacer operativos y luego regresaban con personas detenidas, las cuales dejaban en los calabozos. Acota que en horas de la noche, ellos eran llevados hasta el subterráneo de la misma Comisaría, donde eran torturados, llegando incluso a ser asesinados en el mismo lugar.”; José Oberto Santana Oyarzún de fs. 162 a 164 (Tomo I), 251 a 253 (Tomo I) y de fs. 292 a 293 (Tomo I), en lo pertinente depuso que: “en la Tercera Comisaría Osorno, el Comisario Jefe era el Capitán de Carabineros don Adrián Fernández Hernández, quién antes de llegar a la mencionada, era el ayudante del señor Intendente o Gobernador de Osorno en la época, oficial que tenía bastantes problemas con el personal subalterno que no compartía sus ideologías y actividades sociales que realizaba dentro de la unidad policial, ya que era bastante prepotente.”

e. En cuanto al derecho, se le recuerda a la defensa la frase latina “*iura novit curia*” en cuanto el tribunal conoce el derecho y sobre el secuestro por supuesto que se dan los requisitos del artículo 141 del Código punitivo, toda vez que se dispuso de la libertad personal del sujeto, sin autorización legal alguno y se desconoce hasta el día de hoy su paradero. En relación a la autoría el artículo 15 N°1 del Código Penal, establece: “*Se consideran autores: Los que toman parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata y directa, sea impidiendo o procurando impedir que se evite.*”. En este caso, el acusado Garcés Yáñez era

parte del grupo del capitán Adrián Fernández, quien llegó a Bahía Mansa a disponer de la vida de tres personas y del secuestro calificado de Marcelo Gutiérrez Gómez, todos estos hechos ocurren en un mismo tiempo, lo que es confirmado por las declaraciones de Héctor Vargas Soto. En cuanto a la complicidad, sin perjuicio de lo aquilatado en las consideraciones generales, no hay forma en que esta pueda adecuarse a los hechos descritos por toda la ponderación de los medios de prueba legal que se han detallado.

f. En cuanto a la carrera profesional del señor Garcés Yáñez no se vislumbra como esa carrera profesional podría derribar los medios de prueba legal ni el auto acusatorio de los hechos establecidos en esta sentencia. La defensa sobre este punto nada indica.

D. En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y beneficios de la ley 18.216. El Tribunal lo razonará en los considerando posteriores.

E. Prueba del plenario: La defensa no presentó prueba en la etapa procesal.

F. Calificación final: Atendido el mérito de los antecedentes y los argumentos de la defensa, el Tribunal mantiene la calificación que ha dado precedentemente en esta sentencia y además se ha dado en el auto acusatorio, esto es, **autor** del delito de secuestro calificado de Marcelo Gutiérrez Gómez, en su carácter de lesa humanidad.

27°) En cuanto a la defensa de RODOLFO SEGUNDO CHEUQUELAF LORENZO.

Que haciéndonos cargos de la defensa de **fs. 2309 y siguientes (Tomo VII)** interpuesta por el abogado Mauricio Scheuch Araya, en representación de **Rodolfo Segundo Cheuquelaf Lorenzo**, el Tribunal estará a lo antes razonado, respecto a la ponderación de las declaraciones indagatorias del acusado y todos los fundamentos pertinentes que se han dado respecto a la relación y valoración de la prueba, en especial lo que se detalló y ponderó con precisión en el título de las consideraciones generales para las defensas. En relación a esta defensa se precisa lo siguiente:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento: la defensa interpuso excepciones de previo y especial pronunciamiento, las que fueron falladas a fs. 2401 a 2403 y de fs. 2407 a 2409 (Tomo VII). Las cuales fueron

reiteradas como excepciones de fondo, esto es prescripción de la acción penal y declinatoria de jurisdicción y amnistía.

B. Sobre tachas de testigos y objeciones de documentos: la defensa no realizó tachas a testigos en los términos que exige el artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, ni tampoco objeto ningún documento en particular.

C. Excepciones de fondo, con nuevo estudio esto es declinatoria de jurisdicción, amnistía y prescripción de la acción penal, el tribunal reproduce los fundamentos aportados para las excepciones de previo y especial pronunciamiento, puntualizando:

a. En cuanto a la excepción de prescripción de la acción penal del artículo 433 N°7, deducida el acusado, el Tribunal reitera los fundamentos dados en resolución de fs. 2401 y siguientes (Tomo VII). Y se tiene presente, además, que como estos hechos han sido calificados de delitos de lesa humanidad no es posible aplicar las disposiciones de la Prescripción del artículo 93 y siguientes del Código Penal, puesto que al ser delitos de lesa humanidad no solo son inamnistiables, sino que son además imprescriptibles. No existiendo en conformidad a lo que disponen las defensas en sus escritos, ningún otro elemento de prueba que ponderar respecto a esta excepción. No obstante, cita la defensa el Decreto Ley N°2191, éste Ministro en todos sus fallos tiene como uno de sus fundamentos el fallo de la Corte Interamericana Almonacid Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre de 2006, que entre sus considerandos sostiene:

(114) señala que: la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía. En la misma línea la Corte Interamericana citada lo manifestó en la caso Barrios Altos versus Perú de fecha 14 de marzo de 2001, que en su párrafo 41 dispuso: —esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos

inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. No existiendo en conformidad a lo que dispone las propias defensas en sus presentaciones, ningún otro elemento de prueba que ponderar respecto a esta excepción. **En consecuencia, esta excepción prescripción de la acción penal del artículo 433 N°7 del Código de Procedimiento Penal se rechaza.**

b. Que en cuanto a la declinatoria de jurisdicción, esta excepción ya fue presentada en la causas de público conocimiento, así en **causa rol 113.969** sobre el “Homicidio calificado de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera y Apremios ilegítimos de Jorge Silhi Zarzar y otros” (fallada con fecha 02 de enero de 2020); **rol 114.017** sobre los “Apremios Ilegítimos y Homicidios Calificados de Daniel De Los Ángeles Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga” (fallada con fecha 24 de diciembre de 2021); **rol 113.975** sobre el “Homicidio Calificado de Pedro Ríos Castillo y Guido Troncoso Pérez y Apremios Ilegítimos de Pedro Ríos Castillo” (fallada con fecha 26 de agosto de 2022); casusas donde la excepción fue **rechazada**; **rol 113.089** “episodio asalto al polvorín” (en estado de plenario), también este Ministro Instructor rechazó esta excepción y la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la decisión de este Ministro en Visita; **rol 15.719-1** sobre el secuestro con grave daño y detención ilegal de Elvin Altamirano Monje (fallada con fecha 29 de abril de 2023); y **rol 10.819** sobre secuestros, apremios ilegítimos, detenciones ilegales y homicidios de Mario Cesar Torres Velásquez, José Mario Cárcamo Garay, Francisco del Carmen Avendaño Bórquez, Oscar Arismendi Medina, José Luis Felmer Klenner y José Antonio Barría Barría (en etapa de plenario).

Respecto a las actas, especialmente la citada por el abogado Gonzalo Cruz Gutiérrez, esto es, el **Auto Acordado N°81-2010** de fecha 01 de junio de 2010 sobre Distribución y asignación de causas relativas a la violación de Derechos Humanos en el periodo que se indica, ha señalado en el N°1 de dicho acuerdo lo siguiente: *“los procesos por violación de los derechos humanos que hayan tenido lugar entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, relacionados con la muerte y desaparición de personas, serán conocidos y fallados por un Ministro de Corte de Apelaciones en Visita Extraordinaria, salvo en los casos en que ese nombramiento deba efectuarse como Ministro de Fuero, respecto de los hechos ocurridos o que hayan tenido principio de ejecución en el territorio jurisdiccional de la respectiva corte”*. Como se observa ha sido el máximo Tribunal

quien en uso de sus facultades legales y constitucionales ha designado Ministros en Visita Extraordinaria, para el conocimiento y Juzgamiento de los hechos de vulneración de Derechos Humanos, ocurridos en las fechas previamente indicadas. Más aun es oportuno hacer mención a: **i) Acuerdo de Pleno N°167** de fecha 27 de septiembre de 2011 de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, en que se designa a este Ministro, como instructor de los procesos por violaciones a Derechos Humanos. **ii) Acuerdo de Pleno N°739-2010**, de la Excma. Corte Suprema, de fecha 23 de enero de 2017, en que se me designa como instructor de toda nueva causa que se inicie por violación a los Derechos Humanos, en las Jurisdicciones de Temuco, Valdivia y Puerto Montt y **iii) Acuerdo de Pleno N°739-2010** de la Excma. Corte Suprema de fecha 23 de febrero de 2018, en que se me designa como Ministro en Visita Extraordinaria para la Jurisdicción de Coyhaique. De lo que se desprende con claridad entre muchas otras cosas, que **los Ministros en Visita Extraordinarias tienen competencia para conocer ilícitos por violación a los Derechos Humanos, entre ellos los relacionados con la muerte y desaparición de personas**, como se aprecia no es *númerus clausus*, ni exclusivo, ni excluyente. En todo caso, esa competencia para conocer otros ilícitos consistentes en violación a Derechos Humanos, ha sido ratificada reiteradamente hace más de 20 años por la Excma. Corte Suprema, como además lo ratifican las actas en que se me otorgó competencia para conocer ilícitos consistentes en posibles violaciones a los Derechos Humanos en las jurisdicciones de Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique.

También se tiene presente que el artículo 1 del Auto Acordado N°81-2010 de la Excma. Corte Suprema le entregó a este Tribunal la jurisdicción necesaria para el conocimiento del delito de autos.

Que en materia de violación a los Derechos Humanos (delitos de Lesa Humanidad) debe estarse a lo que significa la **obligación de investigar**. Un estándar normativo en derechos humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial **una nueva regla que inspire la solución de un caso** que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5° inciso 2° de nuestra Constitución que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales (**García Pino, Gonzalo**: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal

Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Tribunal que a partir de la normativa aludida, está debe ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo. Que sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, en su **párrafo 124**, señaló: *“La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”*.

Que siguiendo la línea de este razonamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el **caso “Almonacid Arellano y otros versus Chile”**, ordenó al Estado Chileno que se siguiera investigando y se determinaran los responsables, bajo ese entendido el Estado Chileno cumplió con dicha orden y la causa fue nuevamente conocida por un Ministro en Visita Extraordinaria de la Ilma. Corte de Apelaciones de Rancagua, proceso en el cual se dictó sentencia condenatoria en causa rol 103-2011 de fecha 14 de enero de 2013 y que actualmente se encuentra ejecutoriada. . **En consecuencia, esta excepción se rechaza y así se dirá en lo resolutivo del fallo.**

c. En cuanto a la excepción de amnistía: El Tribunal reitera sus fundamentos precedentemente dados, en el sentido que tratándose de hechos similares a los investigados éste Tribunal ha establecido que corresponden a delitos de lesa humanidad y no obstante, citar las defensas el Decreto Ley N°2191, éste Ministro en todos sus fallos tiene como uno de sus fundamentos el

fallo de la Corte Interamericana Almonacid Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre de 2006, que entre sus considerandos (párrafo 114) señala que: “La Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía”. En la misma línea la Corte Interamericana citada lo manifestó en la caso Barrios Altos versus Perú de fecha 14 de marzo de 2001, que en su párrafo 41 dispuso: “Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. No existiendo en conformidad a lo que dispone la propia defensa en su presentación, ningún otro elemento de prueba que ponderar respecto a esta excepción. En consecuencia, esta **excepción de amnistía del artículo 433 N°6 del Código de Procedimiento Penal se rechaza y así se dirá en lo resolutive de este fallo.**

D. Contestación de la acusación fiscal, adhesión a la misma y acusación particular, el tribunal estará a lo razonado precedentemente y además a los fundamentos dados para la anterior defensa, puntualizando lo siguiente:

a. A diferencia de lo que expone la defensa en un análisis y ponderación detallada de los medios de prueba legal que se han relacionado, si es posible determinar que ha existido el delito de secuestro calificado de Marcelo Gutiérrez Gómez y le ha cabido participación a **Rodolfo Cheuquelaf Lorenzo**.

b. Cabe hacer presente que en el resumen del auto acusatorio, expuesto en las consideraciones generales precedente, se desprende con precisión fecha, lugar y participación de Carabineros de Chile en los hechos. En específico, el retén de Bahía Mansa, el grupo que acompañó al capitán Adrián Fernández Hernández al cruce de Pucatrihue, donde se detiene el bus y bajan al joven Marcelo Gutiérrez, siendo golpeado para luego trasladarlo al retén de Bahía Mansa y desconocer su paradero. De la misma forma, está plenamente acreditado que el acusado Cheuquelaf Lorenzo se encontraba en el retén de Bahía Mansa,

fue al cruce Pucatrihue y bajó al joven Marcelo Gutierrez, todo esto al margen de todo derecho.

c. A diferencia de lo que expone la defensa, se insiste nuevamente en que si existen, según él mérito del proceso, antecedentes que permiten acreditar la participación del acusado Cheuquelaf Lorenzo. La defensa lo que quiere es presentarlo como una persona, casi en condiciones que no sabía lo que hacía, era un joven carabinero. Pero sucede que de la declaración de Héctor Vargas Soto, el joven Marcelo Gutierrez, no solo al margen de la ley fue bajado del bus, sino que fue golpeado en forma grave en su cráneo por los carabineros que lo hicieron descender. Todo esto en presencia de Cheuquelaf Lorenzo.

Es decir que tenemos un grupo al mando del capitán Adrián Fernández, que fue sometido y acusado en esta causa y no se le pudo hacer efectiva su responsabilidad por haber fallecido, según consta a 2582 (Tomo VIII). El cual llegó en octubre de 1973 al retén de Bahía Mansa, se detienen a tres personas Edgar Cárdenas Gómez, María Ester Bustamante y Jorge Aguilar Cubillos, y las ejecutan, además de detenerse a Marcelo Gutierrez, a quien bajan del bus. En este secuestro participa Rodolfo Cheuquelaf Lorenzo. A mayor abundamiento, lo relatado en sus dichos de fs. 760 a 762 (Tomo III), 772 a 773 (Tomo III), 1017 a 1018 (Tomo III) y de fs. 1519 a 1524 (Tomo V), que en lo pertinente soslaya: *“Dentro de las funciones que le tocó cumplir estaban los servicios ordinarios, tales como servicio de guardia, patrullaje de la población y control vehicular, siendo este último un servicio que se efectuaba no todos los días, pero cuando tocaba se realizaba en algunas oportunidades en el cruce de Bahía Mansa con Pucatrihue, por lo general en la tarde, cuando regresaba gente de Osorno a Bahía Mansa, momento en el que se paraban los buses, las dos únicas líneas de aquellos años Carrasco y Tuchie. Se controlaba a los pasajeros, por lo general era solo visual, ya que el personal de Carabineros de Bahía Mansa conocía a toda su gente, por lo que una vez efectuado el control, la gente seguía su camino normalmente. En los controles vehiculares efectuados en el cruce de Bahía Mansa, en una ocasión, se acuerda que se bajó una persona de un bus, no puede precisar si fue el de Tuchie o del de Carrasco, pero fue en el horario de la tarde, es decir, cuando los buses viajaban de Osorno a Bahía Mansa. Narra que a esa persona la bajaron por sospecha, y detuvieron para trasladarla al Retén de Bahía Mansa. Aproxima fue al poco tiempo después de que llegara a reforzar el Retén de Bahía Mansa, esto es,*

en el mes de octubre de 1973, es decir, esa detención debe haber sido durante ese mismo mes. Un día determinado al llegar a su guardia, vio que había un joven detenido por sospecha, respecto del cual preguntó a su superior Pinol, y este le comentó que el día anterior sus colegas lo habían visto por los alrededores y como estaba permitida la detención por sospecha, lo habían aprehendido. Esa mañana se le dio la libertad al joven por falta de mérito. Posteriormente, unos días después, cuando ocurrió el supuesto ataque al Retén Bahía Mansa (que nunca sucedió en realidad) donde se detuvo a tres personas, una mujer y dos hombres, llegaron hasta el destacamento el Capitán Adrián Fernández, junto a los Carabineros Rafael Pérez Torres, Muñoz Albornoz y el fallecido Juan Canales. Ellos procedieron con el operativo, y en un momento dado, el propio Fernández llamó a Nelson Rosas y le habló directamente, sin que pudiera escuchar lo que le decía. Acto seguido, Rosas lo llamó junto a otro de sus compañeros, cuya identidad no recuerda, pero que era de los agregados al Retén, y les dice que por orden del Capitán tenían que ir a detener a una persona que se trasladaba en uno de los buses que iban de Osorno a Bahía Mansa (que podía ser de las empresas de Tuchie o de Carrasco), persona que tendría entre 18 a 20 años y que portaba víveres. Ante la orden recibida, se fueron hasta el cruce Pucatrihue en una camioneta doble cabina de color verde que la había facilitado el SSG, y ahí hicieron parar el bus, controlaron y se encontraron con el mismo joven al que se le había dado la libertad unos dos tres días antes. Cree, aunque no recuerda tan bien, que andaba con un bolso y llevaba efectivamente víveres. Al bajar al sujeto, se dio la orden al chofer de que siguiera su camino y posteriormente Nelson Rosas le preguntó al sujeto si se trataba de “tal persona”, confirmando el nombre que le había dado el Capitán y que Rosas llevaba anotado. Al ratificar que se trataba de la misma persona, Rosas le pegó un culatazo en el estómago, lo subieron a la camioneta y en dirección al Retén, donde el joven fue entregado personalmente por Rosas al Capitán Fernández. De ahí subieron a todos los detenidos a los vehículos en los que se trasladaban, es decir, a los que fueron imputados como atacantes del Retén Bahía Mansa junto a éste último joven y se retiraron del sector.” En consecuencia todos los párrafos que la defensa trata de explicar la lógica ello no logra desvirtuar el auto acusatorio, los medios de prueba legal que se han ponderado y los hechos establecidos en esta sentencia. En consecuencia, la defensa según el análisis de sus escritos no ha dado argumentos

suficientes que permitan al tribunal, llegar a la convicción que debe absolverse a Cheuquelaf Lorenzo. El mérito del proceso apunta a todo lo contrario, esto es la responsabilidad de Rodolfo Cheuquelaf Lorenzo en el secuestro calificado de Marcelo Gutierrez Gómez.

d. Es de caso precisar a la defensa los dichos de Ecar Adolfo Guarda Rosas, declaro de fs. 787 a 788 (Tomo III) y de fs. 892 a 893 (Tomo III) y en lo pertinente ostenta que: *“cuando joven trabajó como cuatro años para la empresa de buses de Tuchie, como auxiliar del recorrido de la micro que iba de Bahía Mansa a Osorno. Dos veces carabineros detuvieron el bus y en la segunda vez se llevaron a un "gallo" más joven, ese joven tiene que haber tenido 17 años, esto ocurrió en 1973, lo recuerda con claridad porque ese joven era casi de su edad, no supo qué pasó con ese joven después del 73. Atestigua que no sabe de qué retén eran esos carabineros, porque estaban en mitad del camino, eran como tres carabineros, dos tomaron al chico y lo dejaron al lado de la patrulla, y ellos siguieron el viaje. Sustenta que cuando detuvieron a este joven, él no decía nada, pero les dijo: “aquí estoy señores, aquí está mi cabeza, háganla pedazo”; Luis Humberto Pinol Carillanca en lo pertinente glosa: “que el Capitán Fernández le señaló que sabía que habían detenido unos extremistas y que él se personaría en el Retén al día siguiente. Cuando llegó al Retén se dio cuenta que las tres personas antes señaladas se encontraban nuevamente detenidas, esta vez como sospechosas de tener 14 molotov, algunas armas en mal estado y un mapa de la casa del Jefe de Retén. Al día siguiente, en horas de la mañana, el Capitán Fernández llegó al Retén acompañado de unos cuatro vehículos y unos 15 funcionarios, incluso andaba acompañado de civiles que reconoció como ex militares. Después pidió el libro de guardia, sacó la hoja donde se registró la detención y le ordenó a uno de sus funcionarios que escribiera lo que él le dictaría, creando una historia de la detención de esas personas distinta a la verdadera. Luego subieron a los detenidos a los vehículos y se retiraron, llevándose consigo el Capitán Fernández el libro de guardia y ordenándole que concurriera al día siguiente a firmar el parte policial que él confeccionaría. Anexa en diligencia de careo con Jorge Garcés Yáñez, de fs. 335 a 336 (Tomo I), refiere en lo pertinente es a quién se refiere como “Sargento Garcés que era Marenga”, en su declaración de fs. 5.568; él era uno de los funcionarios que andaba con el Capitán Fernández cuando se retiraron a los tres detenidos que estaban en el Retén de Bahía Mansa,*

grupo en el que andaban las demás personas que mencionó en esa declaración; no tiene dudas sobre eso. Tiempo después de lo que acaba de relatar, años después mejor dicho, fue interrogado por un Juez por la muerte de esos jóvenes, y ahí se enteró que había un cuarto joven que había ido a comprar cosas a Osorno, y que al regreso no había llegado a Bahía Mansa, por lo que ahora haciendo memoria, ese joven pudo ser el cuarto integrante de los que les dio la libertad en el Retén. Por otra parte, si bien el Jefe del Retén era él, el Capitán Fernández cuando pasó todo eso era su superior, y él no le contaba nada, tenía su grupo de gente seleccionada con la que realizaba todas las cosas, de hecho el libro al que le sacó la hoja fue reescrito por sus hombres de confianza, entre los que estaba Nelson Rosas de Bahía Mansa. Urde, en lo pertinente de fs. 837 a 838 (Tomo III), recuerda muy bien que mucho tiempo después de ese episodio de los jóvenes, Jorge Garcés le comentó personalmente que él sabía el lugar exacto donde habían pasado a darles muerte a los jóvenes. Supuestamente el lugar fue como a 2 kilómetros del Retén de Rahue. Además, Garcés andaba en el grupo con Fernández, tiene que saber dónde específicamente se ejecutó a los jóvenes. El Tribunal le lee la declaración de fs. 772 y siguientes, depone que es efectivo lo que relata Cheuquelaf. Respecto al parte que fue a firmar, indica que no aparecía el cuarto joven en ese documento, solo 3 personas. El que más sabe del cuarto integrante del grupo de los detenidos es Cheuquelaf junto con Rosas.”

E. En cuanto a las eximentes y circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y beneficios de la ley 18.216. El Tribunal lo razonará en los considerandos posteriores.

F. Prueba del plenario: Que analizado el expediente y el término probatorio, la defensa ofreció prueba testimonial de **Olga Patricia Vargas Lagos**, quien a **fs. 2448 (Tomo VIII)**, en lo pertinente declara que es hija de don Héctor Vargas Soto y que su padre en momentos previos a fallecer le señaló que no había visto nada en el cruce de Pucatrihue el 05 de octubre de 1973, solo lo escuchó por terceras personas. En lo pertinente precisa que su papá está muy enfermo, muy grave cuando le hizo aquella confesión, ya que no quería irse con la culpa. Él quería que ella lo dijera en algún momento. Porque había inculcado a don Rodolfo atendido la rabia, necesitaba culpar a alguien. El tribunal razona de la siguiente manera, en cuanto a la testigo Olga Patricia Vargas Lagos, cabe ponderar que es un testigo ajeno a los hechos y solo de manera parcial informa

sobre una situación privada que le habría dicho su padre. Todo lo anterior no tiene el valor para derribar el auto acusatorio y las declaraciones judiciales que en su sano juicio, libre y espontáneamente, en tres oportunidades ante el tribunal. En consecuencia, desde un punto de vista de ingreso de prueba al proceso, de valoración de la prueba y teoría argumentativa no resulta atendible que se prefiera un testimonio de una persona que no estuvo directamente vinculada a los hechos, de oídas, frente a un testimonio como es el caso Héctor Vargas Soto, que estuvo directamente vinculado a los hechos, declaró libre y espontáneamente frente al tribunal y además su testimonio es coherente y se relaciona con toda la prueba del proceso. Que en relación a la declaración de **Rafael Pérez Torres** que depone de fs. 2451 (Tomo VII), que en lo pertinente depuso que acompañó al suboficial Vargas a cortar el tránsito en el camino a Pucatrihue, con el Cabo Rosas Silva. A cargo del procedimiento fue Adrián Fernández. Fueron más vehículos con personal policial con destino al retén de Bahía Mansa. Estuvo más de dos horas cortando en tránsito. Posteriormente los pasaron a buscar, para regresar a la 3° Comisaria de Rahue, entre ellos iba el Capitán Adrián Fernández. Urde que mientras estuvo en el cruce no vio llegar a otra patrulla proveniente del retén de Bahía Mansa. El tribunal puntualiza, respecto a este testigo como ya se indicó al analizar la tacha, el tribunal le tomó declaración durante el sumario a fs. 553 a 554 (Tomo II), 627 a 630 (Tomo II) y de fs. 632 a 633 (Tomo II). Ahora bien, de sus declaraciones judiciales examinadas con detención en momento alguno expresó haber estado cortando el tránsito en la ruta Osorno Bahía Mansa, específicamente haber ido al cruce de Pucatrihue. Luego, su declaración prestada en el plenario resulta contradictoria con sus anteriores dichos. Ahora bien, a lo anterior hay que agregar que es el propio acusado Rodolfo Cheuquelaf Lorenzo quien se ubica en el cruce de Pucatrihue y da cuenta de la detención del joven Gutiérrez Gómez. En consecuencia los dichos expuestos en el plenario no solo resultan contradictorios, poco creíbles, sino inverosímiles en relación a la prueba ponderada en el proceso.

G. Sobreseimiento parcial o definitivo: En cuanto a la petición de sobreseimiento pedida por la defensa, atendido el mérito del proceso, la relación y ponderación integral de los medios de prueba y por un asunto de racionalidad probatoria, no resulta posible dar lugar a la petición pretendida por la defensa y así se dispone para lo resolutivo.

H. Calificación final: Atendido el mérito de los antecedentes y los argumentos de la defensa, el Tribunal mantiene la calificación que ha dado precedentemente en esta sentencia y además se ha dado en el auto acusatorio, esto es, **autor** del delito de secuestro calificado de Marcelo Gutiérrez Gómez, en su carácter de lesa humanidad.

G. ACUSACIÓN PARTICULAR.

28°) La abogada Catalina Ross en representación de la **Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos** de fs. **1.749 1756 (Tomo VI)**, formula acusación particular en contra de Adrián José Fernández Hernández, Rodolfo Segundo Cheuquelaf Lorenzo y Daniel Garcés Yáñez **como** autores del delito de secuestro calificado, en carácter de lesa humanidad, condenándolos en definitiva e imponiendo las penas de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, más las sanciones accesorias legales, con costas, solicitando se reconozca la circunstancia agravante contemplada en el N°8 del artículo 12 del Código Penal.

29°) Análisis de acusación particular, que del análisis de la acusación particular se observa que coinciden en los hechos y calificación jurídica que ha hecho el Tribunal. La diferencia estriba en la petición de agravantes para los acusados, las que serán analizadas en los considerandos posteriores.

H. ADHESIÓN A LA ACUSACIÓN

30°) La abogada Rose Marie Vásquez Garrido en representación de **Edgar Marcelo Gutiérrez Bertín** de fs. 1759 y siguientes (Tomo VI) se adhiere a la acusación fiscal enderezada en contra de los procesados Adrián José Fernández Hernández, Jorge Daniel Garcés Yáñez y Rodolfo Segundo Cheuquelaf Lorenzo en su calidad de autores materiales del delito de Secuestro Calificado previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal vigente a la fecha de los hechos y en definitiva condenarlos imponiéndoselos, respectivamente, las penas de encierro y demás accesorias, con costas.

31°) Análisis de la adhesión a la acusación. Que haciéndonos cargo de la adhesión a la acusación fiscal, el Tribunal sobre esta materia nada tiene que reflexionar.

I. REFLEXIONES SOBRE LESA HUMANIDAD

32°) Para mayor ilustración y atendido además que se ha alegado la prescripción gradual del artículo 103 del Código Penal, que se analizará más adelante, es necesario reflexionar sobre el delito de lesa humanidad.

Que profundizando el origen y concepto del delito de lesa humanidad para un adecuado análisis de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y determinación de la pena, cabe citar la sentencia Almonacid Arellano y otros versus Chile, de fecha 26 de septiembre de 2006 puntualizando lo siguiente:

Párrafo 94. El desarrollo de la noción de crimen de lesa humanidad se produjo en los inicios del siglo pasado. En el preámbulo del Convenio de la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907. Asimismo, el término “crímenes contra la humanidad y la civilización” fue usado por los gobiernos de Francia, Reino Unido y Rusia el 28 de mayo de 1915 para denunciar la masacre de armenios en Turquía.

Párrafo 95. El asesinato como crimen de lesa humanidad fue codificado por primera vez en el artículo 6.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg. Poco después, el 20 de diciembre de 1945, la Ley del Consejo de Control No. 10 también consagró al asesinato como un crimen de lesa humanidad en su artículo II.c. De forma similar, el delito de asesinato fue codificado en el artículo 5.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juzgamiento de los principales criminales de guerra del Lejano Oriente (Estatuto de Tokyo), adoptada el 19 de enero de 1946.

Párrafo 96. Estatuto de Nuremberg jugó un papel significativo en el establecimiento de los elementos que caracterizan a un crimen como de lesa humanidad. Así constituyen actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad. En este sentido se pronunció el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso Prosecutor v. Dusko Tadic, al considerar que “un solo acto cometido por un perpetrador en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil trae consigo responsabilidad penal individual, y el perpetrador no necesita cometer numerosas ofensas para ser considerado responsable. **Todos**

estos elementos ya estaban definidos jurídicamente cuando el señor Almonacid Arellano fue ejecutado.

Párrafo 98. La prohibición de crímenes contra la humanidad, incluido el asesinato, fue además corroborada por las Naciones Unidas. El 11 de diciembre de 1946 la Asamblea General confirmó “los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho Tribunal.

A. Que como ya se ha dicho, por tratarse de un delito de lesa humanidad y no común, sobre esta materia el Tribunal tiene presente lo que en forma reiterada la Excm. Corte Suprema ha manifestado que hechos, como los investigados en esta causa y por los cuales se ha dictado acusación, que corresponden a **homicidio calificado**, es un delito de tal magnitud que deben ser **imprescriptibles**. Asimismo, dicho ilícito es de aquellos que la doctrina reconoce como de **lesa humanidad** y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 N°1 y 15 N°2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos ratificados por Chile, tienen plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que son imprescriptibles e inamnistiables.

B. Que a modo de ilustración, el máximo Tribunal así se ha pronunciado en las causas roles 31.030 – 1994; 469 – 1998; 517 – 2004; 288 – 2012 y 1.260 – 2013, 40.168-2017, 4.080-2018, entre muchas otras. Y de la misma forma, como se ha fallado reiteradamente por este Tribunal en las causas roles: 27.525; 27.526; 45.345; 113.990; 113.989; 18.780; 29.877; 45.344; 45.371; 45.342; 29.869; 27.527; 114.001; 113.986; 63.541; 45.363; 114.048; 10.868-P; 114.003; 10.851; 10.854; 45.359; 54.035; 63.535; 45.343; 57.071; 113.997; 45.354; 45.361; 114.000; 4-2010; 45.362; 114.007; 114.042; 113.996; 29.879; 45.365; 45.367; 44.305.

C. Cabe también hacer presente, que el mismo fallo Almonacid Arellano y otros vs Chile dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 119, al analizar el Decreto Ley de Amnistía 2.191 y en lo pertinente manifiesta que “las leyes de amnistía con las características descritas (es decir, como la chilena) conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crimines de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana e indudablemente afectan derechos consagrados en

ella. Ello constituye per se una violación de la Convención y genera responsabilidad internacional del Estado. En consecuencia, dada su naturaleza, el Decreto Ley N°2.191 carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos, que constituyen este caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile”.

D. Sobre la misma materia del delito de lesa humanidad, cabe recordar lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso ya señalado, **“Almonacid Arellano y otros versus Chile”**, en que reitera, a propósito de las leyes de amnistía, entre otros aspectos la doctrina centrada en la sentencia caso **“Barrios Altos versus Perú”** de 14 de marzo de 2001, en cuanto la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos. En lo pertinente, el fallo **“Almonacid Arellano y otros versus Chile”** afirma lo anterior en los siguientes párrafos: 82.5, 82.6, 82.7, 111 y en especial en el párrafo 119 donde la Corte expresa que las leyes de amnistía, como la chilena, conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana y afectan los derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la convención y genera responsabilidad general del Estado, agregando que el Decreto Ley 2.191, carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para las investigaciones de los hechos, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile. En la misma línea, para sostener como lo ha hecho la Excm. Corte Suprema y este Tribunal, la Corte Interamericana en el fallo aludido manifestó lo siguiente:

82.5. La época más violenta de todo el período represivo corresponde a los primeros meses del gobierno de facto. De las 3.197 víctimas identificadas de ejecuciones y desapariciones forzadas que ocurrieron en todo el gobierno militar, 1.823 se produjeron en el año 1973. Por su parte, “el 61% de las 33.221 detenciones que fueron calificadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, corresponde a detenciones efectuadas en 1973”. Esta misma Comisión

señaló que “más del 94% de las personas que sufrieron prisión política” dijeron haber sido torturadas por agentes estatales.

82.6. Las víctimas de todas estas violaciones fueron funcionarios destacados del régimen depuesto y connotadas figuras de izquierda, así como sus militantes comunes y corrientes; jefes y dirigentes políticos, sindicales, vecinales, estudiantiles (de enseñanza superior y media) e indígenas; representantes de organizaciones de base con participación en movimientos de reivindicaciones sociales. “Muchas veces [las] relaciones políticas se deducían de la conducta „conflictiva” de la víctima en huelgas, paros, tomas de terrenos o de predios, manifestaciones callejeras, etc.” Las ejecuciones de estas personas “se insertan dentro del clima reinante [...] de hacer una “limpieza” de elementos juzgados perniciosos por sus doctrinas y actuaciones, y de atemorizar a sus compañeros que podían constituir una eventual “amenaza”. No obstante, en la época inicial de la represión existió un amplio margen de arbitrariedad a la hora de seleccionar a las víctimas.

82.7. En lo que se refiere a las ejecuciones extrajudiciales –crimen cometido en el presente caso, por lo general, las muertes fueron de personas detenidas y se practicaban en lugares apartados y de noche. Algunos de los fusilamientos al margen de todo proceso fueron, sin embargo, fulminantes y se efectuaron al momento de la detención. [...] En las regiones del sur [del país] la persona, sometida ya al control de sus captores, [era] ejecutada en presencia de su familia”.

E. En el mismo sentido cabe también hacer presente, que el **fallo pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha 15 de noviembre de 2021, en caso Maidanik y Otros Vs. Uruguay**, mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de la República Oriental del Uruguay (en adelante “el Estado” o “Uruguay”) por las violaciones a distintos derechos humanos, en perjuicio de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Asteazu, víctimas de desapariciones forzadas que principiaron durante la dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985, así como de sus familiares, desatándose los siguientes párrafos:

Párrafo 206: ...“en relación tanto con actos de desaparición forzada como respecto a otras graves violaciones a derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, en la misma oportunidad este Tribunal señaló que “es incompatible con las obligaciones internacionales de un Estado Parte en la Convención que

éste deje de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos que por su naturaleza sean **imprescriptibles**, en perjuicio del derecho de las víctimas de acceso a la justicia, amparándose en una situación de impunidad que sus propios poderes y órganos hayan propiciado”...

Párrafo 211: “El Estado debe asegurar que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes ex officio, contando, para ese cometido, con las facultades y recursos necesarios²³⁹, inclusive logísticos y científicos, para recabar y procesar las pruebas, así como para acceder plenamente a la documentación e información pertinente y para llevar a cabo las actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer lo sucedido a las personas desaparecidas y a las víctimas de ejecución extrajudicial”.

Párrafo 246: “La **Corte** recuerda que, al decidir sobre el caso Gelman Vs. Uruguay determinó que “la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”. Por ello, dispuso que “el Estado deberá asegurar que [dicha ley] no vuelva a representar un obstáculo [...] para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de [...] graves violaciones de derechos humanos [...] acontecidas en Uruguay”.

Párrafo 251: “Considerando lo anterior, la Corte entiende necesario recordar al Estado que: cuando un Estado es Parte en un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos al tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, de modo que decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de las obligaciones internacionales. Es decir, todas las autoridades estatales, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. [...]. Por el solo hecho de ser Parte en la Convención Americana, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por lo cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana”.

F. En consecuencia, cabe reflexionar lo siguiente:

F.1. La lesa humanidad nos remite a lo más profundo de la mujer y del hombre, puesto que sostiene todos nuestros valores. Además es una verdadera exigencia social y civilizadora.

F.2. La lesa humanidad modela nuestro habitar. Sensibiliza nuestro marco de acción.

F.3. La lesa humanidad insufla, canaliza, transforma y dinamiza nuestro Derecho. Dotándolo de nuevas herramientas y concepciones. Le fija los límites infranqueables ante los cuales mujeres y hombres deben actuar y detenerse.

F.4. La lesa humanidad como un muro invencible, rechaza con toda fuerza la irracionalidad y arbitrariedad.

F.5. La lesa humanidad vence, derrota a la prescripción (en el más amplio sentido), a las simples legalidades del Derecho penal liberal (prescripción, tipos, participación, penas), puesto que, no tienen la capacidad de resolver esos dilemas jurídicos y sociales.

F.6. La Lesa humanidad es la conciencia robusta de la humanidad. Nos muestra el ideal de mujer y hombre, de humanidad.

F.7. La lesa humanidad, con una resonancia infinita, atraviesa todo el universo jurídico y nos sitúa en lugar correcto y verdadero. Esto es, como honestamente debe funcionar nuestra convivencia en la sociedad.

G. Que también es relevante para esta causa, lo que señala dicha Corte Interamericana en relación a la jurisdicción militar, **párrafo 131**, donde la Corte indica que “El Tribunal ha establecido que en un Estado democrático de derecho

la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas Militares. Por ello, sólo se debe juzgar a Militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Al respecto, la Corte ha dicho que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”. Se hace presente que en ese proceso no consta además, que la Justicia Militar hubiere siquiera iniciado alguna investigación sobre estos hechos, lo que revela la actitud del Estado de mantener la impunidad sobre el delito investigado en esta causa.

H. Cabe puntualizar que en el caso de “**Hilario Barrios Varas**” (**causa rol 25.657-14 de la Excma. Corte Suprema**), en los considerandos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno se dan todos los elementos que ha descrito la Excma. Corte Suprema, esto es, en síntesis, una represión generalizada del régimen de la época, una hiperseguridad al margen de toda condición de la persona humana, una conformidad con la impunidad de los actos cometidos por los agentes estatales, además, con el amedrentamiento a la población civil. Lo cierto es que los hechos calzan con lo que la Corte interamericana de Derechos Humanos, en el caso citado, lo que ha fallado en forma robusta la Excma. Corte Suprema y éste Ministro Visitador corresponde sin duda a un delito de lesa humanidad. **Delitos que son imprescriptibles.**

J. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD PENAL

33°) EXIMIENTE DE RESPONSABILIDAD PENAL.

A. Que a **fs. 2309 y siguientes (Tomo XXII)** el abogado Mauricio Scheuch Araya, en representación de **Rodolfo Cheuquelaf Lorenzo**, alega eximentes de responsabilidad penal del artículo 10 N° 10 del Código Penal.

ANÁLISIS DEL TRIBUNAL: Que en relación a la eximente del **artículo 10 N°10** del Código Penal: En cuanto a lo solicitado por la defensa del acusado Rodolfo Cheuquelaf Lorenzo. Que dicha eximente consiste en: “el que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo”. Según el estudio detallado y minucioso de los hechos probados, es posible concluir que nadie obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio

legítimo de un derecho para cometer un delito de lesa humanidad, en especial tomando consideración lo dicho por Claus Roxin en cuanto que **“no existen causales de exculpación**. Sobre todo, no viene en consideración el estado de necesidad como consecuencia de una orden (Befehlsnotstand). Tampoco el acusado mismo lo hizo valer para él. Tal como se dice en la sentencia de la Tercera Sala, él estaba “informado en su totalidad [sobre el suceso en el campo]. A pesar de ello, con el anhelo de no ser enviado al frente, él se integró en la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que le fueron impartidas.” Esto corresponde al reconocimiento general de que los miembros del campo no fueron obligados a realizar sus actos. Quien se negaba a cooperar, era enviado al frente. A los líderes les interesaba que el funcionamiento de la maquinaria de muerte no fuera impedida por la oposición de algunos. “Hasta hoy no se ha documentado ningún caso en el que un miembro de la unidad militar o policial alemana hubiere sido condenado a muerte, asesinado o por lo menos maltratado, por haberse negado a ejecutar una orden de asesinato.” Con mayor razón no se puede hablar de un error de prohibición exculpante. **Es difícilmente imaginable que quien actúa en un campo de concentración hubiera podido considerar que el asesinato de personas completamente inocentes resultaba conforme al derecho**. Pero incluso de haber sido éste el caso – por ejemplo, debido a la autoría estatal –, una semejante “ceguera jurídica” no habría merecido ninguna disminución de la pena. En el caso que aquí se discute los acusados tampoco invocaron un error de prohibición”. En consecuencia, **esta eximente es rechazada**.

34°) ATENUANTES DE RESPONSABILIDAD PENAL:

A. Que a **fs. 1948 y siguientes (Tomo VI)** el abogado Gonzalo Cruz Gutierrez, en representación de **Jorge Garcés Yáñez**, alega la atenuante de responsabilidad penal del artículo 11 N°6 y 103 del Código Penal.

B. Que a **fs. 2309 y siguientes (Tomo VII)** el abogado Mauricio Scheuch Araya, en representación de **Rodolfo Cheuquelaf Lorenzo**, alega las atenuantes de responsabilidad penal del artículo 11 N° 6 y 9, y 103 del Código Penal. Además las atenuantes previstas en el artículo 211 en concordancia con el artículo 214 del Código de Justicia Militar. El tribunal analizará de la siguiente manera:

B.1. Respecto del acusado Cheuquelaf Lorenzo, no se dará lugar a la atenuante contemplada en el N°9 del artículo 11 del Código Penal, solicitada por la defensa, toda vez que como se ha razonado precedentemente en la ponderación y relación integral de toda la prueba del proceso no es posible sostener que el acusado haya colaborado sustancialmente a los esclarecimientos de los hechos, en realidad ha sido todo lo contrario, han pasado más de 50 años y con otros elementos probatorios, no con los dichos de este acusado se ha logrado determinar los hechos y la participación de los responsables. En consecuencia **no se hace lugar** a la atenuante solicitada por el acusado Cheuquelaf Lorenzo.

C. En relación al **artículo 211 del Código de Justicia Militar**: Que respecto de esta minorante solicitada por la defensa del acusado, el Tribunal reflexiona lo siguiente: Esta alegación no puede ser acogida. En efecto, no se trata de la ejecución de la orden del servicio sino que se trata de la comisión de un delito de lesa humanidad, en este caso, homicidios calificados. Sobre la aplicación de esta atenuante en los delitos de lesa humanidad, podemos mencionar, entre otras, la **causa rol N° 95096-16**, dictada por la Excma. Corte Suprema, quien en su considerando 5° expresa “Que en subsidio solicitó se considerara que en el caso de autos concurren las circunstancias eximentes de los artículos 211, 214, 334 y 335 del Código de Justicia Militar, denominadas “obediencia debida” y “cumplimiento de órdenes recibidas por un superior jerárquico”, las que no pueden ser acogidas, pues respecto de los mandatos del superior jerárquico dentro de una institución militar -de Ejército de Chile en este caso-, aparece de los hechos del proceso que la conducta de los acusados obedece a la materialización de sus propios designios, sin perjuicio de la situación de impunidad que el contexto imperante les proporcionaba, idea que se ha desarrollado en los apartados precedentes. Por ello esta defensa no puede ser atendida, pues dada la especial modalidad en que se cometió el delito, no hay antecedentes precisos de que éste haya sido el resultado del cumplimiento de una orden de carácter militar, presupuesto básico para alegar el cumplimiento del deber militar”. Asimismo, **causa Rol N° 38766-2018**, quien en su considerando 26° señala “Que en lo referido las pretensiones de las defensas de Krassnoff, Zapata y Alfaro, para determinar si en la especie se configuran los errores de derecho denunciados es necesario tener en consideración que, de acuerdo al mérito de autos, las defensas de los recurrentes solicitaron durante la secuela del procedimiento, entre otras

pretensiones, que se reconociera a favor de sus representados las circunstancias consagradas en los artículos 211 y 214 inciso 2° del Código de Justicia Militar. Esta pretensión fue rechazada por el tribunal de primer grado, indicando en sus motivos 78°, 83° y 103° que en cuanto se invoca como circunstancia atenuante lo prescrito en el artículo 211 del Código de Justicia Militar, no cabe sino su rechazo, pues no se ha acreditado que la participación en calidad de autor, en los delitos sub-lite, lo haya sido en cumplimiento de órdenes recibidas de un superior jerárquico. Por la misma razón no se dan tampoco los supuestos para la concurrencia de la eximente incompleta en relación con el inciso segundo del artículo 214 del Código de Justicia Militar.” Haciendo referencia a lo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, en autos **rol N° 2182-98**. Teniendo además presente lo señalado en las consideraciones generales de esta sentencia, en especial lo expuesto en las directrices de la jurisprudencia alemana por el jurista **Claus Roxin**, en cuanto resulta inimaginable que quien actúa en una situación como la establecida en esta sentencia hubiera podido considerar que la ejecución de personas resultaba conforme al derecho. En consecuencia, **esta alegación es rechazada.**

D. En relación al artículo 214 del Código de Justicia Militar: En cuanto fue solicitada por la defensa del acusado el Tribunal razona lo siguiente: Esta eximente aplica “cuando se haya cometido un delito por la ejecución de una orden de servicio, el superior que la hubiere impartido será el único responsable”. Luego de citar doctrina indica que nos hayamos en el caso de obediencia debida, insistiendo que en aquel escenario, quien cumple una orden injusta obedece a que en tales hipótesis el inferior se haya en una situación de inexigibilidad. Sobre lo anterior, no es posible acoger la eximente alegada. Toda vez que: **a)** los hechos investigados, en primer lugar, no se tratan de orden de servicio, sino que delitos de lesa humanidad. **b)** En segundo lugar, no existe en el proceso ninguna representación de ilegalidad o antijuricidad al superior. **c)** En tercer lugar, nadie obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho participando en la ejecución de delitos de lesa humanidad. En efecto, no es posible acoger la alegación del artículo 214 del Código de Justicia Militar, ello por no explicar adecuadamente la defensa su posición, no reunirse los requisitos que señalan dichas normas y que además debe tratarse de una orden del servicio o de

una actividad castrense, lo que claramente no concurre en la especie, porque aquí se trata de un acto ilícito. En consecuencia, **esta alegación es rechazada.**

35°) ANÁLISIS DE TRIBUNAL:

A. En relación a la atenuante del **artículo 11 N°6** del texto antes citado: Examinada la circunstancia atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal, solicitada por las defensas de Rodolfo Cheuquelaf Lorenzo y Jorge Garcés Yáñez, se reflexiona lo siguiente: **Se da lugar a esta minorante, en calidad de simple, por no existir mérito para otra calificación**, ya que a los acusados les favorece esta minorante, toda vez que de sus extractos de filiación y antecedentes citados al inicio de este fallo, se puede observar que no tenían antecedentes penales pretéritos, todos a la época de los hechos. Se califica de simple porque razonar de otra manera en relación a cualquier persona que reside en Chile, se incurriría en una discriminación arbitraria, puesto que solo los que pueden acceder a educación, formación y perfeccionamiento se les califica; pero los que no puede hacer eso (que hay muchas personas en Chile) no se les podría calificar, lo que sin duda constituye una discriminación sobre la materia. En todo caso, no hay ningún antecedente sobresaliente o excepcional que permita al tribunal calificar esta atenuante. Así actuar correctamente en la vida, ingresar a una institución, cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias son parte de las condiciones básicas que se pide a toda persona al convivir en sociedad.

36°) INSTITUCIÓN DE LA MEDIA PRESCRIPCIÓN O PRESCRIPCIÓN GRADUAL:

En relación al artículo 103 del Código penal, el Tribunal se hace cargo de ésta Institución, por lo que cabe precisar:

A. En síntesis podemos expresar que sobre esta materia este Tribunal se remitirá a los razonamientos dados respecto a la imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad. Luego, siendo el delito de autos catalogado como de lesa humanidad, no es posible aplicar en todo su espectro algún instituto de prescripción. De no ser así, resulta muy difícil sostener la categoría de lesa humanidad. Si los hechos han sido calificados de esa forma debe sostenerse dicha afirmación tanto en la calificación del delito como en la determinación de la pena. Además, en relación a esta materia, el autor **Óscar López** (Derecho Internacional y Crímenes contra la Humanidad, Editorial Fundación de Cultura Universitaria. Uruguay, 2008. Pág. 235 y siguientes) menciona el **caso de la Corte**

Interamericana de Derechos Humanos, “Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú” de 10 de julio de 2007, que en su párrafo **190**, señala que la Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía ni disposiciones de prescripción ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables. Además, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en sus “Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile” del mes de julio del año 2014, señaló que le preocupa la aplicación de la “prescripción gradual” o “media prescripción” contenida en el artículo 103 del Código Penal, a violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, lo cual determina la disminución o atenuación de las penas aplicables. Además, en esa materia la **Excma. Corte Suprema, en sentencia en causa rol 28.581-2016 de 24 de octubre de 2016 (causa rol 29.877 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pitrufquén, caso “Nicanor Moyano Valdés”)** ha manifestado sobre esta materia, en su motivo quinto, que resulta conveniente recordar que el artículo 103 del Código Penal no sólo está contemplado en el mismo título que la prescripción, sino que se desarrolla luego de aquella, lo que revela la estrecha vinculación entre ambos institutos. Sin embargo, como en el caso se trata de un delito de lesa humanidad, circunstancia que el fallo declaró expresamente, lo que condujo a proclamar la imprescriptibilidad de la acción persecutoria, cabe sostener que por aplicación de las normas del Derecho Internacional y dado que tanto la media prescripción como la causal de extinción de la responsabilidad penal se fundan en el transcurso del tiempo como elemento justificante para su aplicación, la improcedencia de aplicar la prescripción total alcanza necesariamente a la parcial, pues no se advierte razón para reconocer al tiempo el efecto de reducir la sanción, dado que una y otra institución se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por el ordenamiento penal humanitario internacional, de manera que ninguno de tales institutos resulta procedente en ilícitos como el de la especie.

B. Ahondando en esta institución de la prescripción gradual, el último estudio actualizado sobre la aplicación de ésta por los Tribunales y la Excma. Corte Suprema corresponde a la tesista de magister de la Universidad de Chile **Karina Fernández Neira**, en su trabajo “La aplicación de la prescripción gradual del delito en las causas sobre violaciones de derechos humanos” (página 192) quien después de estudiar detalladamente aspectos dogmáticos y legales tanto

nacionales como de derecho comparado, concluye “que la aplicación de la prescripción gradual en casos de violaciones a los derechos humanos debe ser rechazada. En los casos antes referidos, la Corte Suprema no motiva correctamente sus sentencias, descuida aspectos dogmáticos y procesales, e incurre en incongruencias argumentativas en el afán de aplicar una institución cuyo diseño histórico-legislativo fue pensado para otras realidades, y cuya aplicación en casos de derechos humanos resulta forzada. Además, aunque la jurisprudencia citada evidencia la evolución de nuestro Tribunal superior, pues éste reconoce explícitamente que el Derecho internacional es una fuente directa de obligaciones internacionales para el Estado de Chile en lo referido al respeto de los derechos humanos, dicha evolución ha sufrido serios tropiezos y contradicciones a causa de los fallos del último bienio. Al aplicar la prescripción gradual a delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema, finalmente, compromete la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, particularmente respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”

C. Recientemente la Iltrma. Corte de apelaciones de Temuco en la causa rol penal N°359-2019, de fecha 24 de septiembre de 2019, pronunciándose sobre la no aplicación del artículo 103 del Código Penal, en su **considerando tercero** señala: “Finalmente, se tiene además en consideración, que la estimación de la prescripción gradual respecto de los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad afecta el principio de proporcionalidad de la pena, pues la gravedad de los hechos perpetrados con la intervención de Agentes del Estado, determina que la respuesta al autor de la transgresión debe ser coherente con la afectación del bien jurídico y la culpabilidad con que actuó. En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de "La Masacre de la Rochela vs Colombia", señaló de manera expresa: "que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, fallo "La Masacre de la Rochela vs Colombia", Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, párrafo N° 191).

D. Del mismo modo, Excelentísima Corte de Suprema en causa rol N°8914-2018, seguida por el delito de Homicidios calificados en carácter de

reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, acoge el recurso de casación en el fondo, deducido por la Unidad Programa Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos contra la sentencia dictada por la ltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 05 de abril de 2018, en su aspecto penal, declarando su nulidad y dictando sentencia de reemplazo con fecha 15 de junio de 2020. En dicha sentencia expresa lo siguiente: “**Noveno:** Que, conviene dejar asentado que, aun cuando el reconocimiento de la prescripción gradual, regulada en el artículo 103 del código punitivo, carece de influencia en lo dispositivo del fallo en estudio, la jurisprudencia constante de esta Sala Penal ha señalado reiteradamente que, la calificación de delito de lesa humanidad dada al hecho ilícito cometido, obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuentemente, contrarios a las regulaciones de los Cogens provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo”. Ratificando lo expuesto, con fecha reciente la Excelentísima Corte Suprema en roles N°5780-2023 denominado “Caso Caravana de la muerte episodio La Serena” de fecha 28 de diciembre de 2023 y en causa N°22.276-2022 denominado “Caso quemados” de fecha 05 de enero de 2024, a rechazado la institución de la media prescripción. En consecuencia, esta institución del artículo 103 del Código Penal tampoco es aplicable en la causa y **se rechaza para todas las defensas**. Esto es la petición realizada por las defensas de los acusados Rodolfo Cheuquelaf Lorenzo y Jorge Garcés Yáñez.-

37°) Agravantes de responsabilidad penal.

Que a **fs. 1749 a 1756 (Tomo VI)** la abogada Catalina Ross Fredes, en representación de **la Unidad de Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos**, alega la agravante de responsabilidad penal para los acusados la del artículo 12 N°8 del Código Penal.

Que en relación a la agravante del artículo 12N°8 del Código Penal, solicitada tal como este Tribunal lo ha dicho en la causa 114.000, homicidio de Exequiel Zigomar Contreras Plotzqui, en causa rol 44.305, homicidios

calificados de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, con un mayor estudio de los antecedentes y así lo ha resuelto en numerosas causas condenatorias, ya ejecutoriadas, este Tribunal acoge la agravante pedida del artículo 12 N°8 del texto punitivo para los acusados. En efecto los delitos de lesa humanidad, como ya se han descrito, no es efectivo, que solo puedan ser cometidos por agentes del Estado, es decir, delito de lesa humanidad, no es igual a que se comentan por agentes del Estado. Los delitos de lesa humanidad, también pueden ser cometidos por particulares. En la jurisprudencia nacional hay varios casos en que se ha condenado a particulares, por ejemplo en la causa rol N° 2.182-98, denominado “Episodio Liquiñe”, instruida por el señor Ministro en Visita Extraordinaria Alejandro Solís Muñoz. En ese sentido si bien el auto acusatorio en la descripción de los hechos por la facticidad misma describe a agentes del Estado, el hecho de ser funcionario público no implica automáticamente que la persona se prevalezca de su condición, por ello, lo especial de esta agravante, es decir, si el acusado no hubiera sido agente del Estado, no habría tenido la posibilidad de actuar con el resguardo para su impunidad, como lo hizo, y eso es lo importante, el hecho de ser funcionarios públicos no es parte de los requisitos de los crímenes de lesa humanidad, como ya se describió en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sólo se requiere ser detenido por una política contra determinada población, no siendo necesario que sean agentes públicos. Además, el artículo 63 no es tajante en esta materia, puesto que la persona siendo funcionario público, podría no haberse aprovechado de esa calidad y ejecutar el delito por otros factores o circunstancias que es lo que se viene explicando, por ejemplo, por relaciones de amistad, por relaciones de trabajo o por otras situaciones, pero en este caso se aprovecha de la condición de la calidad de funcionario público. El delito de secuestro con grave daño no tiene en el tipo el factor funcionario público, otros delitos tienen la calidad de ser cometidos por funcionarios públicos, pero este no es el caso. **Por ello es que debe acogerse la agravante del artículo 12 N°8 del Código Penal para los acusados por el delito de secuestro calificado.**

38°) DETERMINACIÓN DE LA PENA. En la determinación de la pena se conjugan varios factores que el sentenciador debe evaluar, entre ellos, como esenciales son:

A. En primer lugar, la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, establecidas en los **artículos 11 y 12** del Código Penal y otras normas del ordenamiento.

B. En segundo lugar, la determinación de la pena regida por los **artículos 50** y siguientes del mismo texto.

C. En tercer lugar, tratándose en este caso de delitos que su penalidad consta de dos o más grados, se deberá aplicar el **artículo 68** del texto punitivo, y si no es así el **artículo 67** del texto citado.

D. En cuarto lugar, tratándose en este caso de delitos de lesa humanidad como se explicará con posterioridad, atendida la gravedad y en consideración a la proporcionalidad de las penas, no procede que los encartados, aparte por la extensión de la pena, obtengan algún beneficios de la **Ley 18.216** atendido a los estándares normativos e interpretativos existentes en la materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

E. En quinto lugar, dentro de otros elementos, debe considerarse el **artículo 69** del Código Penal.

F. En sexto lugar, el equilibrio adecuado entre el **artículo 74** del Código Penal y el **artículo 509** del Código de Procedimiento Penal (si fuera pertinente). Que de igual forma se ha razonado, debe estarse a los estándares normativos e interpretativos sobre Derechos Humanos de la Corte Interamericana sobre esta materia, en especial el sentenciador tiene que considerar la gravedad de los hechos y la proporcionalidad de la pena, pues se trata de delitos de lesa humanidad.

39°) Que conforme a la calificación jurídica precedente y sus razonamientos posteriores, los hechos materia de la causa corresponden a la figura típica del delito de: secuestro calificado, perpetrado en el Sector Bahía Mansa de Osorno, a contar del 5 octubre de 1973. Delito previsto y sancionado en el **artículo 141 del Código Penal**, vigente a la época de los hechos, que tiene una pena de **PRESIDIO MAYOR EN CUALQUIERA DE SUS GRADOS**.

40°) Cabe hacer presente, que según el auto acusatorio de **fs. 1681 a 1725 (Tomo VI)**, fecha 29 de diciembre de 2021, y la calificación final que se ha hecho en esta sentencia los encartados Jorge Garcés Yáñez y Rodolfo Cheuquelaf Lorenzo les cabe responsabilidad como autores. En este caso a todos estos acusados les beneficia la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal la

que como se señaló es en carácter de simple y les perjudica la agravante contemplada en el artículo 12 N° 8 del mismo cuerpo normativa, según se ha razonado. En consecuencia, de conformidad al artículo 68 del Código Penal, se debe hacer la compensación racional de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. En este caso, los acusados quedan sin atenuantes ni agravantes, pudiendo en conformidad al artículo citado, recorrer el tribunal toda la extensión de la pena al momento de aplicarla. Al tratarse de secuestro calificado se aplicará la pena de **PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO**, más las accesorias legales.

41°) Beneficios de la Ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.

Atendidas las razones que se van a exponer (en especial la extensión de la pena) **no procede ningún beneficio de la ley 18.216 aplicable a los acusados.** Además, se tiene en consideración, los informes del Centro de Reinserción Social y Servicio Médico Legal allegados al proceso respecto de:

A. Jorge Garcés Yáñez, a fs. 2267 a 2269 (Tomo VII) informe del Centro de Reinserción Social el que concluye “este Consejo Técnico recomienda su incorporación a las penas sustitutivas de libertad vigilada”. A fs. 2413 a 2415 (Tomo VII) informe del Servicio Médico Legal el cual concluye que: “el evaluado tiene todas sus funciones corticales superiores conservadas, por lo cual, desde un punto de vista psiquiátrico, no tiene impedimentos para enfrentar un proceso judicial”.

B. Rodolfo Cheuquelaf Lorenzo a fs. 2350 a 2354 (Tomo VII) informe del Centro de Reinserción Social mediante el cual se concluye “que se sugiere la libertad vigilada o libertad intensiva”.

42°) Sobre esta materia y aun en el caso que posteriormente los acusados tuvieran una pena inferior de igual forma **no puede acceder a cumplir la pena en libertad**, en efecto con un mejor estudio y ponderación actualizada de los estándares normativos e interpretativos en materia de derechos humanos es necesario hacer las siguientes reflexiones, como el Tribunal lo ha realizado últimamente en causa rol causa rol 2-2013-V de la Ilma. Corte de Apelaciones de Valdivia, causa rol 45.361 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.051 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 45.357 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.103 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.017 del Primer

Juzgado del Crimen de Temuco, causa ro 2-2012 del Juzgado de Letras de Pucón, causa rol 114.034 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 10.914-P del Juzgado del Crimen de Puerto Montt.

A. Un **estándar** en derechos humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5 inciso 2° de nuestra Constitución que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales (**García Pino, Gonzalo**: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Ministro que a partir de la normativa aludida, esta debe ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo.

B. Sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, en su **párrafo 124**, señaló: “La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

C. Esta institución denominada control de convencionalidad puede ser definida en términos simples como el mecanismo que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana (**García, Gonzalo** (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: **Nogueira, Humberto** (coord.) La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Librotecnia. Pp.356-357).

D. Para aplicar entonces el control de convencionalidad, hay que observar por su puesto la Convención Americana (ya citada) en especial los artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

E. Del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna Opinión Consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un **estándar normativo y/o interpretativo** en materia de derechos humanos. En este caso en relación a la aplicación de sanciones y posibles beneficios respecto a los delitos que consistan en graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito de lesa humanidad. En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

Siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

E.1. Caso Barrios Altos versus Perú, de 14 de marzo de 2001, en el párrafo 41, expuso que considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

E.2. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, de 26 de septiembre de 2006, párrafos 111 a 114, la Corte IDH ha señalado: Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Al respecto, este Tribunal ha señalado que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Este Tribunal ya había señalado en el Caso Barrios Altos que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Resulta útil destacar también que el propio Estado en el presente caso reconoció que en “principio, las leyes de amnistía o auto amnistía son contrarias a las normas de derecho internacional de los derechos humanos”. Por las consideraciones

anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía.

E.3. Caso la Masacre de la Rochela vs Colombia, Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, párrafo N° 191, señaló de manera expresa: que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia.

E.4. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú, de 10 de julio de 2007, en su párrafo 190, puntualiza: La Corte recuerda que en cumplimiento de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos, el Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que impidan la debida investigación de los hechos, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita dicha investigación y los procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los presentes. El Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de derecho interno para eximirse de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar penalmente a los responsables de los hechos cometidos en perjuicio de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz. En particular, la Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía, ni disposiciones de prescripción, ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables.

E.5. Caso Masacre de las Dos Erres versus Guatemala de 24 de noviembre de 2009, en el párrafo 129, señala que ante esta situación, la Corte reitera su jurisprudencia constante sobre la incompatibilidad de figuras como la prescripción y la amnistía en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, que de manera clara ha establecido que: El Estado debe garantizar que los procesos internos tendientes a investigar y [eventualmente] sancionar a los responsables de los hechos de este caso surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad. En ese sentido, el Tribunal ya ha señalado que [...]son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las

disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” [...] ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos[...]En particular, al tratarse de graves violaciones de derechos humanos el Estado no podrá argumentar prescripción o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber.

E.6. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha Do Araguaia”) vs. Brasil

de 24 de noviembre de 2010 en el párrafo 155, indica: Adicionalmente, el mismo Grupo de Trabajo manifestó su preocupación que en situaciones post-conflicto se promulguen leyes de amnistía o se adopten otras medidas que tengan por efecto la impunidad, y recordó a los Estados que: es fundamental adoptar medidas efectivas de prevención para que no haya desapariciones. Entre ellas, destaca [...] el procesamiento de todas las personas acusadas de cometer actos de desaparición forzada, la garantía de que sean enjuiciadas ante Tribunales civiles competentes y que no se acojan a ninguna ley especial de amnistía o medidas análogas que puedan eximir las de acciones o sanciones penales, y la concesión de reparación e indemnización adecuada a las víctimas y sus familiares.

F. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su jurisprudencia ha sostenido este estándar en materia de derechos humanos en cuanto tratándose de delitos de graves violaciones a los derechos humanos (entre otros el delito lesa humanidad), los responsables deben ser sancionados, la pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos perpetrados por la intervención de Agentes del Estado. Del mismo modo, se debe evitar cualquier práctica o aplicación de normativa interna que restrinja los efectos de la sentencia u otorgue algún beneficio de cualquier tipo para el cumplimiento de la sentencia. Del mismo modo que las penas resulten ilusorias. Todo ello por tratarse de graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por Agentes del Estado. Lo anterior, es

totalmente diferente al tratamiento penal y procesal penal de la delincuencia común.

G. Sobre esta materia, esto es, de los beneficios que pueden otorgarse a los responsables de los ilícitos penales (tratándose de la delincuencia común) el legislador chileno ya avanzó sobre la materia en la **Ley 18.216**. En efecto en esta ley, si bien el **artículo 33** permite al Tribunal, previo informe favorable de Gendarmería, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad reemplazándola por el régimen de libertad vigilada intensiva, previo los requisitos legales, este artículo debe relacionarse con el artículo 1 y siguientes de la citada ley. En efecto el **artículo 1** de la señalada ley indicada, en forma categórica y expresa, prescribe “No procederá la facultad establecida en el inciso precedente (otorgamiento de los beneficios de Remisión condicional, Reclusión parcial, Libertad vigilada, Libertad vigilada intensiva, Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34 y Prestación de servicios en beneficio de la comunidad) ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 150 A, 150 B, 361, 362, 372 bis, 390 y 391 del Código Penal”.

H. En esa idea de razonamiento, si bien la Ley 18.216, se refiere a los ilícitos penales de la delincuencia común. Manifiesta la voluntad del Estado de Chile de negar cualquier tipo de beneficios (en forma acotada) para los autores consumados de determinados delitos, en este caso **secuestro calificado**. En todo caso si ello no estuviera consagrado en la legislación chilena para todos los responsables de los delitos de lesa humanidad (en la época de los hechos investigados) debemos observar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes citada, según se ha relacionado. En todo caso- como expone Nogueira, debe aplicarse el control de convencionalidad cuando el derecho interno se encuentra por debajo del estándar mínimo asegurado convencionalmente. Considerando los artículos 1, 2 y 29 de la Convención Americana citada. Además los artículos 26, 31.1 y 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969. (**Nogueira, Humberto** (2014): “Sistema interamericano de protección de derechos humanos, control de convencionalidad y aplicación por parte de las jurisdicciones nacionales” en: Nogueira, Humberto (“coord.”). La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a

la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Santiago de Chile, Librotecnia, pp. 395-420).

43°) En consecuencia, aplicando el control de convencionalidad, según lo dispuesto por la Corte IDH, en relación a los **estándares normativos e interpretativos** sobre derechos humanos para los efectos de la sanción y cumplimiento de las penas, en relación a los ilícitos de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito lesa humanidad (como es el caso en estudio) **no es posible** (además de lo razonado y de los estándares normativos) **otorgarle algún beneficio de la ley 18.216 a los acusados** en esta causa y así se dirá en lo resolutivo. De esta forma el control de convencionalidad se manifiesta como una obligación de garantía, es decir, este control se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. Este control es una expresión de la obligación de garantía y de disponer medidas en el ámbito interno. Esto implica que el control de convencionalidad cristaliza estas obligaciones para toda autoridad pública. Más aun, dicho control desde una mirada más amplia se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. (Núñez, Constanza (2017): El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Argentina, ARA, Editores. p. 36). Lo anterior ha sido además ratificado por la **II^{ta}ma. Corte de Apelaciones de Temuco, el 04 de marzo de 2020, en causa rol 1.052-2019**, en cuanto la no concesión de beneficios de la ley 18.216 a aquellas personas que hubieran participado en graves violaciones a derechos Humanos (lesa humanidad). En consecuencia **no es posible otorgarles a los acusados ningún beneficio y deberán cumplir la pena efectiva impuesta** como se dirá en lo resolutivo.

44°) Que el abogado Gonzalo Cruz Gutierrez de fs. 1948 a 1972 (Tomo VI), en representación de **Jorge Garcés Yáñez**, el tercer otrosí de su presentación solicita **arresto domiciliario parcial**, en el caso de ser condenado su representado, sobre lo anterior el Tribunal **no puede dar lugar a lo pedido**, atendido a lo ya razonado y extensión de las penas impuestas. Peticiones

similares ya han sido resueltas por la Excma. Corte Suprema, en efecto en causa Rol 843-2018, en su considerando octavo expresa: ... conforme lo expuesto, estando fundada la resolución recurrida y no existiendo en el ordenamiento jurídico nacional normas que permitan dar lugar al requerimiento formulado en favor del recurrente como tampoco normas imperativas en los tratados de Derechos Humanos, no puede atribuirse ilegalidad a la decisión del Ministro Sr. Mario Carroza, y ésta no es arbitraria, toda vez que las personas condenadas ya sea por delitos comunes o de lesa humanidad cumplen sus condenas en recintos carcelarios sin atender a la sola circunstancia de tratarse de personas mayores.

VII. EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL

45°) Que **fs. 1759 a 1784 (Tomo VI)** en el primer otrosí de su presentación la abogada Rose Marie Vásquez Garrido, en representación de Edgar Marcelo Gutierrez Bertín, deduce demanda civil de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por Álvaro Sáez Willer, abogado Procurador Fiscal de Temuco, por la suma de \$400.000.000. (cuatrocientos millones de pesos), o lo que el Tribunal determine en justicia, con los reajuste de acuerdo al IPC e intereses y las costas del juicio. El demandante se funda en lo sustantivo, esencial y pertinente:

A. LOS HECHOS, se encuentran expuestos en el auto acusatorio respecto del cual su parte se adhirió en todas sus partes, que a efectos de esta demanda civil pide tener por reproducido en toda su extensión y que en lo medular se reproduce en lo pertinente hechos del auto acusatorio. El Secuestro Calificado de Marcelo Del Carmen Gutiérrez Gómez, es un delito de lesa humanidad: Los hechos antes señalados se verificaron en el contexto histórico mayor dado por el Golpe de Estado. Se trata de delitos contra la humanidad, conocidos judicial y extrajudicialmente, ante el derecho nacional e internacional, como "crímenes de lesa humanidad", la razón: dirigente de un partido político de izquierda, pariente de un "extremista". La detención y tortura del joven Gutiérrez coincide con la detención y ejecución de su hermanastro. Todo indica que el menor de edad fue detenido, enseguida torturado hasta indicar el paradero del buscado y enseguida desaparecido. En tanto su hermano Edgar fue detenido, ejecutado y presentado como "extremista" abatido en enfrentamiento. Se describe como era la víctima, en lo pertinente soflama que en el año 1972 mientras vivía junto a su familia en el

Campamento Bernardo O' Higgins, casa N° 82 de la comuna de Osorno, conoce a doña Inés Elena Bertín Yáñez, con quién inicia una relación de pololeo. Producto de esta relación Inés Bertín queda embarazada del actual querellante, don Edgar Marcelo Gutiérrez Bertín. Este hecho determina que ambos jóvenes comienzan una vida de familia juntos y que Marcelo debe dejar sus estudios para mantener a Inés su pareja y a su hijo que está en el vientre. Desde ese momento debió trabajar como jornalero u otras labores que le permitieran mantener a su familia. El delito cometido en contra de la víctima, destruyó una familia, le arrebató la posibilidad de conocer, criar y proteger a ese hijo al que tanto esperaba, llevó a su joven pareja a una profunda depresión y al querellante de autos una completa indefensión, debiendo comenzar a trabajar a los 7 años para ayudar a la empobrecida familia. Desarrolla que debió demandar de reclamación de filiación. El daño sufrido por su defendido se explícita en el hecho de soportar la injusta muerte de su padre y la destrucción de su familia nuclear. Este tiempo, décadas, ha sido el manto de impunidad para los ejecutores materiales, pero también fuente de permanente dolor para su representado.

B. EL DERECHO:

A. Al caso, el tema de derecho que importa resolver la pretensión indemnizatoria de mi mandante, ha sido objeto un centenar de pronunciamientos por parte de los tribunales superiores de justicia de nuestro país. Sobre estos tópicos las respuestas de la ley aplicable, conforme a su tenor e interpretación constitucional, permite sostener la responsabilidad del estado, indemnización y acciones civiles. Respecto a lo precedente cita disposiciones legales.

B. Reconocimiento expreso del Estado de Chile de los delitos de lesa Humanidad y Crímenes de Guerra. El 03 de diciembre de 1973, el Estado de Chile, sujeto de derecho internacional, concurrió con su voto a aprobar la Resolución 3.074 de la XXVIII Asamblea General de Naciones Unidas denominada "principios de Cooperación Internacional para la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de Crímenes de Guerra o de Crímenes de Lesa Humanidad, A la anterior resolución se añaden otras más, todas relativas a crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, a las cuales igualmente concurrió el Estado de Chile, obligándose internacionalmente, nombra las resoluciones. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema. Finalmente modo de mayor abundamiento, en otro de las tantas causas que sostienen la

invariable tesis de La Corte Suprema, se anuló en sede de casación en el fondo sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, que había acogido la defensa fiscal. El monto de la indemnización que se reclama tiene presente los siguientes elementos 1. La magnitud del hecho: De efectos irreversibles al terminar en el hecho con la vida de una persona de apenas 17 años al momento de su secuestro, padre de familia en curso, dirigente y dirigente político. 2. El tiempo transcurrido desde la fecha de los hechos al inicio y próximo fallo: casi 50 años de impunidad. Es decir por poco se consumó el indisimulado intento del Estado por lograr la perpetración de un alevoso crimen sin el correspondiente juzgamiento. 3. El dolor y padecimiento de una persona que sufrió con la desaparición de su padre, en el hecho con la muerte de este. 4. La Corte Suprema lo ha dicho una y otra vez: el daño moral es de corte subjetivo, su asiento está en la propia naturaleza afectiva del ser humano, su demostración en tanto cuantificación no es posible, pero si efectivamente resarcible por la vía de la equivalencia. En este caso, el demandante de autos padeció en carne propia todas las manifestaciones de la desaparición de su padre y desde entonces de una red de mentiras para ocultar la verdad de lo acontecido. 5. Los recientes fallos de la Corte Suprema que han reiteran la doctrina en sede de prescripción de las acciones civiles y llamado pretium doloris en causas de lesa humanidad, cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema. Así, bajo el criterio determinado por la Excma. Corte Suprema, pide fijar a título de indemnización por daño moral para su representado la suma de \$400.000.000, (cuatrocientos millones de pesos), más los reajustes e intereses corrientes desde que la sentencia a dictar quede firme, con costas. Funda esa petición en especial el hecho que desde el secuestro de Marcelo Del Carmen Gutiérrez Gómez, 05 de octubre de 1973, a la fecha de la pronta sentencia han transcurrido 48 años, por causa exclusiva del Estado Chileno. El Estado a través de sus agentes detuvo ilegal cobardemente a Marcelo, el Estado negó justicia por décadas y, por ende, so riesgo de incurrir en el sumo de la injusticia, el Estado está en el imperativo moral y jurídico de indemnizar el inconmensurable dolor de su mandante.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA CIVIL

46°) Que de **fs. 1808 a 1833 (Tomo VI)**, el abogado Procurador Fiscal del **Consejo de Defensa del Estado, Álvaro Sáez Willer**, contesta la demanda civil entablada por la abogada Rose Marie Vásquez Garrido, representación de

Edgar Marcelo Gutierrez Bertín, invocando la calidad de hijo de la víctima. Solicitando acoger las excepciones y defensas opuestas y negar lugar a dicha demanda en todas sus partes; y, en el evento improbable que ella se acogiere, rebajar sustancialmente el monto de la suma demandada por concepto de indemnización de perjuicios, además de acoger la excepción que atañe a los reajustes e intereses, y su cómputo e improcedencia de condena en costas.

A. Excepción de improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por haber sido ya reparada conforme a las leyes de reparación: Comienza aludiendo a la Justicia Transicional, que desde esa óptica se puede mirar en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria. Que no debe olvidarse que, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Que el Estado debe satisfacer numerosas necesidades de toda la sociedad – que lo anterior no puede ser un factor que impida considerar la reparación pecuniaria de aquellos que son y fueron directamente afectados en el proceso de violación a los Derechos Humanos. Alude al esfuerzo de la ley 19.123 en esta materia y los términos y costo para el Estado lo que especifica. Que se determinó una indemnización legal, que optó beneficiar al núcleo familiar más cercano, esto es padres, hijos y cónyuge, pretiriéndose al resto de las personas ligadas por vínculo de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos. Que ante el *pretium doloris*, está limitada la determinación de quienes son los sujetos de daño por repercusión o rebote para deducir acciones pecuniarias, pues la extensión de la reparación económica debe zanjarse en algún punto. Señala el Derecho Comparado, en el Common Law, donde se alude al concepto de “*lass of consortium*” que despliega en sus fundamentos, además de normativa interna. **a) En subsidio de lo anterior, reparación satisfactiva:** que el hecho que el demandante no tenga derecho a un pago de dinero, no significa que en la especie no haya operado otras formas de reparación mediante la entrega de importantes prestaciones, como aconteció en el caso de autos, y que vinieron a satisfacer el daño moral sufrido. Demarca normativa, doctrina, las reparaciones simbólicas y programa de reparación y atención Integral de Salud, fundamentando con jurisprudencia al respecto. Que estando la referida acción de autos basadas en los mismos hechos

y pretendiendo ella indemnizar los mismos daños que han inspirado el cumulo de acciones reparatorias, es que opone formalmente la excepción de reparación satisfactiva a la acción deducida por los demandantes, todos los cuales han invocado la calidad de hermano de las víctimas, mediante el conjunto de reparaciones de diversos orden, incluyendo las simbólicas y de beneficio de salud, a través del programa PRAIS.

B. Excepción de prescripción extintiva:

B.1. Normas de prescripción aplicables: en subsidio opone la excepción de prescripción de las acción de indemnización de perjuicios deducida con arreglo a lo dispuesto en el artículo en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con el artículo 2.497 del mismo Código; por encontrarse prescrita la demanda, en todas sus partes. Apunta que, según lo expuesto en la demanda, el homicidio de Luis Cotal se produjo en octubre de 1973, pero es del caso que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las víctimas o familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, o aun, hasta la entrega pública del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 1990 y el 4 de marzo de 1991, respectivamente, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, **29 de marzo de 2022**, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En consecuencia, oponen la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2.332 del Código Civil. En subsidio, en caso de estimarse que la norma anterior no es aplicable en autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la demanda de autos, transcurrió con creces el plazo que establece el artículo 2.515 del Código Civil.

B.2. Generalidades sobre la prescripción: Aduce que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, citando doctrina al efecto. Expresa que, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Que la prescripción es una institución universal y de orden público. Que las normas del Título XLII del Código

Civil, que la consagra y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no solo al derecho privado. Que entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor cita. Que, esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por las leyes y reglamentos especiales. Adosa que toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2.514 y 2.515 del Código Civil.

C.3. Fundamento de la prescripción: comunica que, la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Que los planteamientos doctrinarios de los que se vale, le permite concluir que la prescripción, es una institución estabilizadora. Que está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas, continua sus argumentos en ese contexto. Finalmente, refiere que en la especie, el ejercicio de la acción indemnizatoria ha sido posible durante un número significativo de años, desde que los demandantes estuvieron en situación de hacerlo.

C. 4. Jurisprudencia sobre la materia: Cita jurisprudencia y reflexiona en ese ámbito. 1). Que el principio general que rige la materia es de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva. Agrega que, 2). Los Tratados Internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la

responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establece se refiere solo a la responsabilidad penal. Citando fallos al respecto. 3). Que no existiendo una norma especial que determine el plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos el derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2.332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto. 4). Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado, sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia. 5º) Que el inicio del plazo debe colocarse, en consecuencia, al momento de emitirse el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pues desde ese momento se tuvo certidumbre de la condición de víctima de la personas desaparecida. Adiciona fallo de la Excma. Corte Suprema.

C.5. Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria: ilustra que, la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. Que debe considerarse, lo planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece- como se dicho- al ámbito patrimonial. En efecto basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos e disposición, tales como renuncia o transacción, por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tacita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

C.6. Normas contenidas en el Derecho Internacional: funda que, en relación con las alegaciones expuestas por el actor en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería

imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en ese sentido, se hará cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia. Reseña a la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, Convenio de Ginebra de 1949, la Resolución N° 3.074 de 3 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 60/147 de 21 de marzo de 2006, de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos. Acota que, el planteamiento de esta defensa fiscal ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país, citando al efecto el caso "Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile" y "Martínez Rodríguez v otra con Fisco de Chile". No habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2.332 y 2.497 del Código Civil, solicitando que con el mérito de lo expuesto se rechazase íntegramente la demanda, por encontrarse prescrita la acción civil deducida.

D. En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas: vislumbra que en subsidio de las defensas y excepciones precedentes, opone alegaciones en cuanto a la naturaleza de las acciones indemnizatorias solicitadas y los montos pretendidos. Alega que el demandante ejerce acción indemnizatoria por daños moral y solicitan por este concepto la suma de \$ 400.000.000. en total, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda con costas.

D.1. Fijación de la indemnización por daño moral: Que con relación al daño moral debe considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades morales. En términos generales refiere que la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgándole a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido. Citando la definición que ha realizado la Excma. Corte Suprema al respecto sobre el perjuicio moral.

D.2. En subsidio de las excepciones precedentes, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales: En subsidio de las excepciones precedentes opuestas, alega en todo caso que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, el Tribunal debe considerar todo los pagos recibidos a través de los años por los actores de parte del Estado conforme a las leyes de reparación y también a los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, y que benefician a los demandantes puesto que todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

D.3. Improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada: hace presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Que a la fecha de notificación de la demanda de autos, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse. Realiza argumentos en esa línea citando jurisprudencia de los tribunales superiores. Luego expresa que, en el hipotético caso de que se resolviera acoger las acciones de autos y se condene a su representado al pago de indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoria y su representado incurra en mora.

D.4. Respecto de las costas de la causa: Proclama que atendido el compromiso del Estado democrático con los Derechos Humanos, no resulta procedente que se le condene en costas, siendo, además, evidente que, a todo evento, tiene motivo plausible para litigar.

ANÁLISIS DE TRIBUNAL.

47°) Que haciéndonos cargo de la **contestación de la demanda efectuada por el Fisco de Chile**, reflexionaremos de la siguiente manera:

Para un mejor entendimiento de la contestación efectuada por el Fisco de Chile, se estructurará su presentación de la siguiente forma:

- A. Excepción de improcedencia de la indemnización dineraria demandada reclamada por haber sido ya reparada conforme a las leyes de reparación.
- B. Excepción de prescripción extintiva.
- C. En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas.

A. En cuanto a:

A.1. Excepción de improcedencia de la indemnización dineraria demandada por haber sido ya reparada conforme a las leyes de reparación. Al contestar el Fisco alega respecto del demandante civil, no le correspondería indemnización alguna por haber sido ya reparada conforme a la normativa que indica.

A.2. La excepción ante referida, será rechazada por el Tribunal y así se estará en lo resolutive, es especial por los siguientes fundamentos ya ponderados en las siguientes causas:

a. **Causa rol 27.525** del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014;

b. **Causa rol 27.526** del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014;

c. **Causa rol 45.345** del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014;

d. **Causa rol 113.990** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015;

e. **Causa rol 113.989**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016;

f. **Causa rol 18.780** del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015;

g. **Causa rol 29.877**, del ingreso del Juzgado de Letras de Pitrufquén, seguida por el delito de homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016;

h. **Causa rol 45.344**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016;

i. **Causa rol 45.371**, del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016,

j. **Causa rol 45.342**, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumerindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015;

k. **Causa rol 29.869**, del Juzgado de Letras de Pitrufquén, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016;

m. **Causa rol 27.527**, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016;

n. **Causa rol 114.001**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016;

ñ. **Causa rol 113.986**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016;

o. **Causa rol 63.541**, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016;

p. **Causa rol 45.363**, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017;

q. **Causa rol 114.048**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017;

r. **Causa rol 10.868**, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017;

s. **Causa rol 114.003**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017;

u. **Causa rol 10.851**, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, seguida por el homicidio simple, en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 20 de enero de 2016;

v. **Causa rol 45.343**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaiquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 31 de agosto de 2017;

w. **Causa rol 57.071**, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el Homicidio Calificado en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia del 12 de octubre de 2017,

x. **Causa rol 113.997**, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco para investigar el delito de Secuestro Calificado en la persona de Segundo Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia del 19 de enero de 2018;

y. **Causa rol 45.354**, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el Secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia del 03 de agosto de 2020;

z. **Causa rol 45.361**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020;

a.1. **Causa rol 114.000**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020;

a.2- **Causa rol 4-2010**, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018;

a.3- **Causa rol 45.362**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018;

a.4. **Causa rol 114.007**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018;

a.5- **Causa rol 114.042**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018. Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados, que han rechazado los argumentos reiterados en el tiempo sobre estas excepciones que ha interpuesto el Fisco de Chile.

a.6 **Causa rol 113.996**, del Primer Juzgado del crimen de Temuco, seguida por el Homicidio calificado y apremios ilegítimos en la persona de Tomás Segundo Esparza Osorio y apremios ilegítimos en la persona de Javier Enrique Esparza Osorio, sentencia de 30 de junio de 2018.

a.7 **Causa rol 29.979** del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado de Domingo Obreque Obreque, sentencia de 07 de abril de 2014.

a.8 **Causa rol 45.365**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Luis Armando Horn Roa, sentencia de 25 de febrero de 2021.

a.9 **Causa rol 45.367** del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Pedro Millalén Huenchuñir, sentencia de 11 de mayo de 2022.

a.10 **Causa rol 44.305** del juzgado del Crimen de Puerto Varas, seguida por el homicidio calificado en las personas de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, sentencia de 25 de enero de 2019.

a.11 **Causa rol 45.368** del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de José Bernardino Cuevas, sentencia de 30 de marzo de 2019. Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados.

a.12 **Causa rol 113.991** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Ramón Carrero Chanqueo, sentencia de 21 de noviembre de 2022.

a.13 **Causa rol 113.478** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Luis Omar Torres Antinao, sentencia de 13 de junio de 2019.

a.14. **Causa rol 114.051** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el secuestro calificado de José Edulio Muñoz Concha, sentencia de 30 de abril de 2021.

a.15. Causa rol 5-2013 del ingreso de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por delito de aplicación de tormentos en la persona de Harry Cohen Vera.

a. 16. Causa rol 63.551 de ingreso del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el delito de homicidio calificado en la persona de Patricio Rivas Sepúlveda.-

A.4. Sobre lo anterior, además se reitera que esta excepción será rechazada. En efecto, cabe hacer presente que el demandando no señala ninguna norma de las leyes que cita, donde se indique que los familiares, ya sea cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas de violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el régimen militar año 1973 y siguientes, no puedan demandar por indemnización por daño moral. Por qué no la cita: primero porque no existe y segundoporqué en el ordenamiento jurídico chileno, tratándose de violaciones a los derechos humanos y por las obligaciones generales establecidas en los artículo 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es, respetar, garantizar, y no discriminar en el goce y ejercicio de los derechos y libertades, no es posible obstruir a persona alguna el derecho de acceso a la justicia (artículos 8 y 25 de dicha Convención). No es óbice interponer las acciones civiles respectivas por el daño causado a las víctimas por violación a los derechos humanos y las reparaciones y prestaciones estatales de todo tipo que pueda otorgar el Estado en cumplimiento a los estándares internacionales. En este punto se seguirá la línea jurisprudencial desarrollada **en fallos por la Excm. Corte Suprema**, en especial: El fallo de 01 de abril de 2014, **rol 1424-2013**, sentencia de remplazo, considerando 13°, motivo que también cita fallos en el mismo sentido, **roles 2918-13, 3841-12 y 5436-10**. Que en síntesis expresa, en relación a la improcedencia alegada por el Fisco de Chile, que esta no es efectiva. Así en términos precisos, la acción civil es la obtención de la compensación íntegra de los daños ocasionados por el actuar de los Agentes del Estado de Chile. Las disposiciones de derecho internacional deben tener aplicación preferente en nuestro régimen jurídico al tenor del artículo 5° de la Constitución Política de la República. Del mismo modo el hecho que la demandante hayan sido favorecida por el Estado por la Ley 19.123 y leyes posteriores no es óbice para demandar civilmente (tanto la cónyuge, los

hijos y los hermanos) toda vez que la citada Ley no establece de modo alguno la incompatibilidad que reclama el Fisco de Chile.

B. Que en cuanto a la excepción de prescripción extintiva del artículo 2.332 en relación al artículo 2.497 y 2.515 en relación al artículo 2.514 del Código Civil: También **será rechazada**. Este Tribunal, en igual sentido, estará a lo ya resuelto por la Excma. Corte Suprema en el fallo de remplazo **rol 1424-2013** de 1 de abril de 2014, considerando 11°, el cual en síntesis y en lo pertinente, señala que tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio Derecho Interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 y su posterior modificación contenida en la Ley N°19.980, reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. Por consiguiente, agrega la Excma. Corte Suprema, cualquier diferenciación efectuada por el juez, en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama. Como se aprecia, la Excma. Corte Suprema de manera sostenida en el tiempo ha rechazado esta excepción de prescripción extintiva, como se puede observar en este fallo y otros posteriores, como en causas roles 15.294-2018 y 2.471-18 del ingreso de la Excma. Corte Suprema, entre otros. Sobre la materia también es importante señalar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros vs Chile” de fecha 29 de Noviembre de 2018, el que se relaciona con la alegada responsabilidad del Estado por violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial como

consecuencia de la aplicación de la figura de prescripción de acciones civiles de reparación relacionadas con crímenes de lesa humanidad. Las presuntas víctimas son siete grupos de personas que, entre 1997 y 2001, interpusieron por separado siete acciones civiles de indemnización de perjuicios, en razón del secuestro y desaparición o ejecución de sus familiares por parte de agentes estatales en 1973 y 1974, durante la dictadura militar. Tales acciones fueron rechazadas entre 1999 y 2003, por juzgados, Tribunales de apelación o la Corte Suprema de Justicia, con base en la aplicación del plazo de la figura de prescripción establecida en el Código Civil. Si bien las presuntas víctimas han recibido una pensión mensual administrativa en virtud de lo dispuesto en la Ley 19.123 de 1992, así como otros beneficios en algunos casos (bono de reparación o bonificación compensatoria), la Comisión consideró que la existencia de un programa administrativo de reparaciones no excluye la posibilidad de que las víctimas de graves violaciones opten por reclamar reparación por vía judicial y que, tratándose de crímenes de lesa humanidad, es desproporcionado negarles sus derechos a una reparación bajo el argumento de prescripción. Sobre estos hechos, en el párrafo 13, el Estado de Chile acepta los hechos que se han tenido por probados por la Comisión en el Capítulo IV de su Informe. En los puntos resolutivos la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado de Chile por violación al derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y se ordena además al Estado a pagar determinadas sumas dinero.

C. En cuanto al daño e indemnización reclamada: Que en un examen somero de las siguientes Constituciones Chilenas la expresión para referirse a los Tribunales, es “Tribunales de Justicia”. De esta forma, lo hacían los siguientes textos: de 1822, capítulo I, artículo 158, donde a los Tribunales se les denomina “Tribunales de Justicia”; de 1823, título XIII, artículo 143, “Suprema Corte de Justicia”; de 1833, capítulo VIII, “De la administración de justicia”; de 1925, artículos 23 y 39, aluden a la expresión “Tribunales de Justicia”; de 1980, artículos 45, 52 N° 2 letra c) y 76 se refieren a la expresión “Tribunales de Justicia”. En consecuencia, la tradición constitucional, constata que el nombre para referirse a los Tribunales para que ejerzan su función no es de Tribunales de Ley, Tribunales de Derecho, Tribunales de Jurisprudencia, Tribunales de

administración, sino que es **Tribunales de Justicia, lo que significa que tienen una conexión directa con este valor e ideal Constitucional**. Por lo tanto, siempre los Tribunales en conformidad, además, al Código Iberoamericano de Ética Judicial, vigente en Chile para los magistrados, en su artículo 35 señala: “el fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del Derecho”. Con mayor énfasis los jueces, frente a casos extraordinarios, únicos, irrepetibles que puedan suceder en una República, los Tribunales deben considerar la colisión que pueda producirse entre el Derecho positivo y la Justicia, debiendo considerarse, además, que la Corte de Apelaciones de Temuco ya recogió esta tradición constitucional de principios y valores en el fallo rol 45-2008 de 1 de septiembre de 2008, recaído en la **causa rol 113.959 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, caso “Curiñir Lincoqueo”**. Sólo a modo de ejemplo, ya que hay muchos sobre la materia, la Corte Constitucional Federal de la Republica Bonn, en una decisión ya en 1953, citando a Radbruch, declaró que en interés de la seguridad jurídica, un conflicto entre una prescripción de Derecho positivo y la justicia de fondo se resuelve normalmente en favor de la primera; sin embargo, cuando la discrepancia entre una ley positiva y la justicia llega a un grado intolerable, la ley por ser derecho injusto, debe ceder ante la justicia (**Antonio Pedrals**: Atisbos de Supralegalidad en el ordenamiento positivo. Universidad de Valparaíso, 1982, pág. 584). Que en este caso es aplicable, a propósito de la indemnización reclamada.

C.1. Que asimismo podemos decir que la naturaleza humana es de tal condición que adquiere un deseo de actuar justamente cuando hemos vivido en un marco de Instituciones justas y nos hemos beneficiado de ellas. (**John Rawls**. *Una Teoría de la Justicia*. Fondo de Cultura Económica, año 2006, página 412).

C.2. Que en la misma línea, el autor citado en su obra *Liberalismo Político*, igual editorial, año 2013, página 224 y 225, donde expresa que los Tribunales cuando deban decidir los casos deben recurrir a los valores políticos que en su opinión pertenecen a la comprensión más razonable del concepto público de la justicia y a sus valores políticos de justicia y de razón pública (esto no tiene que ver con su propia moral personal) pues, los valores anotados son los valores que la ciudadanía y en general todos creen de buena fe, como les exige el deber de civilidad y que se espera que suscriban todos los ciudadanos en tanto personas razonables y racionales. Agrega este Tribunal que el valor justicia consagrado en

nuestras Constituciones por lo menos desde 1822, es un acervo que cualquier ciudadano de una república independiente y soberana, como la chilena, adhiere.

C.3. Que continuando con lo anterior yendo más al fondo en esta introducción, si uno analiza, incluso, el desarrollo del Derecho Civil y su interpretación, como lo hizo **Alejandro Guzmán Brito** en su artículo *La historia Dogmática de las Normas sobre Interpretación recibidas por el Código Civil de Chile*, (Interpretación, Integración y razonamientos Jurídicos Editorial Jurídica de Chile, año 1992, página 77) en cuanto a que toda la evolución del derecho civil desarrollado por los jurisconsultos romanos y sus sucesores puede entenderse al Derecho como equidad constituida, lo mismo podemos decir con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de Derechos Humanos, en especial en materia de reparación integral a las víctimas. Aquí el Derecho es equidad constituida. Del mismo modo, en materia de reparaciones, el autor chileno **Claudio Nash Rojas**, que ha hecho un estudio sistemático y completo hasta ahora en su libro *“Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1988 - 2007”* (editorial Facultad de Derecho Universidad de Chile, Centro de Derechos Humanos) y también en su libro *“Responsabilidad Internacional Del Estado En La Jurisprudencia Internacional y La Experiencia Chilena”* (Editorial Legal Publishing) donde manifiesta en forma clara, en páginas 67 y siguientes del primero, que la Corte Interamericana ha señalado que en aquellos casos en que se han producido violaciones de los derechos y libertades convencionales, el Estado tiene el deber de actuar en el ámbito interno de forma tal que se determine la verdad de los hechos violatorios de la Convención, se juzgue y sancione a los responsables y se repare a las víctimas. Todo ello en el entendido que las situaciones de impunidad pueden inducir a futuras violaciones de Derechos Humanos. Agrega, además, este Tribunal, que lo anterior se ve refrendado por el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo mismo en el segundo libro del autor mencionado, página 183, donde luego de hacer un análisis exhaustivo de la jurisprudencia chilena, concluye que la reparación siempre debe ser integral porque se debe prestar atención a la persona de la víctima y no el Estado victimario y, además, en el ámbito interno, el Estado tiene la obligación de evitar cualquiera interpretación que impida en pleno cumplimiento que signifique la reparación integral de la víctima. Que finalmente, hay que considerar el artículo de **Alejandro Vergara Blanco**, publicado en el Diario El Mercurio, el 30 de mayo de

2013, titulado “Ley Natural, Reglas o Principios Jurídicos: ¿Dónde está el Derecho?”. El autor acota que el derecho es aquel que sufre o goza cada sociedad en su tiempo, no aquel ideal de cada filósofo del derecho y añade, a propósito de un fallo de la Corte Suprema, de los consumidores de las empresas del comercio detallista, y se pregunta ¿Cuál era el Derecho? ¿El que provenía de una antigua ley supuestamente obedecida? ¿El de alguna Ley Natural? O ¿El que dijo la sentencia de la Corte Suprema? Y añade que la respuesta social fue esta última, pues todos los actores adquirieron la convicción de que sólo después de tal sentencia, habían cambiado las reglas. Continúa, ¿La Corte Suprema aplicó las reglas, la ley natural o un principio jurídico? Y se responde indicando que la respuesta es esta última, aplicó un principio jurídico y expresó que eso no es ni positivismo, ni lus Naturalismo, es Derecho. En el caso en estudio, dictado por la **Corte Suprema, sentencia rol 1424-2013, de 1 de abril de 2014**, ya el máximo Tribunal, lo que hizo, como en muchos otros casos, aplicó un principio jurídico ya establecido en la comunidad jurídica internacional, específicamente en la Convención Americana, artículo 63, el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, como también lo ha manifestado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es, realizado un daño por el Estado y acreditado éste, la víctima debe ser reparada íntegramente. Finalmente, el mismo Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, establece el principio *ex aequo et bono* (De acuerdo con lo correcto y lo bueno).

C.4. Que respecto a la responsabilidad civil del Estado, este Tribunal se ceñirá a las sentencias antes aludidas dictadas por este Ministro Visitador y en especial a la sentencia de la Sala Penal de la **Excma. Corte Suprema, de fecha 1 de abril de 2014, rol N° 1424-13**, que en su **considerando décimo**, en síntesis y en lo pertinente, señala que la responsabilidad del Estado, que se pretende hacer efectiva deriva, por un lado, de la comisión de hechos ilícitos por parte de sus agentes y, por el otro, de normas constitucionales precisas y de leyes de igual rango, que han sido incorporadas al Ordenamiento Jurídico Nacional, como lo son las obligaciones contempladas por los instrumentos internacionales que recogen los principios generales del Derecho Humanitario, entre los cuales se encuentra aquel relativo a la obligación de indemnizar los daños producidos por la violación de los derechos humanos. En consecuencia se **procede a rechazar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile.**

C.5. Que siguiendo la misma línea de la sentencia citada, en cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas, sobre esta materia este Tribunal estará a lo que ha resuelto en fallos precedentes en los últimos años, tratándose de cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas y al estándar que ha dispuesto además la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la sentencia citada y los promedios habituales fijados por los Tribunales superiores de justicia en el último tiempo. Sobre este punto la Excma. Corte Suprema ha tenido la oportunidad de pronunciarse en:

C.5.a. Causa rol N°5572-2029, caratulados Schuster Pinto Macarena y otros, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios contra Fisco de Chile, en sentencia del 29 de mayo de 2020, a propósito de la tragedia ocurrida en la isla Juan Fernández, que ante un hecho trágico de esta naturaleza para los actores (viuda e hijos), fijó la suma de \$150.000.000 para cada uno.

C.5.b. El fallo de 05 de agosto de 2021, rol 82-2021, sentencia de remplazo que en expresa en su considerando Décimo Quinto:...“Que la responsabilidad del Estado Administrador, a partir una interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7° y 38 de la Constitución Política de la República en relación a los artículos 4° y 42 del D.F.L N° 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (en adelante Ley N° 18.575 actualizada), ha evolucionado hasta llegar a un estado pacífico, en cuanto a sostener que dicho instituto se funda exclusivamente en las referidas normas y tiene como factor de imputación la “**falta de servicio**”, que se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo, lo hace en forma irregular y/o lo hace tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria. Es importante precisar que la norma del inciso segundo del artículo 21 de la Ley N° 18.575 actualizada, no excluye la aplicación del concepto de falta de servicio y el consecuente régimen de responsabilidad de Derecho Público a las Fuerzas Armadas, toda vez que tal norma no afecta la disposición del artículo 4°, piedra angular de la responsabilidad de los órganos del Estado, por lo que a su respecto debe atenderse a la concepción de la Administración que expresa el inciso segundo del artículo 1° del mencionado

cuerpo de leyes, de forma tal que, sin duda alguna, este régimen de responsabilidad se aplica a las Fuerzas Armadas, como a las de Orden y Seguridad Pública". En este sentido, en su parte resolutive "se revoca la sentencia apelada de 13 de septiembre de 2018 dictada, en cuanto rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio y, en su lugar, se declara que la acoge sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar a favor de cada uno de los actores la suma de \$250.000.000 por concepto de daño moral, la que deberá reajustarse conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha en que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada y el mes anterior al pago efectivo, e intereses desde que esta sentencia quede firme".

C.6. Que razonado lo anterior, éste sentenciador, sobre la indemnizaciones reclamadas, estará a una ponderación acorde con los daños ocasionados que se desprenden del mérito del proceso y del ilícito cometido. Teniendo presente que aquí se trata de actuaciones de agentes del Estado que han cometido un Delito de Lesa Humanidad. Habiendo por otro lado, la Excma. Corte Suprema fijado nuevo estándar sobre las indemnizaciones y la actuación del Estado para casos por falta de servicio. En consecuencia aparece justo y razonable que se otorgue un monto de: **\$150.000.000** (ciento cincuenta millones de pesos) para Edgar Marcelo Gutierrez Bertín, el hijo de la víctima Marcelo del Carmen Gutierrez Gómez, por lo razonado anteriormente y así se dirá en lo resolutive del fallo. Que en nada arredra lo razonado, oficio del Institución de Previsión Social N°4792-6318 del 11 de abril de 2022 a fs. 1857 (Tomo VI).

D. Improcedencia del pago de reajustes e intereses con anterioridad a que la sentencia definitiva quede ejecutoriada: Que como ha venido razonando este Tribunal en las sentencias citadas anteriormente, efectivamente como lo plantea el Fisco de Chile, para el caso de que se condene a pagar a los actores una indemnización determinada, **éste pago debe devengarse desde que la sentencia se encuentra firme o ejecutoriada y el demandado se encuentre en mora.**

48°) Que con el fin de probar el daño moral sufrido por el demandante civil hasta la actualidad, como consecuencia del delito de secuestro calificado de Marcelo del Carmen Gutierrez Gómez, se presentaron los siguientes antecedentes:

A. Testimonios legamente examinados y sin tachas de María Eugenia Carrillo Vivanco de fs. 2452 a 2453 (Tomo VII), Omar Ademir Hernández Yáñez, 2454 a 2455 (Tomo VII) y Pedro Gómez Angulo de fs. 2456 a 2457 (Tomo VII), quienes son contestes en señalar que Inés y la víctima mantenían una relación amorosa de la cual nació el demandante civil. Que tras desaparecer el día 05 de octubre de 1973, nunca más se supo nada de él. Que, para su hijo es doloroso no conocer a su padre, quedando en un estado de desamparo económico. Suman, que no pudo estudiar, debiendo trabajar tales como limpiar combustiones lentas, pintar, etc.

B. De fs. 2466 a 2475 (Tomo VIII), informe integral de daño emitido por el Servicio de salud de Osorno, que en lo pertinente concluye que: *“Los hechos que envuelven el desarrollo de don Edgar Gutierrez, se remontan al periodo de dictadura militar como víctima directa de violencia y represión política ejercida por el estado de hile, con la muerte y desaparición de su padre Marcelo Gutierrez Gómez. B) las circunstancias en torno al asesinato de su padre marcan y originan inevitablemente la imposibilidad de crecer en una familia por una madre y un padre, despojándolo de aquello como derecho fundamental de un niño que nace, lo que conduce a la vez, a desarrollar su vida a través de un proceso de duelo no resuelto, duelo suspendido en el tiempo. Como inmediata respuesta adaptiva a la ausencia de su progenitor, en cuanto a figura parental, proveedor y como figura de afecto, la familia de don Edgar modifica su jerarquización siendo los abuelos maternos quienes asumen el rol parental y su madre más bien como una hermana mayor que pasado un tiempo se aleja en la construcción de una nueva familia, truncando el derecho a crecer en condiciones de amor y protección necesarias para un niño. Don Edgar no tuvo acceso a redes de apoyo debido a elementos culturales de marginalidad y pobreza, acentuados por miedo y prejuicios, dándose lugar a dinámicas de subsistencia y sobrevivencia, en la cual, don Edgar se parentiliza, perdiéndose espacios de juego y celebraciones propios de la infancia y adolescencia. Como consecuencia don Edgar crece en condiciones de exposición y vulnerabilidad; sus abuelos, responsables de su cuidado, consumían alcohol proporcionándole condiciones de crecimiento negligente. Don Edgar experimenta tempranamente sentimientos de soledad y desprotección, motivo por el cual debe salir a la calle en busca sustento para llevar a su hogar, ante la necesidad de alimentarse tanto él como sus abuelos, y como consecuencia la pronta*

interrupción de sus estudios. Sin duda, estos hechos re victimizan, generando un daño irreversible en su personalidad, lo que configura como una grave vulneración a los derechos del niño, niña y adolescente. Al nacer posterior a la desaparición de su padre, debe enfrentar la lucha por lograr ser reconocido como hijo de don Marceo Gutierrez, lo que constituye un nuevo elemento de daño y revictimización en su historia, desencadenando síntomas de frustración, angustia e irritabilidad, pues es un proceso que dura 22 años, en los cuales se produce un nuevo shock emocional que incluye mucho cuestionamiento y vulnerabilidad, esto influye de manera importante en la conformación de su identidad, la cual desarrolla un autoconcepto y autoimagen deteriorada sobre sí mismo, visualizando en síntomas del ámbito depresivo. Pese a su vivencia traumática, mantuvo un espíritu de esfuerzo en búsqueda de brindar las condiciones sociofamiliares y económicas que no tuvo su propio grupo familiar. Desde muy joven don Edgar accedió a trabajos forzosos para ganarse la vida, al no tener respaldo académico para acceder a otras oportunidades, desempeñándose al día de hoy como mano de obra no calificada, sin embargo con el paso de años ha adquirido cierta experticia en la limpieza de chimeneas, desarrollando un micro emprendimiento familiar, manteniéndose a la vez integrado en espacios sociales como la iglesia y bomberos, adquiriendo roles que le proporcionaran un sentido profundo y humanizado en contraste a su propia vivencia temprana. La falta de justicia e impunidad, hacen que permanezca un sentimiento de frustración por la injusticia, a la cual como familia fueron sometidos. Finalmente, es necesario señalar que producto de los eventos descritos el paciente presenta historia y síntomas indicativos de TEPT.”

C. Certificado de nacimiento de Edgar Marcelo Gutiérrez Bertín de fs. 2476 (Tomo VIII) que consta que su padre es Marcelo del Carmen Gutiérrez Bertín.

D. Copia sentencia causa rol C-1474-2006, del 26 de mayo de 2015 del Juzgado de Familia de Osorno, la cual establece la filiación paterna de Edgar Marcelo Gutiérrez Bertín.

E. De fs. 2487 a 2488 (Tomo VIII) del 12 de julio de 2010, resolución del Juzgado de Familia de Osorno en causa rol C.1474-2006

F. 2490 a 2493 (Tomo VIII), Copias simples del 19 de julio de 1966, 2009 y 2010 acreditan gestiones que realizó Edgar Gutierrez Bertín para ser reconocido por la justicia como hijo legítimo de la víctima.

G. 2494 a 2512 (Tomo VIII), Legajo de documentos prensa de organismo de derechos humanos, que dan cuenta del delito cometido contra la víctima.

H. Informe de ILAS de fs. 2595 a 2599 (Tomo VIII), el cual adjunta documentación sobre las secuelas en el plano de la salud mental en los familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos durante la dictadura militar.

49°) Que ponderando tales documentos y testigos, teniendo además presente que de acuerdo a lo expuesto latamente en esta sentencia, el daño moral que reclaman el actor, provocado por el delito de **secuestro calificado de Marcelo Gutierrez Gómez, está plenamente acreditado**. Que en la especie se ha establecido la concurrencia de todos los requisitos que hacen procedente la indemnización que se demanda, esto es: **a)** la perpetración de un delito por agentes del Estado; **b)** la existencia de un daño sufrido por el demandante; y **c)** la concurrencia del nexo causal entre estos y aquellos. Respecto del quantum de la indemnización, si bien tal daño, por su carácter inmaterial, es difícil de cuantificar, no es menos cierto que debe ser considerada la prolongación del dolor sufrido por el actor y considerando la restitución integral, aparece adecuado, congruente y lógico según lo que se ha dicho sobre los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los promedios fijados por los Tribunales superiores de justicia, fijar como indemnización para el actor, por el delito de **secuestro calificado de Marcelo Gutierrez Gómez, cometido por los Agentes del Estado**, esto es la suma de \$ 150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) para Edgar Gutierrez Bertín, hijo de la víctima **Marcelo Gutierrez Gómez**

50°) Que habiéndose fijado la suma a indemnizar y como se ha razonado precedentemente, ésta deberá ser **reajustadas en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor** entre el mes anterior que quede ejecutoriada la sentencia y el mes anterior al de su pago, devengando intereses corrientes por el mismo período, más costas.

VIII. ASPECTOS RESOLUTIVOS.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 6, 7, 10 N°10, 11 N° 6 y 9, 12 N°8, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 50, 51,

52, 56, 61, 68, 69, 103 y 141 **Código Penal**; artículos 10, 42, 43, 50, 51, 56, 67, 68 y siguientes, 81 a 84, 108 a 120, 121 y siguientes, 424 y siguientes, 447 y siguientes, 451 y siguientes, 456 bis, 457, 458 y siguientes, 460, 471 y siguientes, 474 y siguientes, 477 y siguientes, 481 y siguientes, 485 y siguientes, 488 y siguientes, 499, 500 y siguientes y 533 del **Código de Procedimiento Penal**; artículos 2.314 y siguientes del **Código Civil**; **Ley 18.575**; artículos 1, 5, 6 y 38 inciso 2° de la **Constitución Política de la República**; 211, 214 del **Código de Justicia Militar**; **Ley 18.216**; **Ley 19.123** y sus modificaciones posteriores; **Ley 19.980**; **Ley 20.357**, **Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra de 1949**, se declara:

EN CUANTO A LA TACHAS:

I. NO HA LUGAR A LA TACHA interpuesta a fs. 2450 a 2451 (Tomo VII) por Damary Melo Melo, en representación del Programa de la Unidad de Derechos Humanos, sin costas por haber tenido motivo plausible para litigar.

EN CUANTO A LOS INCIDENTES DE NULIDAD:

II. NO HA LUGAR A LOS INCIDENTES DE NULIDAD, interpuestos por el abogado Maximiliano Murath en representación de Adrián José Fernández Hernández, atendido a lo resuelto a fs. 2582 (Tomo VIII).

EN CUANTO A LA ACCION PENAL:

III. QUE NO HA LUGAR al sobreseimiento definitivo solicitado por el abogado por Mauricio Fernando Scheuch Araya en representación de Rodolfo Segundo Cheuquelaf Lorenzo a fs. 2309 a 2321 (VII).

IV. QUE NO HA LUGAR a las excepciones de fondo, esto es la **prescripción de la acción penal**, amnistía y declinatoria de jurisdicción, interpuestas por Mauricio Fernando Scheuch Araya en representación de Rodolfo Segundo Cheuquelaf Lorenzo a fs. 2309 a 2321 (VII)

V. QUE SE CONDENA con costas a RODOLFO SEGUNDO CHEUQUELAF LORENZO, R.U.N 6.400.355-0, ya individualizado en calidad de **autor**, del delito consumado de secuestro calificado de Marcelo del Carmen Gutierrez en su carácter de lesa humanidad, perpetrado en el sector Bahía Mansa de Osorno, a contar del 05 de octubre de 1973, a la **pena 12 años de Presidio Mayor en su grado medio** y a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

VI. QUE SE CONDENA con costas a JORGE DANIEL GARCÉS YÁÑEZ, R.U.N. 5.376.792-3, ya individualizado en calidad de **autor**, del delito consumado de secuestro calificado de Marcelo del Carmen Gutierrez Gómez en su carácter de lesa humanidad, perpetrado en el sector Bahía Mansa de Osorno, a contar del 05 de octubre de 1973, a la **pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio** y a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

VII. QUE NO HA LUGAR, a la solicitud de arresto domiciliario parcial, solicitada por Gonzalo Cruz Gutierrez en representación de Jorge Garcés Yáñez, **de fs. 1948 a 1971 (Tomo VI).**

VIII. Que respecto al acusado **RODOLFO SEGUNDO CHEUQUELAF LORENZO**, según se expresó, no se le concederá algún beneficio de la ley N°18.216, solicitado por la defensa. En consecuencia, deberá cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, sirviéndole de abono los días que ha estado privado de libertad con motivo de este proceso, lo que se detalla de la siguiente forma:

ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL: Desde el **20 de julio de 2020**, como consta a fs. 1.180 (Tomo IV), cuando es notificado del auto de procesamiento de fs. 1125 a 1171 (Tomo IV), en virtud del cual se decreta su arresto domiciliario total, que se encuentra vigente hasta el día de hoy.

IX. Que respecto al acusado **JORGE DANIEL GARCÉS YÁÑEZ**, según se expresó, no se le concederá algún beneficio de la ley N°18.216, solicitado por la defensa. En consecuencia, deberá cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, sirviéndole de abono los días que ha estado privado de libertad con motivo de este proceso, lo que se detalla de la siguiente forma:

ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL: Desde el **27 de julio de 2020**, como consta a fs. 1185 (Tomo IV), cuando es notificado del auto de procesamiento de fs. 1125 a 1171 (Tomo IV), en virtud del cual se decreta su arresto domiciliario total. Hasta el **23 de abril de 2021**, donde se dictó resolución que le otorgó arresto domiciliario parcial según consta a fs. 1.463 (Tomo V).

X. La pena impuesta a los condenados comenzará a regir desde que **se presenten o sean habidos en la presente causa.**

XI. Que una vez ejecutoriada la sentencia, deberán dejarse sin efecto las medidas cautelares personales impuestas a los acusados, oficiándose a los organismos respectivos que fueren procedente.

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL:

I. QUE NO HA LUGAR a las excepciones interpuestas por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Sáez Willer, en representación del Fisco de Chile de fs. **1808 a 1833 (Tomo VI)** esto es:

A. Excepción de Improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por haber sido reparados los perjuicios en la forma que se expresará

B. Excepción de prescripción extintiva.

Sin perjuicio de lo razonado en los párrafos precedentes, respecto del monto de la indemnización y sobre la fecha en que deben aplicarse los reajustes e intereses.

II. Que HA LUGAR a la demanda civil interpuesta por Rose Marie Vasquez Garrido, en representación de Edgar Marcelo Gutiérrez Bertín, de **fs. 1759 a 1784 (Tomo VI)** en contra del Fisco de Chile. Condenándose a la parte demandada a pagar como indemnización de perjuicios, por concepto de daño moral producto del delito de secuestro calificado en su carácter de lesa humanidad en la persona Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez, la suma de **\$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos)** para el demandante.

III. La suma anterior deberán ser **reajustada en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor** entre el mes anterior a que la sentencia quede ejecutoriada y el mes anterior al de su pago; devengando intereses corrientes por el mismo período.

Que se condena en costas, al FISCO de Chile.

Notifíquese esta sentencia personalmente a los sentenciados, dirigiéndose los exhortos pertinentes, facultándose a los Tribunales para que citen a los sentenciados personalmente, bajo apercibimiento de arresto, y realicen todas las diligencias para el oportuno cumplimiento de la notificación de esta sentencia, autorizándose si fuera pertinente para concurrir a los domicilios de los sentenciados para la respectiva notificación, pronunciándose sobre las peticiones que hicieran los sentenciados en el acto de la notificación, en especial si presentarán verbalmente recurso de apelación.

Notifíquese a los abogados querellantes y al abogado que representa al Fisco de Chile, a través del Receptor de turno del presente mes.

En el caso del querellante Programa Continuación Ley 19.123, del Ministerio de Justicia, notifíquese personalmente en secretaría del Tribunal, a cualquiera de los abogados que tenga representación.

Regístrese y cúmplase en su oportunidad, con lo que ordena el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal, comuníquese a los diferentes Tribunales en que se tramitaren procesos en contra del sentenciado para informarles sobre las decisiones del presente fallo y **en su oportunidad, archívese.**

Consúltese si no se apelare y archívese en su oportunidad. Asimismo elévese en **consulta el sobreseimiento definitivo y parcial de fs. 2582 (Tomo VIII) de 31 de octubre de 2023**, respecto de **Adrián José Fernández Hernández.**

Fórmese cuaderno separado para la revisión de las medidas cautelares, dejándose copia del examen de la última revisión de la medida cautelar y demás piezas pertinentes.

Siendo un hecho ocurrido en el año 1973 remítase por la vía más expedita a la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial.

Rol N° 14-2013.

Dictada por don **ÁLVARO MESA LATORRE**, Ministro en Visita Extraordinaria.

Autoriza don Juan Gabriel Lienan Lienan, Secretario subrogante de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco

En Temuco, a veintinueve de enero de dos mil veinticuatro, notifiqué por el estado diario la resolución precedente. (FRF).